

En este libro confluyen el testimonio con el análisis político y social de las últimas décadas de la historia de Chile. El autor alterna el relato periodístico con el estudio e interpretación de los hechos, para explicar cómo una oposición política deviene en una conspiración cívico-militar. Al mismo tiempo, se despliega una profunda autocrítica sobre algunas de las propuestas políticas de la izquierda chilena de ese entonces.

Para Tito Drago, el proyecto de Salvador Allende aún tiene vigencia moral, social y política en el siglo XXI, esto es, la posibilidad de desarrollar un proceso de profundos cambios sociales, de manera compatible con la libertad y la democracia.

ISBN 956-284-313-1



9 789562 843131

Allende: un mundo posible

Tito Drago



Tito Drago

Allende

un mundo posible

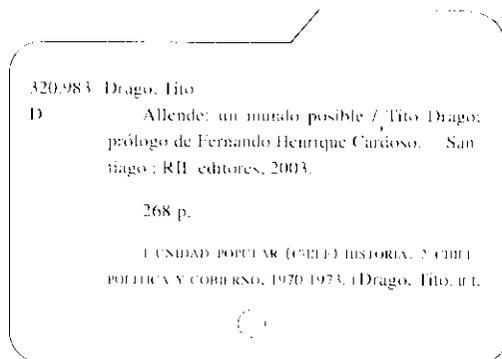


editores

Tito Drago

ALLENDE:
un mundo posible

Prólogo de Fernando Henrique Cardoso



© Copyright 2003. by Tito Drago

ISBN 956-284 315-7

RIL © editores

El Vergel 2882, of. 11, Providencia
Santiago de Chile

Tel. (56-2) 2238100 - Fax 2254269

ril@rileditores.com - www.rileditores.com

Baldomero Fernández Moreno 1217

Buenos Aires, Argentina

Tel. (54-11) 4432-2840

Composición e Impresión: RIL editores

Diseño de portada: Cristián Silva L.

Impreso en Chile - Printed in Chile

Derechos reservados

El Chile eterno

Treinta años han pasado y todavía hoy, al leer el libro de Tito Drago sobre Chile, me viene la misma emoción, la misma repulsa por la cobardía de unos, la violencia de otros y, sobre todo, el mismo entusiasmo por la integridad personal de Allende y la lucha del pueblo chileno.

El relato se deja leer con gusto y sin que se pueda dejar descansar al libro. Cada página, cada episodio, tiene la fuerza para hacernos revivir aquellos momentos de sueño, de errores, de angustia y, por fin, de miedo.

Yo viví en Chile casi cinco años. Al comienzo, fueron los años de Alessandri, en 1964. Luego, los de Eduardo Frei. Volví muchas veces a Santiago, bajo Allende (viví otra vez ahí, trabajando de nuevo en la CEPAL, entre junio y fines de agosto de 1973) y bajo los militares. Otras tantas veces en la época de Patricio Aylwin, de Eduardo Frei (hijo) y, por fin, de Ricardo Lagos.

Viví primero en el exilio. Aprendí entonces a amar a Chile, a su pueblo y a su democracia. Todavía recuerdo con satisfacción aquellos años. Viví en un Chile más provinciano, una ciudad de Santiago quizás menos bella, pese a la imponente cordillera blanca en el invierno, a las flores, a los olores. Pero principalmente aprendí en Chile a respetar más que todo su democracia.

Yo recuerdo las pocas oportunidades en que vi al presidente Frei y a Salvador Allende. A éste lo vi algunas veces más, casi siempre en la casa de Thiago de Mello, poeta brasileño, quien era nuestro agregado cultural y vivía en la casa que fuera de Pablo Neruda, en Santiago, después que el gran poeta se fue a vivir a Isla Negra.

Mis primeras impresiones del senador Allende fueron algo desconcertantes. Un señor elegante, amable, con aires de parlamentario de la Tercera República Francesa. Los brasileños en el exilio fueron muy bien recibidos desde el inicio por la democracia cristiana de Frei. Pero nuestros corazones se dividían: algunos se sentían más cerca de la democracia cristiana; otros –y yo entre éstos– más a gusto con los socialistas.

Había muchos debates. A veces nos invitaban a un centro de estudios internacionales, coordinado por Claudio Vellez. Cuántas

veces, con Osvaldo Sunkef, Edgardo Böeninger (y siempre discutiéndolo todo con Aníbal Pinto y con Enzo Faletto) asistíamos a los debates civilizados entre socialistas, demócratas cristianos, radicales y hasta comunistas.

El ambiente me encantaba. Éramos muchos brasileños y con el tiempo muchos más llegaron. Al comienzo, Celso Furtado, Francisco Weffort, Wilson Cantoni, Jader de Andrade, Plinio de Arruda Sampaio, Almino Affonso (tantos otros más) y yo.

De una cosa teníamos la certeza: Chile era y siempre sería un país democrático...

Al leer el relato de Tito Drago, tan bien documentado, objetivo, sin esconder, edulcorar o exagerar nada, me vino a la mente toda la tragedia del Chile que se imaginaba patria de la libertad (lo era) y soñó serlo también de una sociedad más igualitaria.

De lo que conozco, por lectura o por vivencia, el libro de Tito Drago no hace más que aclarar y demostrar en cada capítulo, con pasión pero sin distorsión, cómo ocurrió todo en aquellos años. Obra de un periodista historiador de calidad.

Del análisis una figura sobresale: Salvador Allende. Por eso quise registrar mis impresiones iniciales: no me hubiera imaginado jamás la fuerza histórica que Allende ganó. Pese a que, como dije, mis contactos con él fueron sociales y superficiales, algo sabía de su personalidad y de su modo de pensar por su hija Isabel, quien fue mi alumna, trabajó un tiempo con mi grupo en el ILPES CEPAL y es todavía amiga mía. Nunca me olvidé de los comentarios que hacía sobre su padre.

Después de la clase de sociología que impartía en el Pedagógico (de cuyo Instituto de Sociología, Clodomiro Almeyda era entonces el director) caminábamos por la alameda (ya no me acuerdo del nombre) donde funcionaba el Instituto. Isabel me describía a su padre fundamentalmente como un demócrata, creyente en el “front populaire”, o sea en la alianza entre socialistas, radicales y comunistas, para mejorar la vida del pueblo en libertad y democracia.

¿Acaso no fue lo que él intentó?

Claro que en el ambiente político de los setenta, con Cuba, Fidel, la Guerra Fría, los intentos guerrilleros, su discurso tuvo que adaptarse a las circunstancias. Aun así, el Chile de Tito Drago nos devuelve al Allende de coraje, democrático, solidario con el pueblo y profundamente institucional.

La izquierda de la época, (del irresponsable MIR a los ávidos del PS, Carlos Altamirano como ejemplo) tenía dificultad en aceptar que

su dirigente máximo fuera no solamente “institucional”, o sea, que respetaba las leyes y la Constitución, sino, además, maestro en el “muñequeo”. Sin embargo, si no fuera por la autoridad personal de Allende, su capacidad de diálogo y su disposición para hacer alianzas, todo hubiera explotado antes.

Siempre se podrá argumentar que, por el contrario, fueron estas características las que llevaron al desastre. El pueblo no se armó, Allende cumplió demasiado con la democracia cristiana, creyó en la fidelidad de los militares, etc.

Es posible. Pero cuando se conoce (por paradójal que sea) el arraigo de los chilenos a las normas, la aceleración de los cambios por el entusiasmo espontáneo de muchos sectores de la unidad popular y por la estrategia mal calculada de sectores izquierdistas, cabe preguntarse: ¿no habrá llevado eso también a la democracia cristiana (algunos sectores de ella) y a los propios militares a la radicalización?

La traición de Pinochet (y sus dudas), de los generales más cercanos a la democracia cristiana; el golpismo, éste sí propio de la derecha más furiosa, se fueron juntando de a poco hasta llegar a la conspiración y, después, como suele ocurrir, a los arrepentimientos habituales: “esa no es la revolución que yo quería...”.

Demasiado tarde.

Chile pagó un alto precio por todo eso. Yo diría que la democracia en general pagó el precio. Los que vivimos procesos semejantes en más de una ocasión histórica, sabemos que, a partir de un cierto punto, no hay vuelta atrás. Los hombres pasan a ser personajes y la historia se desarrolla como si fuera conducida por manos invisibles (de Dios o del diablo).

A fines de agosto del '73 fui cenar, con Francisco Weffort (quien fue ministro de Cultura de mis dos periodos presidenciales) en casa de Ricardo Lagos, entonces nombrado por Allende embajador en Moscú. Yo conocía a Ricardo desde los años sesenta: vivía frente a la casa de sus suegros, en Vitacura, en la calle Las Ñipas y fuimos colegas en la FLACSO. La cena era con Clodomiro Almeyda, entonces, creo yo, ministro de Relaciones Exteriores, después de haber sido ministro de Defensa.

Aquella fue una noche inolvidable. Clodomiro caminando de una a otra parte de la sala nos preguntaba, ¿y cuándo se van ustedes a Brasil? Al contestarle que en diez días más, él afirmaba: quizás la rueda de la historia se habrá dado vuelta ya.

¿Por qué?

Era obvio. Chile ya estaba en manos de los que vinieron a ser “los golpistas”. La clase media estaba en contra del gobierno; había apagones; los *black outs*; el paro de los camioneros; el desabastecimiento; los transportes eran precarios, la gasolina solo se conseguía en el mercado negro; los atentados. En fin, todo olía a desesperación.

Almeyda nos relató su experiencia como ministro de Defensa. El hombre fuerte del Ejército, hasta entonces, era el general Carlos Prats. El general Schneider fue asesinado. Y Almeyda –quien había viajado con Prats, creo que a Moscú– decía no saber nada efectivamente sobre los militares. Toda negociación, dijo, la lleva Salvador, como nombraba a Allende. La suerte (la esperanza) era precisamente la *muñeca* presidencial.

Demasiado tarde. Ya unos temían a los otros, demócratas cristianos a los “de la izquierda”, empresarios a los “cordones industriales” y así en adelante. El cúmulo de decisiones quizás precipitadas, el fuerte empeño del gobierno americano en tumbar a un gobierno “no confiable” en época de guerra fría, la excitación de la prensa conservadora y la impotencia de la máquina pública y de los partidos que le daban sustento (a veces relativamente) al gobierno, resultaron en un plan que, si al comienzo era de unos pocos, al final fue asumido por tantos que impidió una reacción más equilibrada y organizada de los que anhelaban sinceramente que Chile fuera la patria del socialismo en libertad.

Quedó el ejemplo de Allende, la lucha del pueblo chileno por su libertad y el compromiso posterior –ahora sí, de la mayoría– de mantener alianzas capaces de sostener la democracia e impulsar reformas. Quizás con menos generosidad, menos alcance, avanzando menos y transando más. Siempre, sin embargo, con horror a la tortura, a la dictadura y a todo lo que llevó a un gran pueblo a ver a algunos de sus hijos transformarse en bárbaros y a otros en víctimas heroicas, asesinados, presos, torturados, exiliados.

Eso nunca más. Gracias a Allende y al alma peleadora, generosa y corajuda del pueblo chileno que no se dejó desanimar durante los años de plomo de Pinochet.

Fernando Henrique Cardoso

El mundo posible de Salvador Allende

La humanidad ha conocido varios intentos de transformaciones sociales en búsqueda de la equidad y la justicia, unas veces por vías pacíficas y otras violentamente. En la mayoría de los casos se lo hizo hablando de socialismo, socialismo democrático, revolución socialista, o liberación nacional y social, como base política e ideológica de movimientos sociales que unas veces fueron masivos y otros minoritarios. Casi todos esos intentos resultaron derrotados o, una vez triunfantes, se convirtieron en brutales dictaduras que dieron paso a otras desigualdades sociales sin siquiera un atisbo de democracia y libertad, como ocurrió en los regímenes comunistas, caídos unos detrás de otros tras el derrumbe del muro de Berlín.

Chile, de 1970 a 1973 fue una excepción, clara y nítida, que en la actualidad ni siquiera dentro del propio país es conocida y valorada como corresponde. Hoy, a tres décadas del golpe de estado que el 11 de septiembre de 1973 derrocó al gobierno constitucional de Salvador Allende, es más necesario que nunca conocer a fondo lo ocurrido hasta entonces, porque saberlo es necesario y útil para quienes, en cualquier parte del planeta, quieren que la justicia social sea algo más que una mera declaración de intenciones o un simple programa electoral.

La lección histórica más importante legada por Allende, fruto de su profundo humanismo, de su prolongada vida política y en especial de sus tres años como presidente de Chile, señala que es posible avanzar rápida y profundamente por el camino de las conquistas sociales y la equidad, de manera seria y responsable.

Asociada a esa lección hay otras dos derivadas, que son las que le confieren a la experiencia chilena una importancia trascendental y de alcance mundial. La primera indica que ese otro mundo equitativo y justo es posible construirlo con métodos pacíficos, en democracia y libertad. La segunda, señala que un proceso de esas características debe estar atento a las formidables fuerzas transnacionales que se le pueden oponer. Para vencer la oposición de esas fuerzas, además de la cohesión interna se deben buscar y encontrar apoyos en otros países, en especial los limítrofes, porque la buena relación con los vecinos no solamente evita acciones deses-

tabilizadoras desde ellos sino que ayuda a paliar en parte los bloqueos y embargos. Todo ello sin olvidar, como no lo olvidó en ningún momento Allende, que es preciso controlar el ritmo de los cambios económicos y sociales para que el proceso no se desmadre y se pueda mantener la cohesión interna al máximo, una condición indispensable para avanzar.

Porque esa lección y sus derivados tienen plena actualidad en el siglo XXI se puede afirmar que Salvador Allende Gossens, “el compañero presidente” para los ciudadanos que lo apoyaron con fervor y esperanzas, “el Doctor” para sus colaboradores directos, “el señor Presidente” para las relaciones oficiales y “el Chicho” para sus amigos, está presente.

Una presencia necesaria y de gran actualidad política y social en este mundo globalizado, donde millones y millones de personas se manifiestan en todos los países reclamando justicia y equidad, sin encontrarla.

En este trabajo analizamos lo vivido durante el gobierno de Allende, desde el estudio de documentos y hechos y, fundamentalmente, desde la óptica personal de quien compartió junto a millones de chilenos esa voluntad de “avanzar sin transar”, ese sueño que ilusionó a tanta gente dentro y fuera de Chile.

Han pasado treinta años y todavía permanecen sin aclarar aspectos esenciales de esa experiencia, o sin ser aclarados debidamente.

Creemos que ha llegado la hora de aclararlos, en voz alta y de la manera más nítida y documentada posible, aportando datos y testimonios para que se conozca mejor ese período y de convocar, en especial a los jóvenes, a que lo estudien y, sin sectarismos de ningún tipo, extraigan las enseñanzas positivas que de él se derivan.

Tuvo que pasar más de un cuarto de siglo desde su muerte para que el papel de Salvador Allende comenzara a valorizarse en Chile y, al mismo tiempo, a ser analizado desde un punto de vista correcto, real. Los dirigentes de los dos grandes partidos, el Socialista y el Comunista, que fueron la base de la coalición que lo llevó al gobierno, la Unidad Popular, exiliados en su mayoría en el Este europeo –cuando todavía existía la Unión Soviética– o en Cuba, mintieron sobre lo que pasó el 11 de septiembre y, para peor, ignoraron al verdadero Salvador Allende durante décadas. Incluso miembros de su propia familia se negaban a reivindicar su ejemplo y sabiendo claramente que eran falsas las historias sobre su

último día en el Palacio de La Moneda contadas por los dirigentes socialistas y comunistas, se plegaron a ellas, repitiéndolas o admitiéndolas en silencio.

En lo que coincidieron todos ellos fue en la macabra fábula del combate en La Moneda y la falsa historia sobre el asesinato del presidente. Una fábula que, como demostramos en este libro, afectó de manera muy negativa al legado de Allende, a la comprensión de lo ocurrido durante su gobierno e incluso a las condiciones que se dieron para que pudiera triunfar el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973.

Tuvieron que pasar muchos años hasta que, al triunfar Ricardo Lagos en las elecciones de 2001, tuvo el buen criterio de llamar a su lado a la viuda de Allende para anunciar su victoria, lo que fue una manera de reivindicar la figura de aquél. Poco después el mismo Lagos dispuso instalar una estatua del presidente Allende en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda, cuyo acto de inauguración presidió.

El 7 de septiembre de 1970 marcó el inicio de una etapa en la vida chilena que entró en la historia mundial por la puerta grande, con el triunfo electoral del socialista Salvador Allende. Treinta años después otro socialista, Ricardo Lagos, preside Chile y también, como aquella vez, es una etapa que se presenta como otro período que trascenderá el interés local para proyectarse a escala internacional, salvadas sean las distancias, las características personales, las condiciones y los marcos políticos y sociales de ambos procesos.

En los dos casos, ese país ubicado en uno de los extremos de América, ofrece al mundo una experiencia inédita para encarar los grandes problemas de la sociedad contemporánea. Pero no son experiencias iguales ni mucho menos. El uno dista de ser la copia del otro. Las circunstancias son también radicalmente distintas. En aquellos primeros años de la década de los setentas el mundo vivía todavía inmerso en la *guerra fría* y a uno y otro lado del Muro de Berlín las personas, los sindicatos, los partidos políticos, la prensa y todo aquello que tuviera alguna significación, se dividían en amigos y enemigos de las respectivas potencias hegemónicas. Por otro lado, esa bipolaridad permitía hacer ciertos equilibrios a los países del medio. Hoy hay una sola superpotencia, los problemas y las soluciones traspasan todas las fronteras, sean físicas, financieras, religiosas o ideológicas. En esta era de la globalización el desafío es mayor y Chile busca soluciones aliándose con otros países de América del Sur, en especial la Argentina y Brasil, en búsqueda de un nuevo

modelo social. Chile es un país pequeño, de apenas doce millones de habitantes, que sería prácticamente ignorado para el resto del mundo de no ser por su mayor producto de exportación, el cobre y por dos personas que representan la antítesis del ser humano: Salvador Allende y Augusto Pinochet.

El ex dictador ha sido procesado y condenado por la conciencia mundial, aunque el argumento de su familia y de sus abogados defensores de que está loco, “demente” dicen ellos, lo haya salvado de ser condenado expresamente por la justicia ordinaria de su país. Pero condenado, lo que se entiende por condenado, o sea considerado culpable de crímenes de lesa humanidad, lo está sin duda alguna, dentro y fuera de Chile. Es muy probable que poco a poco su imagen se vaya perdiendo y la gente comience a olvidarlo. Posiblemente su nombre sólo quedará en algunos textos como advertencia de lo que no deben hacer los militares para no ser tachados de asesinos y antipatriotas.

Por el contrario, Salvador Allende está y estará presente, recordando siempre que otro mundo es posible por un camino pacífico, en democracia y libertad y convirtiéndose en objeto de estudio y referencia ineludible para las nuevas generaciones que sueñan con un porvenir mejor, en Chile y en otros países. Un porvenir que puede ser definido como *el mundo posible de Salvador Allende*.

Madrid, julio de 2003

CAPÍTULO I

Un doble secuestro

Son las 13:50 del 11 de septiembre de 1973. Salvador Allende Gossens comprueba que sus colaboradores se dirigen hacia la escalera que los lleva del segundo al primer piso del palacio presidencial de La Moneda, envuelto ya en humo y llamas. Segundos antes, sereno y decidido, los ha reunido y les ha ordenado entregarse a los militares rebeldes, que han logrado entrar por la puerta de Morandé 80 y desde abajo les intiman a gritos que se rindan.

A continuación, se dirige al Salón Independencia, se sienta en un sillón, apoya un fusil automático debajo de su barbilla y aprieta el disparador. El médico Patricio Guijón, el último de los que habían iniciado el descenso, vuelve sobre sus pasos para recoger una mascarilla antigás, alcanza a oír los disparos, se da vuelta y ve a Allende impulsado hacia atrás por la fuerza de los impactos. El cuerpo sin vida queda recostado sobre el sillón, ubicado en una esquina del recinto.

Apenas dos balazos alcanza a producir la presión de la mano del Presidente sobre el disparador, pero resultan suficientes para terminar con su vida en el acto. Los sonidos metálicos de esos dos disparos, que llegarían a resonar en todo el mundo, se mezclan con el crepitar de los fusiles y ametralladoras, el cañoneo de los blindados y el volar rasante de los aviones, que atacan con saña la tradicional sede de la Presidencia de la República de Chile.

Esa sede, conocida como La Moneda por haber sido en una época lejana la Casa de la Moneda, arde en llamas después de recibir 19 impactos de misiles disparados por aviones de la Fuerza Aérea, sublevada junto con el Ejército, la Armada y el Cuerpo de Carabineros. En el resto de la ciudad y del país se cierne una represión a sangre y fuego, ante una ciudadanía perpleja e indignada, carente de una dirección nacional que la unifique, y sin las armas que le habrían permitido enfrentar el golpe de estado encabezado por un general traidor. El nombre de ese militar, que muy pocos recuerdan en ese momento, en pocos meses se convertiría en el paradigma mundial de los dictadores: Augusto Pinochet Ugarte. Y muchos años

después en el símbolo de que la justicia contra los crímenes de lesa humanidad no reconoce fronteras, cuando fue procesado en Londres y Madrid, antes de su devolución a Chile y de que allí también se lo calificara como reo.

Mientras continúa el golpe, el cuerpo del *compañero Presidente o el Chicho*, como lo denomina la mayoría del país, yace recostado hacia atrás en el sillón, con el fusil del carabiniero jefe de su escolta caído a sus pies. Los golpistas dirán después que el arma es una metralleta con una dedicatoria de Fidel Castro, en un intento por demostrar que castrismo y allendismo son la misma cosa. De su propia gente el único que alcanza a verlo muerto es Guijón (su médico personal) y, unas dos horas más tarde, Ángel Hoces, un militante socialista de base e integrante de los equipos de bomberos convocados para apagar el incendio.

De los sublevados, el primero en llegar tres o cuatro minutos después de su muerte es un suboficial del que la historia no guarda su nombre, y el segundo, instantes después, el general Javier Palacios, jefe de las tropas que asaltan La Moneda. Lo sigue el subteniente Armando Fernández Laríos, un tenebroso personaje del submundo de los servicios de información, cuya presencia en el lugar nadie nunca sabrá explicar, ya que no forma parte de las fuerzas al mando de Palacios ni está entre los leales al presidente Allende.

El cuerpo sin vida del Presidente es visto más tarde por médicos de las Fuerzas Armadas y de la Brigada de Homicidios de la Policía, que extienden el certificado de defunción –hoy en poder de su familia–, supervisan la toma de fotografías forenses y huellas dactilares y realizan la autopsia en el Hospital Militar. Todo antes de las seis de la tarde de ese mismo día. A unos pocos periodistas sólo se les permite ver un cuerpo tapado, diciéndoles que se trata de Allende. Al día siguiente la Junta Militar dispone un entierro clandestino, en una tumba sin nombre y perteneciente a la familia Grove, en el cementerio de Valparaíso, ciudad puerto y balneario ubicada sobre la costa del Océano Pacífico.

Muy temprano, en la mañana del doce, el comandante Sánchez, edecán de Allende y el último militar en cumplir la orden de alejarse de su lado, pide a Hortensia Bussi de Allende, *Doña Tencha*, que se dirija hacia el Hospital Militar de inmediato, donde se presenta acompañada de un sobrino. No les permiten la entrada. En la puerta, un oficial les indica que sin perder un minuto vayan hasta el grupo séptimo de la Fuerza Aérea, que se encuentra en la base militar de Santiago de Chile.

Allí la espera Sánchez, con quien sube al avión, donde ya se encuentran la hermana menor de Allende, Laura, diputada y dirigente del Partido Socialista (PS), y dos sobrinos. En pocos minutos el avión llega a la base de Quinteros, próxima a Valparaíso. Al bajar el féretro para trasladarlo a una camioneta, la viuda llega a levantar la tapa, pero solo ve a través de un cristal el cuerpo cubierto con una especie de paño blanco, sin poder determinar si se trata o no de su esposo. Poco después ese cuerpo es enterrado apresuradamente, sin que se le rindan los honores que corresponden a un presidente de la República y sin que se permita convocar a la ceremonia a familiares, compañeros y amigos. Tendrán que pasar 17 años para que se pueda hacer un funeral público por el Presidente Allende e, incluso entonces, quienes asisten a la iglesia y al cementerio son cuidadosamente seleccionados y deben mostrar su invitación personal para poder entrar.

Un secuestro detrás del otro

El suicidio de Allende marca el fin de un secuestro y el principio de otro, que comenzará su final 17 años después con la exhumación y entierro público de sus restos, aunque todavía sus ciudadanos sufren las consecuencias de ambos. En uno –con la conspiración que desemboca en el golpe– se le secuestra al pueblo chileno el derecho a transitar un camino de equidad, justicia social, democracia y libertad. En el otro se lo priva de su memoria histórica, de su derecho a conocer, recordar, analizar y reivindicar lo ocurrido durante el gobierno de la Unidad Popular. Y, por sobre todo, se le niega el conocimiento real, verdadero, de la figura, los métodos, las ideas, la ética y la personalidad de Salvador Allende.

El primer secuestro es planeado y dirigido por un grupo de notables chilenos y norteamericanos, ligados al narcotráfico mundial, asociados en poderosas transnacionales con sede en los Estados Unidos y apoyados por el gobierno de ese país, con la activa participación de la Central de Inteligencia Americana (CIA) y teniendo como portavoz en Chile al diario *El Mercurio*, hechos todos documentados y contrastados suficientemente.

El segundo comienza días después de la muerte de Allende, al extenderse la versión de su caída en combate y posterior asesinato por los militares. Esta versión, basada en falsos testimonios, es expuesta por Fidel Castro en La Habana, adornada por Gabriel Gar-

cía Márquez en un artículo periodístico y repetida hasta ser convertida en verdad por las direcciones de todos los partidos de la Unidad Popular. Se trata de una historia sustentada con lujo de detalles por algunos sobrevivientes de La Moneda, con falsos testigos, falsos mapas de situación y de traslado del cuerpo sin vida de Allende dentro del palacio presidencial, y falsas versiones –propias y ajenas.

Esa tergiversación de los hechos, al presentar a Allende como un guerrillero de traje y corbata, viste de verde olivo con metralleta en mano al pacífico, legal y democrático proceso de cambios que bajo su presidencia ha vivido el país del cobre y el salitre. Además, convierte al Presidente en un combatiente de segunda categoría, ya que habría elegido el peor lugar de Santiago para una resistencia armada. Si su opción hubiese sido combatir a pesar de haber recibido informes esa misma mañana que le indicaban que no contaba con fuerzas militares suficientes para hacerlo, se habría protegido dentro de un regimiento o en la Escuela de Suboficiales de Carabineros, que le permanece leal hasta después de su muerte. El Palacio de La Moneda, un viejo caserón del siglo XIX y con espacios abiertos por sus frentes norte y sur, que permiten el cómodo emplazamiento de los blindados y la artillería atacantes, es todo lo contrario de una fortaleza militar.

La confección de esa caricatura póstuma de Allende permite consumir el segundo secuestro, que condena al olvido al más importante proceso de cambios sociales desarrollado en un marco de libertad y democracia, ejemplo para el mundo y respuesta positiva a la pregunta mil veces planteada de si es posible construir una sociedad más justa, libre y soberana sin que medie una revolución violenta, con guerra civil, fusilamientos y la eliminación de un bando por el otro.

Fidel Castro *relata* el 28 de septiembre, ante cientos de miles de personas reunidas en la Plaza de la Revolución de La Habana, lo que según él habría ocurrido 17 días antes en Santiago de Chile: Allende, “avanzando hasta el sitio donde habían irrumpido los fascistas (en el segundo piso del Palacio de La Moneda), recibe una bala en el estómago, que lo hace doblarse con dolor, pero sin dejar de luchar. Apoyándose en un sillón continúa disparando contra los fascistas que se encontraban a pocos metros de distancia, y por fin es alcanzado por una bala en el pecho, que lo derrumba. A pesar de estar moribundo es acribillado a balazos”.

Pero... “al ver caer a su Presidente, los miembros de su guardia personal lanzan un contra-ataque y consiguen hacer retroceder a los

fascistas hasta la escalera principal”. Entonces “en pleno combate, se da un hecho que reviste una gran dignidad: conducen el cuerpo inerte del Presidente a su gabinete y lo sientan en el sillón presidencial. Después le colocan la faja presidencial y lo envuelven en una bandera chilena”. Y por si fuera poco, Castro añade que “después de la muerte del Presidente, los heroicos defensores del palacio resisten todavía dos horas las salvajes acometidas de los fascistas. La última resistencia sólo terminó a las cuatro de la tarde”.

García Márquez, por su parte, relata así la muerte de Allende: “Alrededor de las 4 de la tarde, el general mayor Javier Palacios llegó a la segunda planta (del Palacio de La Moneda) junto con su ayudante, el capitán Gallardo y un grupo de oficiales. Allí, en medio de las falsas sillas Luis XV, de los jarrones chinos con dragones y las pinturas de Rugendas en el Salón Rojo, les esperaba Salvador Allende. Estaba en mangas de camisa, llevaba un casco de minero y no llevaba corbata, las ropas teñidas de sangre... En cuanto vio aparecer a Palacios en las escaleras, Allende le gritó: ‘Traidor’ y le disparó en la mano... Según el relato de un testigo que me pidió que no diese a conocer su nombre, el Presidente murió en un intercambio de disparos con esa banda. Y entonces, los demás oficiales, en un compromiso ritual, dispararon sobre el cuerpo. Finalmente, un suboficial le golpeó la cara con la culata de su fusil”.

Ambas versiones son absolutamente falsas, tanto la del político cubano que tenía suficientes medios (y agentes o confidentes cercanos al lugar de los hechos) para tener una información de primera mano, como la del llamado maestro de periodistas que infringió una de las normas elementales de esa profesión: la de comprobar la veracidad de sus informaciones y no atenerse a la versión de un falso testigo anónimo. Lo único cierto de estos detallados *relatos* es que Allende muere ese día. Todo lo demás es una invención que, repetida hasta el cansancio y adobada con falsos testimonios *directos* (y de los cuales hasta hoy nadie ha dado cuenta de su origen ni se ha rectificado) da pábulo a la leyenda y, a la vez, crea *a posteriori* infinidad de *colaboradores* y *asesores personales* del Presidente muerto, que con el pasar del tiempo crecen, se multiplican y relatan historias personales sin ningún fundamento.

En la creación y mantenimiento de esa fábula que tanto daño hizo a la memoria de Allende y a la comprensión y valoración de su gobierno participaron de manera decisiva, por acción u omisión, quienes ostentaban entonces la dirección de los partidos de izquierda desde cómodos exilios en Europa, a uno y otro lado de la cortina

de acero, en México y en Cuba. De esa complicidad ni siquiera se salvó la familia del Presidente, aunque en su caso al menos guardaron silencio, no desmintieron la versión “oficial” pero tampoco la repitieron a diestra y siniestra.

Tuvieron que pasar 20 años y que se iniciara la democratización de Chile, para que la verdad se comenzara a conocer¹.

Hoy, 30 años después, la opinión pública mundial conoce y aprecia lo ocurrido: Allende se suicida, fiel a su compromiso público varias veces expresado de que ninguna intentona golpista conseguiría sacarlo con vida de La Moneda, de que no renunciaría al mandato que le otorgó su pueblo y de que no abandonaría el país sin completar los seis años para los que ha sido elegido.

Esa verdad del suicidio, ocultada por intereses políticos, fue avallada dos décadas después por el *Informe Rettig*² y asumida por todos los dirigentes políticos chilenos, por sus amigos y por su familia, aunque muchos todavía tardaron años en aceptarlo públicamente y la gran mayoría de ellos no hayan sacado todavía las conclusiones debidas. Tampoco se ha escuchado a los mariscales de la derrota una explicación de la razón que los llevó a inventar y sostener tal mentira durante tanto tiempo.

El suicidio no quita un ápice al valor histórico y real de la figura y las acciones de Salvador Allende. Incluso las enaltece, porque demuestra una firme consecuencia con sus ideas y una fidelidad a su pueblo, al que en ese momento crucial de la historia chilena sabe que no puede ofrecer nada más que su vida y su ejemplo. Treinta años después, su figura pertenece a la historia, a lo mejor y más noble de la historia contemporánea de la sociedad humana, que se irradia desde Chile hacia el resto del mundo.

¹ Drago, Tito. *El doble secuestro*, Madrid, Editorial Complutense, 1993. En este libro se relató y analizó por primera vez cómo murió Allende.

² Pero ese informe también puso reservas inauditas al evaluar el hecho: “es de toda evidencia que la investidura que detentaba, las circunstancias históricas de su deceso y las innegables connotaciones de su última determinación, confieren a su muerte una significación que escapa a las posibilidades y a los deberes que esta Comisión intenta elucidar”. Curioso *lapsus* de esa Comisión, al afirmar que Allende “detentaba” la investidura, o sea que la “poseía ilegítimamente”, pues tal es la acepción que todos los diccionarios asignan al verbo *detentar*, incluido el de la Real Academia Española de la Lengua.

CAPÍTULO II

Chile, un país con historia

Cuando el extremeño Pedro de Valdivia, cubierto con armadura y casco de hierro, llegó a lo que hoy es el corazón de Chile y fundó su capital, bautizándola con el nombre de Santiago del Nuevo Extremo, se encontró con los mapuches, un pueblo que habría de despertar su admiración.

En carta al Rey, Valdivia escribió: “Prometo mi fee, que treinta años que sirvo a vuestra Majestad y he peleado contra muchas naciones, y nunca tal tesón de gente he visto jamás en el pelear”.

Ese espíritu indómito de lucha por su libertad que caracterizó y caracteriza a los mapuches (en su lengua: hombres de la tierra, u hombres de esta tierra) pobladores de la Araucanía, es patrimonio también de los chilenos, descendientes de aquéllos, de los colonizadores españoles y de otras aportaciones de inmigrantes europeos.

Durante el siglo XX Chile se destacó por contar con una sólida organización constitucional y una larga vida parlamentaria, interrumpida sólo por breves períodos en la década del treinta, aunque varias veces esa estabilidad democrática fuera sometida a tensiones. Esa solidez institucional favoreció la existencia de una fuerte y unificada central de trabajadores, dos partidos de izquierda –el Comunista y el Socialista–, una Democracia Cristiana (DC) que en nada tuvo ni tiene que envidiar a sus pares de Europa, un Partido Radical (PR) integrado en la Internacional Socialista, y un compromiso generalizado con las causas nobles y justas del continente, a pesar de su aislamiento geográfico entre la Cordillera de los Andes y el Océano Pacífico.

En la década del treinta, al constituirse una fugaz República Socialista que duró menos de dos semanas, el país vivió una de las experiencias más interesantes y menos conocidas del planeta, como un reflejo o reacción ante la crisis económica mundial que se manifestaba en Chile en forma de una profunda inestabilidad política, social y militar.

Por esa época la organización sindical era débil, el Partido Comunista (PC) estaba escindido en dos y ambas fracciones se procla-

maban sección oficial de la III Internacional y se alistaban en las filas del más duro y sectario estalinismo, teniendo como consecuencia inmediata su aislamiento de los trabajadores en particular y de la ciudadanía en general.

Casi simultáneamente al comienzo de esa crisis y de la inestabilidad en Chile, surgen de forma paralela y sin contacto entre sí, una serie de pequeñas y dinámicas agrupaciones políticas y sindicales, como Nueva Acción Pública, Partido Socialista Marxista, Acción Revolucionaria Socialista, Orden Socialista, Partido Socialista Revolucionario, Partido Socialista Unificado, etc. Casi todas ellas se unen poco después a los sectores descontentos de las Fuerzas Armadas y el 4 de junio de 1932 se alzan en armas, destituyen al gobierno e instalan una Junta de Gobierno que declara instaurada una República Socialista y toma el mando de la nación “para el pueblo de Chile, por el pueblo de Chile y con el pueblo de Chile”.

Este intento de instaurar el socialismo en el país, que dura apenas doce días hasta ser anulado por un golpe perpetrado por la mayoría reaccionaria del Ejército, es liderado por Marmaduque Grove, coronel activo de la Fuerza Aérea. En ese breve periodo de tiempo se alcanza a aprobar una serie de leyes de profundo contenido nacionalista y social, algunas de las cuales son rescatadas del olvido y aplicadas por Salvador Allende durante su presidencia, 40 años después.

El gobierno de aquella República Socialista estableció que “alimentar al pueblo, vestir al pueblo, domiciliar al pueblo, ésta debe ser la suprema ley del estado, contra la cual ninguna otra puede enfrentarse” y fiel a su programa aplica las primeras medidas revolucionarias: plan de reforma agraria; disolución de la Compañía del Salitre Chileno, controlada hasta entonces por capitales norteamericanos; aprobación del proyecto de nacionalización de las minas de salitre; creación del Banco del Estado; imposición del control del comercio interior y exterior; aprobación de la reforma educativa y de normas para que las grandes fortunas comiencen a pagar impuestos.

Grove y sus compañeros pagan con la cárcel su osado intento. Poco menos de un año después, mientras en las paredes de todo el país se repiten inscripciones pidiendo *Grove al poder*, los dirigentes de las agrupaciones citadas y los militares revolucionarios se unen para crear el PS, el 19 de abril de 1933, un partido que no ingresará a la Internacional Socialista ni a ninguna otra hasta después de derrocado Salvador Allende. Entre sus fundadores están el mismo Mar-

maduque Grove Matte, relevante jefe de la masonería; Salvador Allende, bisnieto de un guerrillero en las luchas de la independencia contra el colonialismo español, nieto de un médico y senador por el PR e hijo de un abogado de pensamiento progresista; y Óscar Schnacke, tío de Eric Schnacke, dirigente socialista que durante su exilio en España será director del gabinete de Joaquín Leguina en la Comunidad de Madrid.

En la fundación de ese nuevo partido no figura ningún ex miembro del PC o de los grupos trotskistas, ni siquiera a través de las pequeñas agrupaciones que confluyen en la nueva organización. Recién en 1936 un grupo trotskista ingresa al PS y deberán pasar aún muchos años más (hasta que la crisis del estalinismo comience a expulsar militantes disidentes), para que reciba a ex miembros del PC.

Por esos mismos años se fortalecen en Chile las Milicias Republicanas, un movimiento nazi creado a imagen y semejanza del alemán, con sus mismos métodos armados y violentos de actuación. Para enfrentarlo, ante la pasividad de las autoridades, el PS constituye las Milicias Socialistas, llamadas también *camisas de acero*, de las que Allende forma parte. Es el periodo en que el conservador Arturo Alessandri gobierna con estado de sitio y facultades extraordinarias y en el que está prohibido fijar carteles y hacer propaganda de cualquier tipo. En esas condiciones, los camisas de acero borran de las calles a las milicias nazis y proclaman candidato al Senado a Grove, quien todavía permanece recluido en una prisión. El lema electoral que convierte en parlamentario a este militar precursor del socialismo es “de la cárcel al Senado”.

El triunfo electoral de 1938 lleva al histórico coronel socialista al Senado y a su novel partido al gobierno, integrado en un Frente Popular controlado por el PR, bajo la presidencia de Pedro Aguirre Cerda. El joven médico Salvador Allende es nombrado ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social. Poco después de asumir ese cargo y al comprobar la tarea que tiene por delante, declara en una convención médica realizada en la ciudad de Talca: “es imposible dar salud y conocimiento a un pueblo que se alimenta mal, que viste andrajos y que trabaja en un plano de inmisericorde explotación. Chile tiene la más alta mortalidad infantil del mundo. Por cada veinte partos, nace un niño muerto. Por cada mil nacidos vivos, mueren 250”.

Poco después, hablando de las Cajas de Previsión y de la Beneficencia añadió que “conscientes de la mala calidad de la atención

que están prestando (esas dos instituciones), prefieren gastar millones de pesos en tónicos y jarabes que dan a los enfermos cuando, en realidad, lo que muchos de éstos necesitan son unas cucharadas de frijoles para compensar en parte la subnutrición crónica que están sufriendo, especialmente en proteínas y alimentos protectores”.

Muchos años después, en 1970, cuando la Unidad Popular le confía una responsabilidad aún mayor, la Presidencia de la República, Allende empieza a cumplir con esa previsión, al disponer que se proporcione a cada niño chileno medio litro de leche diario desde las escuelas. Una parte de ese medio litro es servida en las aulas y otra entregada, en polvo, para que se lleven a sus viviendas. Cada fin de mes, durante el gobierno popular, se puede observar a los niños saliendo de las escuelas con sus bolsas de leche en polvo bajo el brazo, como un preciado tesoro. También dispuso que se entregara una cuota similar a las embarazadas.

Porque Chile, un país rico en recursos minerales, tenía y tiene a la mayoría de su población en la pobreza. Hay quienes encuentran el origen de esa división entre una minoría rica y poderosa y una inmensa mayoría pauperizada y alejada del poder en las características que la colonización española desarrolló durante su vigencia. En correspondencia entre dos adalides de la lucha por la libertad de la América hispana, los generales Juan Martín de Pueyrredón y José de San Martín, el primero le dice al segundo: “el sistema colonial observado por los españoles en Chile desde la conquista ha sido en gran parte diverso del que se nota en las demás provincias meridionales. El feudalismo ha prevalecido en todo su vigor, y el ínfimo pueblo ha sufrido de una nobleza engreída y de la opulencia reducida a una clase, poco numerosa, del Reino”.

En Chile, señala también el poeta, escritor y profesor universitario Jaime Valdivieso, hubo “una línea de sistemática continuidad de un pensamiento aristocratizante y clasista encubierto en la ideología republicano-liberal, pero que se remonta al pensamiento de origen feudal de la aristocracia castellano-vasca, dueña del poder económico desde mediados del siglo XVII y que, como cualquier ideología, excede los límites de la conciencia individual, y es propia de una clase, arrogante, despreciativa del indio y del mestizo que desde muy temprano se consideró como la única dueña del territorio”. Esa minoría aristocratizante, que calificaba como *rotos* (mote despectivo para referirse a los pobres) a quienes no pertenecían a su círculo, encabezó la más feroz resistencia a los cambios sociales impulsados por el gobierno popular en 1970-1973.

La clase media prácticamente no existía en el país, sino que la sociedad estaba polarizada en dos extremos: en un lugar la gran masa de trabajadores y en el otro la aristocracia, una aristocracia nada dispuesta a conceder parte de su poder o sus riquezas. De ahí su oposición al gobierno de Allende y su alianza con lo más retrógrado de los Estados Unidos.

Ese pensamiento elitista es asimismo el que consagra una dictadura militar con el apoyo de los partidos políticos, en 1927, con el entonces coronel Carlos Ibáñez del Campo a la cabeza y que es saludada por *El Mercurio* diciendo que: “al concepto de libertad, que ha permitido las tiranías irresponsables, que ha exigido el imperio de la cantidad sobre la calidad, que ha deformado la democracia... que hizo amplios horizontes a las indisciplinas y a las rebeldías y que en nombre del derecho pospuso y debilitó en la ciudadanía la concepción del deber, ha sucedido enérgicamente en los espíritus el concepto de la autoridad base del orden, en cuyo ambiente es sólo posible aspirar al bien común”. Cita ésta que demuestra que el apoyo de ese diario a la ultraderecha y su oposición a la democracia no se debieron solamente al progreso democrático y social registrado durante los tres años del gobierno popular, sino que tiene raíces mucho más profundas, que le han permitido mantener esas características hasta la actualidad.

También en Salvador Allende sus convicciones tuvieron profundas raíces. Además de su formación en una familia democrática y progresista, desde muy temprano, todavía como adolescente cuando ingresó a la Universidad, se destacó como dirigente estudiantil y fue elegido presidente del Centro de Estudiantes de Medicina, delegado ante el Consejo Universitario y poco después vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

Cumpliendo con esas responsabilidades participó en actividades contra el régimen dictatorial de Carlos Ibáñez del Campo, que pagó con la cárcel, procesado por una corte marcial. Estando preso murió su padre, logró un permiso para asistir a sus funerales y junto a la tumba de su progenitor juró con solemnidad consagrar su vida a la lucha social. Su gobierno, su muerte y las condiciones en que ésta se produjo, son pruebas terminantes de que cumplió con ese juramento. Y lo cumplió, como dijo Galo Gómez “con lealtad, pasión, honor y gloria”¹.

¹ *Chile en todas partes*, México, Casa de Chile, 1986.

Alejado de la universidad por la expulsión, dedicó parte de su tiempo a estudiar los clásicos del marxismo e ingresó en la Logia Lautaro, de la que formaron parte próceres latinoamericanos como Simón Bolívar, José de San Martín y Bernardo O'Higgins. Al ser derrocado Ibáñez del Campo pudo regresar a la universidad, terminar sus estudios y recibir el título de médico cirujano.

Las vísperas de la Unidad Popular

El triunfo de la Unidad Popular en las elecciones de 1970 es precedido por varios intentos progresistas, entre ellos el del Frente Popular de 1938-1948, con los gobiernos de Pedro Aguirre Cerda y Juan Antonio Ríos, y el populismo presidido por el general Ibáñez del Campo, en 1952-1958. Es en las elecciones que lo encumbran en 1952 a la presidencia, cuando se presenta por primera vez Salvador Allende como candidato a Presidente por el Frente del Pueblo, y obtiene 51.975 votos, contra 446.439 del vencedor.

En las elecciones de 1958, el PC, junto a las dos variantes en que se encuentra dividido el PS, y dos partidos menores, el Democrático del Pueblo y el del Trabajo, forman el Frente de Acción Popular (FRAP), que con Salvador Allende otra vez candidato a Presidente obtiene 356.493 votos. Triunfa el conservador Jorge Alessandri con 389.909 votos. La diferencia es de apenas 33.000 votos.

Entre 1958 y 1964, fecha de las siguientes elecciones, una serie de acontecimientos nacionales e internacionales cambian el panorama de manera radical. En lo interno, el fracaso del gobierno conservador de Alessandri significa el derrumbe de las posibilidades electorales de la derecha, ante la que se alza un movimiento de izquierda en constante ascenso. En lo externo, el triunfo de Fidel Castro convierte a la revolución cubana en un polo de atracción para el resto del continente y en un ejemplo, que muchos se manifiestan dispuestos a seguir, para combatir la dependencia y la pobreza.

Pero el gobierno de John Kennedy, consciente de esa posibilidad, modifica la política de los Estados Unidos y propone y pone en marcha la Alianza para el Progreso como "una revolución en libertad", que trataría de impulsar gobiernos centristas en América Latina, a los que se daría apoyo económico para emprender obras de infraestructura y reformas en la economía, en especial en el campo, poniendo como contrapartida para recibir ese apoyo que se redistribuya el ingreso interno, se realicen reformas sociales y se exprese

una clara posición contra el bloque soviético y sus brazos exteriores corporizados en los partidos comunistas.

En Chile, país piloto en la citada Alianza, la base social y política sobre la que se experimenta el proyecto es el Partido Demócrata Cristiano (PDC), que en 1952 obtiene menos del cuatro por ciento de los votos y en 1958 el 9,4 por ciento. En 1964, con Eduardo Frei de candidato y agitando la bandera de la *revolución en libertad* como oposición al FRAP, al que se acusa de estar controlado por el comunismo, el PDC triunfa con 1.409.012 votos (55,88 por ciento), seguido de Allende, con 977.902 votos (38,64%) y el reaccionario Partido Nacional (PN), con apenas 125.233 votos (4,95%), lo que constituye una aplastante derrota de la derecha tradicional.

Frei es votado mayoritariamente por los ciudadanos, ilusionados por las reformas prometidas bajo el paraguas del programa propiciado por Kennedy. Su política se orienta a promover el sector manufacturero, impulsar la reforma agraria y lograr un aumento en la producción del cobre, el principal producto de exportación, que durante el gobierno de Alessandri había aportado el 75 por ciento del presupuesto nacional.

El control de la DC por su sector derechista impidió un acuerdo con el PS, que de haberse producido podría haber cambiado el rumbo de la historia chilena. En 1970 el predominio de los progresistas en la dirección democristiana posibilitó el ascenso de Allende a la presidencia pero, no muchos meses después la derecha retomó el control y en 1973 apoyó el golpe de estado de Augusto Pinochet, lo que también imposibilitó otra vez que prosiguiese el histórico cambio de rumbo impulsado por Allende.

La producción de cobre aumenta bajo el gobierno de Frei padre, aunque al mismo tiempo disminuye en 16 por ciento el ingreso para el Estado por tonelada producida (por la baja del precio en el mercado internacional), se inicia la reforma agraria —a cargo del joven Jacques Chonchol, quien años después será ministro de Agricultura de Allende— y se fortalece el proceso de sindicalización agraria. Pero el talón de Aquiles del gobierno demócrata cristiano de Frei es el incumplimiento de su promesa de redistribuir los ingresos para promover una justicia social. Por el contrario, la participación de los trabajadores manuales en la renta nacional disminuye entre 1960 y 1970 del 18,4 al 16,2 por ciento del ingreso total.

Además, la paralización de la reforma agraria provoca la ruptura del ala izquierda del PDC que, encabezada por Chonchol, da origen en 1969 al Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), que se

integraría más tarde en la Unidad Popular. Durante el gobierno de Allende se vuelve a producir (en 1971) otra escisión en el PDC, que da nacimiento a la Izquierda Cristiana (IC), también integrada en la coalición allendista.

El aumento de la carestía de la vida, la baja de los salarios y una desocupación creciente provocan conflictos sociales que el gobierno de Frei reprime a sangre y fuego. En 1966 una huelga de los trabajadores del cobre, en la mayor mina subterránea de ese mineral del mundo, el yacimiento de El Teniente, es reprimida por el ejército, que provoca la muerte de seis mineros y de dos de sus mujeres y deja más de 30 heridos. El 22 de noviembre de 1967, al realizarse una huelga general convocada por la Central Única de Trabajadores (CUT), cuatro trabajadores y un niño son muertos por la represión policial. Ese mismo año mueren otros ocho trabajadores, en lo que se conocería como *la masacre de Puerto Montt*, perpetrada por las fuerzas policiales en esa ciudad del sur del país. Poco a poco el gobierno demócrata cristiano agudiza la represión y llega al fin de su período con las manos tintas en sangre.

En ese caldo de cultivo se va incubando un nuevo frente y en agosto de 1969 nace la pre Unidad Popular, en forma de un comando de acción unitaria por la nacionalización del cobre, integrado por socialistas, comunistas, radicales, demócratas cristianos de izquierda y populares independientes.

También hacia el final del mandato de Frei (en 1969) se produce un motín militar (conocido como el *tacnazo*, por haberse acuartelado los amotinados en el regimiento Tacna de Santiago), que agita una bandera de reclamaciones económicas y sociales. El movimiento, bajo el mando del general Roberto Viaux, tiene connotaciones fascistas, como se demostrará años después por la actividad de ese general contra el gobierno de Salvador Allende.

Mientras el gobierno de Frei negocia con los amotinados, se alistan fuerzas leales en el sur, al mando del general Carlos Prats, y por miles de personas airadas que responden al llamado de la CUT y piden un rápido término del alzamiento, lo que provoca al día siguiente la renuncia del ministro de Defensa Nacional y un forzado acuerdo con los militares rebeldes.

La Unidad Popular se constituye como tal el 9 de octubre de 1969, 12 días antes del *tacnazo*, con un comité formado por 18 representantes, tres por cada partido, que invierten dos meses para elaborar el programa básico que es aprobado por unanimidad.

En el plano económico, el programa establece la necesidad de

terminar con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y expropiar los latifundios, para iniciar la construcción del socialismo. Así mismo, se señala la necesidad de constituir un área estatal dominante, con la nacionalización de las riquezas básicas —cobre, hierro y salitre—, y la integración del área estatal del sistema financiero, la banca privada y seguros y las actividades de interés nacional. En estas se especifica: transporte ferroviario, aéreo y marítimo, comunicaciones, producción, refinación y distribución del petróleo y derivados, siderurgia, cemento, petroquímica y química pesada.

También se establecen otras dos áreas, la propiedad privada y la mixta. En la primera quedarían la propiedad privada de las pequeñas y medianas empresas y sectores de la industria, minería, agricultura y servicios. En el área mixta estarían las empresas en las que se combinaran capitales del estado y de particulares.

Las reivindicaciones sociales se especifican con claridad y didacticismo: “el pueblo chileno quiere viviendas dignas sin reajustes que esquilmen sus ingresos, escuelas y universidades para sus hijos, salarios suficientes, que terminen de una vez las alzas de precios, trabajo estable, atención médica oportuna, alumbrado público, alcantarillado, agua potable, calles y aceras pavimentadas, una previsión social sin privilegios, justa y operante, teléfonos, policías, jardines infantiles, canchas deportivas (polideportivos), turismo y balnearios populares”.

En la cultura promete que “el nuevo Estado procurará las masas a la actividad intelectual y artística, tanto a través de un sistema educacional radicalmente transformado como a través del establecimiento de un sistema nacional de cultura popular”.

Una vez aprobado el programa, los partidos miembros de la Unidad Popular inician el proceso para designar a su candidato a presidente, que debe ser elegido entre Allende, por el PS, el poeta Pablo Neruda, por el PC, y Chonchol, por el MAPU. El 21 de enero de 1970 Allende es proclamado formalmente como el candidato único de esa vasta coalición.

El periodista comunista Eduardo Labarca recuerda una conversación previa entre Allende y representantes mapucistas, diálogo que da una idea de la franqueza y cordialidad con que los líderes políticos chilenos discutían las posibilidades de cada candidato. Los mapucistas le piden a Allende que desista de su candidatura y le dicen: “Tú no atraes a la juventud de hoy, como puede hacerlo Chonchol”. La respuesta es rápida: “Como la Coca-Cola, soy un producto que ya está metido. A Allende lo conocen en

todos los rincones de Chile. ¿Cuánto tiempo y cuánta plata se necesitaría en cambio para meter a Chonchol? Además, soy el único que puede llegar a tener el apoyo de todas las fuerzas de izquierda. No hay otro”. Todo el proceso que viviría hasta su muerte en La Moneda indica que en verdad no existía otro capaz de concitar un apoyo mayoritario y de dirigir un conglomerado de fuerzas tan heterogéneo.

CAPÍTULO III

Tracks, prólogos sangrientos

Salvador Allende gana la presidencia en su cuarto intento electoral. La primera vez que se presenta como candidato a la presidencia, en 1952, lo hace al frente de una fracción del PS, dividido entonces en dos, y apoyado por el ilegal PC. Logra algo menos del seis por ciento de los votos emitidos.

Seis años después es el candidato único de socialistas, comunistas y otros grupos de izquierda menores, unidos en el FRAP, quedando a sólo 33.000 votos del ganador, el derechista Jorge Alessandri, ambos con un tercio de los votos. Se comenta entonces que si el sacerdote marxista secularizado Antonio Raúl Zamorano, que obtiene en esa ocasión 40.000 votos, no se hubiera presentado en esos comicios como candidato a la presidencia, Allende podría haber sido el triunfador.

En 1964 Allende vuelve a ganar votos y logra el 39 por ciento del total, pero su principal adversario, el demócrata cristiano Eduardo Frei, resulta vencedor con el 56 por ciento de los votos, después de recibir un fuerte apoyo político y económico de sus correligionarios de Europa, y fondos clandestinos suministrados por la CIA, que le permiten financiar su campaña electoral.

Finalmente, otros seis años más tarde, el cuatro de septiembre de 1970, en su cuarto intento y al frente de un conglomerado de liberales, marxistas, cristianos, socialistas, comunistas, radicales, sindicalistas y masones, bajo las siglas de la recién creada Unidad Popular, Allende logra la mayoría con el 36,3 por ciento de los votos, frente al conservador Jorge Alessandri que obtiene el 35 por ciento y el demócrata cristiano progresista Radomiro Tomic que consigue el 27,8 por ciento.

La tradición electoral chilena indica que el candidato con más votos debe ser proclamado Presidente de la Nación, aunque la Constitución otorga al Congreso de Diputados y Senadores la potestad de decidirse por uno de los dos más votados, si ninguno de ellos alcanza el 50 por ciento, que es lo que ocurre en esa oportunidad.

Sin embargo, antes de celebrarse estas elecciones, grupos chile-

nos y estadounidenses ya habían comenzado a conspirar para impedir el triunfo de Allende e ir creando un clima favorable para forzar al Congreso a dejarlo de lado y elegir a otro, en el caso de que finalmente obtuviese la mayoría de los votos. Antes de las elecciones todos los partidos y expertos sabían que ninguno de los candidatos obtendría más del 50 por ciento de los votos, por lo que constitucionalmente correspondería al Congreso elegir al Presidente entre los dos más votados.

El 27 de junio de 1970, el entonces asistente de Seguridad Nacional del presidente norteamericano Richard Nixon, Henry Kissinger, en una reunión del Comité de los 40, organismo encargado de aprobar las acciones encubiertas, secretas y clandestinas del gobierno estadounidense, lo dice con claridad meridiana: “no veo por qué tenemos que permanecer cruzados de brazos cuando un país se desliza hacia el comunismo por la irresponsabilidad de su propio pueblo”. Ni el pueblo chileno era irresponsable ni se deslizaría hacia el comunismo, pero la declaración vale para conocer las intenciones que guiaron a los círculos que en aquella época controlaban el poder en los Estados Unidos.

Treinta años después, nada menos que el belicista y ultraderechista secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, al preguntarle el 20 de febrero de 2003 un estudiante –poniendo como ejemplo de Chile como una intervención de Estados Unidos en contra del deseo del pueblo– si creía que Washington es moralmente superior para intervenir en Irak, contestó: “respecto a su comentario anterior sobre Chile en los setenta y lo que ocurrió con el señor Allende, no es una parte de la historia americana de la que estemos orgullosos”.

Las elecciones en las que triunfa Allende se celebraron en un marco favorable a un cambio hacia la izquierda dentro de Chile, dado el fracaso del gobierno democristiano de Eduardo Frei y de la conjunción de gobiernos populares en los países vecinos: gobierna el Perú el general Juan Velasco Alvarado, inmerso en un profundo proceso de cambios sociales; en Bolivia el también general Juan José Torres quien cuenta con el apoyo de los sindicatos y de los partidos progresistas; y en la Argentina se avizora que la dictadura no puede mantenerse mucho tiempo más, se conocen las negociaciones iniciadas con Juan Domingo Perón para pactar un proceso electoral que finalmente se concreta en 1973 con un amplio triunfo del Frente Justicialista, que responde al liderazgo de ese ex presidente, derrocado en 1955 por un golpe de Estado.

Un complot multinacional

¿Amenaza de verdad el gobierno allendista con devenir en un régimen comunista? Sus compromisos pre-electorales, su comportamiento posterior y la misma actitud de los dirigentes soviéticos hacia su gobierno lo niegan. Por esa época se asiste en el Tercer Mundo a una movilización generalizada en favor de que los países subdesarrollados recuperen fuentes de materias primas, sus industrias básicas y sus servicios públicos, con una activa participación del estado. Allende se suma a esa corriente de reivindicación de los recursos naturales, que ya sustentaba el anterior gobierno demócrata cristiano bajo la consigna de la *chilenización*.

Es curioso y a la vez demostrativo de los verdaderos intereses de quienes se le oponen, que dos de las cuestiones que provocan más reacción externa e interna en contra de Allende se gestan bajo el gobierno de la DC: la reforma agraria y la nacionalización del cobre. La primera comienza bajo Frei, y con la misma ley aprobada por la DC se continúa desarrollando con Allende. La segunda es aprobada unánimemente por el parlamento presidido por el mismo Frei y en el que los partidos que constituyen la Unidad Popular están en minoría, como lo siguieron estando durante su gobierno, sin que a Allende se le ocurriera pasar por encima de las competencias que la Constitución otorga a senadores y diputados.

El periodista e historiador argentino Gregorio Selser, en varios libros y escritos, demuestra documentadamente que la confrontación del gobierno norteamericano con Allende está predeterminada antes de las elecciones y, por lo tanto, antes de que asuma el poder y comience a aplicar su programa.

El complot, desde luego, no es alimentado por los Estados Unidos como un todo. Ni todas sus corporaciones transnacionales, ni todos los miembros de su Gobierno y desde luego tampoco los de la oposición están en esa conspiración. Pero sí lo están sectores lo suficientemente poderosos e influyentes como para comprometer al presidente Nixon y utilizar a la CIA. A la cabeza de esos sectores están Harold Genenn, presidente de la International Telephone and Telegraph (ITT); Henry Kissinger, Secretario de Estado; Donald Kendall, presidente de la Pepsi-Cola, y el chileno Agustín Edwards, vicepresidente de la Pepsi-Cola y dueño de *El Mercurio*, un diario que junto a los demás medios de comunicación de ese *holding* jugaría un papel decisivo en la destabilización del gobierno popular.

La capacidad de esos sectores para enrolar a Nixon activamente

en la campaña contra Allende queda reflejada en lo que ocurre el 11 de octubre de 1970, días antes de que el Congreso chileno consagre presidente a Allende. El embajador Korry está dialogando con Kissinger en su despacho de la Casa Blanca, cuando éste lo lleva hasta el de Nixon para que lo salude. Según el relato de Thomas Powers: “Nixon se topó con ellos en la puerta cuando ésta se cerraba y sorprendió a Korry al pegar con su puño en la palma de la mano al tiempo que gritaba: ¡Ese hijo de puta! ¡Ese hijo de puta!”. El asombro que demuestra la cara de Korry interrumpió a Nixon, quien aclaró: “Usted no, señor embajador. Hablo de ese bastardo de Allende...”. Y pasa a explicarle cómo pensaba aplastar al político chileno.

Esa actitud del gobierno de Nixon es públicamente criticada años después por funcionarios gubernamentales, e incluso por el presidente James Carter, pero quizás la más espectacular crítica (o auto-crítica) la realiza el 8 de marzo de 1977 Brady Tyson, subjefe de la delegación de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En el plenario de esa comisión dice Tyson: “seríamos poco sinceros con nosotros mismos y con nuestro pueblo, si no expresáramos nuestro más profundo pesar por el papel que algunos funcionarios gubernamentales, instituciones y grupos financieros privados desempeñaron en la subversión contra el gobierno anterior de Chile, del presidente Allende, elegido democráticamente, y que fue derrocado por el golpe militar del 11 de septiembre de 1973”.

El funcionario norteamericano admite que la expresión de pesar no contribuiría de manera significativa a aliviar el sufrimiento y el terror padecido por el pueblo chileno y aclara:

“Sólo podemos decir que las políticas y las personas responsables por estos actos han sido repudiadas por el pueblo merced a elecciones libres y abiertas”. Se refiere a la pérdida de las elecciones por los republicanos y el triunfo de Carter, pero Tyson olvida decir que los responsables *privados*, los jefes de las grandes transnacionales y la mayoría de los funcionarios de la CIA implicados en el complot, siguen en sus puestos 30 años después.

El más notable es Geneen, a quien sería injusto tratar sólo como el presidente de la ITT, ya que esa empresa bajo su dirección se transforma en bastante más que en una compañía de telecomunicaciones. La convierte en dueña de la cadena Sheraton y de empresas tan variadas que abarcan los rubros de los seguros de vida, editorial, material electrónico, aparcamientos, minas, aserraderos, panaderías, constructoras, señalizadoras de tráfico, aire acondicionado, bombas y válvulas

fabriles, entre otros. En suma, desde que Geneen asume la presidencia en 1959, hasta 1973, la ITT toma el control de 250 empresas, dentro y fuera de los Estados Unidos, pasando del octogésimo lugar al noveno en la lista anual que publica la revista *Fortune*, de las 500 corporaciones industriales más importantes de ese país.

El senador Edward Kennedy comenta en una audiencia del senado: “el sostenido y perfeccionado aparato de presión contra las leyes *antitrust* de la ITT y el esfuerzo que realizó entre 1969 y 1971, es una obra maestra en el arte de la presión política. Cualquier miembro del gabinete y todo asesor de la Casa Blanca con quien la ITT no se haya puesto en contacto, debe sentirse hoy indudablemente como un ciudadano de segunda clase. Probablemente sea un símbolo de *status* en los círculos gubernamentales el haber sido personalmente presionado por Harold Geneen, y un tanto menoscabador el haberlo sido apenas por Ned Gerrity o por Bill Merriam”.

Los documentos secretos de la ITT

En marzo de 1972 la ciudadanía chilena es conmovida por la publicación de *Los documentos secretos de la ITT*, editados simultáneamente por dos reconocidos adversarios: el diario *El Mercurio*, que los incluye en su edición dominical y la Editorial Quimantú, que imprime un libro de tal éxito que se agotan tres ediciones sucesivas en sólo diez días, superando los 200.000 ejemplares. Los originales fotocopados son entregados al gobierno gratuitamente por el periodista norteamericano Jack Anderson, quien previamente publica varios artículos en una cadena de periódicos de su país. Los originales para imprimir el libro son entregados a la dirección de la Editorial Quimantú un miércoles, tras haber sido traducidos por el cuerpo de traductores del ejército chileno por disposición personal del presidente Allende. Cuando el libro ya está impreso y en proceso de encuadernación llega un ejemplar a *El Mercurio* cuyo director, sabiendo que nada puede evitar la distribución por la editorial, resuelve incluirlo también como una separata en su edición dominical, aunque sin formato de libro. De tal manera las dos ediciones coinciden en su salida a la venta.

El amplio conocimiento en Chile de esos documentos provoca un fuerte impacto en la opinión pública, por constituir pruebas indiscutidas e indiscutibles de la conspiración nacional e internacional en contra del gobierno legítimo y constitucional.

Por esos documentos se sabe que el ex jefe de la CIA y director de la ITT, John McCone, recibe el 9 octubre de 1970 un informe confidencial del vicepresidente a cargo de la oficina de esa transnacional en Washington, en el que le informa haber almorzado con Mc. Lean, su contacto en *la Compañía*, como se llama a la CIA en la jerga norteamericana. Mc. Lean le comunica sus impresiones pesimistas sobre la posibilidad de impedir que Allende gane la votación prevista para el 24 de ese mes. Además, le informa de que sus agentes se siguen acercando a miembros de las Fuerzas Armadas chilenas, para intentar que encabecen alguna especie de levantamiento, “sin éxito hasta la fecha”.

Tampoco, dice el informante, logran progresos en sus intentos por conseguir que las empresas norteamericanas cooperen para provocar un caos económico, y señala los casos de la General Motors y de la Ford, que argumentan tener demasiados intereses en Chile como para correr cualquier riesgo y “persisten en la esperanza de que todo saldrá bien”.

La maquinación de la CIA para aplicar una presión económica que cree las condiciones para provocar un golpe militar es detallada el 29 de setiembre de ese año por E. J. Gerrity, otro de los vicepresidentes de la ITT en un télex confidencial enviado a Geneen y en el que expone, entre otras, las siguientes medidas: negativa o demora de los bancos para renovar créditos, que las compañías “arrastren los pies”, que se demoren para enviar dinero, entregar pedidos, fletes y respuestas, y retirar toda ayuda técnica. El 22 de marzo de 1972 Anderson informa que la ITT ofreció a la Casa Blanca ayudar financieramente con millones de dólares, para llevar adelante ese plan en 1970. El tema no queda claro del todo, aunque es lógico pensar que se trata de una oferta de soborno a la cúpula de la Casa Blanca, un ofrecimiento de financiamiento “sucio”, en cuentas B, ya que es imposible creer que el Tesoro de los Estados Unidos necesite subvenciones del sector privado.

En marzo y junio de 1970, el Comité 40, presidido por Kissinger, aprueba nuevas partidas, la última de 400.000 dólares, para las acciones contra la elección de Allende. En esa reunión el Secretario de Estado norteamericano pronuncia su célebre frase, diciendo no encontrar razones para observar con indiferencia “cómo un país marcha hacia el comunismo debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo”.

El 4 de setiembre de 1970 Allende triunfa en las elecciones y esa misma noche, a las dos de la mañana del día cinco, el candidato

demócrata cristiano y líder del sector progresista de ese partido, Radomiro Tomic, visita al ganador para felicitarlo personalmente, lo que constituye un reconocimiento explícito de su triunfo. Simultáneamente los complotados aceleran la campaña del terror y el plan de desestabilización. En pocos días se multiplica por diez la cantidad de pedidos de certificados de la vacuna antivariólica, necesarios para viajar el exterior; se agotan todas las reservas en las líneas aéreas; la moneda nacional, el escudo, sube en el mercado negro de 18 a 100 dólares; el comercio y la industria suspenden las operaciones a crédito; la solicitud de pasaportes (en un país donde sus ciudadanos pueden viajar sólo con la cédula de identidad y sin necesidad de pasaporte a los países limítrofes) se eleva de 80 a 500 por día; cae la bolsa y se comienza a acaparar productos de primera necesidad.

Una información publicada en el *Buenos Aires Herald*, un diario editado en inglés en la Argentina y de gran influencia en el mundo de los negocios y de la política, da cuenta el 21 de setiembre de ese año de que al menos nueve agencias inmobiliarias bonaerenses están ocupadas en conseguir residencias, aunque sea temporalmente, para chilenos que desean ocuparlas por períodos que van desde dos o tres meses hasta dos años, según sus previsiones antiallendistas. Se trata, puntualiza el *Herald*, de *gentlefolk*, gente muy fina, con grupos familiares de hasta 45 personas, lo que dificulta la disponibilidad. Una dificultad que, continúa el periódico, es mucho mayor en Mendoza, la occidental ciudad argentina fronteriza con Chile a la altura de su capital, Santiago.

Con esas condiciones generales, el Comité 40 da luz verde al plan *Track*, conocido más tarde como *Track uno* para diferenciarlo del paso siguiente, que no tardaría en aprobar. El *Track uno* u *Operación gambito*, cuenta con el apoyo del presidente Frei y del derrotado candidato derechista, Jorge Alessandri.

Dos ex periodistas de la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP), Hal Hendrix y Robert Berrelez, vinculados a la CIA y en esa época encargados de las relaciones públicas de la ITT en Santiago de Chile y Buenos Aires, informan bajo la advertencia de “personal y confidencial” el 20 de setiembre a su central que ya se ha iniciado el *Track uno*. El comienzo se verifica al recibir el embajador Edward Korry un mensaje del Departamento de Estado, “dándole luz verde para actuar en nombre del presidente Nixon”. El mandatario norteamericano está dispuesto a hacer todo lo posible para evitar el acceso de Allende a la presidencia, excepto

un desembarco masivo de *marines* como el realizado en la República Dominicana, en el que años atrás se involucraron en una operación militar abierta, con la participación de 40.000 soldados.

Hendrix y Berrelex explican que “la clave (*the key*, subrayado en el original) de si tenemos una solución o un desastre es Frei, y cuanto presión los EEUU. y el movimiento anticomunista chileno pueden aplicarle en las próximas dos semanas. Los diarios de *El Mercurio* son otro factor clave. Es extraordinariamente importante mantenerlos vivos y publicando entre ahora y el 24 de octubre”, fecha en la que el parlamento elegiría un Presidente entre los dos candidatos más votados.

Ambos empleados de la ITT dan su visión de los hechos, escriben *Radimoro* en vez de *Radomiro* Tomic para mencionar al derrotado candidato de la DC el que, afirman, “siente un odio profundo por Frei y los Estados Unidos” y citan al embajador Korry afirmando que considera a las fuerzas armadas chilenas “un lote de soldaditos de juguete” y exigiéndole al presidente Frei “que se ponga los pantalones”. Asimismo cuentan una anécdota clarificadora de los prejuicios antiallengdistas del embajador, cuando recibe a un emisario de Allende, quien le presenta sus respetos y le informa de que “el gobierno de Allende quiere tener buenas relaciones con el Embajador y los Estados Unidos”. Korry solo contesta que ha estado “tan ocupado con los asuntos consulares, ayudando a obtener visas para los chilenos que querían dejar el país, que no había tenido tiempo de pensar en el futuro” y da por concluida la entrevista.

En el mismo informe definen con claridad el objetivo del *Track uno*: “la fórmula Alessandri, que abriría el camino a nuevas elecciones, tenía la aprobación del Gobierno y la aprobación personal de Frei. Una vez elegido por el Congreso, Alessandri renunciaría, cumpliendo así su promesa hecha antes de la elección de que así lo haría, salvo que hubiera recibido la mayoría relativa de los votos en la elección general. La semana pasada Alessandri anunció públicamente su intención de renunciar si se le elegía. Más tarde se supo que Frei vio y aprobó el texto del anuncio antes de que se entregara al público”.

Con total desparpajo, dado que están escribiendo un informe confidencial añaden que “el líder que creíamos que faltaba está ahí mismo a caballo (Frei), pero no se moverá salvo que se le suministre una amenaza a la Constitución. Hay que proporcionarle la amenaza de una manera u otra a través de la provocación. Al mismo

tiempo, hay que aplicar a Frei una presión sutil pero suficientemente firme para que responda”.

Tres años tardará en responder el líder demócrata cristiano a esas presiones. Mientras unos sectores continúan trabajando en el *Track uno*, Nixon abre el camino para el *Track dos* el 15 de septiembre de 1970, al ordenar al director de la CIA que adopte todas las medidas para impedir el acceso de Allende a la presidencia, sin excluir un golpe de estado y excluyendo solamente una invasión directa por los *marines* norteamericanos.

El mismo Kissinger recuerda cinco años después esa reunión y confiesa que “la orden fundamental impartida en la reunión fue urgir a Helms (director de la CIA) a hacer todo cuanto pudiera para impedir que Allende se sentara en la presidencia”. Un comité del senado norteamericano comprueba años después que Nixon autorizó “a la CIA a implicarse en la promoción de un *coup d'état* en Chile” (un golpe de estado, en francés en el original del informe senatorial). Las instrucciones operativas a los agentes son muy claras: el cable 236, enviado desde el cuartel general de la CIA en Washington al jefe de su estación en Santiago, el 21 de septiembre, especifica estas directivas: “Propósito del operativo es impedir a Allende la asunción del poder. La prestidigitación parlamentaria ha sido descartada. Solución militar es el objetivo”. Otro cable del mismo día, el número 240, especifica que la autorización para buscar una solución militar “al problema” a través del *Track dos* es concedida sólo a la *Compañía* y aclara: “Como parte de autoridad hemos sido explícitamente encargados de no decir nada sobre este *Track dos* al Comité 10, Departamento de Estado, embajador y embajada, y no implicarlos en ningún sentido”.

Los últimos intentos previos

Si el *Track uno* se encuentra con el inconveniente del espíritu vacilante e indeciso de Frei, quien unas horas se siente dominado por su odio a Allende y en otras piensa en su imagen de demócrata y su deseado futuro de volver a presidir Chile, el *Track dos* halla su mayor obstáculo en la personalidad firme y clara del Comandante en Jefe del Ejército, el general René Schneider. Éste, según recuerda en sus *Memorias...* su sucesor, el general Carlos Prats, ya en julio de 1970 prevé que ninguno de los tres candidatos obtendría una mayoría absoluta. Schneider comenta en un Consejo de Generales que no

son pocos los que en Chile estiman que las Fuerzas armadas son una alternativa de poder, y advierte de que en las definiciones constitucionales “no figuran las Fuerzas Armadas como opción y, por el contrario, ellas están definidas como garantía del funcionamiento del sistema..., hacer uso de las armas para asignarse una opción implica una traición al país”.

El 7 de septiembre, conocidos ya los resultados electorales, Schneider vuelve a reunir al Consejo de Generales y expone ante sus pares su pensamiento con énfasis, señalando que en ese momento los militares deben ser más consecuentes que nunca con lo que pregonaron durante la etapa preelectoral. En consecuencia, afirma, “como ningún candidato logró la mayoría absoluta, el Congreso Pleno es soberano para elegir entre las dos primeras mayorías, Allende y Alessandri, y a quien proclame, sea quien sea, lo debemos apoyar y respaldar hasta las últimas consecuencias”.

Esa decisión sólo puede ser quebrada si se crea un clima de inestabilidad y violencia que sobrepase a los poderes constitucionales del Estado, según maquinan los conspiradores de la ITT, la CIA, la cuprífera norteamericana Anaconda, propietaria de yacimientos en Chile, la Pepsi y sus amigos locales.

La campaña desestabilizadora se desarrolla en varios frentes. Andrés Zaldívar, el ministro de Hacienda de Frei, habla por una cadena de radio y televisión el 23 de septiembre de 1970 y lanza un mensaje alarmista sobre los efectos que los resultados de la elección presidencial están teniendo sobre la economía. Una serie de atentados se producen el 26, atribuyéndolos la derecha a partidarios de Allende, contra las torres de alta tensión y estallan bombas en la residencia del industrial Jorge Yarur y en dos supermercados situados en el residencial barrio alto. Unas hojas impresas firmadas por la Brigada Obrero-Campesina (BOC), una organización inexistente, advierten de que esas acciones son un tenue esbozo de lo que harán si el Congreso intenta desconocer el triunfo allendista.

Menos de 24 horas después la policía arresta a cuatro de los autores de los atentados, todos ellos miembros de un sector del Partido Radical que apoya a Alessandri y trasciende que la bomba en casa de Yarur fue colocada con el conocimiento previo del propietario, antes de salir hacia la Argentina. El 28 de septiembre el juez que dirige la investigación de la BOC ordena el arresto de Luis Yarur, hijo del industrial “víctima”, por complicidad en el atentado contra su propio domicilio. Ningún juez es removido de su cargo antes de la asunción de Allende ni durante todo su mandato.

Desde otros frentes los dardos apuntan directamente a las Fuerzas Armadas. La CIA y sus cómplices o inductores de las transnacionales filtran “noticias” para abonar el terreno. Por ejemplo, el ex coronel de inteligencia Jeremiah O’Leary publica una columna en el *Washington Evening Star*, el 14 de octubre, afirmando que Allende, en el caso de ser designado presidente, separará del servicio activo y pasará a retiro a los 23 generales del ejército chileno. O’Leary “adelanta” el nombre del futuro comandante en jefe, el coronel Pablo A. Montt. Ese mismo día se conoce la llegada a Santiago, como representante de la estadounidense Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), de Karl Maler, quien con el mismo cargo estuvo en la embajada de los Estados Unidos en Saigón y participó activamente en favor de Kao Ky, un presidente dócil a las directivas norteamericanas. Ningún general es separado ni pasado a retiro, ni Montt es designado Comandante en Jefe.

Un grupo religioso bonaerense, la Sociedad Argentina de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, contribuye a su manera con esos intentos para cerrar el paso a la Unidad Popular hacia el gobierno. Ese grupo publica un anuncio en los diarios invitando a “rezar un rosario por Chile” con el objeto de pedir a la Señora del Carmen, Patrona de ese país, que se conduela y abra los ojos “para ver la tremenda nocividad de las corrientes que se dicen no comunistas, pero que tienden la mano al comunismo”. La derecha cristiana alude así al PDC que, al llegar a un acuerdo de garantías constitucionales con la Unidad Popular, (que se traduce en un compromiso para reformar la Constitución), resuelve apoyar a Allende.

Es curioso, en ese acuerdo, que Allende haya rechazado sólo una de las condiciones propuestas por la DC. En el transcurso de las negociaciones, según recuerda Joan Garcés en uno de sus libros, el senador Patricio Aylwin insistió en condicionar su voto favorable a Allende a que éste se comprometiera a ceder en favor de la cúpula castrense la potestad de designar y remover a los generales. Allende rechazó terminantemente aceptar una jefatura del Estado privada de ese poder capital para la vigencia de la democracia representativa, “que han ostentado todos los presidentes de Chile”, como recordó en ese momento. Antes que eso, añadió, prefería no ser designado Presidente. También es llamativo que, veinte años después, Aylwin llegará a gobernar acatando la Constitución dictada por Pinochet, que niega al jefe del Estado la potestad de nombrar y remover a los generales, incluyendo al propio Comandante en Jefe del Ejército.

El asesinato del Comandante

Pero a pesar de ese acuerdo o quizás porque ese acuerdo cierra el paso al *Track uno*, el *Track dos* sigue navegando a toda máquina y un sector que recibe armas de la CIA juega una carta de mucho peso, orientada a impedir la elección de Allende por el Congreso, dos días antes de que éste se reúna para consagrar un Presidente. El general Prats recuerda en sus *Memorias...* como recibió la noticia de lo ocurrido esa mañana:

“Me encontraba trabajando en mi oficina del quinto piso del Ministerio de Defensa Nacional, cuando a las 08:30 suena el citófono interno y siento la emocionada voz del ayudante del Comandante en Jefe, comandante Santiago Sinclair, quien me avisa apresuradamente que Schneider ha sido víctima de un atentado, que está herido y que fue trasladado al Hospital Militar”.

Lo ocurrido quedó claramente registrado: un grupo de individuos jóvenes intercepta en la esquina de las avenidas Martín de Zamora y Américo Vespucio el coche en el que Schneider se dirige hacia su despacho, bloquea su paso con otro automóvil y con martillos y palos rompe los cristales traseros y la puerta lateral izquierda, con la intención de amedrentar a sus ocupantes y secuestrar al militar. Su idea es tenerlo secuestrado y exigir a cambio de su libertad que no se designe presidente a Allende. Pero la inexperiencia de los atacantes y la valentía de Schneider, quien alcanza a desenfundar su pistola, precipitan un trágico desenlace. Al comprobar que Schneider está decidido a defenderse, los atacantes le disparan con varias armas, algunas del calibre .45, y huyen, dejándolo gravemente herido. Su conductor, en el mismo vehículo atacado, lo conduce de inmediato al Hospital Militar. Allí Prats lo ve momentos después y recuerda:

“Veo el cuerpo inconsciente de Schneider, inmóvil sobre la camilla, con su rostro hecho mármol y su busto bañado en sangre. Uno de los tres balazos le había perforado los pulmones, le rozó el corazón y le destrozó el hígado”.

De inmediato, Frei designa como comandante subrogante a Prats, quien sigue en la línea de mando a Schneider. En la tarde se reúne la Junta de Comandantes en Jefe de las tres armas, presidida por el ministro de Defensa, Sergio Ossa, y en un comunicado de condena del atentado “advierte a toda la ciudadanía que acciones tan deleznable como ésta no harán cambiar su reiterada y permanente actitud de cumplimiento cabal de su misión”. Ese mismo día el Senado

aprueba el “estatuto de garantías” exigido por la DC, un cuerpo legal que modificaría la Constitución para garantizar aun más el respeto a los principios democráticos.

El intento de secuestro, al convertirse en un atentado que tres días después ocasiona la muerte del Jefe del Ejército, provoca un efecto contrario al que se buscaba, ya que las Fuerzas Armadas reaccionan institucionalmente ante el ataque, y los indecisos de la DC apuestan por la continuidad constitucional.

El 24 de octubre, con Schneider en estado de coma, el Congreso elige presidente a Salvador Allende por 153 votos a favor. Votan favorablemente socialistas, comunistas, demócrata cristianos, demócrata cristianos disidentes, radicales e izquierdistas independientes. Alessandri obtiene sólo 35 votos de su PN. Restan siete votos en blanco, que pertenecen seis a la derecha escindida del PR y uno al PN. Una cantidad de votos a su favor que otorga a Allende una de las mayorías más absolutas logradas por un presidente no sólo en Chile sino también en el resto de América Latina.

Ese mismo día es apresado un civil, Wolfgang Melgonza Garay, de 28 años, quien confiesa haber participado en el atentado contra Schneider. En su domicilio se encuentran municiones, armas cortas y largas y granadas de mano de fabricación española. Días después se producen más detenciones, confesiones y reconocimientos por el chofer de Schneider. Todos de gente vinculada a la derecha, entre ellos algunos militares retirados. Prófundos quedan Juan Luis de Bulnes y Julio Izquierdo Menéndez, quien se refugia en Madrid. La orientación del atentado queda clara con las declaraciones del ministro del Interior de Frei, Patricio Rojas, tres días antes de la transmisión del mando. Rojas afirma que los resultados de la investigación policial revelan sin lugar a dudas que el asesinato no es un hecho aislado, sino que forma parte de un todo definido como la rebelión contra el gobierno y el desencadenamiento del caos, para trastornar el proceso constitucional de elección del presidente de la República.

El cuatro de noviembre, en un clima de gran tensión emocional por los sucesos que se acaban de vivir, Frei traspassa la presidencia en un solemne acto realizado en el Congreso Nacional, con las cámaras de diputados y senadores reunidas en pleno. Después se realiza el tradicional *Te Deum*, con una importante modificación sugerida por el nuevo Presidente.

Allende, cuya pertenencia a la masonería y su formación marxista son públicas, es invitado por la jerarquía católica para mante-

ner la tradición de celebrar la tradicional ceremonia religiosa del Te Deum. Responde que es partidario de mantenerla, con la condición de ampliarla, por lo que propone un Te Deum ecuménico, con la participación de todas las iglesias. Así, la ceremonia es oficiada por 25 religiosos de credos diferentes, bajo el liderazgo del católico Cardenal Raúl Silva Henríquez, quien pronuncia la homilía y años después sería un valiente defensor de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. La ceremonia resultante es todo un símbolo del espíritu de tolerancia, democracia, pluralismo y libertad de pensamiento que presidiría el gobierno allendista. Pero, para éste, los problemas apenas estaban comenzando.

CAPÍTULO IV

Del medio litro de leche al poder popular

Es probable que poca gente entienda en los países industrializados, o incluso en los menos subdesarrollados del Tercer Mundo, el impacto que tiene en Chile el cumplimiento por Allende de la promesa preelectoral de que bajo su gobierno se suministraría gratuitamente medio litro de leche diario a cada niño de su país. El cumplimiento en sí mismo de una promesa electoral constituye un gran impacto, pero al mismo tiempo se transforma en una adecuada y significativa medida de lo bajo que es el nivel desde el que parten las demandas populares, insatisfechas hasta ese momento.

En Chile, hasta 1970, la inmensa mayoría de los niños no sabían lo que era desayunar o merendar con leche. Incluso aquéllos de los sectores populares que tenían la suerte de concurrir a una escuela, partían hacia ellas en las mañanas sólo con un *agüita* en sus estómagos. El *agüita* es una infusión preparada con hojas de menta en unos casos, o hirviendo cáscaras de limón o naranja en otros. Algunos más afortunados de entre esa mayoría de marginados tenían esa agua hervida con unas gotas de leche y la complementaban, a veces, con un pedazo de pan. El Allende maduro y mayor recuerda, al llegar a la Presidencia, su experiencia como ministro de Salud en el gobierno del Frente Popular, cuando advirtió acerca de ese mal endémico de su pueblo que es la desnutrición de la infancia.

Al ser insuficiente la producción chilena para abastecer de leche fresca a todos los escolares de Chile, el gobierno de la Unidad Popular dispone la importación desde algunos países limítrofes, como Argentina, pero también desde los Estados Unidos y de Holanda. Desde el comienzo de ese gobierno se puede ver cada semana en los colegios de todo Chile la distribución de leche entre sus alumnos, de manera gratuita, cumpliendo con el objetivo de darle a cada uno al menos medio litro diario. En algunos casos se desatan problemas de alergia y disturbios intestinales, porque la leche en polvo importada de los Estados Unidos y Holanda es

más pura y en algunos casos resulta rechazada por unos estómagos acostumbrados a desayunar con otras cosas. Apoyándose en esos problemas, que se solucionan en pocos días, la derecha logra convencer a varias asociaciones de madres de que esa leche trae drogas soviéticas que producen un lavado de cerebro. En consecuencia, algunas asociaciones la rechazan e incluso las más extremistas llegan a derramarla en los basurales, y hasta se registra un caso en que la utilizan para marcar los límites y las zonas de un campo de fútbol, como lo ilustran reportajes gráficos publicados en la prensa diaria.

Esta tesis del “lavado del cerebro”, según la cual el gobierno de la Unidad Popular está confabulado con el de la Unión Soviética para dopar a los chilenos con drogas capaces de hacerles cambiar su ideología y su manera de pensar, da origen a una guerra de campañas publicitarias. La derecha difunde el rumor, que se reproduce rápidamente, de que las partidas de merluza distribuidas a bajos precios, son “regaladas” porque vienen inyectadas con drogas para el lavado de cerebros. La verdad es que el bajo precio se justifica por uno de los acuerdos de gobierno a gobierno con la Unión Soviética, en virtud del cual pesqueros de aquel país están autorizados a faenar en aguas jurisdiccionales chilenas, muy ricas en mariscos y pesca en general, y como una de las contraprestaciones suministran parte de sus capturas a precios de costo, con la ventaja añadida de que se evita la intervención de los intermediarios.

Pero la campaña de la prensa derechista es tan fuerte y efectiva que el gobierno debe encargarse a Quimantú una contracampaña, sin rumores y con anuncios firmados, que se lanza bajo el lema de “No coma cabezas de pescado”, sino pescado del bueno. En la jerga popular chilena la frase “comer cabeza de pescado” equivale a decir o creer que se está ante una gran mentira. En este caso el juego de palabras permite una campaña de impacto directo, que es muy bien comprendida por la población.

La campaña por el medio litro de leche diario es emblemática para comprender el bajo nivel desde el que se parte, algo admitido desde una década antes por todos los partidos políticos, excepto por el derechista PN, que responde a los intereses de una ínfima minoría que controla la economía. La Iglesia Católica advierte ya en 1962 sobre los desequilibrios económicos y sociales, en un documento en el que llama a realizar una urgente reforma de estructuras y cambios institucionales, con el fin de “obtener que las estructuras sociales permitan mayor participación a las capas de menores ingresos en el proceso productivo”.

El poder económico de una minoría

La concentración de poder económico en manos de la oligarquía chilena recuerda a los sistemas feudales de siglos atrás. En 1970, al asumir Allende el Gobierno, 144 empresas controlan más del 50 por ciento de los activos en todos y cada uno de los sectores de la industria manufacturera. En más del 50 por ciento de esas empresas los 10 mayores accionistas controlan entre el 90 y el 100 por ciento del capital.

Además, el 89,8 por ciento de las sociedades anónimas de la industria, que representan el 90,6 por ciento de los activos, están controladas por capital extranjero. De estos grupos uno lleva el banderín de vanguardia en la concentración de capitales y empresas, agrupado en torno al Banco Hipotecario y conocido como “los piratas”, por su voracidad a la hora de buscar ganancias. Esa presencia del capital extranjero tiene como contrapartida una constante evasión de capitales: en el período 1950-67 salen divisas al exterior en concepto de utilidades de inversiones extranjeras equivalentes a cuatro veces el ingreso de esas mismas inversiones. Al mismo tiempo, la deuda externa supera con creces los préstamos a mediano y largo plazo ingresados al país en ese mismo período.

Todavía en 1964, cuando ya lleva dos años de comenzada la reforma agraria, que inicia el presidente Alessandri en cumplimiento de la condición impuesta por el gobierno norteamericano de John Kennedy para otorgar los créditos solicitados por países en desarrollo, el sistema de tenencia de la tierra da lugar por un lado a grandes latifundios y por el otro a una proliferación de minifundios. Así, el 6,9 por ciento de las explotaciones ocupa el 81 por ciento de la tierra trabajada, en tanto que el 37 por ciento de las explotaciones (minifundistas) cubre sólo el 0,3 por ciento de esa superficie. En el sexenio democristiano (1964-1970) apenas se llega a expropiar el 15 por ciento de la superficie de los latifundios y de ésta, apenas el 12 por ciento es tierra de riego.

Las primeras reformas

Al cumplir Allende un año y medio de gobierno, las organizaciones campesinas y la coalición gobernante festejan la abolición total del latifundio, al haber sido aplicada a fondo la ley de Frei. Ésta, no obstante, implica el pago de la tierra expropiada y el respeto para los latifundistas de la propiedad de la casa señorial, las maquinarias, las

semillas y la cosecha en curso. Todos los expropiados se benefician de esa cláusula de la ley, que se cumple a rajatabla.

La gran noticia de ese primer gran año de la transformación agrícola es que la producción del sector aumenta más del doble de lo que había estado creciendo en el período 1966-70. Pero surgen complicaciones. La confianza de los campesinos en su Gobierno, expresada en el convencimiento de que no serían reprimidos por la fuerza de las armas, despierta masivamente a los indígenas mapuches y los lanza a ocupaciones de predios, algunos de pequeños colonos, por considerar que están recuperando tierras ancestralmente suyas. La ley de reforma agraria establece que los fundos o fincas menores de 80 hectáreas de riego básico son inexpropiables. Una propuesta de la Unidad Popular es modificar esa ley en el Parlamento para reducir el mínimo no expropiable a 40 hectáreas de riego básico, pero la coalición carece de la cantidad de parlamentarios necesaria para hacer aprobar su criterio.

En mayo de 1972, tras poco más de un año y medio de gobierno, Allende presenta en su discurso anual ante el Parlamento un balance de los progresos realizados: en el primer año de gobierno el producto interior bruto aumenta en un 8,5 por ciento, mientras la media anual entre 1966 y 1970 había sido de 3,7 por ciento de aumento; la producción industrial sube del 3,3 por ciento al 12,1 por ciento; la construcción del 1,4 por ciento al 12,2 por ciento, y se batieron todas las marcas de producción de cobre. Es decir que se multiplica al menos por tres el incremento anual de la producción en todos los sectores, algo que tiene lugar en muy pocos países del mundo, a pesar del cerco financiero impuesto por Estados Unidos y el sabotaje de los grandes empresarios nacionales.

Pero no es sólo el crecimiento económico lo que entusiasma a la inmensa mayoría del país, sino un cambio gradual en los patrones de consumo, que Allende explica en ese discurso: “por ejemplo, estamos racionalizando la industria automotriz; hemos decidido reducir el número de modelos de automóviles, limitándolo a los tamaños pequeño y mediano; una planta destinada a producir autos de lujo fue transformada en fábrica de camiones. La producción de cocinas a gas, de máquinas lavadoras, de estufas, de artículos para el hogar, aumentó notablemente”. Esto significa abrir el acceso a esos elementos a sectores de la población hasta entonces excluidos, porque son productos que por norma general hasta el advenimiento del gobierno de la Unidad Popular solamente están al alcance de las capas más pudientes.

Y a continuación el Presidente enumera los cinco millones de libros de textos impresos en Quimantú y repartidos gratuitamente a los escolares; la instauración por primera vez de la matrícula totalmente gratuita en la enseñanza básica; el congelamiento del valor de la matrícula en la enseñanza media y la anulación del carácter obligatorio de las cuotas en los centros de padres. En 1971 se crean 38.500 nuevas plazas en la enseñanza superior, lo que representa un 88,1 por ciento de aumento en relación con el año anterior, y en la Universidad Técnica del Estado el número de vacantes en carreras cortas se multiplica por diez. También en esto se verifica una apertura social, tanto por el aumento del número de estudiantes como por las facilidades económicas que permiten el acceso a la enseñanza media y universitaria de capas sociales de bajos ingresos.

Una especial sensibilidad

Corre el mes de julio de 1972. La policía moviliza 400 de sus efectivos en un barrio periférico de Santiago, la población Lo Hermida, donde están acampados integrantes de familias *sin casa*, cuya dirección responde al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), ajeño a la Unidad Popular. La movilización policial se realiza en búsqueda de delincuentes armados, según señalan los jefes del operativo. En medio de una gran confusión se produce un tiroteo, que provoca la muerte de uno de los pobladores, decenas de heridos y centenares de detenidos, sin que ningún policía resulte lastimado o muerto y sin que aparezca ningún delincuente armado o desarmado, entre los detenidos, heridos o muertos. Nunca se llegó a aclarar quién dio la orden, pero en la madrugada del día siguiente Allende resuelve dos cuestiones que definen su personalidad y su política gubernativa.

Por la mañana temprano se dirige a Lo Hermida para hablar con los vecinos. Al llegar al campamento, en medio de quejas y gritos, los dirigentes vecinales le dicen que allí no entrará ningún policía con su consentimiento. Allende ordena a la policía y a todos sus escoltas que se queden fuera y entra solo, acompañado únicamente por algunos de sus más inmediatos colaboradores y rodeado por una nube de periodistas, fotógrafos y vecinos. En el centro del campamento, de pie sobre un cajón de frutas vacío, habla a los vecinos, presenta sus condolencias, manifiesta su repudio a la violencia y recibe las quejas y demandas de los pobladores. El diálogo, por momentos tenso, dura más de dos horas.

Al regresar a La Moneda su primera decisión es destituir al director de la policía, Eduardo *Coco* Paredes, y al subdirector, Carlos Toro, aunque ninguno de ellos ha dado la orden de allanar Lo Hermita ni ha participado en el operativo. Paredes es miembro del Comité Central del PS y casi un hijo para Allende. Éste ha visto crecer a Paredes, hijo de un gran amigo suyo y por el que siente un profundo aprecio. Toro es miembro del Comité Central del PC y ha recibido instrucción militar en una Escuela de Estado Mayor en la Unión Soviética. A pesar de su cariño filial por el *Coco* y de la alta representación política que tienen los dos jefes, al Presidente no le tiembla la mano para destituirlos de inmediato y designar como director de Investigaciones al abogado Arsenio *Cheno* Poupin, una fina personalidad intelectual, quien posteriormente se desempeña como su asesor en La Moneda hasta ser hecho prisionero el 11 de septiembre de 1973 y asesinado después.

Al ser notificado por Allende de su designación, Poupin le dice: “Por favor no, Doctor, designe a otro, yo soy incapaz de matar a una mosca”. La réplica es inmediata: “Por eso, Cheno, por eso, porque eres incapaz de matar una mosca, porque eres un humanista, por eso te nombro..., porque para duros ya están los policías”. Poupin y Paredes estarán en La Moneda el día del golpe, donde serán tomados prisioneros, trasladados a un cuartel militar, desaparecidos y asesinados sin siquiera una parodia de juicio.

Un año antes del golpe, al *Cheno* le toca enfrentarse a una situación difícil, difícil política, social y humanamente, cuando llegan a Santiago dirigentes de los Montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), dos organizaciones que combaten armas en la mano contra la dictadura argentina. Fugados de la cárcel de Rawson, ubicada cerca de la ciudad de Trelew, al sur de la Argentina, entre otros están Roberto Santucho, el máximo dirigente del ERP y su más estrecho colaborador, Enrique Gorriarán Merlo y los jefes montoneros Marcos Osatinsky, Roberto Quieto y Fernando Vaca Narvaja.

Poupin dispone que todo el grupo sea alojado en un sector de la Dirección General de la Policía y que policías de toda confianza, miembros o vinculados al PS, sean los encargados de su vigilancia y de atenderlos mientras se busca una salida a la situación. Una salida nada fácil de encontrar pues el gobierno argentino, encabezado por el general Alejandro Lanusse, le reclama que se los envíe de vuelta.

Un grave hecho de sangre se produce mientras se está buscando esa solución, cuya búsqueda Allende se la encomienda al jurista y

secretario general del Regional Santiago Centro del PS, Juan Bustos, quien actúa a esos efectos conjuntamente con el autor de este libro, también dirigente de ese Regional. En Trelew los militares entran a la cárcel y ametrallan a otros miembros del ERP y de los Montoneros que tienen reclusos allí y quienes, pese a haberse fugado, no lograron subir al avión secuestrado en el que Santucho y los otros cruzaron la cordillera. De los 18 que están allí solo salvan la vida Camps y María Antonia Berger, pues los militares al acribillarlos a balazos los dieron por muertos.

Hay que dar la noticia a los que están en la *Pesca* y Poupin insiste en que a él le corresponde asumir esa triste tarea y junto con los dos dirigentes socialistas se dirige a la sala donde están los fugitivos, sabiendo ya que entre los muertos en Trelew están las cónyuges de Santucho y Vaca Narvaja. Los fugitivos algo se maliciaban pues con el pretexto de que los trasladarían a otro sitio sus guardianes les habían retirado la radio. Poupin empieza informándoles de que están llegando noticias de la Argentina acerca de un incidente en la cárcel y que hubo muertos entre los presos que se habían fugado y estaban detenidos en Trelew. Pero cada vez que está por comenzar a leer la lista de los muertos vacila y sigue hablando en términos generales, dolorido por lo que tiene que comunicarles. Finalmente lee la lista, se produce un silencio total, Santucho se levanta y se dirige hacia un rincón donde se queda mirando la pared, Vaca Narvaja no se inmuta, apenas un tic nervioso en la mejilla denota que acusa el golpe. De repente se oye cómo Gorriarán Merlo se rompe una mueca por la fuerza de su mandíbula crispada y tras ello se pone de pie y se lanza a llorar gritando “¡hijos de puta, hijos de puta!”, refiriéndose a los militares que perpetraron lo que desde entonces se conocerá como “la masacre de Trelew”.

Poupin se retira y se dirige a La Moneda para informar a Allende de lo ocurrido en Trelew. El presidente ya había recibido al canceller y miembro del PS, Clodomiro Almeyda, partidario de devolver los fugitivos a la Argentina. Otros miembros del gobierno y dirigentes de los partidos de la Unidad Popular plantean que se les abra un juicio en Chile por violación de su espacio aéreo e ingreso ilegal al país, lo que permitiría mantenerlos en el país mientras se sustanciaba el proceso, con la esperanza de que antes cayera la dictadura argentina. Desde las Fuerzas Armadas un informe reservado le señala la necesidad de terminar cuanto antes con el problema, porque de mantenerse podría afectar seriamente las relaciones con el país vecino.

Momentos después Allende, acompañado por Bustos y Almeyda, recibe a un grupo de abogados argentinos, encabezados por Gustavo Roca y Rodolfo Ortega Peña, quienes le solicitan que permita que los fugitivos sean enviados a Cuba. Almeyda interviene en sentido contrario, oscilando entre la tesis de la devolución a la Argentina y el juicio en Chile. Allende escucha en silencio y para sorpresa de casi todos corta la discusión diciendo que es evidente que los afectados violaron leyes, que en la Argentina hay una dictadura y, también, que Chile es una nación humanitaria..., por lo que dispone que sean enviados a Cuba, aunque él no comparta los métodos de los Montoneros y el ERP, como se lo subraya a los abogados. Dos días después todos los fugitivos viajan hacia Cuba en un avión de Cubana de Aviación y nada más llegar hacen declaraciones a la prensa criticando al gobierno chileno por haberlos “tenido presos” y por ser socialdemócrata, calificativo que en esa época dentro de la izquierda suena a insulto.

La sensibilidad social de Allende se manifiesta una y otra vez. Lo demuestra, por ejemplo, su actitud cuando los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, en huelga en demanda de mejoras salariales, se congregan frente al ministerio y cortan el tráfico, en las cercanías de La Moneda. Cuando Allende se dirige en automóvil desde la residencia presidencial hacia su despacho le informan de que deben modificar su ruta, porque los huelguistas tienen interrumpido el tráfico. Sin pensárselo dos veces ordena tomar el camino de siempre, al llegar frente al Ministerio de Obras Públicas baja del vehículo y se dirige a los trabajadores, dialoga con ellos, se niega a hablar allí acerca de sus demandas, les recuerda que si quieren hacerlo basta, como siempre, con que pidan una audiencia, y les señala que en un Chile democrático y popular los trabajadores no deberían cortar el tráfico ni impedir su paso *al compañero Presidente*. Los huelguistas levantan los obstáculos colocados en la calle, permiten la reanudación del tráfico y días después una delegación suya es recibida por Allende en La Moneda.

Un presidente en la fábrica

Para fomentar la relación de su gobierno con la ciudadanía, y en especial con los trabajadores, y dar ejemplo a sus ministros, Allende traslada su despacho durante unos días a una fábrica textil, Sumar. Allí celebra sus reuniones de gabinete, recibe a embajadores, fun-

cionarios, jefes militares y delegaciones de todo tipo, que deben cruzar primero todo el barrio y después toda la planta hasta llegar a él. “Al menos aquí logro que de verdad vean cómo se vive y se trabaja en Chile”, comenta a uno de sus colaboradores.

Durante los días en que mantiene su despacho en Sumar, quienes van a verlo o a reunirse con él deben atravesar toda la fábrica, pues se instala en el extremo opuesto a la puerta de entrada. Así, sus ministros, representantes de sindicatos, embajadores, periodistas, artistas y un sinnúmero de sectores y gremios pasan entre los trabajadores de la fábrica que no interrumpen en ningún momento su labor.

Al término de ese episodio, en un encuentro con corresponsales de medios extranjeros Allende insiste sobre la necesidad de que los dirigentes estén en un contacto más estrecho con las bases, pues, dice, los jefes de la Unidad Popular “viven superficialmente el proceso chileno. Falta profundizar, estudiar más y conocer más la realidad chilena. Posesionarse cada uno de los que se dicen revolucionarios. Se hace, pero no lo suficiente. Si arriba no hay unidad, mucho menos la va a haber abajo”.

Abajo, precisamente, la movilización popular transcurre por senderos inexplorados, a medida que se acrecienta la confianza en sus propias fuerzas y en su gobierno, que es criticado desde todos los sectores. La crítica es distinta según desde donde llegue pues, como se ocupa de recordarlo una pancarta durante una manifestación popular en apoyo de Allende: “Este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno”.

El Chile de ese período es como un enorme panal de abejas, en el que todos sus habitantes están en continuo movimiento. Del lado de Allende, creando un poder popular que cada partido o sector interpreta a su manera. Del otro lado, creando las bases para el golpe de estado.

En el campo popular se constituyen organismos de participación de los trabajadores en la dirección de las empresas del área social de la economía; se crean juntas vecinales de abastecimiento y control de precios, integradas por los vecinos de una manzana, barrio o distrito; y surgen los comandos comunales campesinos y los cordones industriales, unas nuevas y espontáneas organizaciones paralelas y más dinámicas que la tradicional CUT.

En la otra acera, la derecha con el apoyo de grupos empresariales nacionales y transnacionales y con la activa participación del gobierno norteamericano y sus organismos de inteligencia, continúa generando las condiciones de desestabilización para provocar

un golpe de estado, proceso que se acentuará a partir de marzo de 1973 cuando, contra todos los pronósticos, la coalición gobernante obtiene el 43,39 por ciento de los votos en los comicios parlamentarios, más del 33 por ciento de aumento en relación con los obtenidos al ganar las elecciones presidenciales.

CAPÍTULO V

Entre el socialismo y la democracia social

El culto a las palabras y a las formas esconde tras las fórmulas de “abrir el camino hacia el socialismo”, establecer “una vía chilena al socialismo” o crear un “socialismo en democracia”, una realidad mucho más amplia y viva, que el propio Allende define como la búsqueda del camino para construir la primera sociedad socialista edificada según un modelo democrático, pluralista y libertario.

Esa sociedad mantendría, según se comprueba con las actuaciones del gobierno de la Unidad Popular, tres áreas económicas diferenciadas y complementarias a la vez: la propiedad social, muy alejada de los tópicos de la propiedad del estado burocrático y corrupto; la privada –que se garantiza a todas las empresas pequeñas y medianas, declarando inexpropiables a las que antes de 1970 tuviesen un capital inferior a 14 millones de escudos - y la mixta, en la que conviven el capital privado y el público. Contra lo que se pudiera suponer por lo que ocurrirá después, el PDC también lleva en su programa electoral de 1970 el compromiso de terminar con el poder de las minorías y de construir una fuerte Área de Propiedad Social (APS). Para el PDC la concentración del poder en manos de una minoría está identificada claramente en “los monopolios industriales y financieros, nacionales y extranjeros y los terratenientes latifundistas”. Para pasar a un nuevo orden económico social, al que denomina *sociedad comunitaria*, el programa demócrata cristiano propugna la creación de *una nueva economía*, constituida en lo esencial por un Área Social y otra privada. Se evidencian así grandes coincidencias con el programa de la Unidad Popular.

Podría parecer que lo que unos llaman *creación del socialismo* otros prefieren denominarlo *sociedad comunitaria*. La diferencia está más en los hechos que en las palabras. El programa demócrata cristiano está redactado para cosechar votos, en tanto que el de la Unidad Popular además de la búsqueda de votos quiere tener en la presidencia a alguien dispuesto a cumplir con sus promesas pre-electoraes. Y, si se quiere, otra diferencia estriba en que la energía desatada por la toma de confianza de amplias masas de la población más

pobre se transforma en un nuevo impulso y da mayor contenido al programa de la Unidad Popular, al que repetidamente desborda por la izquierda, a veces con resultados que ponen en peligro el proceso en su conjunto.

Antes de cumplirse un mes de gobierno de la Unidad Popular se produce la primera expropiación de una industria, la Fábrica Textil Bellavista de Tomé. Casi al mismo tiempo, Allende anuncia la apertura de un poder comprador de acciones bancarias y el envío de un proyecto de ley al Congreso para nacionalizar todos los bancos. El proceso de ampliación del Área de Propiedad Social, por imperio de las circunstancias, en vez de seguir los lineamientos del programa de la Unidad Popular se adapta para resolver cuestiones de hecho, como el de empresas en huelga, abandonadas por sus patrones, paralizadas por falta de materias primas, o pura y simplemente plegadas a la campaña de desestabilización.

Las *desviaciones* constituidas por las intervenciones, requisiciones o expropiaciones impuestas por situaciones de hecho, no están contempladas en el programa de la Unidad Popular y son el resultado de la movilización de los trabajadores, animados y decididos a participar activamente en el proceso. Pero eso no impide que se sigan los lineamientos básicos del programa, una de cuyas demandas principales es la chilenización de los recursos naturales, en especial del hierro, el carbón, el salitre y el cobre.

El cobre, sueldo de Chile

El 20 de diciembre Allende, aún sin cumplir dos meses en el gobierno, comparece ante el congreso mapuche y promete que solucionará los problemas que aquejan a los 180.000 indígenas de esa etnia, pero advierte de que no tolerará actos ilícitos, como la toma de tierras. El 21 habla en una concentración pública en Santiago, donde puntualiza las razones por las que se nacionalizarán la minas e instalaciones cupríferas y explica que:

“Entre 1930 y 1960 han salido de las fronteras de la patria 3.700 millones de dólares... que equivalen al 40 por ciento de la riqueza total de Chile, del esfuerzo acumulado durante 400 años por todos los chilenos... Más o menos por esos mismos años, por los capítulos de cobre, hierro, salitre, electricidad y teléfonos, han salido del país algo así como 9.600 millones de dólares, cifra que representa el valor total de la riqueza de Chile... la Anaconda obtuvo utilidades en

escala mundial por 99 millones de dólares en 1969. De esas utilidades 79 millones, o sea el 80 por ciento, los obtuvo en Chile; sin embargo, en Chile sólo tiene invertido el 16 por ciento de las inversiones que posee en escala mundial. El 16 por ciento de sus inversiones le da el 80 por ciento de las utilidades”.

Tras una pausa, el Presidente alza los brazos y exclama: “¡Caramba que es buen negocio para la Anaconda invertir su dinero en Chile!”. Esa transnacional norteamericana sería finalmente expropiada por acuerdo mayoritario del parlamento chileno, en el que la coalición allendista está en minoría.

Dispuesto a chilenizar los minerales, Allende quiere hacerlo sin dar argumentos para una provocación, y explica su posición ante el Consejo Consultivo de la Confederación de Trabajadores del Cobre, reunida el siete de febrero de 1971: “No queremos el camino de la apropiación indebida ni la usurpación, pero tampoco queremos el privilegio y la granjería; queremos, dentro de las leyes a que tienen derechos se dicten en un país independiente y soberano, dentro del marco jurídico de la propia democracia burguesa y con apoyo de los sectores demócrata-cristianos, queremos dictar una ley que permita a Chile, dentro de los cauces legales, hacer que el cobre... sea auténticamente nacionalizado y sea de Chile y de los chilenos”. Para que no queden dudas, y previendo algunas reacciones, precisa: “Queremos evitar que haya represión contra Chile, queremos evitar que se nos cierren las fuentes de crédito, queremos evitar que se tomen medidas de represalias, queremos evitar que se pongan cortapisas al desarrollo técnico de nuestras Fuerzas Armadas, queremos evitar que se nos niegue la colaboración técnica y el progreso científico, queremos evitar esas cosas, pero no al precio de la indignidad”.

El 11 de julio, el Senado y la Cámara de Diputados, reunidos en Congreso Pleno aprueban por unanimidad la nacionalización del cobre, en una sesión presidida por el demócrata cristiano Patricio Aylwin y con la ausencia de 42 legisladores pertenecientes al PN y a la derecha del PDC, quienes manifiestan de esa manera su disconformidad. La ley incorpora una propuesta de la Unidad Popular por la cual de la indemnización que corresponda a las compañías se descontarán amortizaciones, depreciaciones, castigos, desvalorizaciones y rentabilidades excesivas. En unos casos las compañías quedarán con dinero a cobrar y en otros a pagar. Estas últimas son las que predominan.

Así nace la “doctrina Allende”, que sentencia que de las indem-

nizaciones por la expropiación se deberán descontar las ganancias excesivas.

Ese mediodía Allende preside una concentración popular en la Plaza de los Héroes de la ciudad de Rancagua y afirma: “Hoy es el Día de la Dignidad Nacional, porque Chile rompe con el pasado, se yergue con fe en el futuro y empieza el camino definitivo de su independencia económica, que significará su plena independencia política”.

Como el cobre, en muchos casos de acuerdo con las empresas y en otros por expropiación, se nacionalizan los yacimientos de hierro, carbón y salitre, pagando las indemnizaciones respectivas.

El Cardenal Raúl Silva Henríquez, jefe de la iglesia católica chilena, el mismo día que se aprueba la nacionalización del cobre, con signa que el proceso de esa nacionalización es constitucionalmente impecable, en declaraciones a un diario local. No obstante, y a pesar de que compañías como la Bethlehem Steel, Cerro Corporation, Ralston-Purina, Bank of America y First National City Bank llegan a acuerdos satisfactorios para desprenderse de sus acciones, el gobierno de los Estados Unidos anuncia en agosto de 1971 que no acordará nuevos créditos a Chile mientras no se pague indemnización por las empresas norteamericanas confiscadas. Esa declaración da inicio al *bloqueo invisible*, que contribuye a desestabilizar la economía chilena. Esa actitud se traducirá en un bloqueo de los créditos internacionales desde los organismos donde Washington posee votos decisivos, en la prohibición de vender productos a Chile, lo que conlleva a la escasez de repuestos para las máquinas industriales y materias primas y, lo que afecta de una manera directa a la estabilidad de la sociedad, el embargo de productos alimenticios y medicamentos.

El '71 es un año de profundos cambios en la estructura económica y social de Chile. Durante ese año el Estado pasa a controlar 16 bancos que representan el 90 por ciento del crédito bancario total; 12 empresas textiles que producen el 50 por ciento del total del sector, y el 80 por ciento de la capacidad productiva de materiales de construcción. En su conjunto, las empresas del Área de Propiedad Social pasan a generar aproximadamente el 23 por ciento de la producción total del sector industrial.

Si por socialismo se entiende la estatización de todas las actividades, al estilo de la Europa del Este, la Unión Soviética, China y Cuba, queda claro que en Chile no hay tal socialismo, ni su Gobierno pretende crearlo. En el Chile de Allende no hay control policial

de los ciudadanos, no hay partido único ni se quiere establecerlo, no hay sindicalización obligatoria y no hay censura de prensa, rigiendo una total libertad de expresión.

De manera totalmente distinta a lo que rige en los países del llamado “socialismo real”, en Chile la entrada y salida del país es totalmente libre, existe un mercado en funcionamiento, quien lo desea puede establecer empresas, cambiar de trabajo, comprar y vender. Mientras, el Poder Ejecutivo gobierna con el Parlamento y el Poder Judicial en contra, sometiéndose a las reglas del juego que establecen la Constitución y las leyes.

Pero si, por el contrario, se admite que lo establecido en la Unión Soviética, Europa del Este, China y Cuba no es precisamente socialismo, se puede aceptar que en Chile se experimenta una forma de caminar hacia un socialismo humano, democrático y liberal, cuyo paso decisivo es esperado para las elecciones de 1976, al término constitucional del mandato de Allende.

Los cambios en libertad

Una característica esencial que diferencia a la experiencia chilena del llamado *socialismo real* es la participación activa, democrática, estimulante y estimulada, de la población. En las fábricas del área social, o sea de las empresas de propiedad del Estado, intervenidas o requisadas, sus trabajadores tienen una participación del 50 por ciento en los Consejos de Administración, elegidos democráticamente y por votación secreta.

Además, con el desarrollo del proceso surgen espontáneamente otras formas de participación, como los Comités de Producción, constituidos en cada sección o departamento de una empresa por votación a mano alzada entre sus integrantes y unidos en un Comité Coordinador, auténtica dirección bis u organismo supervisor.

Si en el *socialismo real* la tónica dominante en la producción es la abulia, el desinterés y hasta el sabotaje, bajo el lema de “el Estado hace que me paga y yo hago que trabajo”, en el Chile de Allende es exactamente al revés. Los trabajadores, los empleados y los campesinos, estimulados al ser tratados por primera vez en su vida como personas, y por entender que la satisfacción de sus necesidades es el primer objetivo de su gobierno, priman la voluntad, la iniciativa y el interés por hacer las cosas bien.

Desde luego, como en todo proceso en el que interviene el factor

humano, hay excepciones y se producen excesos y pequeñas corruptelas, pero esos casos son excepcionales y rápidamente sometidos al control del resto de los trabajadores. La grandeza se advierte también en que no hay cortapisas ni represalias para la denuncia de esos problemas y para su solución. Como ejemplo de las iniciativas a la hora de rechazar los abusos, cierta vez un equipo de periodistas de la revista *Mayoría*, editada por Quimantú y el autor de este libro visitan las minas de carbón de Lota, próximas a la ciudad de Concepción. Allí los mineros los llevan a comprobar “in situ” como el nuevo gerente, un dirigente sindical, ha trasladado su residencia a un palacete de lujo que ocupaba el gerente cuando la empresa era privada. A la semana siguiente *Mayoría* publica la foto de ambas residencias, la que el dirigente ocupa en ese momento y la que fue su vivienda en los años anteriores, en el barrio obrero de la misma ciudad.

Lo inédito del camino emprendido para las transformaciones sociales explica esa y otras contradicciones en las que incurrieron algunos dirigentes, los errores y los aciertos, las denuncias, las aproximaciones sucesivas y las rectificaciones.

Allende es consciente del desafío que enfrenta la sociedad chilena, como lo expresa en mayo de 1972 ante el Congreso Nacional: “en todas partes están atentos a si seremos capaces de avanzar en la transformación revolucionaria del sistema capitalista con un régimen de pluralismo, de multipartidismo, sin paréntesis del principio de legalidad, sin que el ejercicio de las libertades públicas ponga en peligro la emancipación social de los trabajadores”.

La atención era general, de parte de amigos y enemigos, de escépticos y de entusiastas, de nacionales y extranjeros, de poderosos y marginados. Un país pequeño, dependiente, con una economía basada en la exportación de un producto mineral, el cobre y alejado de los grandes centros del poder mundial, emprende bajo la conducción de Allende un camino inédito para superar el atraso, las desigualdades y las injusticias.

En contra de lo que ha estado ocurriendo durante todo el siglo, tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados, ese desafío económico y social se empieza a concretar a la vez que se amplían las libertades democráticas hasta extremos nunca conocidos en Chile. El gobierno de Allende aplica leyes aprobadas en años anteriores y queda sometido a las que dicta un Congreso en el que su coalición está en minoría. Además, cuando surgen conflictos entre los poderes constitucionales, se somete a las instancias que con-

sagra la misma Constitución: la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General de la República, dos instituciones de neto corte conservador. A pesar de ello, se apega a la legalidad, amplía las libertades democráticas y progresa por el camino de los cambios sociales en profundidad.

CAPÍTULO VI

Una reforma agraria demócrata cristiana

Desde un punto de vista formal se puede decir que la Reforma Agraria comienza en Chile con la legislación aprobada en la parte final del gobierno del conservador Jorge Alessandri (1958-1964), respondiendo a la presión norteamericana bajo la administración Kennedy.

Pero durante el gobierno de Alessandri sólo se asignaron tierras fiscales a 1.210 familias. En rigor, la reforma, entendiéndola por tal la expropiación de grandes extensiones de tierra y su traspaso a los campesinos que carecían de ella, o la poseían en superficies insuficientes para asegurar su subsistencia e incluso para lograr una adecuada aplicación de técnicas modernas de producción, recién comienza cuando llega a la presidencia Eduardo Frei, con su lema de *revolución en libertad*.

El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 obliga a los sectores más lúcidos que controlan el poder en los Estados Unidos a buscar alianzas en los demás países latinoamericanos, para impulsar reformas sociales que se constituyan en un freno a nuevas experiencias guerrilleras victoriosas. Una crisis en el seno de la Iglesia Católica, que daría nacimiento después a *Cristianos por el Socialismo* y a la Teología de la Liberación, movimientos que cuestionan la validez del sistema capitalista, se manifiesta también en la DC, que levanta un programa avanzado de reformas, especialmente desarrollado en el capítulo agrario.

En Chile el punto de partida es escalofriante: cuatro de cada diez campesinos carecen de tierras, son asalariados, inquilinos o medieros y cinco de cada diez son pequeños propietarios que en muchos casos ni siquiera producen lo suficiente para autoabastecer a su familia, por lo que queda apenas uno de cada diez con propiedades algo más que pequeñas. El censo agrícola de 1955 indica que el 9,7 por ciento de los propietarios es dueño del 86 por ciento de la tierra cultivable. En algunas provincias, como Santiago, Valparaíso y Aconcagua, la concentración es mayor todavía: el siete por ciento de los propietarios posee el 92 por ciento de la tierra.

La JDC, dirigida por Jacques Chonchol, se lanza a dinamizar el proceso de organización campesina desde el Instituto Nacional para el Desarrollo Agropecuario (INDAP) ni bien asume Frei su gobierno (1964).

Ese estímulo a los campesinos, que se realiza a pesar de fuertes resistencias de los sectores latifundistas de la DC, se traduce en una creciente movilización de los trabajadores del agro, lo que se nota en la casi quintuplicación de los afiliados a los sindicatos entre 1964 y 1966 (de 10.000 a 47.471) y decuplicación en 1969, con más de 100.000 afiliados. Estos se vuelven a duplicar en los dos primeros años del gobierno de la Unidad Popular, llegando a 253.531 en 1971, con una leve declinación en 1972, cuando se fijan en 234.403, baja que se atribuye al traslado de esos campesinos a las cooperativas.

Entre 1965 y 1970 se expropian 1.400 predios que cubren 1.200.000 hectáreas, beneficiando a 30.000 campesinos. A finales de 1970 la movilización de los trabajadores del agro se incrementa y aumenta el número de *tomas* u ocupaciones ilegales de terrenos, en las que cada vez participan más campesinos. Los latifundistas a su vez responden con la creación de *guardias blancas*, unas bandas armadas que defienden los fundos o fincas en unos casos, y en otros los asaltan para expulsar a los ocupantes. En 1969, antes del gobierno de la Unidad Popular, en una de las fincas calificadas legalmente como expropiables, sometida a ocupación legal respaldada por la ley y la fuerza pública, un funcionario demócrata cristiano de la Corporación de Reforma Agraria (CORA), Hernán Mery, es asesinado salvajemente por una de esas bandas derechistas. La Unidad Popular convoca entonces una huelga general de repudio, que saca a la calle a 200.000 campesinos, la mayor concentración de trabajadores agrícolas de toda la historia chilena hasta ese día.

Con ese antecedente no extraña a nadie que Jacques Chonchol, ministro ya de Salvador Allende, impulse a fondo la reforma agraria que su anterior partido, el demócrata cristiano, ha encarado a regañadientes y sin mucha convicción. En los primeros 30 meses de gobierno de la Unidad Popular se expropian 2.500 latifundios, entre ellos uno de los más grandes del mundo, representando ese sólo fundo de 520.000 hectáreas de superficie casi la mitad de lo expropiado durante todo el gobierno de Frei.

Las ocupaciones de predios, con millares de campesinos desfilando con sus herramientas de labor empuñadas como si fueran armas, son los aspectos más llamativos del proceso agrario durante el gobierno de la Unidad Popular. Los enfrentamientos con los guar-

das blancos y los rostros indígenas desafiantes, que se atreven por primera vez a hablar de igual a igual con los funcionarios, se suceden incluso en los más encumbrados despachos de la capital, aunque hay casos en los que no son bien acogidos y otros en los que ni siquiera los reciben.

El escritor Alejandro Witker recuerda una anécdota de Pedro Hidalgo, ministro de Allende quien, tras la caída de la Unidad Popular, después de ser detenido y torturado por los golpistas en 1973, es internado en un campamento de prisioneros en la isla Quiriquina.

En esa improvisada cárcel no hay servicios sanitarios, pero a las pocas semanas de funcionar, la Cruz Roja Internacional presiona y logra que se habiliten unos pozos sépticos, sobre los que se colocan tres asientos en una misma casucha. Un día, el ex ministro Hidalgo se encuentra ocupando uno de esos asientos y en el de su lado hay un campesino que lo mira, se sonríe, lo vuelve a mirar y a sonreír, haciendo sus cosas pero sin decirle ni una palabra. Inquieto, Hidalgo le pregunta de qué se ríe.

La respuesta: “Lo que son las cosas, compañero, me estoy acordando de que viajé tres veces a Santiago para tratar de hablar con usted cuando era ministro y yo dirigente sindical y no me pudo recibir... ¡Si supieran los compañeros que ahora hasta cago junto a usted...! ¿Ve que el golpe tiene también sus cosas buenas...?”.

Uno de los aspectos de mayor relieve de las transformaciones sociales impulsadas por el gobierno de Allende es el despertar de las masas campesinas, postergadas durante siglos, acostumbradas a callar ante la prepotencia de los poderosos. En el gobierno de la Unidad Popular lo reconocen como propio y exigen respuestas a sus problemas. En algunos casos, como el relatado por Witker, las barreras se mantienen, pero en la mayoría se abren y por las puertas abiertas entran las demandas sociales que en el caso de los campesinos se sintetizan en una sola palabra: tierra.

Cinco objetivos para el agro

Pero, además, esos aspectos contradictorios, como el relatado por Witker, se enmarcan en una política definida en torno a cinco objetivos: cambiar rápidamente el sistema de tenencia de la tierra; modificar el sistema de relaciones entre la agricultura y el resto de la economía; impulsar la participación campesina en el proceso; reorientar la estructura productiva para lograr un máximo de explota-

ción del agro, y superar la postergación de grupos significativos, como los indígenas y los comuneros del Norte.

Las nuevas formas de propiedad contemplan el mantenimiento de la propiedad privada en las explotaciones medianas, pequeñas y minifundistas y la organización de cooperativas o haciendas estatales en las superficies mayores, pero siempre que el desarrollo de cualquiera de esas opciones se realice mediando la decisión libre de los campesinos para participar en ellas. La vivienda y el goce o huerto de cada familia son garantizados como propiedad individual.

Sin embargo, dentro de la Unidad Popular se perfilan dos tendencias de interpretación de ese programa, que se traducen en diferentes acciones según sea el PC o el PS el que en determinados lugares posea mayor influencia sobre los campesinos. Los comunistas plantean el fortalecimiento de los pequeños y medianos productores como propietarios privados, en tanto que los socialistas dan prioridad a la creación de formas de propiedad social, aunque respetando la propiedad privada en los predios menores de 40 hectáreas de riego básico y desarrollando una tarea política para convencer a los campesinos de las ventajas de la asociación cooperativa.

Los principales movimientos reivindicativos se producen en la comunidad mapuche, que despierta reclamando sus propiedades ancestrales, aunque con modernas formas de movilización, huelgas y ocupaciones. Claro que las reacciones son diversas. En unos casos, como en la comuna Lautaro, en el sur del país, el Parlamento desafuera al Gobernador por negarse a proporcionar la fuerza pública para desocupar el fundo "Las Tres Hijuelas", ocupado ilegalmente. En otros, son los propietarios los que quiebran la legalidad al repeler a balazos las ocupaciones, como en otro fundo de Lautaro, donde unos 60 mapuches intentan reocupar la propiedad y son repelidos a tiros por el administrador, quien mata personalmente al mapuche Juan Melipán.

Los enfrentamientos adquieren tal magnitud que los propietarios agrarios de la sureña provincia de Cautín insertan un anuncio en *El Mercurio*, en noviembre de 1971, solicitando que esa provincia sea declarada zona de emergencia (y por lo tanto bajo control militar) y anuncian que mientras no se acceda a su reclamo mantendrán un sistema de defensa propio. Ese anuncio es una especie de carta de ciudadanía de los guardias blancos.

Por otra parte, la indefinición y una cierta parálisis producida por la clara división de opiniones entre las cúpulas de los partidos comunista y socialista, respecto de las formas que debería adoptar la

producción agraria, facilitan la actuación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y de otros sectores de ultraizquierda, ligados a la periferia de los partidos de la Unidad Popular.

El MIR, autoproclamándose *vanguardia de la revolución*, desplaza desde las ciudades a pequeños grupos de activistas armados para organizar tomas de predios, sin tener en cuenta las consecuencias que esas acciones tienen sobre los campesinos que participan en ellas. A los pocos días de producirse cada toma, esos grupos promotores abandonan los predios llevándose sus armas, de bajo calibre y con escasa munición y dejan a los campesinos desarmados a merced de la ira de los terratenientes y de sus guardias blancos, por lo general mercenarios a sueldo.

En estas tomas y retomas no faltan episodios que podrían ser calificados como pintorescos, si no fuera por las graves consecuencias que producen. Entre ellos está el protagonizado por un juez, Juan Olate, de Melipilla, una localidad próxima a Santiago, quien es acusado por el gobierno de violar la Constitución y el Código Penal por ordenar la detención de campesinos que ocupan legalmente el fundo Millahuín. El juez se *defiende* argumentando que si no hubiese detenido a los campesinos, los patrones armados y organizados habrían procedido "a sacar a balazos a los ocupantes", según sus propias palabras. Ese episodio ilustra acerca del poder de los propietarios de las tierras y de la complicidad con ellos de los jueces, sino de todos, al menos de la mayoría.

Por otro lado, la indefinición de la Unidad Popular en su conjunto y el aventurerismo del MIR entregan a la DC y al PN un argumento precioso para gestar un movimiento de oposición a la reforma: el miedo de los pequeños y medianos propietarios a que no se les respete su propiedad, porque si por un lado el gobierno se compromete a hacerlo, noticias cotidianas hablan de la ocupación de fundos con independencia de cuál sea su superficie, forma de explotación o destino. Fiel a su política de diálogo el Gobierno, cuando las ocupaciones son ilegales, al igual que en otros sectores, trata de agotar las vías de la negociación, antes de recurrir a la actuación de las fuerzas de seguridad, política que es deformada por la derecha y presentada como un apoyo restringido a la expropiación generalizada de tierras. En ese sentido se destaca el diario *El Mercurio*, que un día sí y otro también "ignora" los esfuerzos de negociación impulsados por el gobierno y pone el acento, incluso deformando los hechos, sobre las ocupaciones ilegales.

Pero existen otras razones para esas tomas de fundos, al margen

de la mayor o menor incidencia que pudieran tener en ellas el ala izquierda del PS y el MIR. Grupos aislados de activistas hubieran sido incapaces de promover el auge que tuvieron tales ocupaciones, que fueron 22 en 1966, nueve en 1967, 26 en 1968, 148 en 1969, 456 en 1970 (todavía bajo el gobierno de Frei) y 1.278 en 1971, el primer año del gobierno popular. De los motivos esgrimidos para esas actuaciones, el reclamo de tierra significa el 29 por ciento en 1970 y el 37 en 1971. El grito de “Tierra, tierra”, acallado durante siglos, encuentra en el gobierno de Allende la posibilidad de expresarse con libertad y de ampliarse como para que resuene en los más recónditos pasillos del poder.

Otro carácter distintivo de las ocupaciones realizadas bajo la Unidad Popular es que en la mitad de ellas intervienen campesinos que no trabajan en el mismo predio, que lo hacen por solidaridad o por entender que esas acciones forman parte de un proceso mucho mayor.

Diálogos y negociación

En tanto, los latifundistas protestan aunque tienen pocas razones para hacerlo. La mayoría de las expropiaciones, sean producto de *tomas* o no, se concretan después de largas negociaciones, en las que los propietarios mantienen la casa señorial y sus aldeaños, guardan el derecho de recoger para sí la cosecha de ese año y también se quedan con las semillas, herramientas y demás enseres. Además reciben bonos de la reforma agraria, avalados por el Estado, en pago de la superficie expropiada. De ahí la insatisfecha demanda del PS y del MAPU de que las expropiaciones sean a *puerta cerrada*, lo que equivale a que los propietarios no puedan interrumpir el ciclo productivo con la retirada de las herramientas y las semillas, que en opinión de esas fuerzas políticas deberían quedar para su uso inmediato por los campesinos.

Atrapado entre dos fuerzas: el deseo ancestral de los trabajadores del agro de recuperar sus tierras, por un lado, y el marco de actuación legal que le crean las leyes vigentes, por el otro, Allende se debate entre su promesa de respetar la legalidad y su compromiso de no reprimir, situación que explica en una conferencia de prensa en Quito, en agosto de 1971:

“Nuestra raza aborigen, durante un siglo y medio ha sido explotada, oprimida; muchos son degradados moral y físicamente por la persecución inicua de que han sido objeto. Les han ido usurpando

las tierras de sus propios antepasados. Ahora por primera vez en la historia, un gobierno –que es de ellos– plantea la justa devolución de lo que por derecho propio les pertenece. Sucede, lamentablemente, que no tienen tranquilidad para esperar, y se producen así las tomas de tierras. Yo no uso, ni usaré jamás, la represión, sino el diálogo, el apoyo, para superar las situaciones urgentes”.

Ante otras ocupaciones, como las de viviendas sociales, el Presidente procura dar la misma respuesta. En noviembre de 1970, a los pocos días de asumir la presidencia, visita una población donde se ha registrado una *invasión* y allí dialoga con los ocupantes ilegales, a quienes advierte: “No he venido para buscar aplausos sino para decir que es una obligación de todos demostrar que somos un gobierno y no un conjunto de gente irresponsable. ¿Qué quiero yo?, que entiendan y usen su madurez y que sepan que los propietarios (de esas viviendas) tienen más derecho que ustedes porque han hecho el esfuerzo y estas ocupaciones podrían derivar en el enfrentamiento de civiles contra civiles, de civiles contra uniformados y de pobladores contra pobladores. Por eso tengo que apelar a la conciencia de ustedes, porque además de todos estos problemas no podemos tener un enfrentamiento entre trabajadores que sería lo más grave que podría ocurrirnos. Por eso apelo primero a vuestras conciencias y luego sólo si es necesario se aplicarán las leyes vigentes”.

En ese complicado proceso, en el que por un lado se debe aplicar la ley y se aplica, y por el otro hay que contemplar las legítimas aspiraciones de los desheredados de la tierra, la reforma agraria avanza, aunque sus frutos productivos no sean inmediatos. Al desorden propio de todo tiempo de cambios sociales se unen las especiales condiciones de expropiación, que dejan a los propietarios la casa patronal, las máquinas y las semillas; el déficit de presupuesto del Estado, que dificulta el otorgamiento de créditos, y las huelgas de los camioneros, que desabastecen de insumos al campo. Unas huelgas impulsadas y en gran medida financiadas por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y las grandes compañías nacionales y extranjeras.

No obstante y a pesar de todas esas dificultades, en varios rubros se logra incrementar la producción y en otros se sientan las premisas para hacerlo. Por primera vez en la historia de Chile las masas de campesinos pueden acceder a la tierra, organizarse, ser libres y ver que ya no existen más latifundios ni latifundistas que puedan tratarlos como en la época feudal. Y, lo más importante, encuentran en el gobierno a un interlocutor que los reconoce como parte activa, como un sector social con derecho a una vida digna.

CAPÍTULO VII

Ni Washington ni Moscú

“Nunca me he decepcionado tanto en mi vida”, dice un cansado e indignado Salvador Allende mientras se deja caer en un sillón de la embajada chilena en Moscú, el 8 de diciembre de 1972, al término de varias horas de entrevistas y negociaciones.

El presidente llega a Moscú dentro de una gira por varios países, impulsado por la difícil coyuntura económica de su país y en búsqueda de recursos financieros que permitirían un respiro y una reeducción de los procesos productivos. Uno de los objetivos fundamentales es obtener créditos frescos para la compra de alimentos. El desabastecimiento de productos básicos de la alimentación popular, uno de los factores de desestabilización, es producto de una transitoria baja en la producción agrícola ocasionada en gran medida por la retirada de semillas y herramientas realizada por los latifundistas, del aumento de la capacidad de compra de los sectores populares, del acaparamiento de las capas de altos ingresos y del paro o *lock out* patronal.

Para paliar sus efectos, el gobierno popular necesita incrementar la importación de alimentos y, ante la escasez de divisas, los créditos se toman indispensables.

Allende no es un hombre al que se pueda humillar fácilmente. No obstante, en ese momento está dispuesto a tolerar desplantes, en búsqueda de soluciones para su país. Negocia, pide y casi suplica créditos por 200 millones de dólares, que son significativos para Chile y una suma menor para la entonces Unión Soviética. En un momento de las negociaciones, ante la intransigencia soviética, amenaza con retirarse. Sólo logra veinte millones, de ahí su decepción. A Argentina, gobernada aún por una dictadura, se le conceden créditos por diez veces esa suma, doscientos millones de dólares, para la compra de carne. La comparación hace más que evidente la falta de sensibilidad de Moscú.

La actitud soviética hacia Chile no constituye una casualidad. En la nomenclatura moscovita el gobierno chileno es considerado sólo un país *amigo*, que en la jerga del Kremlin es algo muy distinto

de un *hermano*. Los burócratas de Moscú son muy rigurosos a la hora de distinguir entre afinidades amistosas y familiares, y esa distinción hace que retaceen los apoyos financieros a los *amigos*, comprometiéndose más con los *hermanos*. Pero la relación familiar, como lo testimonian tantos casos, obliga a admitir la existencia de un *hermano mayor* e incluso de una *madre patria socialista* a los que subordinarse.

Los soviéticos tienen claro que con Allende en el gobierno, Chile jamás se subordinaría a una u otra potencia. Porque el no alineamiento, el antiimperialismo y el latinoamericanismo militante son principios sólidamente arraigados en su pensamiento y en los de su Partido, a pesar de que en los últimos años se implantara una fuerte influencia comunista sobre su Comité Central. A la hora de rechazar subordinaciones y a diferencia de Fidel Castro, Allende no admite alinearse con una potencia porque ésta sea enemiga de la otra.

En marzo de 1971 y a pesar de la hostilidad del gobierno de Washington, de su embajada y de la ITT, Allende declara a *The New York Times* que no permitirá la construcción de bases militares extranjeras en Chile que atenten contra los Estados Unidos, país con el que desea mantener las mejores relaciones. Además, se refiere a la construcción por la Unión Soviética de un puerto pesquero y de una planta de edificios prefabricados, que la prensa derechista presenta como la construcción encubierta de una base militar y que se debe al cumplimiento de un contrato firmado por el gobierno de Eduardo Frei.

Desde un primer momento Allende define a su gobierno como no alineado y propugna la defensa de los intereses del Tercer Mundo. Ni Washington ni Moscú gustan de ese planteamiento, aunque por razones diferentes y en consecuencia con reacciones también distintas. El gobierno norteamericano cede a las presiones de la ITT y considera al gobierno popular su enemigo, incluso antes de asumir Allende la presidencia. El gobierno soviético le dispensa el trato de país *amigo*, pero le niega el de *hermano*. De esa forma, sufre el rechazo, provocaciones y abandono desde las que son en ese momento las dos capitales del mundo, y cariño y apoyo desde la periferia, en especial desde los países vecinos: Perú, Argentina y Bolivia, a pesar de problemas limítrofes centenarios con los tres y de conflictos bélicos con dos de ellos, todavía frescos en el recuerdo.

En diciembre de 1972, Allende proclama en México: “sabemos que estamos dentro de América Latina y el Tercer Mundo”. Ese mismo año, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en

Nueva York, plantea las reivindicaciones del Sur frente al Norte industrializado y llama al establecimiento de nuevas relaciones económicas y financieras internacionales.

“La libertad no se logrará mientras nuestras economías estén sometidas. El sistema de relaciones de producción e intercambio nos deja a merced de lo que los grandes países industrializados resuelven, en defensa sólo de sus propios intereses”, dice ante el presidente Velasco Ibarra, de Ecuador, en su visita a Quito, el 25 de agosto de 1971.

En su último mensaje ante el Congreso Pleno, el 21 de mayo de 1973, define su política internacional: “Si dentro de Chile nos hemos esforzado por hacer compatible el avance del proceso revolucionario con el pluralismo, más allá de nuestras fronteras nos hemos propuesto mantener relaciones con todos los pueblos del mundo, sin exclusivismo ideológico... Buscamos que la paz y la colaboración se extiendan a los pueblos de América Latina, Asia y África. Reclamamos que un nuevo tipo de relaciones económicas se establezca entre las naciones del capitalismo industrial y las no desarrolladas”.

Una solidaridad latinoamericana

Las suyas no son meras palabras. Durante su gestión, y a pesar de las duras tensiones internas que absorben la mayoría de sus fuerzas, el gobierno desarrolla una política de cooperación y buena vecindad con los países de América Latina, en especial con los que Chile tiene fronteras comunes: Argentina, Bolivia y Perú.

Con Argentina, que está gobernada por una dictadura encabezada por el general Alejandro Lanusse, firma un acuerdo de cooperación tras una entrevista entre ambos presidentes y se sientan las bases para la superación de un centenario conflicto fronterizo.

Con Bolivia y Perú, dos países con los que Chile estuvo en guerra a finales del siglo XIX y a los que arrebató provincias, también se establecen por primera vez vínculos de amistad, favorecidos por la existencia en aquéllos de dos gobiernos militares nacionalistas y populares, presididos por los generales Juan Velasco Alvarado y Juan José Torres, respectivamente.

Tras el derrocamiento de Allende tendrían que pasar décadas, desaparecer las dictaduras y comenzar a recuperar la democracia en Chile para que, gobiernos constitucionales de por medio, se res-

tauren relaciones cordiales y equilibradas con sus vecinos, llegando a soluciones firmes de algunos conflictos fronterizos y encauzando otros para llegar al mismo resultado.

El gobierno de Allende, además, da un fuerte impulso a la participación de Chile en el Pacto Andino e insiste en la necesidad de la integración de América Latina; incorpora Chile al Movimiento de los Países No Alineados; organiza la tercera Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), y da albergue en su país, de la manera más amplia y generosa, a todos los perseguidos por dictadores y dictaduras. En esa época, en la que Cuba aparece como una bandera atractiva para quienes desean la liberación nacional y social de sus naciones, restablece las relaciones diplomáticas con ese país y mantiene su amistad personal y política con Fidel Castro, a pesar de disentir con firmeza sobre el uso de la fuerza, ya que es un pacifista convencido y practicante.

La particular situación de ambas naciones, agredidas por los Estados Unidos por haber recuperado la soberanía sobre sus riquezas naturales, y por poner coto a las ganancias desmedidas de tres o cuatro poderosas transnacionales, lleva a sus gobiernos respectivos a actuar juntos en diversos frentes de la política exterior. No es la falta de libertades en Cuba ni el régimen de partido único lo que causa la hostilidad norteamericana hacia Fidel Castro, porque la misma agresividad manifiesta Washington contra Salvador Allende y en Chile, bajo su gobierno, existe una pluralidad de partidos y la más absoluta libertad, en todos los aspectos de la vida humana, social y política. Alguien tan poco sospechoso de parcialidad pro socialista como Nathaniel Davis, embajador de Washington en Chile durante los dos últimos años del gobierno popular, cita unas reveladoras palabras de Roger Morris, un colega de Henry Kissinger en el Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, quien comenta la posiciones de aquél ya antes de las elecciones del 4 de septiembre de 1970: "No creo que nadie en el Gobierno comprendiese cuán ideológico era Kissinger en la cuestión de Chile. Nadie supo ver que Henry consideraba a Allende como una amenaza mucho más peligrosa que Castro. Si Latinoamérica se concienciaba alguna vez, no sería por Fidel Castro. Allende es el vivo ejemplo de la reforma social y democrática en América Latina. Ocurrían en el mundo acontecimientos desastrosos, pero sólo Chile lo asustó (a Kissinger)".

Davis añade, más adelante, que "está claro que Allende no quería cortar todos sus lazos con los Estados Unidos. Entendía que una

relación de cooperación en algunos aspectos era más deseable que la total confianza en la ayuda rusa, cubana, china o de Europa del Este. Por otro lado (Allende) no estaba seguro de la generosidad que podían tener sus amigos comunistas ni de cuán comfortable sería el abrazo del gran oso ruso".

Allende, consciente de la debilidad de su gobierno frente a quienes detentan el poder financiero internacional, dispone mantener los tratados de cooperación militar con los Estados Unidos, restringidos no obstante por decisión de Washington. El gobierno popular se esfuerza por no precipitar una crisis, negocia indemnizaciones con las transnacionales expropiadas, a otras les compra las acciones a precios pactados de común acuerdo y sólo se producen enfrentamientos con pocas de ellas. Pocas, pero poderosas en sus influencias sobre el presidente Richard Nixon. Pero si bien hace esfuerzos por evitar la crisis, Allende tampoco está dispuesto a renunciar al irrenunciable derecho del pueblo chileno de tener un país soberano y ser dueño de sus riquezas naturales.

El Presidente no quiere que su país dependa de los Estados Unidos, de la Unión Soviética, ni de ninguna otra potencia y su política lo refleja. Agredido por los Estados Unidos en todos los organismos multilaterales, víctima de acciones encubiertas de la CIA y la PIT en su contra, bloqueado en el mundo de las finanzas internacionales, desestabilizado por una amalgama de intereses internos y externos, busca apoyo en la diversificación de sus relaciones internacionales, pero siempre evitando poner en juego la soberanía de su país. Dentro de esa lógica se incluyen su visita a la Unión Soviética y la mejora de las relaciones con los países que integran el bloque del Este.

Como señala Nathaniel Davis, el gobierno norteamericano considera al proceso chileno mucho más peligroso que el cubano, por su carácter pacífico, respetuoso de la legalidad y de las libertades públicas. Con esa definición de principios y la suma de intereses particulares que se concentran en el presidente Richard Nixon, la hostilidad estadounidense contra el gobierno de Salvador Allende está asegurada.

Pero en el otro extremo de la bipolaridad mundial de aquella época esa hostilidad no motiva una reacción equivalente. Si una de las potencias se muestra dispuesta a utilizar todos los medios a su alcance para derrocar al gobierno popular, excepto la invasión militar directa, la otra no hace el menor esfuerzo para evitarlo, temerosa de que la izquierda latinoamericana, ya bastante alejada de los partidos comunistas, pudiese seguir el inédito ejemplo chileno. Ade-

más, según los testimonios de Davis, los soviéticos aconsejan a Allende que busque un acuerdo con los Estados Unidos.

Finalmente, en la burocracia soviética se impone la tesis de que es mejor un país bajo el control de la potencia rival, con la cual se pueda negociar, que dejarlo fuera del control de ambas, lo que podría tornarlo imprevisible. Allende, y Chile, pagan caro su defensa de la dignidad y la soberanía nacional y su no alineamiento en la guerra fría.

CAPÍTULO VIII

La ultraizquierda en acción

A Arturo Calderón no le tiembla el pulso cuando sale al encuentro del ex ministro del Interior de Eduardo Frei, Edmundo Pérez Zujovic, quien se mantiene en una segunda línea dentro del PDC, sin aspiraciones de liderazgo y dispuesto a apoyar lo que resuelva su ex Presidente. Ese ocho de junio de 1971, Pérez Zujovic se dirige hacia sus ocupaciones habituales cuando dos automóviles interceptan al suyo, al tiempo que varios individuos, encabezados por Calderón, descargan sus armas sobre él, matándolo en el acto. El atentado parece un calco del que ha costado la vida al general Schneider, razón por la que en un primer momento se especula con la posibilidad de que la autoría corresponda también a la ultraderecha o que sea una acción encubierta de la CIA, como parte de un plan de desestabilización de más vastos alcances.

La escasa importancia de la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP), autora del atentado, hace difícil determinar si sus autores se proponen desestabilizar al gobierno, si buscan “acelerar el proceso” o si se trata simplemente de un ajuste de cuentas con Pérez Zujovic, responsable de la represión de los trabajadores en Puerto Montt, con muertos y heridos, tres años atrás, cuando era titular de la cartera de Interior. Lo cierto es que el atentado conmociona a toda la sociedad y pone al gobierno de Allende contra las cuerdas, acusado por la derecha de permitir –y algunos hasta dicen de alentar– la actuación de grupos armados ilegales. El mismo día del atentado el Poder Ejecutivo acuartela a las fuerzas armadas y al cuerpo de carabineros, decreta el estado de emergencia y establece el toque de queda durante las noches en la provincia de Santiago, incluyendo a la capital del país.

Pero el gobierno reacciona de inmediato y en apenas una semana la policía, dirigida por Eduardo Paredes, miembro del Comité Central del PS, esclarece el caso: los autores del atentado son miembros de la VOP, un grupo de una decena escasa de activistas que rechaza toda posibilidad de lograr conquistas sociales por la vía electoral. Ex militantes trotskistas integrados recientemente en el PS y

que tuvieron contactos con la VOP antes de que Allende asumiese el gobierno, son decisivos a la hora de organizar la investigación y búsqueda de ese comando.

Entre el 14 y el 16 de junio la investigación concluye con la localización del grupo. Calderón y dos de sus más directos colaboradores son cercados e intimados a rendirse. Finalmente, mueren abatidos a tiros, después de resistirse a los policías comandados por el *Coco Paredes* en persona.

En unos documentos que se encuentran en un refugio de la VOP se afirma que el atentado es una medida de carácter justiciero, destinada a castigar la masacre de Puerto Montt. En esos mismos papeles se fija una posición contraria al gobierno allendista, que califica a esa organización como una mezcla de ultraizquierdistas fanáticos y delincuentes. La VOP no realiza activismo en las organizaciones de masas, sus militantes se mantienen en la clandestinidad aún bajo un régimen que respeta plenamente la libertad de expresión, organización y actuación de todos los sectores políticos y sociales, y no se siente comprometida con la suerte del gobierno de la Unidad Popular, al que consideran una traba en su camino. En ese grupo, desprovisto de un discurso político, alejado de los movimientos de masas, falto de vinculaciones internacionales y con militantes sin trabajo ni ocupación conocida, resulta difícil determinar cuáles de sus miembros son delincuentes y cuáles simplemente ultraizquierdistas.

Al no comprobarse entonces ni después que la VOP tuviera conexiones con otros grupos o con servicios de inteligencia nacionales o extranjeros que pudieran haberle pagado para que asesinaran a Pérez Zujovic, y al no proporcionarles ese acto ningún tipo de beneficio material, sólo resta encuadrar esa acción dentro de un marco político. Pero su impacto en el proceso es menor, por la rápida resolución del caso y debido a que carece de continuidad, una vez detenidos o muertos sus integrantes.

La VOP por no tener conexiones, tampoco las tiene con el MIR, aunque ambas organizaciones comparten dos o tres ideas que definen sus respectivas maneras de actuar: es imposible transformar la sociedad respetando la Constitución y las leyes, el gobierno de Salvador Allende es reformista (y por lo tanto un obstáculo para la revolución socialista) y, en consecuencia, ellas no tienen ninguna obligación o responsabilidad con respecto a su supervivencia, estabilidad, fortalecimiento o derrocamiento. Al fin de cuentas, repiten la actuación de los comunistas en Alemania antes de la II Guerra Mundial, cuando se negaron a aliarse con los socialistas para impe-

dir un triunfo electoral del nazismo, bajo su absurda afirmación de que: “¡Después de Hitler, nosotros!”. Ilusos. Como en Alemania, también en Chile se demostró que después del fascismo tarda mucho en volver a crecer la hierba en los campos y mucho más todavía en aparecer las flores.

El MIR contra Allende

El máximo dirigente del MIR, Miguel Enríquez, afirma en abril de 1972 que “reformismo o revolución es la alternativa de la izquierda y el pueblo, cuando ya sabemos, después de un año y medio (de gobierno de la Unidad Popular) que el reformismo conduce inevitablemente al fascismo, en las condiciones políticas actuales de Chile”.

Para el MIR, el de la Unidad Popular es un gobierno reformista, vacilante e incapaz de hacer una revolución social. Además, en la concepción de ese movimiento, un gobierno reformista es la antesala del fascismo pues crea un estado de cosas que “conduce inevitablemente al fascismo”, por acción o por omisión.

Otro dirigente y reconocido teórico del MIR, Ruy Mauro Marini, en un artículo publicado en mayo de 1973 afirma que “la característica esencial del gobierno de la Unidad Popular consiste precisamente en su incapacidad para romper con una determinada fuente de legitimidad —la que le otorgó la democracia representativa burguesa, a través del proceso electoral— para basar su legitimidad en la organización masiva del pueblo”. Y, “con ello, el gobierno se afincó cada vez más en el Estado burgués, en vez de hacerlo en la movilización revolucionaria del pueblo”.

Este análisis pone de manifiesto que, para la dirección del MIR, la principal cualidad de Allende (mantener la legitimidad lograda con su triunfo electoral y dentro de ella desarrollar un profundo proceso de cambios sociales, y de recuperación de la soberanía y dignidad nacional), se convierte en una incapacidad esencial que lo lleva a “afincarse en el Estado burgués”, en vez de basarse en la movilización revolucionaria del pueblo. Sus análisis ignoran o pretenden ocultar que las más grandes movilizaciones del pueblo chileno, que aumenta su participación día a día en todos los frentes, se producen siguiendo y alentando día a día a la dirección de la Unidad Popular y no precisamente a la del MIR.

Desde el punto de vista de la dirección de ese movimiento, si el reformismo (o sea Allende y la Unidad Popular) conduce *inevitable-*

mente al fascismo, y si esa conducción además padece una *incapacidad esencial* para basarse en la capacidad organizativa del pueblo, resulta lógico que el MIR se despreocupe de la suerte que pueda correr el gobierno y que no pierda el tiempo en preocuparse de analizar cómo lo pueden afectar sus propios actos.

El MIR, como una gran concesión al triunfo electoral de la Unidad Popular, pero también con la especulación de que Allende indultaría a varios de sus militantes presos (como efectivamente ocurrirá poco después de asumir éste la presidencia), cuatro meses antes de las elecciones del 4 de septiembre de 1970 anuncia la suspensión de sus acciones armadas, y después del triunfo electoral ofrece un grupo de sus militantes para integrar la custodia personal del Presidente.

La suspensión la cumple parcialmente, ya que se abstiene de asaltar bancos o supermercados para financiarse, pero realiza otro tipo de acciones armadas, entre ellas la ocupación indiscriminada de tierras. En lo que respecta a la custodia de Allende, llamada coloquialmente Grupo de Amigos Personales (GAP), un grupo de sus militantes se mantienen unos meses colaborando en esa tarea, hasta que son reemplazados por miembros del PS. A principios de 1972 un acontecimiento fortuito demostrará hasta que extremo el MIR se desinteresa por la suerte del gobierno de la Unidad Popular. Un grupo de miristas, entre ellos uno que había pertenecido al GAP, se traslada en una camioneta en la que llevan algunas armas (tres fusiles y varias pistolas) y unos mapas en los que han señalado cuarteles militares y edificios públicos. En las cercanías de la ciudad de Curimón, al sur de Santiago, el conductor pierde el control del vehículo y se estrella contra un árbol. Alertados los carabineros acuden al lugar y encuentran con sorpresa las armas, por lo que detienen a los ocupantes del vehículo, quienes están heridos. De inmediato se constituye un juez militar, en virtud de que la tenencia o transporte de armas de guerra es de competencia de la justicia castrense. Al ser interrogados por el juez acerca de las razones por las que transportan armas de guerra, los miristas afirman que pertenecen al GAP, y que están cumpliendo una misión en tal carácter, por lo que solicitan ser liberados. Al preguntárseles por los mapas contestan que en ellos están marcados los lugares que deben ser atacados en el caso de que se produzca un golpe de Estado.

Uno de los detenidos aún porta una credencial (vencida) que lo acredita como miembro del GAP, cuerpo al que perteneció unos meses en la primera época del gobierno allendista. En esta oportu-

dad la suerte juega a favor de la Unidad Popular, ya que ese juez es uno de los pocos que no está afectado por la agitación ultraderechista y se limita a aplicar la ley y los procedimientos jurídicos establecidos.

Además, previendo que el hecho puede derivar en un escándalo que involucraría al gobierno, toma debida nota de que la credencial está vencida y de que ello indica que el detenido ya no pertenece a la custodia presidencial.

Sin embargo, una y otra vez los miristas insisten en su versión de que cumplen una misión como miembros del GAP y reclaman que se les deje en libertad. Días después el juez le comenta al abogado defensor de los detenidos su estupor ante las respuestas y se muestra asombrado de que a los miristas ni se les cruce por la cabeza la idea de que su coartada, que pretenden utilizar para ser liberados de inmediato y librarse del juicio, podría ser perjudicial para el gobierno. El caso habría derivado en un escándalo tremendo contra el gobierno si hubiese caído en manos de un juez militar próximo a los derechistas que ya están conspirando.

Pero la actitud de los miristas detenidos es consecuente con una concepción política de su dirección. Ésta sostiene que el gobierno es reformista y que con su respeto a la legalidad y su búsqueda de diálogos y acuerdos está desviando al pueblo del camino hacia la revolución, que entienden como un enfrentamiento armado entre dos bandos. Desde ese punto de vista, es lógico que en sus declaraciones ante el juez prime su interés por ser rápidamente liberados y que ni siquiera entren a considerar si su actitud perjudica o beneficia al gobierno. Es un tema que los tiene sin cuidado.

La VOP y el MIR no son lo mismo

La VOP y el MIR no son la misma cosa, a pesar de que ambas organizaciones desestabilizan con sus acciones al gobierno de la Unidad Popular.

La primera condensa el ultraizquierdismo de una decena de militantes, carece de un discurso político mínimamente estructurado y observa con desprecio el activismo en las organizaciones de masas. Por el contrario, el MIR posee un discurso político bien estructurado y más militantes, publica revistas y periódicos, mantiene una emisora de radio, participa en manifestaciones y procura incidir en las bases, aunque con escasa fortuna. Además, periódicamente, desde

el aeropuerto santiaguino de Pudahuel, y en medio de una parodia de clandestinaje, militantes miristas portando documentación falsa parten rumbo a La Habana. Pero se da la paradoja de que todo ese clandestinaje se torna inocuo, cuando se comprueba que esos viajeros se embarcan normalmente en aviones de Cubana de Aviación y como si se fueran de vacaciones o a estudiar en el extranjero son despedidos por familiares, amigos y compañeros de militancia, acompañados por funcionarios de la embajada caribeña adscritos al G2, el servicio de inteligencia de Cuba. En los campos de entrenamiento de la isla aprenden a empuñar armas cortas y fusiles, a disparar a un blanco fijo y a desfilar con porte marcial. En suma, un aprendizaje militar elemental, similar al que reciben los jóvenes chilenos en sus dos primeros meses de instrucción normal del servicio militar obligatorio en las Fuerzas Armadas, solo que adobado con charlas políticas y algunas nociones de seguridad personal,

Sin embargo, la VOP y el MIR tienen algo en común: durante todo el proceso del gobierno popular no les son ofrecidos ni ocupan cargos de responsabilidad en la administración del Estado, en cualquiera de sus rangos o niveles. Mientras los militantes socialistas, comunistas, mapucistas, independientes, socialdemócratas, de la IC y de la izquierda demócrata-cristiana reparten su tiempo entre la militancia política y la resolución de problemas cotidianos, en especial en la esfera de la producción agraria e industrial, vopistas y miristas miran hacia otro lado y se dedican a criticar al gobierno y a preparar acciones por su cuenta, sin considerar el efecto que pueden tener en el proceso en su conjunto.

De esa forma, en diciembre de 1973, la Comisión Política del MIR podrá emitir un documento en el que, además de culpar al *reformismo* (Allende y el PC) y al *centrismo* (el PS) de la derrota, se vanagloriará: “No fuimos gobierno, no hay escándalo o corrupción que nos puedan atribuir”. En sus análisis posteriores al golpe, el MIR continuará practicando el juego de la mistificación. No obstante, dirán una gran verdad: no fueron gobierno, entre otras cosas por que no contaron con el apoyo ciudadano para serlo.

Por otra parte, al no asumir responsabilidades, ni en el gobierno, ni tampoco en las empresas nacionalizadas o intervenidas, les resulta fácil proclamarse a salvo de las alegadas corrupciones y escándalos. Por lo demás, nunca probados, ni siquiera después de las detenciones y allanamientos masivos posteriores al golpe militar.

En ese mismo documento, la Comisión Política del MIR añadirá que tiene la autoridad moral y la fortaleza orgánica suficientes para

asumir la conducción del movimiento de masas chileno y llevarlo al éxito, pero no explicará por qué no se puso al frente de ese movimiento de masas en septiembre de 1973.

En ese contexto, el MIR no se siente obligado a respetar lo que resuelve el gobierno de la Unidad Popular o las decisiones que adoptan los organismos representativos de los trabajadores, como la CUT. José Peralta, dirigente del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR, un ala del MIR), sintetiza esa actitud en noviembre de 1971: “si el gobierno sigue insistiendo en la aplicación de la Reforma Agraria hecha por los ricos en el gobierno de los demócrata-cristianos, nosotros haremos nuestra propia reforma agraria de tipo revolucionario”. E intenta hacer esa reforma.

Sus militantes, la mayoría de origen estudiantil, se trasladan en grupos hacia el interior del país, llegan a los fundos y, estén o no comprendidos en el marco legal establecido por la Ley de Reforma Agraria, arengan e impulsan a los campesinos para que ocupen las tierras, les ofrecen protección *armada* y los acompañan durante los primeros días de la ocupación. Son numerosas las fotografías en las que se pueden ver a algunos jóvenes de aspecto urbano armados con fusiles, revólveres y escopetas, junto a campesinos enarbolando palos, azadas y otros instrumentos de labranza. En la mayoría de los casos, una vez lograda la ocupación y el desalojo de los patrones, los activistas del MIR se trasladan hacia otra comarca, a repetir la hazaña, mientras dejan a los campesinos a cargo del fundo, desarmados y librados a su suerte frente a las guardias blancas.

Si el 11 de septiembre de 1973 el MIR (la VOP ya no existe) hubiese desempeñado el papel que pregonaba y se hubiese destacado en la resistencia al golpe pinochetista, se podrían haber explicado e incluso justificado algunas de sus actitudes. Sin embargo, como se puede apreciar en el capítulo sobre el golpe, ese 11 de septiembre el MIR desaparece de la escena, a pesar de haber estado durante tres años propagando su consigna de “Pueblo, conciencia y fusil”.

El MIR no sólo se mantiene al margen del esfuerzo colectivo para organizar y sacar adelante las empresas del área social sino que, además, con su actitud provocadora ayuda a desestabilizar un gobierno que constituye la esperanza de millones de personas en Chile y que concita la atención y la simpatía de muchas más en el resto del mundo.

En las manifestaciones convocadas por la Unidad Popular, el MIR desfila separado y en formación militar, con banderas rojinegras, a la vez que sus activistas corean: “Pueblo, conciencia, fusil...”

MIR, MIR, MIR”. Esa postura y ese pregón pueden hacer pensar que en ese grupo existe un grado suficiente de organización, preparación militar y posesión de armamentos como para constituirse en un seguro de reserva combatiente contra cualquier intento de golpe de Estado. Los hechos se ocuparán de demostrar, el 11 de septiembre de 1973, que toda esa parafernalia oculta una impotencia política y que lo más importante de su *organización militar* lo constituyen sus marchas pseudomilitares, sus banderas al viento y sus consignas repetidas hasta el cansancio.

Su presencia, sus gritos y sus poses para las fotos con algún arma en la mano, sólo resultan útiles a quienes se dedican a crear el clima psicológico necesario, mediante campañas de rumores, atentados y la publicidad, directa e indirecta, incluyendo las referidas a las acciones irresponsables del MIR.

El gobierno de la Unidad Popular tiene la misma tolerancia hacia el MIR que hacia organizaciones de la ultraderecha, como Patria y Libertad, que también exhiben armas y las utilizan. En esa actitud gubernamental está el convencimiento de que el diálogo y el avance social son el camino para limitar el campo de acción de esos grupos e ir eliminándolos poco a poco. Pero ambos extremos, los de la izquierda y los de la derecha, al fin de cuentas terminan apoyando la creación de un clima golpista.

CAPÍTULO IX

El pastel de choclo

Sergio Silva Bascuñán, dueño de la chacra o finca *El Arroyo*, de Chiñihue, obsequia a sus invitados con un pastel de choclo, típico plato chileno preparado con granos de maíz tierno. En torno a ese plato único hay reunidos 33 comensales, seleccionados, según Silva Bascuñán, por su “experiencia, ilustración y buen criterio”, quienes analizan la situación del país y llegan a la conclusión de que ha llegado “la hora de la acción”. Es el cuatro de marzo de 1972. En la reunión, que pasa a conocerse como *el complot del pastel de choclo*, están representados sectores claves de la sociedad. Por el sector empresarial asisten los dirigentes de la central empresarial Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), Orlando Sáez y Domingo Arteaga; el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Jorge Fontaine; el presidente de la Confederación Nacional de Empleadores Agrícolas, Manuel Valdés; el presidente del Colegio de Ingenieros, Eduardo Arriagada, y el presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Silva Bascuñán.

El sector judicial es representado por el ministro de la Corte Suprema, José María Eyzaguirre, y el legislativo por el presidente del Senado, Patricio Aylwin, del PDC. Ese partido está representado, además, por los ex ministros de Frei, William Thayer, Máximo Pacheco, Andrés Zaldívar y Jaime Castillo Velasco. Por el PN participan el senador Francisco Bulnes y el diputado Sergio Diez.

Asimismo, asisten los sacerdotes José Miguel Ibáñez Langlois y Eduardo Lecourt; el publicista de Patria y Libertad, Jaime Guzmán; el jefe del Opus Dei en Chile y ex ministro de Alessandri, Julio Philippí; el representante de la Unión Cívica Democrática, Gonzalo Vial Correa y el rector de la Universidad de Chile, Edgardo Boeninger. Una vez terminados los postres, frutas de temporada, se sirve el café con *bajativos* y se brinda con whisky por la declaración aprobada en la reunión, en defensa de “nuestra libertad, nuestra democracia y los derechos humanos”, que los reunidos consideran seriamente amenazados.

En esa declaración está incluida la obligación de “actuar con

decisión y valentía”, pues ante la situación nacional “no cabe la cobardía ni el desaliento. Es la hora de la acción”. Fijan para septiembre de 1972, la hora y el día señalado para desatar las acciones de desestabilización destinadas a provocar las condiciones para una intervención golpista de las Fuerzas Armadas. Aunque la más notoria ausencia en ese cónclave golpista es la de militares, en actividad o retirados, la previsión de su actitud es objeto de reiterados análisis. En última instancia, todos los allí reunidos saben que sería imposible derrocar a Allende sin volcar a un sector importante de las Fuerzas Armadas en contra del gobierno constitucional. Uno de los principales acuerdos, que trasciende a pesar de no estar recogido en la declaración escrita, es la preparación de una huelga patronal (*lockout*) para septiembre. El gobierno, al conocer los resultados de la reunión, denuncia que se ha gestado un *Plan septiembre*, de carácter netamente sedicioso. Los diarios de la derecha se burlan de la denuncia gubernamental, hablando en tono de broma del *Complot del pastel de choclo*.

La mafia del pastel

Es posible que alguno de los 33 allí reunidos no tuviese una cabal conciencia de la trascendencia de esos acuerdos, al ignorar que los organizadores de la reunión están en contacto con una auténtica mafia internacional que mueve los hilos del complot, y que ha adjudicado un papel a cada sector participante: unos deben crear el clima político, con acusaciones en el Parlamento; otros lanzar las campañas de acción psicológica; los más ultras preparar armas y explosivos y los dirigentes patronales organizar su huelga.

El 24 de marzo la policía, munida de una orden judicial, allana los locales centrales del movimiento fascista Patria y Libertad, en los que encuentra 21 bombas molotov, tres pistolas, un centenar de cápsulas de ácido sulfúrico (para preparar detonadores de las bombas molotov, incendiarias), laques (palos o garrotes), bastones y linchacos.

El 29, sólo cinco días después del allanamiento, el juez interviniente decide poner en libertad a los arrestados en el local, aduciendo falta de pruebas. El sector judicial del *pastel de choclo* cumple también su parte en el complot.

Otro sector, el de *agitación y propaganda*, recibe días después sucesivas inyecciones de dólares estadounidenses. El Comité de los 40 aprueba entre el 11 y el 24 de abril una donación para el diario *El*

Memorio de 965.000 dólares, otra de 50.000 para respaldar a un sector proclive a escindirse de la Unidad Popular y otros 24.000 para una organización empresarial. Los que conspiran en nombre de la patria no vacilan en recibir dinero de los Estados Unidos, clandestinamente, para financiar sus actividades sediciosas.

Entre tanto, la Unidad Popular está lejos de asistir de brazos cruzados a la evolución del complot. El cuatro de septiembre, al cumplirse el segundo año del triunfo electoral, 800.000 personas desfilan en apoyo de su gobierno, mientras la oposición se cuida de salir a las calles, en respuesta a la recomendación de los partidos Demócrata Cristiano y Nacional de no salir, “para evitar agresiones”.

El 14 de septiembre Allende revela públicamente detalles del complot: se pretende paralizar el país sobre la base de una huelga del gremio de transporte por carreteras, cortar las rutas en al menos ocho sitios, crear dificultades en los barcos mercantes, provocar disturbios callejeros, sabotear las líneas férreas y puentes y desatar pronunciamientos militares. Siete días después el subsecretario del Interior, Daniel Vergara, un destacado militante comunista, anuncia que el *plan septiembre* o *complot del pastel de choclo* ha sido frustrado, y que el gobierno controla la situación. Uno de los derechistas más activo en las Fuerzas Armadas, el general Jorge Canales, Director de Instrucción del Ejército, es pasado a retiro ante las evidencias de que integra el grupo director de la sedición, como lo confirma el general Carlos Prats, Comandante en Jefe de esa fuerza.

Sin embargo, el primero de octubre de 1972, 7.000 conductores de los servicios interprovinciales de buses anuncian una huelga de 24 horas en todo el país. El gobierno negocia y concede la devolución a sus propietarios de tres líneas de autobuses intervenidas, con lo que se da por resuelta la huelga. Pero los sediciosos no duermen y el tres de ese mismo mes se declara en huelga la Federación de Estudiantes de Enseñanza Secundaria (FESES), cuya dirección responde al PDC, en protesta contra la política educativa del gobierno y en rechazo del nombramiento de las directoras de dos liceos de Santiago. Grupos de jóvenes, muchos de ellos estudiantes secundarios, asaltan la heladería Coppelia, en el aristocrático barrio de Providencia, para castigar a sus patrones por no haber apoyado un paro patronal. Al intervenir la policía se producen incidentes y son detenidos 114 de los asaltantes, que la justicia deja en libertad al día siguiente sin siquiera registrar sus nombres. Los disturbios callejeros promovidos por la JDC fueron una constante en los dos últimos años del gobierno allendista, así como sus enfrentamientos con estudian-

tes de la Unidad Popular, con los que llegaron a tener verdaderas batallas campales.

El golpe económico

El sector político se mueve a su manera: el 6 de octubre de 1972 los senadores Francisco Bulnes, Patricio Aylwin, Julio Durán y Américo Acuña acusan a Allende, ante el Senado, de haberse colocado al margen de la ley. El mismo día la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CODUCA) declara un paro nacional por tiempo indefinido a partir del ocho, si el gobierno no accede a las demandas de los camioneros de la provincia de Aysén, en el sur del país, que se oponen a la creación de una empresa pública de transportes en esa zona. La particular conformación del territorio chileno, alargado y paralelo a la cordillera de los Andes, dificulta el tendido de ferrocarriles y multiplica la importancia del transporte por carreteras, del que depende en gran parte la actividad productiva del país. Ello explica los esfuerzos del Gobierno por evitar esa huelga y los de los conspiradores por provocarla.

El sector de agitación y propaganda hace lo suyo. El siete de octubre el diario *El Mercurio* dedica su editorial al comercio detallista y provoca la alarma de los pequeños y medianos comerciantes, afirmando que se marcha hacia la destrucción del comercio privado. El mismo día, ese diario recoge un anuncio en la misma línea de su editorial, pagado por la Cámara Central de Comercio y la Confederación del Comercio Detallista.

Veinticuatro horas después, el mismo día que comienza el paro de los camioneros, Patricio Aylwin declara que “hay quienes creen que ya se han hecho suficientes marchas sin resultados visibles, y que ahora tendrían que ponerse en práctica otras formas de resistencia. Sin perjuicio de esta idea, que fue sugerida hace meses por el senador Carmona (miembro de su propio partido y uno de los primeros partidarios de abandonar la vía legal de oposición), pienso que las concentraciones públicas de las fuerzas opositoras tienen gran importancia, porque son la respuesta indispensable a la amenaza totalitaria de los partidos marxistas de ganar la calle”.

Como si hubiesen esperado esa consigna, en las calles de Santiago se suceden los incidentes a todas horas del día, respondiendo a un plan. La revista *Time* –nada sospechosa de ser izquierdista– informa de que los provocadores de esos actos reciben una paga día-

ria de 300 escudos, equivalente a dos jornales medios, pero se abstiene de decir quién los paga. El paro de los camioneros se agrava, con interrupción de carreteras y bloqueos al paso de camiones ajenos a la huelga. Los piquetes sólo dejan transitar a los vehículos que transportan productos perecederos.

El gobierno dispone la constitución de un Comité Nacional del Transporte presidido por el contraalmirante Ismael Huerta. El 10 de octubre son detenidos en la sede de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones los máximos dirigentes de la huelga: León Vilarín, Guillermo Satt, Jorge Álvarez y Eduardo López Opazo. Los detenidos reciben la visita y solidaridad de Sergio Diez, del PN; Mario Mosquera, de la DC; Benjamín Matte, de la Sociedad Nacional de Agricultores (SNA); Orlando Saenz, de la SOFOFA y Jorge Fontaine, de la CPC. Los dos últimos, comensales del *pastel de chocho*.

La huelga de los camioneros se extiende en un clima de creciente violencia. Los dueños de camiones aparcen los vehículos en grandes concentraciones, algunas de hasta 1.000 unidades, a las que le retiran los neumáticos y piezas vitales del motor para evitar o dificultar su confiscación, al tiempo que constituyen grupos de choque que asaltan a quienes no acatan la huelga, cortan carreteras y vuelcan la mercadería. Sus dirigentes se niegan a cualquier negociación que no parta de la previa aceptación de sus demandas.

La financiación suministrada por el Comité de los 40 sirve para pagar cada día el equivalente de un jornal a cada camionero en huelga, que gana lo mismo trabaje o no. En los campamentos de los huelguistas se organizan juegos, entretenimientos, asambleas, grupos de guardia, centinelas y una estructura jerárquica controlada en la cúspide por León Vilarín, apodado *El Villano* por los partidarios de la Unidad Popular.

En sus *Memorias...*, el general Prats revela que el paro del transporte toma de sorpresa a las Fuerzas Armadas, que tienen opciones para tratar otras interrupciones de servicios básicos, pero carecen de planes específicos y experiencia acumulada para actuar en caos de interrupción de los servicios de locomoción, agua, combustible y electricidad. Añade que tampoco el gobierno, en un primer momento, se percató de la trascendencia de esa huelga, a la que ni Prats ni Allende alcanzan a encontrar un motivo gremial verdadero, fuese justo o erróneo.

Para ejemplificar esa ausencia de motivos, Prats explica que hubo una negociación el siete de septiembre de 1972 entre el ministro de Economía, Carlos Matus, y los dirigentes de los camioneros. Ese día

llegan a un proyecto de acuerdo, que establece un reajuste de 120 por ciento en las tarifas y el compromiso gubernamental de no aumentar el precio de la gasolina ni de los neumáticos. Además se acuerda la ampliación en 60 días del plazo para que éstos finiquiten los trámites para formalizar los pedidos, en base a los cuales se les venderían 1.500 camiones con un descuento del 15 por ciento sobre el precio de lista y pagando solamente el 20 por ciento al contado. Sin embargo, poco tiempo después se reinicia el paro.

Un paro injustificado

Analizando esos sucesos, Prats señala que “la determinación de provocar un paro nacional de tanta gravedad no aparecía gremialmente justificada, en circunstancias en que era perfectamente viable proseguir las negociaciones hasta llegar a acuerdos más específicos y realistas”. Y añade que el jueves 12 de octubre de 1972, cuando se adopta la decisión de provocar ese paro nacional, “resulta extraño apreciar que se desata en la capital una sincronizada campaña a través de las radios de la oposición, en apoyo del paro de los transportistas, con abiertas incitaciones a la ciudadanía a expresar su solidaridad pública con los huelguistas”.

A esa altura, la cuestión está planteada en torno a si los huelguistas lograrán paralizar el país y producir el caos capaz de desencadenar un golpe de Estado, o si el gobierno mantendrá en funcionamiento los servicios esenciales. Ante la violencia de los camioneros, a los que se suman profesionales, comerciantes y empresarios, el Ministerio del Interior anuncia que aplicará la ley y requisará todo camión parado o que obstaculice una carretera y lo pondrá a disposición de un interventor. Ese mismo día son arrestados medio millar de camioneros, cuyos vehículos se requisan y pasan a transportar carga de propiedad particular. Al anuncio de la Confederación del Comercio Detallista y de otras cámaras patronales de que se suman al paro, los trabajadores organizados comienzan a dar su respuesta. Los de Textil Yarur y Textil Progreso, empresas nacionalizadas y en cuya dirección participan, resuelven cortar el abastecimiento a los comerciantes que cierran las puertas de sus establecimientos.

El general Bravo, designado coordinador general del transporte terrestre y jefe de la zona de emergencia de Santiago, prohíbe la difusión de noticias tendenciosas o alarmistas, o comentarios sobre los

comunicados de su jefatura, así como las manifestaciones públicas, suspende los permisos de portación de armas y dispone la protección del libre tránsito de los vehículos automotores y del abastecimiento de combustibles líquidos. Además, ordena que todas las emisoras de radio y televisión se constituyan en cadena las 24 horas del día, a disposición de su jefatura, medida que los PDC, Nacional y de Izquierda Radical rechazan de inmediato.

A medida que los comercios e industrias se van sumando al paro patronal, se multiplican las acciones de respuesta. Los supermercados que cierran son abiertos por los vecinos del lugar y a continuación resultan requisados por la Dirección Nacional de Industria y Comercio (DIRINCO), las fábricas son ocupadas y puestas en marcha por sus trabajadores y los jóvenes se ofrecen como voluntarios para conducir los camiones requisados y para cargar y descargar su mercadería.

El 15 de octubre, la Federación de Estudiantes (universitarios) de Chile y los estudiantes de enseñanza media partidarios de la Unidad Popular, asumen la responsabilidad de colaborar en el abastecimiento del Gran Santiago. Los estudiantes de la Universidad Técnica del Estado, junto con obreros de la Estación Central, descargan en seis horas más de un millón de kilos de arroz. Dirigentes de 18 de los 28 sindicatos de taxistas de Santiago solicitan protección policial para salir a trabajar. Los camiones requisados, o de camioneros que no se plegaron a la huelga, circulan con una curiosa escolta mixta, en la que marchan a la par carabineros uniformados y voluntarios civiles.

El Mercurio sigue cumpliendo su papel y el 16 de octubre señala en su editorial que “frente a la quiebra del orden económico y a la impotencia del orden jurídico para impedir el atropello a las garantías constitucionales, han surgido los gremios (de patrones), con sus directivas y sus bases, para defender los derechos amagados. Los partidos políticos democráticos (de los que ese diario excluye a los de la Unidad Popular, *nota del autor*) saben muy bien que el paro de protesta de los gremios no es un movimiento de patrones y empresarios solamente”. Vaya si lo saben. Lo saben y participan junto a las asociaciones patronales en la campaña desestabilizadora del orden constitucional.

Ese mismo día una delegación de senadores y diputados nacionales y democristianos visitan al general Prats para quejarse por la cadena de radiodifusoras impuesta por el gobierno, defender “la justicia del paro” y calificar de ilegal la forma en que las autoridades enfrentan la situación, una forma totalmente ajustada a derecho y

en la que incluso Allende decide no aplicar las leyes que lo autorizan a emplear la fuerza para resolver determinadas situaciones. Entre los visitantes están Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Juan de Dios Carmona. Al señalarles Prats que el paro “era la antesala de la subversión”, Aylwin le manifiesta que en las expresiones del General advierte una inclinación a favor de la línea del gobierno, cargo que aquél rechaza.

Alarmado por lo que escucha en esa reunión, Prats pide una conversación personal al presidente del PDC, Renán Fuentealba, perteneciente al sector progresista del mismo, a quien manifiesta que si su partido apoya a los huelguistas se puede producir un enfrentamiento con características de guerra civil y que debería propugnar una salida política a la confrontación de fuerzas. Fuentealba le contesta que es partidario del diálogo, pero entrando por la puerta ancha de La Moneda, de manera pública y formal y no en reuniones secretas.

Horas después Prats informa a Allende sobre lo que califica de “posición constructiva” de Fuentealba. Por la noche el Presidente habla por televisión y llama a la DC a dialogar, una manera de abrir la puerta principal de La Moneda, la que se reserva para visitas oficiales.

Pero los complotados progresan en su proyecto. Al día siguiente, 17 de octubre, logran que se sumen a la huelga nuevos gremios patronales y de empleados de alta jerarquía, entre ellos la Federación Nacional de Trabajadores del Banco del Estado; los ingenieros de Chilectra, la empresa nacional de electricidad; ingenieros agrónomos, colegios de abogados, médicos, químicos, farmacéuticos, ingenieros civiles, la FESES y la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Ante ello, Allende advierte que el país se encuentra al borde de la guerra civil y ordena al general Bravo que disponga el toque de queda en Santiago durante las horas de la noche.

Ese mismo día termina la visita de Fidel Castro, quien se pasa casi un mes yendo de un lado para otro del país, contraviniendo el deseo gubernamental de que su permanencia se acorte. Los asistentes a la recepción que ofrece la embajada para despedirlo se enteran allí del decreto ordenando el toque de queda. Uno de los invitados, el general Augusto Pinochet, se acerca al gobernante cubano y le informa de la medida dispuesta, agregando muy formalmente: “No se preocupe, mi comandante, que su seguridad está asegurada” a lo que su interlocutor, sonriendo, le contesta: “No se preocupe usted, general, porque aquí (y señala con su dedo índice el edificio y el

puerto de la embajada) está usted en territorio cubano y nosotros no tenemos ningún problema”. Pinochet estuvo durante toda la gira de Castro pegado a su lado, haciendo de edecán y atendiendo con toda solicitud y zalamería las necesidades del visitante a quien siempre se dirigió diciéndole “mi Comandante” y golpeando sus tacones.

La respuesta popular

Con independencia de las medidas oficiales, la ciudadanía responde al paro patronal con diversas iniciativas tendientes a asegurar el funcionamiento del país y en esa actividad se van configurando nuevas formas de organización popular. La más trascendente, que tendría una decisiva influencia en la orientación futura del proceso, es la creación de los Cordones Industriales. En ellos se agrupan los trabajadores de las empresas de un sector (cordón) determinado para coordinar las acciones en defensa de sus fuentes de trabajo, el abastecimiento a los comercios que permanecen abiertos y la distribución de productos a sus hogares.

La denominación de *cordones* alude a la ubicación de los establecimientos fabriles a lo largo de las principales vías de comunicación, que se extienden alrededor de la capital. Esto no impide que surja un Cordón Santiago Centro, que geográficamente en nada se parece a esa extensión alargada, por la implantación de sus centros de trabajo en la zona céntrica de la ciudad y por sus características laborales, en su mayoría de oficinas, centros administrativos y de servicios.

Poco después los cordones comienzan a constituirse también en Concepción, Valparaíso y otras ciudades importantes. En estos cordones se diluye la diferencia entre trabajadores sindicalizados (en la CUT) y no sindicalizados, y se establece una forma de funcionamiento asamblearia, en la que los representantes son electos y revocados sin plazos fijos para mantenerse en sus puestos. Sólo la confianza de sus bases permite que ejerzan el liderazgo quienes mejor las interpretan y mientras las interpreten.

De los nueve cordones surgidos en Santiago, ocho son presididos por jóvenes militantes socialistas y el noveno por un independiente de izquierda. Los dirigentes de la CUT, con una organización burocratizada y en la que el equilibrio de fuerzas entre socialistas y comunistas impide la rapidez de resolución que las circunstancias exigen, son rebasados por la espontánea organización de los cordones.

Promediando octubre comienzan a incrementarse los atentados. Son volados postes telefónicos y tendidos eléctricos y se arrojan bombas contra locales políticos y comercios abiertos. Los choques entre policías, de un lado, y comandos de la derecha, del otro, se producen en varias ciudades, como asimismo entre derechistas e izquierdistas. El Comité de los 40 libera otros 1.427.666 dólares, que son entregados a partidos políticos de la oposición y a organizaciones patronales.

A la vez, surge otra nueva forma de organización ciudadana: los Comandos Coordinadores de Trabajadores, llamados también Comandos Comunales, que agrupan a los cordones, las asociaciones de pobladores y las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios (JAP).

En respuesta a un *Pliogo de Chile* presentado por los huelguistas y que Allende se niega a discutir porque afirma que contiene puntos políticos inaceptables (como mencionar la obligación de que él acepte ese pliego “ante otro poder del Estado”), el pueblo organizado en los Comités Coordinadores y los trabajadores de los cordones emiten un *Pliogo del Pueblo*, en el que consignan los derechos populares:

“Asegurar el derecho: a la distribución y abastecimiento adecuado y oportuno del pueblo. A un sistema de transporte y movilización que resuelva las necesidades del pueblo. A que todas las industrias produzcan bajo el control del pueblo. A tener vivienda, hospitales, escuelas, campos deportivos y una ciudad igual para todos. A resolver el problema del campo y hacer producir la tierra. A terminar con la explotación del imperialismo en Chile. A no dar más créditos a los patrones ladrones. A que los grandes capitalistas financien las necesidades y derechos del pueblo. A obligar ahora a que los capitalistas inviertan sus ganancias. A una política de reajuste con sentido de clase. A una vida digna para la mujer. A una educación abierta, popular e igualitaria. A la salud. A la contraofensiva política”. Tales son los derechos reivindicados como plataforma de lucha por los partidarios de la Unidad Popular.

El mes de octubre de 1972 termina con los huelguistas manteniendo el paro y los partidarios del gobierno combatiendo sus efectos, y con una novedad esencial: previa una declaración del dirigente socialista Eric Schnacke, de que su partido no se opone a la constitución de un gabinete cívico-militar, Allende acepta la renuncia de su Gabinete en pleno y designa uno nuevo, en el que integra a los dos máximos dirigentes de la CUT, Rolando Calderón, en Agricultura, y Luis Figueroa, en Trabajo, y a tres militares, el general Carlos Prats, Comandante en Jefe del Ejército, en Interior; el general Clau-

dio Sepúlveda, de la Fuerza Aérea, en Minería, y el contraalmirante Ismael Huerta, de la Armada, en Obras Públicas. Sepúlveda y Huerta son elegidos por sus respectivos Comandantes en Jefe. Como Comandante en Jefe subrogante del Ejército asume el general Augusto Pinochet, el mismo que meses después se alzaría contra el Gobierno. Prats declara que no existe compromiso político entre las Fuerzas Armadas y el Gobierno, sino que se trata de una colaboración patriótica en aras de la paz social.

El tres de noviembre varios miembros del nuevo gabinete reciben a los dirigentes patronales. El cinco, Prats lee por la cadena nacional de radio y televisión un documento, firmado por él y los ministros Flores, Millas y Figueroa, en el que expone la posición del gobierno frente al paro, fija un plazo de 48 horas para que se le ponga fin, compromete conversaciones para después de su término y advierte que “en el futuro no aceptará paralizaciones o abandonos de funciones intempestivas, que causen daño a la economía, a la vida y a la salud de la población. En tal emergencia, aplicará, sin discriminación, el peso de la ley a los responsables de tales actos”.

El seis de noviembre los camioneros anuncian el fin de su huelga, que ha durado 26 días y la aceptación de las condiciones comunicadas el tres por el gobierno. Prats, que se ha reunido con los dirigentes de los camioneros, señala que “la solución del paro se debe a la reafirmación de la autoridad del Presidente de la República quien, haciendo uso de sus facultades legítimas, designó nuevos ministros, imponiendo su decisión de devolver la normalidad al país”.

Al término de la huelga el gobierno queda fortalecido, al extremo de que a los pocos días Allende delega la presidencia en Prats y sale de gira al exterior. Pero el paro también deja al país pérdidas económicas de 250 a 300 millones de dólares, una cantidad muy elevada para la época en que se producen. A esas pérdidas se sumarían las derivadas del atraso en la siembra, ocasionada por la falta de transportes. Asimismo, se consolidan una derecha volcada hacia posiciones más recalcitrantes, una vigorosa organización popular que apoya al gobierno y se produce una ampliación sustancial del área de propiedad social, merced a la incorporación de medio millar de empresas requisadas durante el conflicto. Una parte minoritaria de esas empresas son restituidas a sus propietarios en los meses siguientes.

Por otro lado y como uno de los frutos de esa confrontación, nace el semanario *La Aurora de Chile*, que toma su nombre del primer periódico impreso en Santiago en el siglo XIX y que, editado

por el Regional Santiago Centro del PS, se convierte en el portavoz de los nacientes Cordones Industriales y en un eficaz instrumento de comunicación participativa, extendido a todo el país y clave para entender la evolución del movimiento de masas en los meses que siguieron hasta el golpe del 11 de septiembre de 1973.

CAPÍTULO X

El Sol y la Aurora

Cuando Salvador Allende asume la presidencia, el 4 de noviembre de 1970, los 800 trabajadores de la Editorial Zig-Zag se encuentran en huelga, en demanda del pago de salarios atrasados y de su actualización de acuerdo con el alza del costo de la vida. La editorial, en esa época, pertenece a un grupo de empresarios demócrata cristianos y está catalogada, por su capacidad de producción, como la segunda mayor empresa de América Latina en su sector.

Sus talleres, de los más modernos del continente, cuentan con dos rotativas de hueco-grabado de ocho cuerpos cada una, una de cinco, tres rotativas *offset* de ocho cuerpos, varias planas *offset* y tipográficas, y todos los servicios accesorios de fotomecánica, composición, encuadernación y distribución. Además, dispone de personal altamente calificado y elementos de producción de fotografía, dibujo y redacción periodística, de historietas y de libros. Ante la intransigencia de las partes, el gobierno popular, *aplicando leyes de varias décadas atrás*, designa un interventor, cuyo nombre es propuesto por la CUT. El personal insiste, como punto básico para negociar, que se paguen los sueldos atrasados y que se asegure el mantenimiento de los puestos de trabajo. La patronal, sea porque acusa el impacto de la campaña derechista que anuncia el caos económico que provocaría el nuevo gobierno, sea porque forma parte ya del boicót empresarial que comienza, aduce no tener fondos para pagar los sueldos. Además, dice no estar en condiciones de asegurar el mantenimiento de los puestos de trabajo. En consecuencia, ofrece la empresa en venta.

Este ofrecimiento genera una intensa polémica en la cúspide de la Unidad Popular, pues los socialistas insisten en que la empresa debe ser requisada o confiscada y no comprada. Pero Allende dispone su compra, la que se concreta tras una ardua negociación con los dueños, en la que se establece el precio total y se pacta la forma de pago.

La negociación la dirige, por parte del gobierno, Jorge Arrate, un joven economista que después ocuparía otros puestos importan-

tes en el gobierno. Al ser designado, Arrate era director del Instituto de Economía de la Universidad de Chile. Él recuerda que en diciembre de 1970 Allende lo llamó, basado en una recomendación de su hija, la *Tati* y le explicó que no quería que la compra fuera negociada por el canal del Ministerio de Economía porque “es una empresa que tiene que ver con las ideas y no se le puede dar el mismo tratamiento que a las demás”. El Presidente además le indicó que se contactara con el abogado del principal accionista de la editorial, el empresario democristiano Sergio Mujica, el abogado Jacobo Schaulsohn, un civilista, miembro del PR y amigo personal de Allende.

Arrate solicitó la colaboración de un amigo argentino, Lucio Geller, profesor e investigador en el Instituto que dirigía. Al comenzar las negociaciones, lo primero que hicieron las dos partes fue designar un árbitro para fijar el precio y la designación, por común acuerdo, recayó en la consultora norteamericana Price Waterhouse. Finalmente, la operación de compraventa se concretó y el documento respectivo se suscribió en la sede del Ministerio de Economía.

Durante los primeros dos meses de 1971, Arrate ejerció como una especie de administrador, gerente o director general, junto a una comisión designada por el personal de la empresa, garantizando su funcionamiento y analizando proyectos, ideas y la creación de nuevos sectores de edición. En una asamblea de trabajadores, a propuesta del Departamento de Publicidad, Promoción y Ventas, se acordó bautizar a la nueva empresa como Quimantú, un neologismo basado en el idioma mapuche y que se traduce como “Sol de la sabiduría”.

Como en marzo debía reiniciar sus actividades en la universidad visitó al Presidente, le informó de que había cumplido con sus instrucciones y le solicitó que designase a un reemplazante. La respuesta fue “búsquelo”. Sergio Maurín, otro economista y también miembro del PS, como él, a quien conocía desde que ambos militaban en la Federación de Estudiantes de Chile (FECH), aceptó el cargo. Precisamente, cuando en 1964 Arrate fue candidato para presidir la FECH, su proclamación la hicieron Allende y el dirigente y escritor comunista Volodia Teitelboim.

Bajo la gerencia de Sergio Maurín, Quimantú pasa a ser dirigida por un Consejo de Administración, integrado a partes iguales por representantes de sus trabajadores y por funcionarios de confianza del gobierno. Los primeros son elegidos por sufragio universal y

secreto; y los segundos son nombrados a propuesta de los partidos que integran la coalición gobernante y siguiendo el criterio de las cuotas, o reparto de cargos en proporción a la fuerza electoral de cada formación política. Como en la caja no hay fondos, la compañía recurre al crédito de los bancos para pagar los sueldos, en tanto el pesado mecanismo editorial se vuelve a poner en marcha.

Quimantú, o el éxito del trabajo de un pueblo por su cultura

Cuando la nueva administración se hace cargo de la editorial a fines de 1970, ésta apenas puede trabajar al 20 por ciento de su capacidad y durante un solo turno, debido a la pérdida de clientes y a la escasa producción editorial y periodística propia. En 1973, al ser derrocado el gobierno popular, Quimantú emplea a 1.500 trabajadores (600 más que cuando fue comprada) y en sus talleres se trabaja a tres turnos, prácticamente al cien por ciento de su capacidad instalada.

En 1972 y 1973, tal es su ritmo de trabajo que debe derivar una pequeña parte de la producción a terceros talleres. Quimantú se desarrolla compitiendo de acuerdo con las leyes del mercado y respetando la legalidad hasta extremos que en algunos casos atentan en contra de su propio interés empresarial o de los objetivos políticos del gobierno. Asimismo, debe enfrentarse a una fuerte competencia del sector privado, que opera con deslealtad, ya que empresas y publicaciones de ese sector reciben subsidios de servicios de inteligencia de los Estados Unidos y de los grupos empresariales; además de concentrar la mayor cantidad de los anuncios publicitarios, los que son retaceados o directamente negados a la editora nacional.

Un dato significativo lo constituye la asunción por Quimantú de contratos suscritos por su antecesora, *Zig-Zag*, (como parte de las condiciones de compraventa) para imprimir las revistas semanales *Erquilla*, –con dirección demócrata cristiana– y *Visión*, norteamericana, que aparecen regularmente durante todo el período del gobierno popular. En todo este proceso, una sola vez la edición de una de ellas (*Visión*), sufre un retraso.

Los responsables de esa publicación incluyen en una de sus maquetas una fotografía trucada del ministro de Economía, el socialista Pedro Vuskovic, en el que se lo hace aparecer tocando el violín con un jamón, en momentos en los que hay una escasez de alimentos y

racionamiento de alguno de los productos de la canasta popular, causados por el bloqueo empresarial. Los trabajadores del taller se niegan a imprimir la publicación si se mantiene esa foto, pese a que desde la gerencia se les explica que Quimantú carece de cualquier responsabilidad o potestad para discernir sobre lo que se incluye o no en *Visión*, ya que con esa revista hay, simplemente, un contrato de impresión, que incluye la composición, impresión y encuadernación. Mientras se discute entre la gerencia y los trabajadores, la aparición de la revista se atrasa un día.

En medio de ese conflicto, el gerente recibe un llamado telefónico de Joan Garcés, desde La Moneda, quien le transmite un mensaje de Allende: “He prometido que en mi gobierno se respetaría la libertad de prensa. Deben imprimir *Visión* sin censurar su contenido”.

Maurín convoca una asamblea y transmite el mensaje a los trabajadores, quienes rechazan la solicitud de Allende y se ratifican en su decisión de no imprimir *Visión* mientras se quisiera mantener la adulterada fotografía de Vuskovic. Garcés recibe de inmediato la información del resultado de la asamblea. Menos de una hora después vuelve a llamar a Quimantú y transmite textualmente otro mensaje de Allende: “Si ustedes, los directivos de Quimantú son incapaces de explicar la situación a los trabajadores de los talleres, díganmelo, convoquen ya mismo una asamblea e iré yo a explicársela”.

De inmediato se convoca esa asamblea y tras escuchar los informes del gerente se resuelve por mayoría imprimir *Visión*. Este episodio permite valorar la dimensión de las convicciones de Allende, pero también que los trabajadores mantuvieron, de alguna manera, su protesta: misteriosamente, en todos los ejemplares de esa edición de la revista, la calidad de la impresión de la fotografía en cuestión es deficiente, tanto que resulta imposible distinguir si el fotografiado es Vuskovic y, mucho menos, qué es lo que éste tiene en las manos.

El episodio demuestra tanto el debate y la participación que existe dentro de Quimantú, como el firme compromiso de Allende en defensa de la libertad de expresión y de prensa. Si en la propia editorial del Estado se respeta el derecho de la oposición para atacar al gobierno, incluso trucando fotografías, ¿qué dudas pueden haber de que las empresas privadas que actúan en el mercado también gozan de absoluta libertad? Desde su estatización y por voluntad del grupo que asume la responsabilidad de dirigirla, en Quimantú se estructura progresivamente un sistema de participación de los trabajadores

en su gestión y dirección. Por un lado se mantiene la estructura administrativa tradicional, en cuya cúspide –el Consejo de Administración– los trabajadores de la empresa cuentan con la mitad de los cargos, que se renuevan anualmente en elecciones secretas. La otra mitad, en términos muy generales y relativos, se puede decir que representa al resto de los trabajadores del país, en la medida que son funcionarios designados por el gobierno, a propuesta de los partidos de la Unidad Popular.

Pero, además, surge otra estructura paralela, constituida por los Comités de Producción, como una manera de controlar a los jefes de departamentos y de secciones heredados, ante la sospecha de que algunos de ellos, militantes demócrata cristianos, podrían intentar sabotear la producción. En un principio, y dado que al comprarse la empresa se firma el compromiso de mantener todos los puestos de trabajo, se incluyen en éstos a los jefes de secciones y departamentos y se los mantiene a pesar de ser personal de confianza de la anterior dirección. Cada Comité está integrado por tres a cinco miembros, elegidos en votación pública por los trabajadores que integran cada unidad productiva y de entre ellos. Los integrantes de los comités desempeñan su función voluntariamente, sin cobrar ningún extra por esa tarea que, en la mayoría de los casos, los obliga a quedarse en la empresa fuera de su horario laboral. Aunque su misión originaria es controlar que se adopten las medidas necesarias y pertinentes para la marcha normal de la producción, poco a poco esos comités van ampliando sus facultades y coordinándose entre sí.

También de forma paralela a la gerencia, pero no en oposición a esta, surge otra estructura, en cuya cúspide se ubica el Coordinador de Comités de Producción, un verdadero poder dentro de la empresa, impulsor de toda su actividad y modelo para otras empresas del área de propiedad social. Su principal diferencia con la estructura gerencial es su carácter dinámico y su origen asambleario, siendo todos los cargos revocables por la simple decisión de quienes los han designado. En septiembre de 1973 existen 54 comités de producción en Quimantú en todas sus secciones y departamentos, periodísticos, editoriales, administrativos, comerciales y de talleres. Ellos elaboran normas de producción y reglamentos de autodisciplina, participan en la promoción de las publicaciones, discuten su contenido así como el de los nuevos planes editoriales, y buscan sustitutos para los insumos cuya adquisición en el exterior está impedida por el bloqueo invisible y la falta de divisas, o porque los importadores les niegan recambios o repuestos que venden a otras empresas. En

los comités de producción participa también la gran mayoría de los trabajadores demócrata cristianos e independientes, poco menos de la mitad del total del personal de la empresa.

A principios de 1973 los Comités de Producción montan una exposición de repuestos, recambios y piezas fabricados artesanalmente en los talleres de la Editorial y que son producidos para reemplazar los que se han deteriorado en las máquinas de composición, fotografía, impresión y encuadernado, en su mayoría de origen norteamericano y que no pueden ser importados por el embargo dispuesto por las autoridades y los grupos de presión de ese país.

En el campo específico del contenido de las revistas, colecciones de libros, fascículos y folletos participan tanto los trabajadores de cada medio, como los de taller, administración y distribución, a través de sus representantes en el Comité Coordinador de Comités de Producción.

El ámbito de acción de Quimantú es amplio y es precisamente esa amplitud la que valoriza el aporte de su experiencia. La editorial produce colecciones de libros, a razón de un título lanzado al mercado cada día como promedio, historietas (*comics*), folletos, revistas de actualidad, femeninas, laborales, juveniles e infantiles. Entre las publicaciones periódicas mensuales, quincenales y semanales, edita 45 títulos al mes. Por lo general, esas publicaciones atienden a una difusión masiva, utilizando las líneas tradicionales de distribución y creando otras nuevas. Por primera vez en la historia de Chile una editorial pone a la venta sus libros a través de la red de los vendedores de diarios y revistas en la calle (suplementeros), con cuyo sindicato firma un acuerdo y mantiene relaciones de amplia cooperación mutua.

En materia de libros publica colecciones políticas que atienden al pluralismo ideológico, venciendo la cerrada oposición e incluso el sabotaje de miembros del PC, en tiradas que decuplican las tradicionales en esos rubros.

Uno de los éxitos de venta más notables lo produce la colección de Minilibros Quimantú, creada para competir con las historias de vaqueros, policías rudos y novelitas rosas. Esa colección, con tiradas que oscilan entre 50.000 y 100.000 ejemplares por título y por semana, tiene un formato similar a las de la competencia, pero la mayor tirada permite fijar su precio en el equivalente aproximado de lo que se paga por una cajetilla de cigarrillo. En los avisos y carteles promocionando esta colección se utiliza esa circunstancia para transmitir que “por el precio de una cajetilla de cigarrillos compra un libro”.

El 60 por ciento de los títulos de esa colección son clásicos de la literatura universal y de la chilena, mientras que el 40 por ciento restante reúne a autores noveles nacionales y a autores extranjeros contemporáneos. En sus primeros 15 meses de vida, la Editorial Quimantú vende más de cinco millones de libros de producción propia, de las colecciones Clásicos del Pensamiento Social, Debates Nacionales, Cuncuna (para niños) y Literatura. Además, imprime millones de libros de texto y cuadernos, encargados por el gobierno para su distribución gratuita en las escuelas.

Un éxito similar, aunque dispar, se logra con las historietas, de las que se llegan a publicar 15 títulos de revistas cada mes. Al ser comprada por el Estado, la editorial ya cuenta con un departamento de historietas y en los depósitos tiene una existencia de películas importada de los Estados Unidos, suficientes como para abastecer durante un año los requerimientos gráficos de sus publicaciones.

Al principio, por razones de economía, se utilizan esas mismas películas, pero cambiando el argumento. Así, es posible apreciar a apuestos aviadores norteamericanos dialogando acerca de sus actividades criminales sobre Vietnam, en tanto que los *feos* vietnamitas, con aspectos de infames asesinos, claman por la defensa de la patria y sus anhelos de liberación. De manera un tanto simplista y maniquea, al menos por una vez los *buenos* de la historieta son feos y con rostros de malvados, y los *malos* resultan serlo unos hermosos rubios con caras de ángeles. Esto se produce por el híbrido proceso de utilizar los dibujos importados de Norteamérica y agregarles textos elaborados en Chile desde un punto de vista renovador.

A poco andar, a ese departamento se le agrega una sección de análisis de contenidos y, siempre con la participación de sus trabajadores, se comienzan a elaborar guiones nuevos y a crear personajes propios. Los tradicionales personajes del *Far West* norteamericano y sus rubias damiselas van siendo reemplazados por chilenos: campesinos, obreros, policías, soldados, estudiantes, médicos y trabajadores en general.

La participación de los receptores

Aunque pueda parecer extraño, en este rubro de historietas es donde primero se produce la participación de sectores sociales ajenos a la empresa. Para elaborar el guión de *El Manque*, un héroe campesino, se solicita la colaboración de organizaciones agrarias,

así como de policías para las policiales, militares para las de acción y trabajadores para todas. A partir de estas colaboraciones se originan los talleres de evaluación, que se propagan a otras áreas del departamento editorial. Estos talleres, diseminados en todo el territorio nacional, fundamentalmente en las capas sociales más bajas, reciben las publicaciones y, junto a equipos de evaluación y análisis de la editorial, las someten a crítica.

En un trabajo con asentamientos campesinos se origina toda una investigación sobre formatos, colores y contenidos, a partir de la crítica que los mismos campesinos hacen a la presentación de una revista. "Tiene letra muy chiquita, dicen, nosotros no estamos acostumbrados a leer y además, en las noches, en nuestras casas tenemos muy poca luz". Tras unas primeras resistencias y explicaciones acerca de tipos de letras y diseño, el taller considera atinada la observación, que sorprende a los maquetadores profesionales, unos ciudadanos habituados a leer y a tener buena luz.

Esa crítica de los campesinos origina un cambio en la revista. Sería simplista decir que lo fundamental consiste en aumentar el tamaño de las letras, ya que además de esto se comienza a variar el enfoque editorial en todos los campos, con precisiones muy claras sobre la definición del color, las ilustraciones, el diseño de las letras y los formatos. En pocos meses Quimantú se convierte en una referencia para todo sector social que tenga algo que decir, por lo que debe habilitar un amplio local en la empresa para recibir delegaciones de todo tipo, que llegan a plantear sus inquietudes, con la certeza de encontrar el eco deseado.

Un joven belga, que años después se convertirá en una referencia obligada en el mundo de la comunicación social, Armand Mattelart y que está haciendo prácticas de posgrado en Quimantú, recibe la tarea de analizar las objeciones presentadas por los campesinos y a partir de allí la presentación de todas las publicaciones se va ajustando a nuevos criterios que, en lo esencial, se pueden sintetizar diciendo que deben poder ser acogidas e interpretadas por todos los sectores sociales, lo que se logra en poco tiempo.

La mayoría de los trabajadores de la editorial, con un buen porcentaje de demócrata-cristianos entre ellos, participan en las tareas de promoción para ganar espacio en el mercado, en el que se compete duramente con medios y empresas que llevan años de implantación en el favor del público.

En jornadas de trabajo voluntario, los trabajadores de talleres, redacción, administración y servicios auxiliares concurren a barrios,

minas, fábricas, poblaciones y asentamientos campesinos, en todo el país, a promocionar las publicaciones y dialogar con los posibles lectores. En cada exposición o tienda de venta promocional se produce instantáneamente el diálogo acerca de contenidos y contenidos. Se organizan encuentros sociales y deportivos con el Sindicato de Suplementeros, o vendedores de diarios y revistas, como una manera de acercarlos a Quimantú, más allá de la simple relación comercial.

El pluralismo ideológico y político es una de las constantes de la editorial y se expresa en dos vertientes: por un lado, ofreciendo su capacidad instalada para que todo tipo de organismos, asociaciones, sindicatos y partidos puedan contratar allí sus trabajos de impresión. Si bien es cierto que a nadie se cierran sus puertas, también lo es que la extrema derecha no se acerca a ellas, si no es para tirar bombas incendiarias, como ocurre varias veces; la DC las transita solo con *Ercilla* y un par de revistas para mujeres, y los partidos de izquierda van y vienen como por su propia casa.

Por otro lado, el pluralismo se evidencia en las publicaciones propias de la editorial. Sus revistas, colecciones de libros y ediciones especiales tienen cuerpos directivos y de redacción constituidos por socialistas, comunistas, radicales, demócrata cristianos, miristas, mapucistas e independientes.

Con esa actitud, de pluralismo y de acercamiento a los sectores populares, Quimantú logra quebrar los reducidos círculos elitistas en los que hasta esa época circulaban las ediciones, y poner los libros en la calle, al alcance del pueblo. Demuestra así que es posible la participación popular en un marco de democracia y libertad, compete en condiciones materiales desventajosas con la iniciativa privada apoyada por los monopolios transnacionales y demuestra que es posible producir con altos niveles de calidad en materia de comunicación social, negando que lo progresista tenga que aparecer siempre asociado con la mediocridad, la monotonía y el burocratismo verticalista.

Sin embargo, la experiencia registra también gruesos errores, que se pagan caros. Se ponen en marcha algunos proyectos de publicaciones *obreras*, que a poco andar demuestran ser solamente malas revistas *para obreros*, realizadas por jóvenes intelectuales con aires de superioridad. Se hacen propios algunos estereotipos y se respetan prejuicios que en poco tiempo se revelan tanto o más perjudiciales que los heredados del régimen anterior, con la indudable ventaja de que la editorial es sensible a las críticas, recepción que se facilita por

el carácter asambleario de su dirección. En una oportunidad, por ejemplo, se aprueba la edición de un periódico obrero, del que se llega a imprimir un número cero escrito totalmente a mano, bajo la argumentación de que los trabajadores se sentirían más identificados con esa escritura, de una grafía irregular y plenamente diferenciada de la composición tipográfica tradicional, que los ideólogos del proyecto atribuyen a la derecha.

Antes de la aparición del primer número, el taller de evaluación constata que los trabajadores no se sienten identificados y que además, en su mayoría, no alcanzan a descifrar esa extraña escritura a mano. Asimismo, se observa que la reproducción de toda escritura que se aleja de los tipos más clásicos de la tipografía ocasiona un gran cansancio en los lectores.

No es el único caso de experiencias fallidas, aunque se las pueda disculpar ya que se están ensayando nuevos caminos, haciéndolos al andar, y sin que nadie posea una brújula infalible.

El pluralismo resulta difícil de defender ante la actitud del PC en la empresa, donde por el sistema del *cuoteo* tiene ubicado en el segundo puesto de la escala ejecutiva a Joaquín Gutiérrez, brillante escritor y militante de la vieja escuela estalinista. Su celo partidario lo lleva a tratar de evitar que se publique cualquier libro que esté en el *index* de la iglesia moscovita. Cuando constata que no tiene fuerzas para lograrlo intenta una maniobra, apoyándose en la necesidad de abaratar costos, y ofrece una donación soviética: las películas de las obras completas de Marx, Engels y Lenin. De haberse aceptado la “desinteresada donación de los compañeros soviéticos”, la línea de producción de libros se habría ocupado con esa edición durante dos años, con las traducciones manipuladas desde Moscú. Y, mientras, no se imprimirían otras obras.

Después de haber publicado libros de sociología de diversas tendencias, incluyendo varios estalinistas, el Departamento de Publicaciones Especiales decide editar la *Historia de la revolución rusa*, de León Trotsky. Gutiérrez y sus colaboradores se oponen una y otra vez a que se la edite y llegan a pedirle al embajador soviético que proteste ante el presidente Allende, lo que el diplomático hace recibiendo como respuesta: “Chile es un país democrático y plural y el Presidente no puede intervenir en este asunto”. Ante la inevitable publicación, Gutiérrez plantea que un miembro de su partido escriba el prólogo, “aclarando” lo que es Trotsky y el trotskismo, demanda que es rechazada. El argumento es muy simple: un prólogo por lo general sirve para apoyar la edición, no para impugnarla. Final-

mente, la obra se imprime y gracias a la polémica creada por la posición de los comunistas se despierta una gran expectativa y en el primer mes de su salida al mercado se venden 15.000 ejemplares.

Con todo, lo que significa esa editorial puede quedar simbolizada en los aplausos y vítores con que sus columnas de manifestantes, identificados con carteles propios, son recibidas en las grandes concentraciones de la Unidad Popular. También lo queda en el odio que despierta en sus competidores y en los partidos de derecha y, lamentablemente, en el ensañamiento con que la dictadura fascista instaurada tras el golpe del 11 de septiembre de 1973 manda a ocupar sus instalaciones, quemar gran parte de sus libros y archivos, perseguir a su personal y lo poco que tarda en vender sus maquinarias en el exterior.

La Aurora de Chile

En plena huelga patronal de octubre de 1972, el Comité Regional Santiago Centro del PS resuelve editar un semanario como instrumento de información, movilización, participación y lucha contra el golpismo que, como se ha dicho, toma su nombre del primer periódico editado en el país a principios del siglo XIX, *La Aurora de Chile*. Concebido como un periódico agitativo, en pocas semanas se convierte en un emisor-receptor, movilizador de voluntades y ámbito de efectiva participación popular.

De formato estándar o *sabana*, tiene una diagramación simple y aggl. Sus primera y última páginas se componen con titulares de gran tamaño y textos en cuerpos 14 y 16, que facilitan su utilización como carteles, que se fijan en las carteleras y se pegan en las murallas. Su estilo coloquial establece rápidamente el diálogo con los lectores, al expresarse con claridad, sin rebusques lingüísticos pero a la vez sin concesiones al populismo.

Sus páginas primera y última se ven a menudo en el interior de las fábricas, centros de trabajo y de estudio como periódicos murales, y pegadas en las paredes. A su lado, los comités de fábrica y los trabajadores individualmente, agregan sus propios textos, la mayoría de las veces escritos a mano por ellos mismos, impulsados por llamamientos del periódico en ese sentido. En las manifestaciones, los titulares obran como consignas y sus primeras páginas son muchas veces enarboladas como pancartas. A la redacción, instalada en el mismo Comité Regional, en la calle San Martín, llegan cartas,

delegaciones, colaboraciones espontáneas y pedidos de ejemplares para distribuir. De ese aluvión participacionista surgen los Centros de Distribución y Discusión y los Corresponsales Populares del semanario.

El periódico se distribuye a través de la red tradicional de quioscos, junto con el resto de la prensa tradicional, y también directamente en los citados centros, en los que cada edición es discutida y analizada. Sus conclusiones son llevadas al Consejo de Redacción, integrado por la Comisión Política del Regional.

Al principio, las colaboraciones espontáneas y las de los Corresponsales Populares son recogidas en páginas especiales. Pero en poco tiempo las colaboraciones superan la posibilidad de editarlas a todas. Ante esa situación y en contra de lo que una primera reacción podría indicar, se opta por impulsar aún más la colaboración de esos corresponsales y se pide que colaboren también Fotógrafos Populares. En el mismo semanario se insertan avisos y se reparten octavillas pidiendo Corresponsales Populares. En la demanda se dice que no es necesario saber leer ni escribir para serlo y que basta con tener un profundo sentido crítico y conciencia de ser trabajadores.

Llegan centenares de respuestas. Paralelamente a la redacción se constituye una sección de Corresponsales Populares, se organizan cursos para ellos y se imparte instrucción acerca de cómo realizar periódicos populares, en multicopia, serigrafía y aun a mano, estos últimos para los diarios murales.

El éxito de *La Aurora de Chile* genera subproductos. Junto con cada ejemplar, dependiendo de la zona y de los acontecimientos, los Centros de Distribución incorporan unas simples octavillas en unos casos y verdaderos suplementos en otros. Con este trabajo paralelo se logran varios objetivos: tener mil ojos y mil oídos; no desalentar a los colaboradores espontáneos, que ven así que su trabajo se materializa en la palabra escrita, y se posibilita un flujo de comunicación horizontal, de ida y vuelta. Los receptores dejan de ser meros lectores condenados a la pasividad, para pasar a desempeñar un papel activo.

Una censura “socialista”

La repercusión que adquiere *La Aurora de Chile* en la movilización popular y el impacto de sus ejemplares en los frentes de trabajo no pasan desapercibidos en la cúpula de los partidos de la Unidad

Popular y el periódico es censurado en dos oportunidades por el Comité Central del PS. La primera vez, a finales de 1972, con el pretexto de que los Comités Regionales no pueden editar diarios por su cuenta sin la autorización del Comité Central. Es un argumento absurdo, ya que en el pasado y en ese mismo año los Comités Regionales editan boletines y periódicos. La razón de fondo es el temor que tiene la fracción, o grupo de poder, que controla el Comité Central del PS ante el creciente prestigio y audiencia del semanario. Tras arduas negociaciones, en las que pesan los pronunciamientos de las bases socialistas, el Comité Central acepta que se reanude la edición, con el compromiso del regional de consultar los grandes temas con la Subsecretaría de Comunicaciones del Comité Central, a cargo de Eric Schnacke. Éste mantendrá durante todo el tiempo de edición de la publicación un diálogo fluido, sin presiones y sin problemas con la dirección del periódico.

No obstante, en las semanas previas al golpe, cuando Allende propone el diálogo con la DC, al apoyar *La Aurora de Chile* esa propuesta de forma decidida y sin rodeos, a través del titular: “Si al diálogo”, sufre una segunda censura. El periódico ya está en imprenta, en los talleres de *La Nación*, cuando un informante del Comité Central avisa del tenor del titular al Secretario de Organización del PS, Ariel Ulloa. Éste llama al Regional y exige que se quite el artículo de apoyo al diálogo y se respete la posición adoptada por el Comité Central, que es de no oponerse al diálogo pero tampoco participar en él. Tras una larga deliberación, la Comisión Política del Regional retira el artículo, pero no incluye otro con la posición oficial del PS. Como protesta por la censura, deja el espacio en blanco y en los días siguientes explica la situación a sus bases, en multitud de reuniones.

El último número de *La Aurora de Chile*, que se entrega a imprenta en la noche del lunes diez de septiembre de 1973, no alcanza a ser distribuido. Su titular recoge unas palabras pronunciadas por la máxima autoridad del Partido Socialista, Carlos Altamirano, en el acto realizado en el Estadio Chile el domingo nueve: “En caso de golpe, LOS MILITARES DEBEN DESOBEDECER LAS ÓRDENES GOLPISTAS”.

CAPÍTULO XI

Prensa, poder y golpismo

La libertad de expresión y de prensa durante el gobierno de la Unidad Popular es la más amplia y continuada de la que goza Chile en toda su historia y una de las más destacables en el mundo entero. Esa libertad es aprovechada al máximo por los conspiradores, que lanzan verdaderas campañas de intoxicación con falsedades manifiestas que despiertan tentaciones represoras en sectores de partidos de la Unidad Popular, aunque esas tentaciones son frenadas por sus direcciones y en especial por Allende, quien vela porque así sea. Sin embargo, la agresividad de los medios controlados por la derecha es alimentada por constantes y sistemáticas acciones encubiertas de la CIA a través de periodistas y medios locales. Algunas anécdotas lo evidencian.

En septiembre de 1971, un cable de la agencia estadounidense de noticias United Press International (UPI), dice que una avioneta que ha acompañado a Allende durante una visita realizada en agosto a Colombia, Ecuador y Perú, conduciendo a parte de su comitiva y que se creía perdida, en realidad llevó armas y propaganda al guerrillero colombiano Manuel Marulanda, *Tiro Fijo*. También afirma que el mandatario chileno se ha entrevistado en Bogotá con el opositor senador José Ignacio Vives Echeverría y que en Perú ha visitado al general Juan José Torres, el recientemente derrocado presidente de Bolivia y que no mucho más tarde sería asesinado en la Argentina.

Ante la difusión de ese cable, que reproduce una nota del diario más conservador de Bogotá, *El Tiempo*, sin ninguna comprobación que, aunque sea indirectamente, avale la autenticidad de la noticia y sin siquiera contrastarla con el gobierno chileno u otras fuentes, y ante la negativa de UPI a desmentirla, Allende acusa a esa agencia de difamación y anuncia el 15 de septiembre que clausurará sus oficinas en Santiago, cierre que no se alcanza a hacer efectivo. Ese mismo día comienza una campaña en toda la prensa continental en contra de la medida, con la activa participación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), cuyo principal miembro en Chile es *El*

Mercurio.

Allende califica lo ocurrido de juego sucio y cobarde, consistente en que “los periódicos de aquí reproduzcan mentiras manufacturadas para agredir al gobierno y al pueblo de Chile, y luego se laven las manos atribuyéndolas a una fuente ajena”.

Una semana después se presenta en Santiago el vicepresidente de la UPI y gerente general para América del Sur, William McCall, quien hace gestiones ante Allende, presenta disculpas por lo que califica de error, anuncia que ha relevado de su cargo al director de la oficina en Chile, Martín Houseman, y pide que se vuelva a autorizar su funcionamiento, que en ningún momento se interrumpió. El Presidente accede y la UPI continúa su trabajo en Chile.

Ese no es el único caso de difamación, aunque sí el primero que recibe una respuesta enérgica por parte del gobierno de la Unidad Popular. Otra agencia norteamericana, la Associated Press (AP), en octubre de 1970, en los días que mediaron entre el triunfo electoral y la proclamación de Allende como Presidente, difunde un cable, también sin citar fuentes, según el cual 40 húngaros expertos en guerrillas se trasladarán a Chile cuando aquél asuma la presidencia. No se supo nunca de alguna rectificación de la AP, como tampoco se conoce cualquier indicio, desde esa época hasta la fecha, que permita ni siquiera sospechar que la noticia tuviese el menor grado de verosimilitud.

La AP no es molestada en lo más mínimo durante todo el gobierno de Allende, a pesar de que muchos de sus partidarios creen que cables de ese tipo forman parte de las campañas de acción psicológica anti-Unidad Popular y que no se trata de simples errores periodísticos.

Lo que sí se ha comprobado es que dos ex periodistas de la AP, Hal Hendris y Robert Berrellez, proveen de planes de inteligencia en el ámbito periodístico a la ITT y a la CIA, según documenta el también periodista Jack Anderson al difundir unos papeles que pasan a ser conocidos como *Los documentos secretos de la ITT*.

En ese mismo mes de octubre de 1970 la SIP se reúne en México. En la sesión inaugural, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, Tom C. Harris, dice que el triunfo de Allende es la mayor amenaza para la prensa libre del continente y que si esa libertad se pierde “las víctimas serán *El Mercurio*, uno de los diarios más grandes de América, su director, Agustín Edwards, uno de nuestros miembros más respetados y ex presidente de la SIP y los otros directores de diarios de Chile”.

No obstante, los hechos demuestran que esos malos augurios son

falsos, que la misma SIP se puede reunir al año siguiente en Santiago, que el gobierno de la Unidad Popular eleva la libertad de prensa a su máxima expresión y que, por el contrario, son importantes medios protegidos por la SIP los que la vulneran con la publicación de informaciones falsas y en un hecho que sintetiza toda su actitud: el apoyo a la campaña para preparar el clima golpista y al golpe mismo.

A fines de 1972, cuando Allende lleva ya dos años gobernando y faltando nueve meses para su derrocamiento, la oposición cuenta en Chile con 54 diarios, entre ellos *El Mercurio*, el periódico de mayor circulación y potencia empresarial del país, y 98 radios; y el gobierno sólo con 10 diarios y 36 radios. De los tres canales de televisión, uno está en manos de la oposición, el que se vanagloria de no pasar jamás una información que pueda ser favorable a Allende y los otros dos (uno de ellos de propiedad pública) en las de la Unidad Popular. En estos dos canales trabajan periodistas y productores de todos los signos políticos y se emiten programas e informaciones que apoyan o critican al gobierno, según cual sea su editor.

Una amplia libertad

Todas las opciones políticas tienen libertad para publicar periódicos y poseer emisoras de radio, incluyendo a los grupos y partidos de ultraderecha y de ultraderecha. El MIR publica regularmente su revista *Punto Final*, además de tener su radio y su periódico, al igual que el ultraderechista Patria y Libertad los suyos. Un periódico de ultraderecha, *PEC (Política, economía, cultura)* sigue publicándose, sin que modere en lo más mínimo su línea de insultos contra Allende y de abierta invocación al golpe, incluso cuando su director —perseguido por la justicia por terrorismo— se exilia en la Argentina, desde donde continúa dirigiendo la publicación. Además, las publicaciones extranjeras pueden venderse libremente, a pesar de la difícil situación que vive el país en materia de divisas.

Entretanto, las relaciones del gobierno con los medios de comunicación de masas de la oposición son conflictivas desde que Allende asume la presidencia, y en consecuencia dan pie a múltiples acciones judiciales que se suceden intermitentemente, generando una tensión creciente y por lo general con sentencias contrarias al gobierno, que éste acata, aunque procura defenderse dentro del mar-

co legal, sabiendo que la mayoría de los jueces están en su contra. El diez de septiembre de 1971 el gobierno inicia una querrela ante los tribunales contra el diario *Últimas Noticias*, por afirmar que “los días del actual gobierno están contados y pronto estallará una guerra civil en el país”, pero el periódico es sobreesido por el juez.

La agudización de la campaña desestabilizadora orquestada por la derecha con apoyo financiero y político externo, en algunas ocasiones arroja como consecuencia la implantación del estado de emergencia, una facultad constitucional del Gobierno, que incluye el nombramiento de militares como jefes de las zonas en las que rige. Una de las prerrogativas que dicho estado concede al Ejecutivo es la de establecer cadenas radiales y censurar el contenido de las informaciones.

En octubre de 1972, en pleno paro de los camioneros, una cadena radial o conexión obligatoria de todas las emisoras, que de acuerdo con las leyes vigentes dispone y controla la Oficina de Información y Radiodifusión de la Presidencia (OIR), es utilizada para transmitir los discursos de un senador oficialista y del presidente de la allendista CUT, en contra de los transportistas en huelga. El general Prats recuerda que ese mismo día lo llama el presidente del Senado, un demócrata cristiano, quien, además de transmitirle su opinión de que la cadena es ilegal, le dice que habiendo sido solicitada aquella por el Jefe del Estado de Emergencia es intolerable que sea utilizada para esas intervenciones, que califica de partidistas.

Preocupado por esa situación, Prats se entrevista con dos ministros y el Presidente a quienes traslada la queja del dirigente demócrata cristiano. Allende, una vez enterado del caso y sin que llegue a terminar la reunión, la interrumpe y en presencia de sus interlocutores llama de inmediato al presidente del Senado, al que da una explicación por lo ocurrido. A continuación dispone que el general Bravo, jefe de la zona de emergencia, se reúna con los directores de todas las radiodifusoras para que se comprometan a cumplir de manera estricta la prohibición de incitar a la población a solidarizarse con el ilegal paro de los transportistas y, una vez obtenido ese compromiso, levante la cadena obligatoria.

Dos días después, las radios de la oposición se desentienden del compromiso y, en palabras de Prats, “se lanzan en una desafiante actividad de incitación al paro, invitando a la ciudadanía a lanzarse a la calle a solidarizar con los huelguistas”. Ante las dudas del general Bravo para disponer otra vez la cadena obligatoria, bajo el argumento de que afectaría a todo el país aunque la zona de emergencia

rige sólo en Santiago, Prats propone a Allende que se declare una cadena obligatoria de carácter nacional, con censores militares en la OIR “para asegurar la ecuanimidad de su manejo”. Allende acepta, lo que es una demostración más de su voluntad de buscar soluciones en base al diálogo y la concertación.

No obstante, los medios de la oposición, liderados por *El Mercurio*, se ponen al servicio directo del golpismo.

En las vísperas del frustrado motín militar del 29 de junio de 1973, *El Mercurio* publica conceptos del tratadista Pedro Ortiz Muñoz sobre *la misión de las fuerzas armadas*, quien asegura que en el caso de que los ciudadanos que intervienen en la política nacional o en la internacional lleguen a un grado de descomposición moral que produzcan un caos interno, o un grave peligro para la soberanía del Estado, las Fuerzas Armadas no sólo tienen el derecho sino la obligación de intervenir.

El ilustre tratadista argumenta que el verdadero golpe lo constituye el trastorno político y moral que, a su entender, sufre el país, y que una sublevación de las Fuerzas Armadas no sería más que el contragolpe. Un párrafo textual del artículo dice: “Barridos los mercados del templo y con el restablecimiento inmediato de la Constitución y las leyes, deberá procederse sin demora alguna a colocar al Soberano (el pueblo) en situación de elegir de inmediato sus nuevos mandatarios”.

Al leer ese artículo, Prats se queda meditando y recuerda con sorna el manido refrán: “A buen entendedor, pocas palabras bastan”. Para un buen o mal entendedor, ese artículo significa una justificación *a priori* de un golpe de Estado.

Los medios de la oposición reciben unos sustanciales aportes económicos encubiertos del gobierno de los Estados Unidos que, según su embajador, Nathaniel Davis, “se concentraron en la financiación de los partidos de la oposición y de los medios de comunicación chilenos”.

Según Davis, la mayor parte del dinero para los partidos es para el Demócrata Cristiano, el Nacional y la fracción escindida del PR. En los medios de comunicación, añade, “el apoyo continuo a *El Mercurio* totalizaba 965.000 dólares entre noviembre de 1971 y septiembre de 1973. Esa suma era adicional a los 700.000 dólares autorizados a principios de setiembre de 1971, alcanzando el total de gastos para ayudar a *El Mercurio* aproximadamente 1,7 millones de dólares durante los tres años de Allende”.

En carta a Thomas Morgan, presidente de la Comisión de Rela-

ciones Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el representante demócrata Michael J. Harrington señala que “un memorando de proyecto actualizado de la CIA dictaminó que *El Mercurio* y otras expresiones de comunicación apoyadas por la Agencia, jugaron un papel importante, estableciendo el escenario para el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, que derrocó a Allende”. La cadena periodística encabezada por ese diario, añade, recibió dinero tanto del gobierno norteamericano como de la CIA.

Otro proyecto de la CIA, prosigue, financiaba *fichas* individuales en la prensa. En la jerga de la *Agencia* se denomina así a las personas introducidas en los medios, como una moneda o una ficha en una ranura, para hacer su labor desde adentro. Y describe así la acción de esas *fichas* de la CIA en Chile:

“Una, que producía comentarios radiofónicos regulares por red nacional, estuvo financiada por la CIA desde 1965 y continuó produciendo propaganda para la CIA durante la presidencia de Allende. Otras *fichas*, todas empleadas de *El Mercurio*, hicieron posible que la Estación generara más de un editorial por día, bajo la guía de la CIA. El acceso a *El Mercurio* tuvo un efecto multiplicador, porque sus editoriales eran leídos para todo el país a través de varios sistemas de radio nacionales. Más aún, *El Mercurio* era uno de los periódicos más influyentes en América Latina, particularmente en los círculos empresariales extranjeros.

“...El principal proyecto de propaganda de la CIA financió una variada gama de actividades de propaganda. Produjo varias revistas de circulación nacional y un amplio número de libros y estudios especiales. Elaboró material para ser colocado en la cadena de *El Mercurio* (con una circulación diaria de más de 300.000 ejemplares), para periódicos de partidos opositores, para dos semanarios, para todas las estaciones de radio controladas por partidos opositores, y para varios programas regulares de televisión en tres canales”. Lo que equivale a reconocer que la CIA financia programas incluso en los canales de propiedad pública, a través de “fichas” compradas entre el personal fijo y que de acuerdo a las normas laborales vigentes no pueden ser removidas por los máximos directivos, designados por el gobierno.

Así, el respeto de Allende a la libertad de expresión y de prensa, que éste lleva al extremo, no puede ser cuestionado si se lo analiza con un mínimo de seriedad. Sin embargo, una de las banderas de los golpistas y en especial de *El Mercurio*, el diario financiado por la CIA y la ITT, es el supuesto peligro que el gobierno allendista podría

significar para esas libertades. Ese diario aceptará después sin ningún atenuante y durante más de una década, todas las agresiones contra periodistas, clausura de medios e implantación de una rígida censura, que perpetrará la dictadura del general Pinochet.

CAPÍTULO XII

La Unidad Popular, crisis de dirección

Salvador Allende es ante todo un humanista liberal, no por sus tentativas de una doctrina económica liberal según la actual concepción del neoliberalismo, sino por su amor a la libertad y su respeto a las ideas políticas, religiosas y sociales de los demás. Asume desde joven un amplio compromiso social, sensible a los sufrimientos y a las necesidades de las personas y, por sobre todo, de las capas más humildes de la población. Es un socialista que reconoce en el marxismo “un método de análisis” pero no un dogma ni un conjunto de recetas. Es un hombre dialogante y a la vez autoritario, con un autoritarismo paternalista. Tiene una gran capacidad de trabajo y no oculta un sentido de grandeza, como observando a cada rato y de reojo el lugar que le reserva la historia.

Se lo puede definir como un socialista democrático y un reformista consecuente, pero en los años en que gobierna, en América Latina esas definiciones en muchos oídos suenan mal. Ser llamado reformista o socialdemócrata es casi un insulto para la izquierda chilena, y para la mayoría de la izquierda mundial de esa época. Sin embargo y utilizando el término en su mejor sentido, Allende es eso, un reformista, un socialista democrático, un luchador por la democracia y la igualdad que no vacila en llamarse a sí mismo visionario, porque *cree que una transformación profunda es una revolución*. Pero también se llama así porque en esa época todos los movimientos sociales se denominan revolucionarios, incluyendo a la DC, que propone una revolución en libertad, una consigna ésta lanzada también desde Washington por el gobierno demócrata. Las diferencias se definen a la hora de llenar de contenido las propuestas revolucionarias respectivas.

Durante los tres años de la Unidad Popular se producen dos fenómenos paralelos y antagónicos: Allende, sectores medios del PS y las jóvenes camadas de militantes que se expresan en los Cordones Industriales, los Comandos Comunales y las JAP maduran sus concepciones ideológicas, sin darles un contenido formal demasiado explícito, sin constituir cuerpos de doctrina, pero apuntando clara

mente a desarrollar el proceso hacia una sociedad más equitativa, democrática y libertaria, hacia una sociedad socialista. Una sociedad socialista en el buen sentido de la palabra, muy distante de lo que es el socialismo soviético y sus derivados.

Mientras, por un camino paralelo, en las cúspides de los dos principales partidos de la Unidad Popular, el Socialista y el Comunista, y en el MIR, se consolidan posiciones dogmáticas, dependientes ideológicamente de Moscú o de La Habana, de manera directa o indirecta. La dependencia comunista de Moscú dista de ser una novedad. En cambio, la relación de socialistas y miristas con La Habana es diferente y con matices, ya que una es la que se deriva del apoyo a las banderas castristas de liberación nacional y social, de la solidaridad con los oprimidos que se alzan contra la opresión y de la herencia todavía fresca del ideario emancipador del Che Guevara, y otra la que se deriva de la conexión con el aparato de inteligencia cubano, controlado a su vez por el soviético.

La dirección del PC, uno de los más fuertes, consolidados y *ortodoxos* del mundo, con una sólida implantación entre los trabajadores sindicalizados, es de las que consideran a Leonid Breznev demasiado blando y al defenestrado Nikita Krushev un reformista socialdemócrata, casi un renegado de la iglesia moscovita.

En la dirección del PS la situación no es tan homogénea como en la comunista, aunque el control lo mantiene siempre un sector procomunista, vinculado por un lado a Moscú y por el otro a La Habana, incluso a través de los respectivos aparatos y servicios de inteligencia. Ese partido sufre una doble militancia, expresada a través de algunos de sus afiliados que responden más a direcciones extrapartidarias que a las propias. Un sector de esos dobles militantes están en el Comité Central y a su vez, una parte de ellos –Guaraní Pereda, Ariel Ulloa– responden a la línea comunista y otra parte al aparato cubano –Arnoldo Camú, Ezequiel Ponce, Rolando Calderón–.

Otros afiliados, ubicados en las bases y en organismos intermedios, militan también en el MIR, aunque su influencia sobre el conjunto del PS es débil. En términos políticos, se puede decir que en ese partido predominan los simplemente socialistas que, en líneas generales, se sienten identificados con las posiciones sostenidas por Allende. Así se lo aprecia en los grandes actos, en movilizaciones masivas de los trabajadores y en la actividad en los nuevos organismos de participación, como los cordones industriales. Pero la doble militancia, a pesar de ser ampliamente minoritaria, al contar con un

apoyo externo que se expresa de mil maneras, incluyendo la económica, gana poder en la sombra a través del control de puestos en el aparato.

Dialéctica de una derrota

El Secretario General del PS, Carlos Altamirano, cubre insuficiencia ideológica y organizativa con una verborrea revolucionaria, coquetea con todas las tendencias internas representadas en el Comité Central, con los regionales críticos y con los dirigentes de los Cordones Industriales, incluso con el MIR, pero siempre termina en lo fundamental prisionero del aparato prosoviético de su Comité Central. En sus declaraciones políticas públicas, como lo hace la mayoría de ese comité, asume gran parte de las reclamaciones de las bases y lanza mensajes revolucionarios. En la práctica, deja el control de la dirección al aparato, controlado por los “dobles militantes”.

Esa dependencia ideológica y práctica del comunismo moscovita se verifica durante todo el proceso, aunque la fraseología revolucionaria pareciera indicar una diferenciación con el reformismo comunista. Pero la dependencia se tornará evidente después del golpe, cuando Altamirano se refugiará con su Comité Central en La Habana primero y en Berlín Oriental después, y escribirá el libro *Dialéctica de una derrota*. Ese libro, escrito en 1977, en la tranquilidad del exilio, sin tener que trabajar, sin problemas económicos y con tiempo suficiente para analizar experiencias y contrastar datos, es ilustrativo de su insuficiencia ideológica y de la manera en que se pliega a la influencia comunista.

En lo que pretende ser una visión hacia el futuro y que ilustra suficientemente su actuación pasada, Altamirano escribe en la más pura ortodoxia soviética de esa época que “la etapa histórica actual se caracteriza por el tránsito del capitalismo al socialismo en escala mundial... la historia comienza a escribirse en socialista... el avance del campo socialista no sólo se percibe en la esfera económica, comienza también a consagrarse su superioridad militar. Aún más, hoy cuestiona la preeminencia capitalista en el plano científico y tecnológico. El curso de la historia universal – en forma cada vez más notoria– es determinado, conjunta y alternativamente, por el desarrollo ininterrumpido de la comunidad socialista...”.

Es interesante señalar que Altamirano escribe esas palabras des

pués de vivir cuatro años en el campo soviético, en La Habana y Berlín Oriental. No puede, en consecuencia, alegar falta de información ni que el muro de Berlín le impide ver lo que ocurre del lado oriental, ni ignorar el criterio sectario y manipulador con el que la Unión Soviética y sus aliados prestan ayuda a un sector del exilio chileno. Para Altamirano el socialismo soviético es un campo dentro del cual se ubica y al que canta loas, sin que le merezcan una sola mención las aberraciones sociales de la URSS y sus satélites, las cárceles, los campos de concentración y la supresión de las libertades públicas, hechos que convierten a ese régimen en una caricatura del sistema en el que pensaron los precursores de los ideales socialistas.

Altamirano explica el devenir como “el fenómeno histórico, dialécticamente interrelacionado con el fortalecimiento del campo socialista”, una fraseología propia de los dirigentes del aparato del PC ruso, a la vez que defiende la teoría soviética de la coexistencia pacífica, la que, explica, no significará el congelamiento del cambio social en un país determinado. En realidad, la aplicación de esa teoría soviética incluye un intercambio de zonas de influencia con los Estados Unidos y el abandono o congelamiento de procesos de liberación y cambio en varios países.

Pero Altamirano rechaza las aprehensiones izquierdistas sobre una distribución del mundo en esferas de influencia, porque aquellas “han sido irrefutablemente desvirtuadas por la actitud solidaria y combatiente de la Unión Soviética en Cuba, Vietnam y Angola, y constituyen el mejor testimonio histórico de una conducta antiimperialista resuelta y militante”.

Para el Secretario General del PS, la división del movimiento comunista mundial, y en concreto el conflicto entre la Unión Soviética y China es un obstáculo para la liberación de los pueblos, culpa de ello a los chinos, toma partido por los soviéticos y expresa su esperanza de que “una nueva dirección restablecerá el verdadero pensamiento revolucionario y marxista y los principios del internacionalismo proletario” en ese país asiático. De su afirmación se deduce que “el verdadero pensamiento revolucionario y marxista y los principios del internacionalismo proletario” son los venerados en las capillas del Kremlin.

Esa definición ideológica que Altamirano expresará en 1977 y que pretenderá regir los pasos del PS de Chile bajo la dictadura, explica muchas de las cosas que ocurren durante el gobierno de Allende cuando, en los momentos decisivos, la dirección del PS clau-

dica ante la monolítica actitud del Comité Central del PC. Así puede entenderse que en *Dialéctica de una derrota*, después de considerar que una declaración de los partidos comunistas reunidos en La Habana, en junio de 1975, constituye “una excelente base de discusión para empezar a soldar el compromiso básico de todas las fuerzas progresistas, democráticas y antiimperialistas del continente” americano, diga que el eje central de la tupida malla ideológica tendida por el imperialismo continúa siendo el anticomunismo, que es, afirma Altamirano, “en esencia, un producto prefabricado y manipulado por el poderío ideológico y publicitario de Estados Unidos”.

Es verdad que bajo la bandera del anticomunismo los gobiernos de los Estados Unidos y sus aliados nativos encubren sus propios objetivos y que tildan de comunistas a todos aquellos movimientos, partidos, intelectuales y gobiernos que en América Latina reivindican la liberación nacional y social de sus pueblos, sea de manera tímida o vigorosa, pacífica o violenta, reformista o revolucionaria. Pero también es verdad que hasta la disolución de la URSS, los partidos comunistas son dirigidos desde Moscú y que su estrategia general está subordinada a la del Kremlin. Chile sufre esa realidad, como los demás países de América Latina, y en la historia de los últimos setenta años asiste a continuos cambios de táctica del PC, cambios que no tienen mayor relación con su situación interna y obedecen siempre a los vaivenes moscovitas. Unas veces alentando huelgas insurreccionales, otras propugnando frentes con la derecha, sin excluir aventuras armadas, aunque éstas sean contraproducentes para amplios movimientos ciudadanos que surgen en los últimos años de la dictadura.

En el país vecino, la Argentina, se registró a mediados de los años cuarenta uno de los más feroces alineamientos del PC con la derecha y la ultraderecha, al extremo de unir contra el movimiento peronista a los comunistas, radicales, socialistas y conservadores, apoyados públicamente por el embajador y magnate norteamericano Spruille Braden, lo que dio origen al eslogan peronista de “Braden o Perón”. Tan derechista y autinacional fue la posición de los partidos Socialista y Comunista que un importante sector de ambos los abandonó y se integró en el peronismo.

Las dos revoluciones

Otro ejemplo mayor de esa subordinación a Moscú la ofrece el

PC de la Argentina años después cuando, para salvaguardar el comercio exterior soviético con ese país, justifica la dictadura de Videla, responsable de la desaparición de 30.000 personas, entre ellas muchos militantes comunistas. El gobierno cubano también, sin importarle prendas y por motivos similares, mantiene permanentes y cordiales relaciones diplomáticas y comerciales con esa dictadura.

Si vale aquello de que a confesión de parte, relevo de pruebas, es bueno citar palabras finales de ese libro de Altamirano: “Hemos enfatizado en muchas oportunidades, siempre con íntima complacencia, el singular entendimiento logrado en Chile por los partidos Socialista y Comunista... salvo brotes esporádicos y no significativos, nuestro partido actuó depurado de los resabios anticomunistas y antisoviéticos... la aptitud unitaria del socialismo chileno encontró un correlato adecuado en el Partido Comunista, sin el cual, esta unidad no hubiera sido posible: su solidez orgánica, su coherencia ideológica, y su profundo enraizamiento en las tradiciones de lucha del proletariado”.

Ese PC, pone como ejemplo Altamirano, “ha contado con numerosos dirigentes de excepcionales condiciones, en especial Luis Corvalán”. Ese *dirigente excepcional* es durante décadas el principal responsable de la política soviética en Chile. Detenido a los pocos días del golpe, pasa cuatro años preso y es canjeado por un disidente soviético, en una operación concertada por los gobiernos de Breznev, el entonces presidente soviético y Pinochet y que en su ejecución es un calco de otras operaciones, propias de canje de espías.

Quizás por ello, en 1977, y a pesar de toda el agua que ha pasado bajo los puentes, Altamirano no encuentra mejor mentor que George Dimitrov, un dirigente del aparato de la Tercera Internacional y estalinista de pura cepa, según consigna en su libro: “a pesar del tiempo transcurrido y la enorme disimilitud del contexto histórico, recobran plena vigencia, a nuestro juicio, las formulaciones teóricas planteadas por Dimitrov en los años treinta” respecto del Frente Popular. En los años treinta el comunismo transita por su más feroz época estalinista, plagada de purgas internas, torturas, cárceles, confinamientos y asesinatos de sus propios militantes y dirigentes. El estalinismo, en cuyo aparato internacional Dimitrov es una pieza clave, oscila entre etapas en las que considera a los socialistas de la Segunda Internacional como los peores enemigos del movimiento obrero y etapas en la que preconiza la necesidad de aliarse con ellos en un Frente Popular. Un frente en el que los comunistas se reservan siempre el papel de vanguardia.

Comunistas y socialistas sostienen, en el Chile de 1970, dos fórmulas para la revolución chilena: los primeros entienden que corresponde realizar una *revolución democrático burguesa* y los segundos una *socialista*, sin que para estos últimos el término revolución implique el recurso a la violencia armada, a menos que sea para defenderse de un golpe de Estado o de acciones armadas de la derecha.

En la terminología marxista se entiende por revolución democrático burguesa la transformación de la sociedad feudal o precapitalista en una sociedad capitalista. El modelo clásico de ese proceso es la revolución francesa de 1789, que implica la conquista de las libertades públicas, el sufragio universal, la abolición de las leyes de trabajo esclavistas o feudales y, por sobre todo, la reforma agraria y la constitución de un fuerte mercado interno, con el mantenimiento pleno de la propiedad privada sobre los medios de producción, incluida la tierra. Para el PC y otros sostenedores de esa tesis, una vez realizada en Chile y en otros países del Tercer Mundo la revolución democrático burguesa, se abriría un espacio histórico de tiempo, en el que el desarrollo económico fortalecería numérica y cualitativamente al proletariado. Recién después, al término de ese proceso, el proletariado estaría en condiciones de plantearse el paso a una etapa superior.

Esa etapa superior, o revolución socialista, se caracterizaría por la estatización de los medios de producción y de cambio, la abolición de la propiedad privada de las empresas y centros de producción, y su socialización. El poder político pasaría a las manos del proletariado organizado, que impondría su dictadura de clase. El modelo clásico es la revolución rusa de octubre de 1917.

Los socialistas chilenos, casi sin distinción de tendencias, sostienen en la década del sesenta y del setenta, que las dos etapas: la democrático burguesa y la socialista, se unirían en una sola, ya que sería imposible lograr la liberación nacional y social (objetivo de la revolución democrático-burguesa) sin expropiar a los grandes empresarios, transnacionales y terratenientes. Esa expropiación, añaden, en un país dependiente, donde la propiedad está muy concentrada, abriría rápidamente el paso a la revolución socialista. La evolución de la revolución cubana, que se inició como democrática y antiimperialista y en poco tiempo se transformó en socialista, es su principal referencia histórica y práctica, al margen de que no propugnen el uso de la violencia ni apoyen las restricciones castristas a la libertad de expresión y a la democracia.

En el proceso de la Unidad Popular, los comunistas se atienen a

su concepción ideológica de la revolución por etapas: con mayor fuerza en sus organismos de base e intermedios y con una inconsistencia notoria en su dirección nacional, caracterizada por la gran distancia entre sus dichos y sus hechos. La posición del PC implica una paralización de las reformas económicas y sociales y la búsqueda de la alianza con la DC a cualquier precio, incluso cediendo ante las posiciones del sector derechista de ese partido. La del PS, por el contrario, induce a profundizar esas reformas y a limitar el tipo de los acuerdos con la DC.

Una presión renovadora

Durante el gobierno de Allende, en el seno de la Unidad Popular hay dos partidos dominantes, el Socialista y el Comunista, con mayor incidencia del primero en la base y en la respuesta a las iniciativas populares, pero con más control *de aparato* del segundo sobre la CUT. En los organismos públicos y empresas del área social se aplica el *cuoteo*, sistema por el cual se reparten los cargos proporcionalmente entre los partidos integrantes de la coalición gobernante. Ese sistema de distribución del poder, ideado para asegurar el pluralismo, en muchos casos se convierte en un freno para la producción, pues las luchas internas entre cargos de partidos rivales absorben gran parte de las energías.

En la dirección de la Unidad Popular las fuerzas dominantes son tres: el Partido Socialista, el Comunista y Allende como personalidad más allá de su pertenencia al primer partido, con los demás miembros de la coalición subordinados a éstos. En el funcionamiento propiamente dicho de la dirección de la Unidad Popular, el PC impone su línea, pero en la conducción del gobierno es siempre Allende quien decide. Se puede decir, sin temor a equivocarse, que todas las grandes decisiones, erróneas o acertadas, son dispuestas por el Presidente.

Allende no comparte la tesis ideológica comunista sobre la revolución democrático burguesa, sino que sostiene la posibilidad de una transición pacífica hacia el socialismo, sin detenerse en etapas intermedias. Aunque también sin propugnar un enfrentamiento armado e, incluso, sin considerarlo inevitable en el avance hacia el socialismo, en lo que se diferencia de la dirección de su partido que sí dice que lo cree inevitable. En la concepción de Allende el socialismo es un régimen en el que las grandes empresas, la banca y los

servicios básicos pertenecen al área de propiedad social, pero dejando amplio campo para la iniciativa privada en la pequeña y mediana empresa. Y, en abierta contradicción con las posiciones comunistas, manteniendo una absoluta libertad de expresión, de prensa y de reunión, y con un sistema plural de partidos políticos.

Allende mantiene una relación cotidiana con las direcciones de los partidos coaligados, pero en unos casos la demora de los partidos o de la Unidad Popular en decidir sobre cuestiones concretas, y en otros la falta de acuerdo sobre aspectos específicos, obligan al Presidente a adoptar decisiones sin esperar a más. Así ocurre en enero de 1973, cuando la dirección del PS le reclama por no haber sido consultada con respecto a un proyecto de ley sobre el área social de la economía. Allende responde que el proyecto fue sometido a la consideración de todas las colectividades integradas en la Unidad Popular, y que al demorarse la respuesta él decidió pronto, "porque hay resoluciones que no pueden dejarse indefinidamente en suspenso".

Otro ejemplo se produce en relación al diálogo con el PDC, en las semanas previas al golpe. El PS toma una posición ambigua, de no oponerse al diálogo pero también de no participar en las conversaciones, algo que sectores internos de esa formación y en especial el Comité Regional Santiago Centro definen como "NI", o sea una síntesis contradictoria de Sí y No, que se traduce en una permanente indecisión. Es Allende quien debe decidir por sí mismo, y lo hace invitando a los demócratacristianos a dialogar con él, en búsqueda de soluciones consensuadas.

Las profundas transformaciones sociales y, en especial, la incorporación de centenares de miles de personas al proceso de cambios, se reflejan en forma de crisis interna en los partidos y sobre todo en el Socialista, el más abierto de los que integran la coalición gobernante y el que más ha crecido en número de militantes, influencia y votos. Una tradición asamblearia y de discusión entre las tendencias y grupos que existen en su seno, lo convierte en campo fértil para que los fenómenos sociales que eclosionan durante el gobierno de la Unidad Popular encuentren eco en formulaciones políticas e ideológicas.

Un próximo congreso, que de no haber mediado el golpe debía realizarse a principios de 1974, hubiera dado nacimiento a una nueva dirección del PS, más representativa y a tono con los tiempos que se viven, tal como se anunciaba en congresos locales realizados en los regionales más fuertes. Una dirección que podría haberse con-

vertido en un apoyo más firme para Allende y, a la vez, en la garantía para avanzar con paso firme en las grandes transformaciones sociales, abriendo el camino para un sistema socialista, democrático, libre y participativo.

CAPÍTULO XIII

El auge electoral de la Unidad Popular, un aguijón para los golpistas

El triunfo de la Unidad Popular en las elecciones parlamentarias del 4 marzo de 1973, obtenido a pesar del complot nacional e internacional y de la desestabilización de la economía provocada por el paro de octubre de 1972, decide al núcleo central de la oposición derechista, aliada a la ITT y protegida por el gobierno norteamericano, a apurarse por el camino del golpe. El jefe del PN, Sergio Onofre Jarpa, había fijado como su objetivo en esas elecciones el aumento del poder parlamentario de la oposición, de manera de contar con los dos tercios del Senado, lo que le permitiría enjuiciar y destituir legalmente a Allende. Para lograrlo, entre el PN y el PDC deberían lograr entre el 60 y el 70 por ciento de los votos, lo que a su vez debería implicar bastante menos del 30 por ciento para la Unidad Popular. Si se toma en cuenta que en décadas anteriores los partidos gobernantes siempre perdieron votos, por un desgaste lógico de quien está en el poder y que Allende ganó las elecciones presidenciales con el 36 por ciento de los votos, el objetivo de la derecha no aparece como desproporcionado. El sistema electoral chileno, al elegirse los senadores por circunscripciones, permite que con el 60 por ciento de los votos, o algo más según los casos, se puedan obtener los dos tercios de las bancas del Senado.

Sin embargo y contra todo pronóstico, la opositora Confederación de la Democracia (CODE), en la que se unifican las listas de la DC y del PN, obtiene sólo el 54,7 por ciento de los votos. El partido federado de la Unidad Popular sube hasta el 43,4 por ciento, más de siete puntos por encima de las presidenciales en las que había sido electo Allende, en 1970.

Aunque la Unidad Popular puede argumentar que ningún gobierno anterior ha aumentado sus votos mientras estaba en el gobierno, lo cierto es que el resultado deja las soluciones constitucionales en un callejón sin salida para ambos bandos pero en especial para la oposición. El gobierno tiene más diputados y senadores que antes, pero sin llegar a lograr una mayoría suficiente que le permita

la aprobación de leyes indispensables para cumplir su programa y dejar de usar el pesado, tortuoso, lento y desgastante camino de los decretos de insistencia. Cada vez que la oposición rechaza un proyecto gubernamental, el Poder Ejecutivo debe insistir con un decreto (decreto de insistencia) y en caso de un nuevo rechazo, debe apelar al Tribunal Constitucional o a la Contraloría General de la República. Estos organismos unas veces le dan la razón y otras no.

Con los resultados electorales apuntados, la oposición, a su vez, se queda sin la posibilidad de derrocar legalmente a Allende.

Como un mal augurio de lo que se avecina, el día posterior a las elecciones la policía detiene a cinco derechistas con 1.800 cartuchos de dinamita y 3.000 fulminantes. Dos semanas después representantes de la ITT admiten ante una comisión investigadora del Congreso de los Estados Unidos que esa empresa ha destinado un millón de dólares para impedir que Allende asuma la presidencia. Ese mismo mes los ministros militares salen del Gabinete, al haberse cumplido el objetivo de asegurar unas elecciones normales.

En sus memorias, el general Prats fija el miércoles 11 de abril como el inicio de las deliberaciones abiertas sobre el proceso político en las jerarquías más altas de las Fuerzas Armadas, con ocasión de una conferencia que el ministro de Educación, Jorge Tapia, pronuncia ante 60 oficiales para exponer la reforma educativa en marcha. Tapia explica que la reforma sigue los lineamientos de la Unesco e informa de que el gobierno, frente a las críticas surgidas, ha decidido someter a debate nacional su aplicación, postergándola hasta que se pronuncie el Consejo Nacional de Educación, que tiene una amplia representatividad ciudadana y doctrinaria.

Al terminar Tapia su detallada explicación, toma la palabra uno de los asistentes, el almirante Huerta, quien critica duramente el proyecto de reforma, y asevera que ganando la conciencia de los jóvenes el gobierno quiere imponer un régimen marxista, concorde con la ideología del Presidente de la República, según, dice el marino, en un folleto distribuido por un departamento del Ministerio de Educación. Su intervención es recibida con fuertes aplausos.

La respuesta de Tapia puntualiza que el folleto citado es desautorizado por el Gobierno y que está lejos de corresponder a los fines de la reforma, que se caracteriza por su concepción pedagógica moderna y pluralista, sin intenciones ideológicas específicas.

“Como si el ministro no hubiese hablado en castellano”, comenta Prats, se suceden varias intervenciones de otros oficiales, quienes insisten en las finalidades marxistas de la reforma, que rechazan como

padres de familia, califican al gobierno de marxista, y ante cada discurso sube el estruendo de los aplausos, en tanto que las aclaraciones pacientes y mesuradas de Tapia son acogidas en silencio. La reunión termina con un ministro de Defensa, José Tóhá, desolado y un Prats advertido de que la deliberación ha comenzado en el seno de las Fuerzas Armadas.

El jueves 19 de abril de 1973 se inicia una huelga de los trabajadores, en demanda de mayores salarios, en la mina de cobre El Teniente, ubicada 80 kilómetros al sur de Santiago y cuya dirección sindical es de mayoría demócrata cristiana. Dura 74 días y se convierte en uno de los elementos más desestabilizadores de la situación.

El primero de mayo, al pronunciar un discurso ante los manifestantes que conmemoran el día de los trabajadores, Allende denuncia que se está incrementando la escalada sediciosa. Un ejemplo de ese aumento se tiene al día siguiente, al aterrizar de manera forzosa una avioneta en Mendoza, Argentina, en la que viaja Roberto Thieme. Este, jefe de los grupos de acción del movimiento fascista Patria y Libertad, había sido dado por desaparecido meses atrás, al “perdersé” la avioneta en la que despegó del aeropuerto y que en vez de dirigirse por el rumbo declarado lo llevó al otro lado de la cordillera.

En esa oportunidad, Patria y Libertad acusa a la Unidad Popular de haber derribado el aparato y los medios de comunicación opositores, en especial *El Mercurio*, montan una campaña basada en esas acusaciones. Su aterrizaje en Mendoza demuestra que la *desaparición* anterior es una acción suya para poder conspirar con más tranquilidad. Desde la clandestinidad Thieme dirige los grupos de acción de Patria y Libertad, que colocan bombas y asaltan locales políticos, a la vez que se adueñan de las calles de las principales ciudades y sobre todo de Santiago. En los últimos meses del gobierno de Allende se produce un promedio de un atentado por hora, más de veinte cada día.

Los socialistas ganan la calle

Durante abril de 1973 prácticamente no pasa día sin que grupos uniformados, con pantalones y chaquetas de cuero negro, desfilen en formación militar, con sus banderas desplegadas al viento y sus puños con defensas de hierro y golpeando a cualquiera que osa contradecirlos, o que replica a sus gritos contra el gobierno.

Así se incuba uno de los hechos más trascendentes de esa época,

ilustrativo entre otras cosas de la pusilanimidad de la máxima dirección socialista. En los últimos días de abril el secretario de organización del PS, Ariel Ulloa, convoca a los dirigentes de los comités regionales de ese partido en Santiago: Sur, Centro y Cordillera y les encomienda que realicen actos y manifestaciones en el centro de la ciudad, para ganar la calle a la derecha.

En una reunión aparte con los representantes del Regional Centro, el más destacado por su número de afiliados, poder organizativo y fuerza política, y que venía planteando la necesidad de cambiar de métodos y dirigentes, Ulloa les encomienda que desplieguen a sus militantes por el centro de la ciudad para impedir las manifestaciones (ilegales) y los prepotentes desmanes de Patria y Libertad, que la policía no atina a frenar. “Cuando aparezcan esos gallos haciendo de las suyas, no deben quedar con un solo hueso sano”, es su orden.

Uno de sus interlocutores le señala que si actúan con palos, linchacos y cachiporras, los fascistas responderían con armas de fuego. “En ese caso, lleven algo para defenderse”. “¿Algo, quiere decir armas de fuego?”, vuelven a preguntarle. “Sí, pues, pero no disparen primero, llévenlas sólo para defenderse si ellos empiezan a disparar”. La preocupación de los socialistas tiene dos vertientes: por un lado no originar ningún hecho que pueda prestarse a una provocación que desestabilice al gobierno, y por otro impedir que siga avanzando la desestabilización creada por las bandas derechistas.

Dos o tres días después de esa conversación, el Regional Centro comienza a desplegar a sus militantes por la zona indicada, en tanto que los Regionales Sur y Cordillera organizan manifestaciones. La actividad del Regional Centro se organiza en un local de la calle Catedral, en el que desde meses antes sus militantes están recibiendo instrucción de defensa personal, que no incluye el uso de armas de fuego. En lo esencial aprenden una mezcla de lances de judo y karate, la pelea en parejas o grupos, marchas y métodos de comunicación en aglomeraciones, para dispersarse o agruparse según indiquen las circunstancias. Esos conocimientos se han vuelto indispensables desde que los comandos de Patria y Libertad y del Comando Rolando Matus, del PN, se han habituado a atacar a los manifestantes de otros partidos, sin importar su sexo, edad, profesión o nivel de militancia política. El criterio imperante en la Unidad Popular, contrario al uso de la fuerza, se transforma de a poco en el de utilizarla para defender sus locales o responder a las agresiones.

El periódico del Regional Santiago Centro, *La Aurora de Chile*, en su nota de portada el tres de mayo proclama: “Basta ya de tolerar sus paseos (los de la ultraderecha) con cascos y banderas por el centro de Santiago. La inmundada araña negra no deberá ensuciar nunca más la vista del pueblo. A las arañas hay que tratarlas como a repugnantes seres venenosos y aplastarlas con el tacón del zapato”.

Esa semana y siempre respondiendo a las directivas del Comité Central, el Regional Centro saca a la calle cada día entre 300 y 400 de sus militantes, provistos de palos, cachiporras y linchacos, organizados en escuadras, y con pequeños grupos de protección armados con revólveres y pistolas. Los integrantes de las escuadras, entre ellos un miembro del Comité Central pero que no forma parte de su mayoría, antes de salir reciben sus instrucciones en el local de la calle Catedral. Allí, un integrante de la Comisión Política del Comité Regional les explica el objetivo, *ganar la calle a los fascistas*, y las condiciones bajo las que deben actuar: ninguno debe portar armas blancas o de fuego y ninguno puede tomar iniciativas, excepto los jefes de las escuadras, cada una de ellas integrada por 90 personas, para evitar derivaciones indeseadas. En el caso de oír un disparo de arma de fuego deberán hacer cuerpo a tierra de inmediato. “Recuerden, compañeros, que en ningún caso el primer disparo será de un socialista, pero que si disparan contra nosotros de inmediato responderán nuestros grupos de protección. Por eso, al primer disparo todos al suelo”, es la clara y precisa instrucción reiterada por la Comisión Política del Regional Santiago Centro.

El dos y tres de mayo el despliegue se realiza sin incidentes. Pero el cuatro, sobre las seis de la tarde, los responsables de los grupos socialistas movilizados reciben el aviso de que por la céntrica calle Huérfanos han pasado los fascistas, marchando en formación militar, con sus característicos uniformes de cuero, insignias y banderas, gritando contra el gobierno e insultando a quienes identifican como pertenecientes o simpatizantes de algún partido de la Unidad Popular.

A esa hora, a lo largo de esa calle están destacadas tres escuadras completas del Regional Centro, que cubren tres cuadras (unos 300 metros), más una escuadrilla de reserva de 30 personas en el Pasaje Matte, que desemboca sobre la calle Huérfanos, donde está ubicado el puesto de mando.

En cada esquina, además, está apostado un grupo de protección, de ocho personas cada uno, con armas de fuego y que tiene la orden terminante de no ser el primero en disparar en ningún caso, y de hacerlo solamente si los fascistas usan sus armas, que éstos no se

recatan en exhibir en público. Los jefes de las escuadras tienen la indicación de actuar rápida y sincronizadamente de manera de dispersar a los fascistas sin darles tiempo a sacar más armas de fuego, en una actuación lo más *limpia* posible, que en el peor de los casos pudiese derivar en algún hueso roto pero no en el uso indiscriminado de armas de fuego y mucho menos en muertes.

La Comisión Política del Regional Centro es consciente de que no debe hacer nada que dé pie a una provocación o que pueda tomarse como tal. A las seis y media de ese cuatro de mayo los comandos de Patria y Libertad vuelven a desfilar por el centro de la calle Huérfanos, encabezados por el Presidente de la juventud de ese movimiento, Ernesto Müller, y el jefe de sus grupos de acción, Mario Aguilar, sin darse cuenta de que por allí están apostados los socialistas.

Se repiten los incidentes, con gritos, empujones y algunos golpes contra partidarios de la Unidad Popular, entre ellos uno conocido como “el Negro”, un militante socialista a quien reconocen, insultan y no alcanzan a golpear porque se retira rápidamente del lugar. En el revuelo que se produce, los jefes de las escuadras socialistas pierden contacto con su puesto de mando y no alcanzan a actuar. Los de Patria y Libertad siguen su marcha pasando por entre medio de los socialistas, doblan por Ahumada y se dirigen en dirección a la Alameda. En el puesto de mando socialista se piensa que, como en días anteriores, aquéllos darían una vuelta completa por la calle Agustinas y volverían a aparecer, desde la calle Bandera, como efectivamente ocurre.

Son poco más de las siete menos veinte cuando los ven llegar, ruidosos, violentos y desafiantes. Los ultraderechistas dejan la cuadra donde está desplegada la primera escuadra, superan los dos tercios de la segunda y se acercan a la confluencia de Huérfanos y Ahumada, donde los socialistas tienen planeado tomarlos entre las escuadras segunda y tercera para neutralizarlos, sin darles tiempo a reaccionar con armas de fuego y cumplir con las directivas en tal sentido, cuando ocurre algo que desmorona esa previsión. Un partidario de la Unidad Popular, con varias copas de más en el cuerpo y que no participa en la movilización socialista, increpa de viva voz a Müller, lo llama fascista y grita “Viva Allende”. Recibe como respuesta una lluvia de golpes. Dos transeuntes, ajenos a los dos grupos políticos en cuestión, salen en defensa del agredido. En un santiamén se generaliza la gresca, a escasos diez metros de donde los socialistas han marcado el punto de encuentro y control de los ultras.

El jefe de la segunda escuadra socialista, al notar el revuelo cree que la tercera ya está en actividad y lanza su gente a la acción. Los fascistas, en inferioridad numérica y sorprendidos, comienzan a caer por el suelo, algunos con los huesos rotos, en cuestión de segundos. Sin pensarlo dos veces, los ultraderechistas Müller y Aguilar desenfundan sus armas de fuego. El primero dispara un tiro al aire y salta por encima de una *locomotora* o pequeño carro de venta de maníes, con la intención de parapetarse en la esquina. Tocarlo el suelo del otro lado de la manicera y caer acribillado a balazos es casi un mismo acto, con siete impactos en el cuerpo. Otros dos miembros de Patria y Libertad, Kunt Haun Le-Roy, de 16 años, y Roberto Zúñiga Tapia, resultan heridos de bala, el primero en el muslo y el segundo en el pecho. Los integrantes de las escuadras socialistas, al escuchar el primer disparo, de Müller, se lanzan cuerpo a tierra de inmediato, lo que impide que los dos disparos que alcanza a hacer Aguilar antes de la réplica socialista hieran a ninguno de ellos. Aguilar cae mortalmente herido en la entrada de Huérfanos 1022, víctima de la buena puntería de un integrante de los grupos de protección.

Los socialistas quitan a los militantes de Patria y Libertad todas las armas, manoplas, cachiporras, linchacos, pistolas y revólveres y se retiran. El puesto de mando del Regional Centro, después de ordenar a las escuadras que se retiren –los grupos de protección lo hacen inmediatamente después de terminar su intervención–, indica lo mismo a la escuadra de reserva que se encontraba dentro del pasaje. Cuando el jefe del puesto se dirige otra vez hacia la salida que el pasaje tiene hacia la calle Huérfanos, escucha “mar...” y con estupor comprueba que la reserva, integrada por treinta hombres y mujeres, se retira en perfecta formación y marcando el paso, en medio de un mar de personas corriendo y gritando, con el ruido de fondo de las persianas de los negocios que sus dueños cierran apresuradamente.

Mientras, por Ahumada y desde la Plaza de Armas llega otra manifestación socialista con banderas desplegadas, organizada por el Regional Cordillera y sin ninguna conexión con el enfrentamiento. Con sus gritos favorables al gobierno, “avanzar sin transar” y otros similares, cruzan la esquina y siguen hacia la Alameda. Recién esa noche algunos, y la mayoría al día siguiente al leer los diarios, se enteran de lo que ha ocurrido allí.

Anochece ya cuando los militantes de Patria y Libertad heridos son llevados al hospital, se recoge el cuerpo de Aguilar y los socialistas comprueban que han salido del lance sin siquiera un herido.

Sobre las 20:00 el puesto de mando informa de lo ocurrido a la Comisión Política del Regional Santiago Centro, en su local de la calle San Martín, lindero al del Comité Central. Ante la trascendencia de los hechos, los tres máximos responsables de la Comisión Política se trasladan al Comité Central para hablar con Ulloa, con la intención de transmitirle la información que acaban de recibir. Uno de ellos comienza a hablar y sólo alcanza a decir: “Queremos contarte con detalles la información que hemos recibido de nuestros militantes respecto a la balacera de Huérfanos y Ahumada” cuando el Secretario de Organización lo interrumpe y afirma: “Ya tenemos la información completa. Ha sido un enfrentamiento entre bandas ultraderechistas. Se balearon entre ellos”. Los del Regional insisten: “Pero, nosotros tenemos otra información...”.

Ulloa corta la réplica, aparentando seguridad, sin dar lugar a explicaciones y dando por terminada la reunión: “La del Comité Central es la buena, pues además de nuestro servicio de inteligencia tenemos informes de los pacos (carabineros)”. Esa versión es mantenida públicamente por el Comité Central y es también la que sostiene el Ministerio del Interior.

La incoherente actitud del Comité Central socialista, que primero impulsa los hechos y luego los niega, causa desconcierto en sus bases, pues es imposible mantener esa versión, ya que son entre 800 y 900 los militantes socialistas que participan esa semana en el despliegue por las calles céntricas de Santiago, después de recibir directivas en el local de la calle Catedral. Las protestas de la militancia llegan directamente al Regional desde las diez comunas o distritos que lo integran. Su tenor es el siguiente: “Nos llamaron a luchar para ganarle la calle a los fascistas, vamos a hacerlo sin armas de fuego y confiados en los grupos de protección, cumplimos nuestra tarea, ganamos la calle... y ahora resulta que para el Comité Central somos un grupo de ultraderecha”.

La Comisión Política del Regional Centro disiente de la posición asumida por el Central y le hace presente que una política socialista debe ser veraz, y que, de mantener la versión que le imponen, cundirá el desánimo en los militantes y la acción realizada perdería su objetivo de disuadir a los derechistas de continuar con sus disturbios callejeros y con las agresiones. Además, las bases del regional presionan para que se asuma públicamente la autoría del hecho.

Pero a la dirección del regional, inclinada mayoritariamente a decir la verdad, se le presenta una disyuntiva de difícil solución: romper la disciplina impuesta por el Comité Central o acatarla, ca-

llarse y enfrentar a sus militantes. Opta por una salida intermedia: explicar detalladamente todo lo ocurrido y responsabilizarse por ello, en reuniones a puertas cerradas de las asambleas comunales y en un pleno del Comité Regional. Después en su semanario, *La Aurora de Chile* del martes 8 de mayo de 1973, titula con grandes caracteres: “Huérfanos y Ahumada: PARA QUE SE SEPA”. En el artículo de su primera página recoge la versión del Comité Central, explica que nada ganaría la izquierda matando premeditadamente a un ultraderechista.

Así, tras subrayar que los socialistas no creen en el asesinato político como método de acción, aclara que “no estamos dispuestos a mirar cruzados de brazos que nos quemem los locales. No estamos dispuestos a mirar cruzados de brazos que nos quemem los medios de locomoción, que nos arrojen piedras, que nos insulten en las calles o que nos agredan”. Finalmente vuelve a afirmar: “no queremos la violencia, ansiamos vivir en paz, pero tenemos dignidad y no sufriremos pasivamente la violencia fascista”. A buen entendedor pocas palabras bastan, habrán pensado los responsables del Regional Santiago Centro al publicar ese artículo.

La actitud de Secretario de Organización del PS, Ariel Ulloa, es refrendada por el Secretario General, Carlos Altamirano, y se mantiene inalterable, como una prueba más de una doble política que enciende el verbo e inflama los discursos, pero que luego queda sin valor para enfrentar la realidad de los hechos y aplican la política del avestruz, escondiendo la cabeza debajo del ala, cuando sus bases y dirigentes intermedios se toman en serio lo que oyen y actúan en consecuencia. Los dirigentes del Regional no reciben ni una sola instrucción concreta después de esos hechos, salvo que repitan la versión oficial del Comité Central. De éste no llega ni una pregunta o preocupación por la suerte de quienes, siguiendo sus órdenes, han participado en el enfrentamiento.

La reacción de Allende es distinta. A los dos días de ocurridos los hechos recibe un informe de la policía, elaborado a partir de la información que recoge un oficial de inteligencia del Cuerpo de Carabineros. Éste reconoce como socialistas de Santiago Centro a varios de los desplegados en Huérfanos y Ahumada minutos antes del tiroteo, aunque al producirse el enfrentamiento se encontraba a unos 50 metros del lugar. El Presidente, indignado, advierte a los máximos dirigentes de la Unidad Popular y en especial a los de su partido, que esos hechos no deben repetirse, que el cuidado del orden público debe estar en manos de la policía y que para devolver

la paz a las calles está decidido a decretar el estado de emergencia en Santiago.

Al mismo tiempo envía a su secretario particular, el fiel Osvaldo Puccio, a entrevistarse con los responsables del Regional Centro, a quienes señala que el Presidente tiene una completa información acerca de lo que ha ocurrido, que exige la entrega o destrucción de las armas utilizadas y que todos los que las hubiesen usado sean retirados de Santiago y de la actividad política al menos por dos meses.

El Regional acata la orden, las armas son arrojadas al fondo de un lago y los miembros del grupo de protección se pasan dos meses refugiados en un fundo de Cautín. Cuando termina la entrevista, Puccio pregunta: “¿Tienen dinero para trasladar y mantener a estos compañeros? El Doctor (Allende) me ha indicado que los ayude en todo lo necesario, para que no tengan que volver a Santiago y para que sus familias no sufran problemas de subsistencia”. Y ayuda en todo lo que se le pide.

CAPÍTULO XIV

La desestabilización

La contundente réplica socialista en Huérfanos y Ahumada tiene como efecto inmediato que durante todo el mes de mayo desaparezcan las manifestaciones ultraderechistas en Santiago, aunque en Concepción se mantienen, con atentados terroristas, ataques al diario *El Color* por elementos de Patria y Libertad, y el secuestro y tortura de tres jóvenes comunistas. Desde Buenos Aires, donde logra asilo, Walter Roberto Thieme, hermanastro de Müller, proclama la necesidad de una guerra civil para “liberar a Chile de una dictadura marxista”. El Colegio Médico, con una dirección derechista, proclama un paro de 48 horas. Este paro es seguido por la mayoría de los profesionales, que llegan hasta el abandono de las guardias y las urgencias. La minoría que por ética profesional o por solidaridad con el gobierno se mantiene en sus puestos, en jornadas dobles y sin descansos, es impotente para asegurar el servicio. En las urgencias se llega a ver a oftalmólogos atendiendo partos y a estudiantes de los últimos años de medicina que entran en funciones antes de tener sus títulos.

Por esos días, el general Prats, quien al regresar de un viaje por varios países europeos advierte que la situación puede derivar hacia un golpe de Estado si no se establece una tregua política, se reúne con dirigentes de todos los partidos de la Unidad Popular, previa consulta con Allende. Su propósito es convencerlos de la necesidad de un acuerdo con la oposición demócrata cristiana, en torno a un plan económico de emergencia que permita encarar la difícil situación y encauzar un diálogo constructivo capaz de establecer una tregua.

Sin embargo, en junio la DC se vuelca con mayor decisión a las calles, encabezando a los mineros huelguistas de El Teniente y a los estudiantes de enseñanza media, convocados por ese partido. Una de estas manifestaciones choca con jóvenes de la Unidad Popular y ambos bandos son disueltos por la policía con bombas lacrimógenas, carros lanzaguas y tanquetas. Mientras se producen esos incidentes Allende está reunido en La Moneda con dirigentes sindica-

les de El Teniente, a los que recibe para escuchar sus alegatos. Hora después, las Comisiones Políticas de los partidos Comunista y Socialista emiten una declaración conjunta, criticando la reunión de Allende con los dirigentes sindicales, a los que niegan representatividad califican la entrevista de “absolutamente inconveniente” y reclaman “una actitud enérgica ante los sediciosos”.

El *compañero Presidente*, desagradablemente sorprendido por la crítica, firmada por la dirección de su mismo partido, declara que siempre ha discutido y analizado las grandes líneas de acción con los jefes de los partidos de la coalición gobernante, pero que nunca renunció ni renunciará a las prerrogativas y a la autoridad que las responsabilidades del cargo le imponen. Asimismo, justifica su reunión con los huelguistas y declara la inconveniencia de que un sector de la Unidad Popular emita declaraciones públicas sin una previa discusión democrática. Además, señala que ha recibido a los sindicalistas el mismo día en que la policía reprimía con los instrumentos legales los desmanes en la calle para procurar impedir que los mineros fueran utilizados como punta de lanza contra los trabajadores de Santiago y para aclararles cualquier duda que todavía pudieran tener acerca de la actitud del Ejecutivo y de las graves consecuencias de la huelga de El Teniente para el país. En esa oportunidad, las direcciones comunista y socialista son apoyadas por sus bases, generalizándose la crítica a Allende.

Las calles de Santiago vuelven a ser escenario de fuertes enfrentamientos, con manifestaciones y contramanifestaciones, sin que se deriven muertes, pero sí un elevado número de heridos y allanamientos de locales derechistas por la policía. El 26 de junio se producen dos hechos enfilados directamente hacia el golpe de estado: *El Mercurio* publica en forma de editorial la filosofía que orientará a los golpistas, y el general Prats es víctima de una acción de la que nunca se podrá establecer con claridad si es una concatenación de hechos espontáneos, o si es una acción cuidadosamente preparada para provocar su salida de la Comandancia en Jefe del Ejército.

Respecto al primero, *El Mercurio* afirma: “la autoridad política no puede escoger para las altas funciones a los hombres de vida más perfecta, más severa y más fecunda... sensatos, austeros e inteligentes. Esta elección no puede encomendarse a las masas ignorantes, viciosas... y desprovistas de todo interés público general. La democracia es un mito y una aberración, y seguramente la fuente más copiosa del trastorno político que estamos padeciendo... para llevar a cabo esta empresa política salvadora hay que renunciar a los Par-

tidos, a la mascarada electoral, a la propaganda mentirosa y envenenada, y entregar a un corto número de militares escogidos la tarea de poner fin a la anarquía política...”.

Respecto al segundo hecho, producido un día después, Prats recibe un duro golpe psicológico que lo lleva a presentar por primera vez su renuncia. Por la mañana preside el rutinario Consejo de Generales, donde se informa de unas medidas disciplinarias tomadas contra el comandante Souper, jefe del Batallón Blindado 2, por haber realizado movimientos sospechosos y no planificados de tropas.

Después del almuerzo, sale en su coche oficial, sentado al lado del conductor, el suboficial Vargas, para dirigirse hacia el Comando en Jefe. A poco andar nota que dos o tres automóviles lo sobrepasan, haciéndole señas e insultándolo. Uno de los automóviles se pone a su lado, ocupado por dos *hombres* que le sacan la lengua, hacen gestos con las manos y le gritan cosas. Al llegar a un semáforo el automóvil de los desconocidos se detiene al lado del suyo y redoblan los gestos y las voces.

Prats aguanta, pensando que al dar el semáforo la luz verde cada cual seguirá su camino, pero el otro se mantiene a su lado, continuando sus ocupantes con la actitud insultante. El militar empuña un revólver, encañona al conductor del otro coche, le exige que se detenga para darle explicaciones y al comprobar que en vez de hacerlo los insultos crecen, apunta hacia el guardabarros delantero y dispara.

El conductor del otro vehículo frena de inmediato, hace lo mismo el del general, se bajan todos y al descubrirse el primero, se le suelta la cabellera y aparece el rostro de una mujer. Prats apenas atina a reaccionar. Turbado, le presenta sus excusas y le dice que de haber sabido que era una mujer jamás hubiese disparado. A su vez, la señora Alejandrina Cox Palma le pide perdón.

Pero, *espontáneamente*, decenas de conductores colocan sus coches alrededor del de Prats, impidiéndole cualquier movimiento, un hombre armado de un tarro de pintura y pincel escribe sobre la carrocería de su automóvil, otros desinflan los neumáticos y aparecen numerosos fotógrafos y periodistas. En el tumulto, explicable en gran parte por tratarse de un barrio donde domina la derecha, un taxista se acerca a Prats, le dice que quienes lo rodean lo pueden linchar y se ofrece a sacarlo de allí, lo que hace con gran decisión, aprovechando que su automóvil tiene la vía libre. Esa misma tarde Prats presenta su renuncia verbal a Allende, quien la rechaza.

El jueves 28, por intermedio de un tercero, Prats y la señora Cox

Palma intercambian cartas, él dándole explicaciones y ella reconociendo que lo provocó, aunque dice haberlo hecho sin intención premeditada, lo que según diversos testimonios no se ajusta a la verdad. Por la noche, Allende invita a cenar a su residencia a Prats y a los dos generales que lo siguen en el escalafón, Augusto Pinochet y Alejandro Urbina, sin que traten ningún tema en especial. Todos entienden, dado el clima cordial de la velada, que es un gesto del Presidente para demostrar que continúa manteniendo su confianza en el Comandante en Jefe. Una tranquilidad que duraría apenas unas horas y una confianza de la que se mostraría merecedor al día siguiente.

El ensayo general

El veterano periodista Enrique Gutiérrez, conocido entre sus colegas y amigos como *El Peineta*, recuerda su asombro en la mañana del 29 de junio de 1973. A esa hora ya está enterado de que un sector del Ejército se ha alzado contra el Gobierno. De ahí su asombro al comprobar que una columna de tanques de los insurrectos se detiene a escasos 500 metros de La Moneda frente a la luz roja de un semáforo, a la altura del cerro Santa Lucía, respetando las leyes del tráfico urbano. Dos o tres calles más adelante, frente a la Iglesia de San Francisco, las tropas bajan de los transportes, se despliegan en guerrilla, y de uno de los tanques surge un grito que se repetiría varias veces: “¡Abajo los comunistas, muera el comunista Allende!”.

El Presidente, advertido por la mañana de que los golpistas atacan el Ministerio de Defensa y La Moneda, cuyos edificios están separados por la Avenida Bernardo O’Higgins, más conocida como La Alameda, se dirige de inmediato hacia su despacho, acompañado de sus escoltas y del retén de carabineros, normalmente apostado con dos tanquetas frente a su residencia de la calle Tomás Moro. Prats, agotado por los acontecimientos del día anterior, no oye el despertador colocado en la cabecera de su cama y se queda dormido. A las 09:00 es despertado por el secretario general de la comandancia, quien le informa de la sublevación. Diez minutos después está en la Escuela Militar, desde donde imparte las órdenes para reprimir el motín, se traslada al primer Regimiento de Artillería y comprueba que la unidad ya está comenzando a salir para cumplir su misión. De allí pasa a la Escuela de Suboficiales, donde su director, el coronel Julio Canessa, le informa de que los oficiales no quie-

ren salir a atacar a los rebeldes, pero que él lo hará con los suboficiales y la tropa.

La reacción de Prats es inmediata: ordena reunir a los oficiales y les pide que expliquen su actitud. Un mayor le expresa que ellos no están en rebeldía, pero que no desean disparar contra sus compañeros; otro le dice que tiene un hermano entre los oficiales del Batallón Blindado. El general les aclara que la suya es una orden y no un pedido, que él como Comandante en Jefe tiene el deber de reprimir el movimiento sedicioso y que ellos, a su vez, tienen el deber de obedecerle. Además, les dice que entenderá que si no quieren obedecer su orden es porque están comprometidos con los amotinados. “En tal caso, –concluye– lo mejor es que me maten, porque yo iré a La Moneda a defenderla, encabezando a los que quieran seguirme”. Tras unos instantes de vacilación, los oficiales se comprometen a obedecer y empiezan a salir al frente de las tropas.

Prats, una vez asegurada la lealtad de las unidades que tienen a cargo la represión del alzamiento, se dirige hacia La Moneda, donde están desplegadas también tropas leales con las armas pesadas emplazadas, y decide hablar directamente con los amotinados, temeroso de que una demora comience a dar un vuelco a la situación y de las bajas civiles que podría motivar una represión en toda regla. Avanza, acompañado sólo por el teniente coronel Osvaldo Hernández, el capitán Roger Vergara y el sargento primero Vergara. Segundos antes, el capellán Villarroel les da la absolución.

Cuando llegan frente al tanque más próximo, su comandante les apunta con una ametralladora. “Baje e identifíquese”, le grita Prats. El oficial suelta el arma, baja y se entrega. Así lo hace, uno a uno, con otros tanques y carros de combate, hasta llegar hasta el teniente Garay, quien se niega a cumplir la orden, retrocede y apresta su arma para dispararle. A Prats lo salva su ayudante, el mayor Osvaldo Zavala, quien se acerca en ese momento, salta por detrás de Garay, le pone su pistola en la sien y lo desarma.

Un sector de los alzados huye, llevándose tres o cuatro tanques, mientras continúan oyéndose disparos aislados. En tanto, llegan los comandantes de la Fuerza Aérea y de la Armada.

Los fugitivos, que se entregarían poco después, se detienen en una estación expendedora para cargar gasolina en los exhaustos depósitos de sus blindados. El encargado de la estación se niega a atenderlos si no guardan la fila, detrás de decenas de particulares que se apresuran a llenar sus depósitos, ante el temor de que un conflicto prolongado los sorprenda sin combustible. Un fotógrafo

que pasa por el lugar immortaliza la extraña escena de unos militares sublevados, con sus uniformes de combate y armas, aguardando su turno en una fila de civiles, como una expresión clara de lo rotundo de su derrota.

Allende llama ese día al pueblo, por las ondas de Radio Corporación, la emisora del PS, mientras los sublevados asedian La Moneda: “Pido al pueblo que ocupe las fábricas e industrias, que esté alerta, que marche hacia el centro de la ciudad, pero que no haya víctimas; la gente tiene que salir desarmada a las calles, hacerlo con prudencia y utilizando cuantos recursos tengan a mano. Si llega la hora, el pueblo tendrá armas”. Si bien se ocupan todas las fábricas y centros de trabajo, la movilización popular hacia el centro es lenta y salvo los aplausos a las tropas leales y los insultos a los rebeldes, coreados por centenares de personas en torno a La Moneda, la cuestión se dirime entre militares, rápidamente. Incluso la participación de Patria y Libertad en la rebelión es más testimonial que otra cosa, a pesar de que en la noche previa a la asonada y con la complicidad de oficiales golpistas robaron ametralladoras pesadas y municiones del Cuartel de Santa Rosa.

Los cinco principales cabecillas de Patria y Libertad, —encabezados por Pablo Rodríguez— se asilan en la embajada de Ecuador, desde donde se declaran promotores del motín y afirman que fueron traicionados.

Esa intentona fracasa porque desde el principio encuentra a tres jefes militares dispuestos a impedirla y que no vacilan: Prats y los generales Mario Sepúlveda y Guillermo Pickering, dos piezas claves para el control de la guarnición de Santiago. Prats califica de providencial —por no haberle hecho caso al despertador— el hecho de que estuviera en su domicilio cuando le informan del alzamiento, pues eso le permite actuar directamente, ganando un tiempo precioso que evita que la conjura se extienda, pues había otros oficiales comprometidos, algunos de alta graduación y de cuya indecisión o traición se quejaron tanto el coronel Souper como los cinco dirigentes de Patria y Libertad asilados en Ecuador.

La respuesta popular al llamamiento de Allende tiene dos fases. En un primer momento los trabajadores ocupan todas las fábricas y centros de trabajo, pero no marchan hacia el centro masivamente, como pide el Presidente, ni se expresan reacciones desde la izquierda encaminadas a sofocar el golpe, por la indecisión de su dirección. Se mire como se mire, ese enfrentamiento ocurre sólo entre militares y se define entre ellos. Recién hacia el atardecer, con el

complot ya dominado por completo se realiza una gran manifestación en la Plaza de la Constitución, frente a La Moneda, desde cuyos balcones habla Allende ante un público en el que predominan los gritos en favor de “crear, crear, poder popular”. Allende acoge esa demanda, vinculándola a la acción de gobierno: “organizar y crear el poder popular, pero no contra el Gobierno o independientemente de él”.

El “tanquetazo”, como se conoce coloquialmente a la fallida intentona, termina representando una suerte de ensayo general del que mucha gente saca conclusiones y hace cálculos para el futuro. El general Yovane recuerda tiempo después que el motín le permite ver cómo actúan el gobierno y sus partidarios: “yo tomé nota cuidadosamente de lo que hacen, los edificios que ocupan, los sectores del cinturón industrial que los trabajadores aislan, el número de gente que movilizan y muchas cosas más. Por eso fue tan fácil el 11 de septiembre (de 1973), porque repitieron exactamente los mismos movimientos”.

Otros comprueban los mismos hechos y los diferentes destinos de cada uno van a estar marcados, en gran medida, por la adecuación de sus movimientos en función de las lecciones del 29 de junio. Lo acontecido inmediatamente después con Prats, Sepúlveda y Pickering es una de las claves que preanuncian el trágico final. También es una comprobación más de que los golpes de Estado apoyados, auspiciados o preparados por la CIA cuentan por lo general con un pre-golpe, un golpe de ensayo, como ocurrió en casi todos los golpes perpetrados en América Latina antes y después del derrocamiento de Allende.

Pepsi, *Mercurio* y narcóticos

El general Prats, en uno de los momentos de máxima tensión, cuando observa la forma en que se concatenan acontecimientos aparentemente aislados, pero que están unidos por un guión único, se pregunta: “¿Quiénes están moviendo siniestramente los hilos de la conspiración psicológica y empiezan a usar la fórmula diabólica de colocar de escudos de su cobardía moral a las mujeres de los uniformados, como cuando se usó a la mujer de la oposición política en la marcha de las cacerolas, al final de la visita de Fidel Castro?”.

La respuesta a esas preguntas reconoce sus orígenes en los planes *Track Uno* y *Track Dos* y su expresión específica en un grupo de personas con intereses creados en Chile y los Estados Unidos, entre las que se destaca Meyer Lansky, uno de los principales *gangsters* con inversiones en el juego y en la prostitución en la Cuba pre castrista, quien traslada sus garitos a Las Vegas y a Las Bahamas, donde funda el Lucayan Beach Hotel. Uno de los socios inversores en ese hotel es Charles Allen, posteriormente presidente de la Pepsi Cola. Su abogado de entonces es Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos durante el gobierno de Allende. El agente de relaciones públicas del Lucayan es el periodista William Safire, después asesor de prensa del Nixon presidente.

Nixon, como abogado de la Pepsi Cola, logra la autorización para instalar una planta embotelladora en Asia, desde la que Lansky habría organizado el tráfico de droga para los soldados norteamericanos en Vietnam. Por esa época ya es vicepresidente de la Pepsi el chileno Agustín Edwards Eastman, *El Dunny*, dueño de *El Mercurio* y cabeza del clan económico chileno más poderoso, aliado a la ITT y a las cupríferas Anaconda y Kennecott, ambas con yacimientos en Chile, y con amigos y cómplices en distintos escalones del gobierno y de la administración norteamericana. En 1970-1973 todos ellos aparecen vinculados, de una u otra manera, a la tragedia chilena, sobre todo *El Mercurio*, que marca el paso de la campaña de acción psicológica destinada a quebrar la profesionalidad de las Fuerzas Armadas.

Según las actas del Comité de los 40, ese diario recibe financiación en dólares de manera encubierta, con el argumento de fortalecerlo para evitar que caiga en manos del gobierno allendista. Sin embargo, la potencia tanto de la empresa editora como de los sectores empresariales que lo apoyan permite poner en duda que ese fuera el verdadero objetivo, y da paso a la versión, nunca comprobada fehacientemente pero tampoco desmentida de que, en el aspecto financiero, *El Mercurio* en realidad es sólo un puente entre la CIA y los grupos conspiradores en el interior de Chile. La habilidad de Lansky para mover dinero sucio juega un papel muy importante en el establecimiento de un flujo de financiamiento para los golpistas.

Esos grupos apoyan a la derecha, que juega sus cartas a principios de 1973 y en el terreno electoral, con la ilusión de que el caos económico creado por el paro patronal de octubre del año anterior influiría a su favor en los resultados. Además, cuentan con el *bloqueo invisible* arbitrado por el gobierno de los Estados Unidos y varias de sus transnacionales, y con la falta de apoyo concreto de los países del *socialismo real*. Instaurado ese clima sólo les resta esperar una victoria capaz de asegurarles los dos tercios de votos en el senado, para presentar una acusación constitucional y destituir legalmente al Presidente en las ya próximas elecciones de marzo de 1973.

Pero las urnas arrojan unos resultados que todo el mundo, la derecha incluida, consideran como una victoria de Salvador Allende. Éste no sólo puede argumentar en su favor el crecimiento de los votos, (cuando todos los gobiernos precedentes siempre han perdido popularidad y votos a los dos años de su mandato), sino que queda a salvo de la acusación constitucional y de la consiguiente destitución por el Parlamento.

Al conocer el resultado electoral, los más recalcitrantes anti-allendistas, el *Dunny* y sus amigos, los conspiradores del *pastel de choclo*, Patria y Libertad, el PN, los grupos de militares ya definidos como antigubernamentales y la derecha del PDC, (sin una coordinación entre todos ellos pero con evidentes zonas de contacto), llegan a la conclusión de que deben impedir que Allende llegue al término de su mandato, en 1976. Ante ellos se presenta una alternativa: impulsar un golpe de Estado, como medio activo para derrocar al presidente constitucional, o apostar por la tesis de “la pera madura”, según la cual un clima de caos económico y social actuaría por sí sólo, obligando a Allende a renunciar, o a convertirse en

un presidente títere de un gabinete cívico militar, en el que quedarían desplazados los partidos de la Unidad Popular.

El período decisivo se vive entre el 30 de junio, (una vez sofocado el primer motín militar) y el 23 de agosto, día en el que Prats presenta su renuncia indeclinable a los cargos de ministro de Defensa y de Comandante en Jefe. A partir de esta última fecha los acontecimientos se desarrollan como si estuvieran concatenados por una mano trágica y con un punto de llegada, que se advierte cercano y prácticamente inevitable.

El análisis del *tanquetazo* producido el 29 de junio permite a los conspiradores comprobar que Prats es un escollo insalvable para cualquiera de las dos opciones golpistas, la que promueve una desestabilización que obligue a Allende a renunciar o a ser destituido por el Parlamento, y la que se plantea su derrocamiento liso y llano. Sobre todo porque cuenta, en junio de 1973, con la total lealtad de los generales Mario Sepúlveda y Guillermo Pickering, comandantes de las unidades de combate más poderosas del ejército chileno, con sus cuarteles en Santiago. El golpe frustrado ha servido también para que en cada unidad los conspiradores tomen nota de la actitud de los demás oficiales, para convencer a los indecisos, o para neutralizar a los decididamente constitucionalistas. Pero el análisis se hace también desde el Gobierno y Prats llega a la conclusión de que solamente un entendimiento político entre la Unidad Popular y la DC permitiría evitar un enfrentamiento armado y dirimir las diferencias por las vías constitucionales, pensamiento con el que en líneas generales coincide Allende.

El apoyo popular

Los tres fracasos de la derecha: el paro patronal de octubre de 1972, las elecciones de marzo y el motín de junio de 1973, dejan en claro que el gobierno cuenta con apoyo popular suficiente, que existen grandes diferencias en la cúspide de la Unidad Popular y que sus bases se han radicalizado y pugnan por mantener en sus manos las empresas ocupadas en octubre.

El frente conspirador comienza a articularse en un rango superior inmediatamente después del fracaso del 29 de junio. El primero de julio de 1973, el general Bonilla le informa a Prats que ha hablado con Eduardo Frei. Le dice que éste opina que es posible un entendimiento de la DC con el gobierno si se constituye un gabi-

nete cívico-militar, desplazando a los ministros de la Unidad Popular. Ese mismo día Prats se reúne con los dirigentes socialistas Carlos Altamirano, Ariel Ulloa y Rolando Calderón, y les insiste en que la situación es grave y que es urgente llegar a un acuerdo político con la oposición. Su prédica tiene escaso eco.

Poco después, el ministro de Defensa, Clodomiro Almeyda, y los tres comandantes de las fuerzas armadas, se reúnen con Allende, a quien transmiten el criterio de los generales y almirantes, favorable a una apertura política y a que se aplique un programa para aliviar la emergencia económica.

En los días siguientes se debate entre los altos mandos castrenses la propuesta presidencial de volver a incorporar militares al Gabinete, opción que en principio no se concreta pues el cuerpo de generales del Ejército entiende que no se han creado las condiciones para una participación descomprometida de las Fuerzas Armadas, o sea para una participación que no signifique un apoyo político al gobierno. Prats insiste en la conveniencia de una negociación con la DC, a lo que Allende responde que la considera impracticable en esas circunstancias y lo desafía a que se convenza por sí mismo, hablando con Frei.

Al día siguiente, 8 de julio, el comandante le pide a Bonilla que arregle una entrevista con Frei y le sugiere hacerlo en la casa de Sergio Ossa Pretot, en la que se reúnen esa misma tarde. Prats ignora todavía que el dueño de casa es el encargado por la DC de subvertir a las capas medias de la oficialidad, con las que tiene buenas relaciones en la Escuela Militar.

Once días después, al salir de una reunión con generales y almirantes, Prats se dirige a La Moneda a dar cuenta de lo allí tratado al Presidente y, en uno de sus pasillos, se topa con Altamirano y Calderón, encuentro que aprovecha para informarles de que en las Fuerzas Armadas se está viviendo una tensa situación, que puede rebasar a los Comandantes en Jefe y dar paso a un golpe. Prats les señala que ha llegado el momento de definir si se quiere un diálogo con la DC o si se prefiere enfrentar un golpe militar y una subsiguiente guerra civil. Altamirano, a su vez, le informa de que ha sabido que la oposición busca la forma de desplazarlo del mando del Ejército, por constituir un obstáculo para un golpe institucionalizado.

Incansable, Prats charla esa misma noche durante una hora con Renán Fuentealba, dirigente del ala progresista del PDC, quien se muestra abierto al diálogo. Al día siguiente da cuenta a Allende de

sus conversaciones con Altamirano y Fuentealba. El Presidente ya se ha reunido con el dirigente socialista, quien le relata parte de su conversación con *el General*, pero *obvia referirse a la insistencia de Prats en la necesidad del diálogo con la DC, omisión que le es señalada por Calderón, presente en la reunión.*

Mientras tanto, el Cardenal Raúl Silva Henríquez —quien después del golpe pinochetista se convertiría en uno de los grandes y perseverantes defensores de los derechos humanos— se suma a quienes reclaman un diálogo y una negociación y pide una tregua. El dirigente demócrata cristiano Renán Fuentealba decide actuar públicamente, y en una declaración al diario comunista *El Siglo* advierte de que “es indispensable que los dirigentes más altos del gobierno y de la oposición hagan un esfuerzo supremo para lograr un consenso mínimo, que permita al país seguir viviendo dentro del régimen democrático”.

Allende pronuncia un discurso el 24 de julio por la cadena nacional de radio y televisión, en el que defiende las conquistas económicas y sociales del proceso, se pronuncia por mantener a las Fuerzas Armadas marginadas de la pugna por el poder político y llama a la oposición a un diálogo y entendimiento.

Los últimos intentos de negociación

Las bases sobre las cuales el gobierno está dispuesto a entenderse con la oposición, esto es, con la DC, las sintetiza en unos pocos puntos: el gobierno quiere un poder popular subordinado y no antagónico al régimen institucional; el camino político de la Unidad Popular no es el insurreccional pero éste sí lo es para la burguesía; es necesario articular los poderes del Estado con una vigencia plena del Estado de Derecho, lo que implica terminar con el bloqueo legislativo a que está sometido el Poder Ejecutivo; así mismo es necesario delimitar legalmente el régimen de propiedad de las empresas y un acuerdo para adoptar medidas concretas destinadas a contener la inflación y asegurar la distribución de los productos esenciales destinados al consumo de la población.

Pero el plan sedicioso continúa. El 25 de julio comienza otro paro de los camioneros. Al día siguiente, Patricio Aylwin, como presidente del PDC, anuncia que acepta la proposición de diálogo y que el lunes 30 su directiva se reuniría con Allende en La Moneda, día en el que finalmente se inician las conversaciones. Los partidos

de la Unidad Popular apoyan el diálogo, con la excepción del PS, que dice *NI*. El principal partido del gobierno, por boca de su Secretario General, Altamirano, se define diciendo que no se opone al diálogo,... pero que no participa en él. *NI*, o sea ni *no*, ni *sí*.

La alegría de Prats por el inicio del diálogo dura poco. El martes 31 de julio, Aylwin envía una carta a Allende en la que expresa que la idea de éste de formar comisiones para desarrollar acuerdos es dilatoria, e insiste en la urgencia de formar un Gabinete con la participación institucional de las Fuerzas Armadas *con poderes suficientes* en la estructuración de los mandos superiores y medios de los ministerios. Lo que de ser aceptado significaría una suerte de *golpe blando*.

Prats se lamenta en sus *Memorias...* de que “después de la tensa etapa transcurrida hasta que el Presidente logró, aunque a regañadientes, que el Partido Socialista superara su alergia a buscar un consenso mínimo con la democracia cristiana, Aylwin plantea una condición que –como político fogueado– sabe bien que para Allende resultará imposible aceptar”. Porque de aceptarlo significaría institucionalizar un poder militar por encima del civil. Por ello Prats entiende que el Presidente no podría someterse a la imposición de¹ dirigente demócrata cristiano.

En efecto, el dos de agosto Allende responde a la carta de Aylwin públicamente y propone estudiar el conjunto de la reforma constitucional, ofrece promulgar las reformas constitucionales pendientes, plantea ocho puntos de ordenamiento económico y social y señala, por último, que la designación de un nuevo Gabinete sería una consecuencia del acuerdo previo sobre los puntos planteados. Con claridad le expresa que propone una solución concreta “que concilie las posiciones jurídico-constitucionales del Partido Demócrata Cristiano y del Gobierno, sin que las de ustedes se impongan sobre las nuestras, ni viceversa”. Termina su carta diciendo: “no deseo dramatizar, pero tengo el deber de recordarle las trascendentes responsabilidades que usted y yo tenemos en los difíciles instantes que vive el país y las proyecciones históricas de nuestras decisiones. Por ello y por el interés superior de Chile, debemos continuar el diálogo. Lo invito formalmente para que prosigamos nuestras conversaciones”. Sin embargo, al día siguiente Aylwin da por terminadas las conversaciones con el Gobierno, con el argumento de que Allende se niega a designar un gabinete que signifique una garantía para el PDC que, en su carta anterior, planteaba que estuviese controlado por los militares.

La provocación castrense

El sábado cuatro de agosto se produce una de las más feroces provocaciones de los militares golpistas contra los trabajadores y la Unidad Popular, en la empresa Lanera Austral, de la ciudad de Punta Arenas, en el extremo sur del país. Una de las características del proceso posterior al tanquetazo del 29 de junio de 1973 es la aplicación de la Ley de Control de Armas, elaborada por el Gobierno, modificada por el Parlamento con apoyo de la oposición, vetada por el Ejecutivo y finalmente promulgada.

Esa Ley faculta a las Fuerzas Armadas y Carabineros a allanar locales donde se denuncie la existencia de armas de fuego. Pero, a pesar de las evidencias de que grupos de extrema derecha están armados y cometen atentados, como Patria y Libertad que lo anuncia públicamente, los allanamientos invocando esa norma legal se producen únicamente en sedes de los partidos de izquierda, en sindicatos y, sobre todo, en las fábricas del área de propiedad social. El propio Prats, cuando en una reunión de generales alguno de los asistentes defiende la aplicación de esa ley en las fábricas, señala que no se ha producido ninguna medida militar en contra de Patria y Libertad, ni en búsqueda de las ametralladoras pesadas que han sido robadas por miembros de ese movimiento cuando se preparaba el tanquetazo. Lo cierto es que, más allá de la búsqueda de armas que apenas poseen los partidos y movimientos populares, lo que se persigue con los allanamientos es ir creando un ambiente psicológico de confrontación entre los militares y los trabajadores. Los miembros de las Fuerzas Armadas que intervienen en los allanamientos comienzan a ver a los trabajadores como sus enemigos. Lo sucedido en la Lanera Austral es la demostración de esos hechos llevada al extremo.

El sábado 4 de agosto de 1973, unidades de las tres fuerzas armadas revisan el barrio industrial de Punta Arenas durante todo el día en búsqueda de armas, sin resultados y sin ejercer violencia contra los pobladores. La excepción es la Lanera Austral en la que entran miembros de la Fuerza Aérea, que en ningún caso utilizan llaves ni llaman a las puertas. Simplemente derriban sus puertas a culatazos. Hombres y mujeres son puestos con las manos en la nuca, piernas abiertas y bayoneta a la espalda, en medio de una retahíla de insultos, puntapiés en las pantorrillas, empujones y todo tipo de vejámenes.

Por razones técnicas, en la empresa se mantiene una temperatura interior en torno a 25 grados, por lo que todo el mundo viste ropas ligeras pese a que es temporada de pleno invierno. Con esas ropas, sin darles tiempo a abrigarse o cubrirse, todos los operarios y

operarias son sacados al patio, donde permanecen unas dos horas con temperaturas de tres grados bajo cero.

En el minucioso registro no se encuentra ni un arma, pero es asesinado un obrero y otro cosido a bayonetazos.

De inmediato, el periodista Hernán Uribe, director del diario *Última Hora*, se traslada a Punta Arenas para investigar lo ocurrido. El resultado es una investigación audaz, seria y bien documentada que, después del golpe y ya exiliado su autor en México, lleva a la dictadura pinochetista a privarlo de su nacionalidad.

Uribe comienza su crónica con dos declaraciones. Una de un obrero de Lanera Austral: "Por su odio y brusquedad, creí que eran miembros de Patria y Libertad disfrazados de militares". Otra, del máximo responsable militar de la región, el general Manuel Torres: "Existe un fuerte intento de infiltración en el Ejército, especialmente por parte del MIR". El periodista puntualiza que la empresa fue expropiada en diciembre de 1970, cuando pertenecía a una sociedad compuesta por los dueños de textiles Sumar y el contador Arturo Frei Montalva y que en total trabajan 210 personas, 10 por ciento de ellas mujeres, distribuidas en tres turnos. Cuenta Uribe que "el obrero Manuel González Bustamante fue baleado en el interior de Lanera Austral, se desangró allí durante unos veinte minutos y murió luego en el Hospital Militar. Este cronista contó 10 orificios de bala en la pequeña habitación de tres por cuatro metros, en cuyo suelo permanecía aún como prueba acusadora la sombra del charco de sangre. La cantidad de impactos significa que se dispararon varios balazos".

El comandante Claudio Clavijo, quien dirige el operativo sobre el terreno, declara dos días después: "lamento que el trabajador haya muerto, pero como no obedeció la orden se hizo un disparo al aire y como continuara corriendo se le disparó a las piernas con las lamentables consecuencias que se conocen". Clavijo ni siquiera repara en que su explicación es totalmente insostenible, pues ¿cómo podría alguien continuar corriendo en una habitación de tres por cuatro metros? Y si se disparó a las piernas, a tan poca distancia, ¿cómo se explica que los disparos lo alcanzaran en el cuerpo, provocándole la muerte? ¿Y cómo se puede entender que González Bustamante, ametralladorista durante su servicio militar y hermano de un suboficial del Ejército y por lo tanto conocedor del poder de las armas de fuego, saliera corriendo al ser encañonado y recibir una voz de alto?

Todo indica que el allanamiento, los métodos utilizados y el asesinato respondieron a un plan cuidadosamente elaborado.

CAPÍTULO XVI

El punto de no retorno

La conclusión para el Gobierno es que ya no mantiene el control en el extremo sur del país y que la situación se acerca peligrosamente a un punto de no retorno, por lo que Allende vuelve a insistir a los Comandantes en Jefe en su deseo de incorporarlos al Gabinete, agregando en esta ocasión al General Jefe de Carabineros, como una manera de dar seguridades adicionales a la DC y de enfrentar los problemas cotidianos. Tras varias consultas entre los comandantes y de éstos con sus generales, se forma un nuevo Gabinete, en el que los militares asumen cuatro carteras: Defensa, Hacienda, Obras Públicas y Transportes, y Tierras y Colonización.

De inmediato se produce un hecho que prueba la directa relación de ciertos movimientos militares con el PDC. A los dos días de constituido el nuevo gabinete se produce una situación de tirantez entre el general Ruiz, ministro de Obras Públicas y Transportes, y el socialista Jaime Faivovich, interventor en el gremio del transporte, que se halla en huelga. Faivovich ha ordenado que se requisen los camiones paralizados por sus patronos, operación que se frustra por que se hace presente un coronel de la Fuerza Aérea que da orden en contrario. Ruiz dice después que hubo un malentendido, ya que el citado coronel sólo había recibido instrucciones de ir a informarse pero, de todas maneras, afirma que los dirigentes transportistas ponen como única condición para levantar el paro que Faivovich sea destituido como interventor.

Allende acepta la renuncia de Faivovich y aprueba la idea de nombrar interventores militares. Prats le pide a Pinochet, comandante subrogante del Ejército, el nombre de un oficial para reemplazar a Faivovich y recibe la sugerencia del general Bonilla, quien acepta. Horas después el Presidente llama por teléfono a Prats para comentarle que un diputado de la DC, Cerda, ha calificado por radio de positiva la designación de Bonilla como interventor del transporte, lo que prueba la íntima y rápida conexión entre Bonilla y ese parlamentario. "Y a mí todavía no me han traído el decreto para su nombramiento", comenta Allende antes de comunicarle que, por

supuesto, ya no podrá firmarlo aunque se lo traigan. Los vasos comunicantes de Bonilla y la DC habían funcionado tan rápido esta vez que, al excederse, terminan por abortar el nombramiento. De todos modos es otro general vinculado al PDC, Hernán Brady, quien asume la intervención.

Sin embargo, ninguna de esas concesiones y garantías logra poner fin a la huelga, que continúa extendiéndose, al extremo de que el lunes 13 de agosto Allende cita a los tres comandantes, para señalarles que el paro adquiere proyecciones de suma gravedad. A continuación les pide que cinco horas después le den una respuesta y se pronuncien con claridad respecto a si las Fuerzas Armadas están decididas a actuar con decisión para evitar los daños que están sufriendo el país y la población.

La respuesta que recibe es que las Fuerzas Armadas dictarán todas las disposiciones necesarias para que su acción resulte efectiva, pero le señalan que el paro ha adquirido una marcada connotación política y prevén que habrá resistencia de los huelguistas y presiones de la oposición, por lo que le sugieren que llame a la directiva de la DC y le pida que contribuya a evitar el desastre que se avecina.

Esa misma noche, en la casa de Prats, se reúnen los tres comandantes en jefe con Aylwin, Cerda y un dirigente sindical de la DC. Aylwin expresa sus reservas ante la actitud del gobierno, y dice que lo considera responsable del paro que afecta al país. No obstante, cambian ideas acerca de cómo encontrar una solución, aunque el presidente del PDC anticipa que por ningún motivo otorgarán al Gobierno las facultades privativas del Parlamento para decretar el Estado de Sitio. La reunión se celebra a la luz de una vela, porque un atentado con dinamita realizado por grupos opositores deja sin energía eléctrica a las provincias de Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Valparaíso y O'Higgins.

Hasta el 15 de agosto no están en condiciones de actuar los interventores militares para requisar camiones, pues la Contraloría General de la República, hostil al gobierno y que emplea todas las argucias legales para entorpecer sus acciones, demora varios días el trámite de dar validez legal a esos nombramientos. Pero los problemas continúan. A la hora de actuar, los almirantes Merino y Carvajal se entrevistan con Prats e insisten en sus reticencias para emplear personal naval en el allanamiento de Reñaca, un lugar donde hay aparcados unos 500 camiones de huelguistas, con el argumento de que éstos han organizado una verdadera fortaleza alrededor de sus vehículos. Los dos jefes navales proponen que el gobierno ceda en

el arreglo previo de los 14 puntos planteados por los dirigentes de los camioneros. Anota Prats en sus *Memorias...*: “pienso en la curiosa postura de ambos almirantes: mientras no vacilan en realizar con máximo rigor el allanamiento de industrias e instalaciones públicas controladas por la Unidad Popular –amparándose en la aplicación de la Ley de Control de Armas– sienten el temor reverencial de aplicar los mismos procedimientos a los elementos de la oposición lanzados a un paro de gravísimas consecuencias para la economía nacional”.

Con excepción de Reñaca, donde se mantienen las reticencias navales, en los demás emplazamientos en los que hay miles de camiones, a los que los transportistas les han quitado los neumáticos y piezas claves para impedir que se los lleven, se ponen en marcha las requisiciones. La directiva del PDC, diputados y senadores de ese partido, ante el éxito de las medidas, atacan públicamente a Prats, acusándolo de colocar a las Fuerzas Armadas “en una acción ilegal al servicio de la represión a los trabajadores del transporte”, a los que expresan su respaldo y les prometen su presencia en los lugares en los que han concentrado sus vehículos.

El Gabinete acuerda que el general Ruiz, ministro de Obras Públicas y Transportes, hable por la cadena nacional de radio y televisión para explicar las graves consecuencias que el paro de transportistas tiene para la economía nacional. La Secretaría General de Gobierno puntualiza que el Ejecutivo ha cumplido íntegramente el acuerdo que puso fin al paro de 1972, que la nueva huelga fue lanzada, *con métodos gangsteriles*, mientras los transportistas estaban conversando con el ministro del Interior en búsqueda de nuevos arreglos, que hay víctimas mortales por los atentados que han sufrido los hombres y mujeres que no se plegaron al paro y que el PDC está sumando fuerzas a los grupos sediciosos, que sólo buscan el enfrentamiento y la guerra civil entre los chilenos.

El viernes 17 de agosto se pone en evidencia la actitud golpista del generalato de la Fuerza Aérea (FACH). Ese día Allende le pide a Prats que en su carácter de ministro de Defensa cite al general Gustavo Leigh, segundo en el mando de la FACH y que vayan los dos a verlo. Una vez en su despacho, les dice que Ruiz le presentó la renuncia a su cargo de ministro de Obras Públicas y Transportes, alegando que ha fracasado al no lograr una solución al paro de los camioneros. Allende prosigue informándoles que ha señalado a Ruiz la gravedad de su determinación, ya que en ese momento el paro está quebrándose y que su renuncia fortalecería a los huelguistas,

además de ser el desencadenante del enfrentamiento que el gobierno está evitando a costa de sucesivas concesiones. Al insistir Ruiz, le aclara que de mantener su posición debería presentarle también su renuncia al cargo de Comandante en Jefe de la FACH. Como Ruiz accede a presentar ambas renuncias, el Presidente le ofrece a Leigh la Comandancia en Jefe y el Ministerio, a lo que éste replica que antes de dar una respuesta debe hablar con Ruiz. Allende le indica que lo haga y que regrese en una hora con su respuesta. Leigh le pide más tiempo para contestar, recibiendo un último plazo, hasta el día siguiente, sábado 18 de agosto de 1973.

Ese fin de semana se produce uno de los episodios más demostrativos de la implicación en la conspiración de los generales Ruiz y Leigh, de su cobardía y doblez y, por el contrario, de la decisión y claridad de Allende. Leigh informa a Prats y éste a Allende, que ningún general de la Fuerza Aérea desea aceptar la Comandancia en Jefe y el Ministerio, y que se han autoacuartelado las guarniciones de El Bosque y Los Cerrillos, las dos más importantes de esa fuerza y próximas a Santiago.

El Presidente llama a su presencia a Leigh y sin rodeos le dice: "reúnase con sus generales y tráigame el nombre de quién de ellos será ministro de Obras Públicas y Transporte, y usted aceptará el cargo de Comandante en Jefe. De lo contrario nombraré Comandante a mi edecán y pasaré a retiro a todos los generales, hoy mismo". Humillado, Leigh se retira y al volver acepta la Comandancia, a la vez que propone al general Humberto Magliochetti para titular del Ministerio, cargo que éste jura ese mismo día domingo.

El lunes, Leigh informa a Prats de que el general Ruiz, en vez de concurrir a la ceremonia de transmisión del mando previamente acordada, se ha autoacuartelado en Los Cerrillos. Prats le recuerda que él, como Comandante en Jefe del Ejército, cuando se produjo la sublevación del 29 de junio solicitó al ministro de la Defensa que lo dejara resolver, sin interferencias políticas y que, aplicando el mismo criterio, le pide que resuelva el problema interno de su arma, en el que no interferiría él como ministro. Por las dudas, Prats ordena también el acuartelamiento del Ejército y la Armada. Tras varias horas de reuniones y tensiones, Ruiz entrega el mando a Leigh.

El martes 21 de agosto el general Carlos Prats tiene la certeza de que ha llegado a su cúspide la campaña de acción psicológica sobre los oficiales del Ejército, para definirlos en favor del golpe de Estado.

Ese día el general amanece con una fuerte gripe. No obstante

asiste durante la mañana a una reunión en el ministerio del Interior. Al mediodía, afiebrado, se dirige a su residencia oficial de Comandante en Jefe del Ejército, decide guardar cama, come algo y se queda profundamente dormido.

A media tarde un fuerte bullicio lo despierta. Su mujer, Sofia, muy impresionada le dice que frente a su residencia se han concentrado unas 300 mujeres que gritan y le piden a ella que las reciba para entregarle una carta. Al observar que entre las vociferantes hay varias esposas de generales y oficiales del Ejército, muchas de ellas hasta entonces sus *amigas*, les manda a decir que le entreguen la carta al portero. La misiva pinta una situación dramática del país, describe a los esposos de las firmantes como disciplinados oficiales al límite de la desesperación y le piden a ella que interceda ante Prats y le lleve el ruego "de tantas mujeres que lloran calladas".

Ni lloran ni están calladas. En pocos minutos su número se multiplica por cinco, pero ya no son sólo mujeres, sino también varones y menores de edad, que gritan toda clase de insultos contra Prats y el gobierno. Entre los manifestantes aparecen militares, uno de ellos de uniforme, el mayor Renán Ballas Fuentealba, yerno del retirado y conspirador general Alfredo Canales. Hay también dos mayores (comandantes) vestidos de civil. La comisaría de Carabineros de la zona, encargada del orden público, envía 20 hombres para controlar la manifestación, los que son recibidos con insultos y pedradas, que también se lanzan contra la residencia, rompiendo varios cristales de las ventanas. Los insultos más repetidos son: *maricón*, *marxista* y *gallina*.

Una hora y media después de comenzada la manifestación llega el general Bonilla, quien pide hablar con el matrimonio Prats. Se sientan los tres en el recibidor, el visitante se dirige a la dueña de casa y tras invocar la amistad que ha unido hasta ese momento a los dos matrimonios, lamenta que su propia esposa, sin su consentimiento según él, haya participado en la manifestación. La señora de Prats se retira sin hacer comentarios y el Comandante le pregunta a Bonilla si tiene algo que decirle a él.

Bonilla, uno de los generales de confianza de la DC, le contesta que su imagen (la de Prats) se ha deteriorado porque entre los oficiales se dice que él se ha confabulado con Allende para destituir al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, César Ruiz Danchau. Prats contesta que si su imagen se ha deteriorado es porque los generales no quieren respaldar al Comandante en Jefe y que si él cree en las patrañas sobre su supuesta intervención para sacar a

Ruiz, no tienen ni una palabra más que hablar, nunca más. Tras su respuesta, Prats se levanta e invita a Bonilla a que se retire.

Después se presenta Pinochet, *el general leal*, para expresarle su pesar por lo acontecido, quien al llegar a la residencia es pifiado e insultado. Pronto llega Allende con los ministros Orlando Letelier y Fernando Flores. También son silbados e insultados por los manifestantes. Prats ha dado orden de que no se utilice la fuerza contra los congregados, para evitar que algunas de las mujeres resultase herida o lesionada, lo que daría pie para nuevas manifestaciones.

Pero Allende, después de estar una hora dentro de la casa escuchando los insultos, sale y ordena al Comisario a cargo de los carabineros que despeje la zona, cosa que se logra en unos pocos minutos, de manera que al retirarse el Presidente y los ministros ya no quedan personas hostiles en los alrededores.

El ministro Letelier, asesinado en 1976 en los Estados Unidos por agentes enviados por Pinochet, recuerda a Prats “con las mejillas ardientes, rígido ante la multitud” que lo insultaba y quien poco después, erguido en su silla, le comenta: “nunca pensé que generales y coroneles a los que conozco desde la infancia se esconderían tras las faldas de sus mujeres. Estoy triste por Chile, porque he visto, no sólo la traición, sino un tipo de cobardía que no creía posible”.

El efecto de lo ocurrido es muy fuerte sobre Prats, quien lo recuerda así en sus *Memorias...*: “Quedo meditando en la gravedad de lo ocurrido. Al recordar uno a uno los nombres de las señoras de generales y oficiales que participaron en la manifestación, me siento como en el ensueño angustioso y tenaz de las pesadillas, considerando los largos años de falsa amistad que nos habían prodigado”.

Como consecuencia de esos acontecimientos se plantea seriamente la posibilidad de renunciar y condiciona su permanencia a que los generales le manifiesten su solidaridad frente a los insultos de las esposas de algunos de ellos y firmen una declaración pública, que Pinochet se compromete a gestionar. Recibe en su casa al cuerpo de generales, les explica su actuación de los días precedentes y les anuncia que esperará 24 horas su reacción, para proceder en consecuencia. Al terminar les ofrece la palabra, que ninguno toma, manteniéndose todos en un significativo silencio.

La traición de algunos generales

El jueves 23 de agosto el Congreso, por iniciativa de los diputa-

dos demócrata-cristianos, aplica “un hachazo decisivo, con el que se cercena en dos partes el tronco de la comunidad nacional”, en palabras de Prats, al aprobar un acuerdo por el cual se declara gravemente quebrantado el orden constitucional y legal de la República, un documento que “pasa a ser un cheque en blanco endosado por el Parlamento” y puesto en manos de los golpistas.

El cuerpo de generales no sólo se niega a firmar la declaración de solidaridad con su Comandante, sino que presiona a Pickering y Sepúlveda para que pidan el retiro. Prats, conocedor de que la presencia de ambos es vital para mantener el mando sobre el Ejército, les insiste para que permanezcan, pero ellos plantean que les es imposible responder de la disciplina de los cuerpos de tropa a su cargo, si la oficialidad media y subalterna está claramente perturbada por la acción psicológica que la oposición ha llevado al paroxismo, y responden que les debe aceptar su pedido de retiro y aprovechar la ocasión para aplicar medidas disciplinarias a los generales rebeldes, que han estado soliviantando a los mandos medios y subalternos.

Esa noche Prats –quebrado psicológicamente por la intensa campaña desarrollada en su contra en los últimos días– le pide a Allende que acepte su renuncia a los dos cargos que ostenta, señalándole de que continuar en el cargo debería solicitarle que aplique su facultad presidencial y pase a retiro entre doce y quince generales, lo que podría precipitar la guerra civil. Ese mismo día el Presidente recibe una información confidencial que le hace llegar directamente el Regional Santiago Centro del PS, con una lista contrastada de los generales golpistas en el cuerpo de Carabineros, y la sugerencia de que sacrifique al Comandante de ese cuerpo, un convencido constitucionalista, para poder pasar a retiro a la mayoría de los golpistas y nombrar Comandante a otro general constitucionalista, que se encuentra mucho más abajo en el escalafón. Con la ventaja de que debajo de esos generales, los coroneles y tenientes coroneles son mayoritariamente constitucionalistas.

Allende medita, dada la posibilidad de adelantar el enfrentamiento y ante el comentario de Prats de que si se nombra Comandante a Pinochet, “que tantas pruebas de lealtad me había dado”, queda la posibilidad de que se distienda la situación, dándole tiempo al Gobierno para lograr el buscado entendimiento con la DC. Ese día a Allende lo abandonan Prats, Pickering y Sepúlveda y, algo trascendente, éstos no quieren tomar la iniciativa en contra de los generales golpistas, todavía minoritarios. Esa retirada de los generales constitucionalistas es el hecho que con mucha justicia gana para el 23 de

agosto de 1973 el título de *día de la inflexión*, el momento preciso en el que comienza la cuenta atrás para el golpe.

En rigor de verdad, la demanda de aplicar medidas disciplinarias a los altos oficiales conspiradores es un clamor que se eleva cada vez más fuerte desde las filas populares. *La Aurora de Chile*, en primera página y con gran despliegue tipográfico, después de calificar los allanamientos por la ley de control de armas como una *pura provocación*, señala en su edición del 23 de agosto que “si realmente se desea que las FEAA. estén junto al pueblo, deben ser depuradas de los malos elementos. En esa parada, sabe el compañero Presidente que tendrá a su lado no sólo a toda la clase obrera, sino también a todo lo que de sano y patriota exista en este país. ¡Y que no tiemble la mano, camarada Allende! ¡Que no tiemble!”. Pero en ese momento decisivo a Allende le fallan los generales Prats, Pickering y Sepúlveda, que se niegan a desenvainar su sable contra los conspiradores. Premonitoriamente, *La Aurora de Chile* llama el mismo 23, en una edición cerrada la noche anterior, a que “si el fascismo se alza contra el pueblo, a combatir con lo que se tenga. Pueblo y militares patriotas aplastaremos al fascismo”. Añade que “esta noche, o mañana, puede montarse una nueva provocación. Los desesperados seguirán golpeando las puertas de los cuarteles, pinchando a sus pocos amigos fascistas para que se alcen... Seguirán enviando mujeres de pañuelitos blancos a insultar a los militares patriotas. Seguirán mandando al lumpen y el pijaerío a provocar en las calles. Y por ahí puede surgir la llama. Por ahí pueden encontrar el detonante que andan buscando”. Una advertencia y una visión clara de lo que se está maquinando y de lo que sucedería de no arbitrarse medidas firmes para evitar que se cumplan los designios golpistas.

La provocación se monta, es efectiva, afecta al alto mando del Ejército y en ese momento decisivo, Allende se queda sin sus generales, porque Prats, Pickering y Sepúlveda se van a sus casas. Si no se conociese la trayectoria anterior y posterior de Prats, de su decisión y del compromiso asumido con su pueblo y su país, de su apego total a la legalidad, se podría hablar de cobardía, de cálculos menores, o de oportunismo. Pero otras son las razones.

Se conocen las de Prats, pues unas las consigna en sus *Memoorias...* y otras las da a entender: o se aplica mano dura a los conspiradores, arriesgando una guerra civil, opción que le repugna o él da un paso atrás, para que Allende cuente con tiempo para llegar a un acuerdo con la DC, respaldado por *el siempre leal Augusto Pinochet Ugarte*.

Sin embargo, de las razones de Allende no queda una constancia escrita, aunque se conocen los parámetros en los que se mueve. Convencido de que por encima de todo está la voluntad de la ciudadanía, ha madurado su decisión largo tiempo y llega a la conclusión de que si no prospera el acuerdo con la DC, convocará un plebiscito para que el pueblo resuelva, una posibilidad que anuncia en público en junio de 1973, horas después del tanquetazo. De esa manera mantendría a Chile dentro del imperio de la Constitución y la Ley. En la medianoche del 23 de agosto el Presidente convoca a los líderes de la CUT, Luis Figueroa y Rolando Calderón, para que coordinen con los generales leales a Prats (Pinochet y Urbina) las acciones para enfrentar una eventual insurrección derechista y coordinar también la destitución al día siguiente de los seis generales conspiradores. Pero Pinochet y Urbina, en ese momento los dos más altos cargos en la cadena de mando del Ejército, alegan que consideran imposible esas destituciones por el riesgo de guerra civil que implican, en su opinión. Allende acepta la posición de que a esas alturas una decisión de depurar el alto mando de las Fuerzas Armadas y de Carabineros no sería acatada pacíficamente y que al menos un sector se alzaría en armas. Quienes apoyan la depuración, como el PS, sostienen que el enfrentamiento armado es inevitable y que siendo así, lo sensato es tomar la iniciativa, respecto al momento y las condiciones, teniendo en alerta a los trabajadores dispuestos a combatir junto a las tropas leales. Después de todo, Allende ha prometido el 29 de junio que si los trabajadores necesitan armas, armas tendrían, llegado el momento y junto a las tropas leales. Pero lo cierto es que el Presidente tiene serias y fundadas dudas sobre la capacidad militar de la Unidad Popular. El PC no está por la labor y lo dice con claridad. La dirección del PS proclama que el enfrentamiento es inevitable..., pero Allende conoce bien a Altamirano, Adonis Sepúlveda, Calderón, Almeyda. Gente de verbo encendido y escasa capacidad de organizar cosas concretas, desde las menores hasta las mayores. De ese Comité Central sólo unos pocos responden, como Schnacke, que cumple a cabalidad la tarea que se le ha encomendado, de hacer funcionar los medios de comunicación gubernamentales y del Partido. Los demás están más preocupados por su lucha interna, fraccional, que por traducir en la práctica su afirmación de que el enfrentamiento es inevitable.

En las bases socialistas la situación es otra. En prácticamente todos los Comités Regionales han cambiado las direcciones y de

ellos, apoyados en los Cordones Industriales, los Consejos Comunitarios y Campesinos, surge una nueva camada de dirigentes. Pero Allende, enfrascado en la tarea de gobernar, no los conoce, sino de manera indirecta. Su idea es todavía la del PS de antes de 1970: apenas 15.000 afiliados, de los cuales seis o siete mil más propensos a las discusiones teóricas que a la militancia activa. Durante el gobierno popular el PS creció hasta tener en 1973 más de 80.000 militantes, la mayoría jóvenes comprometidos con el proceso y dispuestos a dar su vida por él, muchos saben utilizar armas por la instrucción recibida en el servicio militar y mayoritariamente quieren cambiar esa sociedad ya, no en un futuro incierto, no en una segunda etapa. Aunque se llame igual, es prácticamente otro Partido. Sin embargo, esa realidad no le llega a Allende, o le llega distorsionada por el enturbiado cristal del Comité Central, un organismo totalmente superado por los hechos.

Además, las diferencias que se producen en las cúspides de los partidos de la Unidad Popular, no son tales en las bases. En las fábricas, las poblaciones, las minas, los campos y los centros de estudio, comunistas y socialistas trabajan juntos y, en muchos casos, colaborando con los independientes e incluso con sectores de mócrata cristianos. Esa actividad conjunta es particularmente notable en las JAP y en los Comités de Producción. Pero su apoyo a Allende, en el caso de una insurrección castrense, sólo es posible si una parte de las Fuerzas Armadas profesionales continúa subordinada al Gobierno constitucional.

También sabe Allende, y esto por los informes de los servicios de inteligencia, que no contará con el MIR si de combatir se trata, como lo demostrarán los acontecimientos posteriores, al demostrar ese movimiento que no pasa de ser un simple y débil grupo agitador. El problema para el Presidente es cómo contar con unas fuerzas armadas profesionales, armadas y coordinadas y no con el MIR u otros grupos o partidos, desarmados y sin coordinación.

Ante ese cuadro, es comprensible que Allende finalmente tenga que dejar pasar el momento en el que puede forzar una decisión desde posiciones de una cierta ventaja, para confiar en *el siempre leal Pinochet* e intentar un acuerdo con la DC, partido que apoya la conspiración pero piensa en una salida pseudo constitucional, con la renuncia o destitución semi-legal del Presidente y el paso de sus poderes a su sucesor constitucional, el Presidente del Senado, Eduardo Frei.

No obstante, la principal razón por la que Allende no reprime a

los militares de alta graduación involucrados en el movimiento golpista, es porque el mando del Ejército no se atreve a ejecutar las órdenes del Presidente, ante la posibilidad de que ello anticipe o fuerce el enfrentamiento para definir por las armas la situación.

Allende no renuncia a ejercer su cargo constitucional de jefe supremo de las fuerzas armadas. Su profundo humanismo, contrario al derramamiento de sangre y su apego a la concepción de la vía chilena hacia el socialismo como un camino pacífico y no insurreccional, al que no quiere renunciar mientras vea una luz, aunque sea tenue, al final del túnel, no son un obstáculo para su decisión de defender al Estado frente a la insurrección y la subversión. Una prueba es que a finales de agosto dispone el traslado a Santiago de 4.000 carabineros, la fuerza mejor preparada para el combate urbano y que hasta ese momento se ha manifestado como la más decididamente constitucionalista. Allende prevé, como finalmente ocurrirá el 11 de septiembre, que el triunfo o el fracaso del golpe de Estado se decidirá en la capital.

Pero para esa defensa se plantea, en todo momento, que los civiles pueden jugar un papel decisivo siempre y cuando se cuente con la lealtad de un sector de las fuerzas armadas. Lo contrario, lanzar el pueblo desarmado, o mal e insuficientemente armado, y sin mandos militares profesionales, a enfrentarse a unas fuerzas armadas unidas, consideraba que sólo produciría una masacre civil.

Una gran fuerza en desarrollo

El PS llega a mediados de 1973 en pleno proceso de desarrollo de su fuerza numérica, organizativa y política. Un fortalecimiento que le permite tener mil ojos y mil oídos, movilizar a las bases y ser influido por ellas, y haberse convertido en un factor de triunfo, como lo demuestra en el paro de octubre de 1972.

Ese desarrollo le sirve para ocupar fábricas y hacerlas producir con eficiencia, llenar las calles de manifestantes y barrer de ellas a los grupos fascistas. Además, influye en el buen funcionamiento de algunos servicios del Estado como la policía, que tradicionalmente han sido utilizados contra la izquierda y que, conducidos con resolución y tacto político, cumplen su labor a las órdenes del gobierno. El 26 de agosto se tiene una evidencia clara de ello.

Desde un par de semanas antes se sabe en los medios políticos que Roberto Thieme, jefe de los grupos de acción de Patria y Liber-

tad, ha trasladado su cuartel general desde Mendoza, Argentina, a Chile y se mueve en la clandestinidad. El Regional Santiago Centro dispone su búsqueda, en colaboración con la Dirección General de Investigaciones, la policía civil, mayoritariamente leal al Gobierno.

Miembros del Regional acompañan a detectives en varios allanamientos infructuosos en búsqueda de Thieme. En una oportunidad tienen la certeza de haber dado con él, a escasos 300 metros de La Moneda, pero el ultraderechista logra escapar por las terrazas de un edificio de departamentos, dejando la cama caliente y unos papeles sobre la mesilla de noche. El 26, un camarero socialista del elegante restaurante Insbruck, en el barrio Las Condes, ve con sorpresa al buscado Thieme cenando en una de las mesas, acompañado de una decena de jóvenes, hombres y mujeres. De inmediato avisa a su Comunal, de allí dan el alerta al Comité Regional y en contados minutos se presenta en el restaurante una comisión policial, acompañada por militantes socialistas. Ninguno de los comensales opone resistencia, sorprendidos de que pudieran ser encontrados en sus propias madrigueras.

Esa misma noche, Thieme, sin ser sometido a ningún tipo de apremio, como pueden comprobarlo en la mañana siguiente sus abogados y médicos, y como es norma con todos los detenidos durante el gobierno de Allende, confiesa haber participado personalmente en varios atentados, entre ellos el que obligó a Prats y la dirigencia demócrata cristiana a reunirse a la luz de una vela. Pasa a disposición de la justicia dos días después, con cuatro procesos criminales, dos ante la justicia civil y dos ante la militar, por delitos contra la seguridad interior del Estado. Además es acusado de ser el autor intelectual de más de 500 atentados terroristas que han costado siete muertos, más de un centenar de heridos y cuantiosos daños materiales. Por esos días, se cometen una media de un atentado a la hora, buena parte de ellos perpetrados por comandos de Patria y Libertad, cuya dirección en reemplazo de Thieme asume su hermanastro, Ernesto Miller, quien lo anuncia en una entrevista difundida por el canal 13 de televisión (controlado por la DC), en la que reconoce que su movimiento participa en la ola de atentados dinamiteros en todo el país.

Thieme, en su primera declaración ante el juez, dice que los autores del asesinato del edecán naval de Allende, capitán de navío Arturo Araya, fueron marginados de Patria y Libertad, califica al crimen de estúpido y comenta que “si algunos chiquillos se creen

miembros del Movimiento sólo por comprar un arma de fuego, nosotros no podemos controlarlos”.

El PS, en especial sus regionales Santiago Centro, Valparaíso Puerto, Valdivia, Concepción y Santiago Sur, han desarrollado unos servicios de inteligencia bastante eficientes, que hacen fluir constantemente datos de todo tipo hacia sus direcciones y que en los dos meses previos al golpe concentran sus esfuerzos en detectar movimientos golpistas. También funciona un *aparato* del Comité Central, controlado por los *elenos*, llamados así porque sus principales dirigentes, Arnoldo Camú y Rolando Calderón, han militado en los grupos de apoyo que desde Chile trabajaron en 1969 en favor del Ejército de Liberación Nacional (ELN), fundado por el Che Guevara en Bolivia en 1967 y que siguió actuando después de la muerte de su fundador. El PC también cuenta con un servicio de inteligencia, aunque más presto a pasarle su información a la embajada soviética que a su propia dirección, y menos aún al resto de la Unidad Popular, incluido el Gobierno. El MIR, de escasa implantación popular, es prácticamente *todo aparato* y dentro de éste el de inteligencia tiene una importancia preponderante, tanta como para poder hablar de una *espiomanía mirista*. No obstante, separando la paja del trigo se pueden encontrar buenos datos en sus denuncias públicas y también en algunos informes confidenciales que hace llegar al Gobierno.

Este esfuerzo y organización de los partidos de la Unidad Popular, permiten al gobierno de Allende suplir la acción subversiva del oficial Servicio de Información Militar (SIM) que debería estar trabajando para prevenir el golpe, pero desde un principio está controlado por los sediciosos, como el mismo general Prats lo reconoce en sus *Memorias*... Con la excepción del SIM, todos los servicios partidarios antes mencionados hacen llegar a sus direcciones respectivas y al Gobierno unos datos que unidos permiten saber que el golpe está en marcha, por decisión tomada en los primeros días de septiembre, aunque aún no se ha fijado una fecha, establecido un comando único, ni comprometidas las tres fuerzas. La principal duda es la posición del Ejército, donde todavía Pinochet se alinea entre los constitucionalistas.

La Gran Muñeca

El arma principal en que se basa Allende para aplazar una defi

nición de la situación que implique el riesgo de un enfrentamiento armado, cuando todavía Prats, Sepúlveda y Pickering tienen el mando de las tropas, es su extremada confianza en su capacidad para maniobrar, negociar, pactar y llegar a acuerdos, una habilidad que ha desarrollado en sus 40 años de político y parlamentario. Sus amigos y partidarios llaman a eso “la muñeca” de Allende, la *gran muñeca*, esa articulación que le permite manejar situaciones difíciles y conducir con éxito la embarcación por las aguas políticas más tormentosas.

Es la suya una capacidad para discutir y convencer que le reconocen hasta sus más feroces enemigos. El mismo Pinochet, cuando en la mañana del golpe Allende llama a los jefes golpistas a La Moneda para negociar su rendición, se niega a permitir que ningún alto oficial vaya a hablar en persona con él y comunica su negativa al Almirante Carvajal con la frase: “Ese gallo es chueco”, que se puede traducir como: “Ese hombre es torcido, no es recto, no es de fiar”. La autoridad de Pinochet para juzgar la rectitud de Allende es nula, pero esa frase despectiva esconde su profundo temor de que el Presidente logre convencer a los oficiales y, en lo personal, también teme enfrentarse con Allende, por el riesgo de que le suceda lo mismo que a Leigh y Ruiz Ranchau unos días antes. Ninguno de los jefes golpistas tiene agallas para enfrentarse en persona al Presidente y exigirle la rendición.

Otros datos que Allende tiene en cuenta en el análisis que realiza en esos días previos al golpe, es la impotencia de los sectores progresistas de la DC, encabezados por Tomic, Fuentealba, Gabriel Valdés y Bernardo Leighton, partidarios no sólo de llegar a un acuerdo con la Unidad Popular, sino también de apoyar sus conquistas sociales y nacionales, aunque critiquen y se opongan a determinados aspectos, que consideran extremos.

La carta que Radomiro Tomic, el rival de Allende en las elecciones presidenciales de 1970, envía a Prats el 25 de agosto, expresa sin remilgos los temores de ese sector progresista ante el inminente peligro de una dictadura de derechas. En el peligro que amenaza sumergir al país por muchos años, dice, “sería injusto negar que la responsabilidad de algunos es mayor que la de otros, pero, unos más y otros menos, entre todos estamos empujando a la democracia chilena al matadero. Como en las tragedias del teatro griego clásico, todos saben lo que va a ocurrir, todos dicen no querer que ocurra, pero cada cual hace precisamente lo necesario para que suceda la desgracia que pretende evitar. Por lo que toca a usted, es

esta una responsabilidad que la historia no hará recaer sobre sus hombros si finalmente el enfrentamiento, la dictadura y una represión sistemática, cada vez más honda y más encarnizadamente mutilan la unidad esencial de los chilenos”. En términos similares, Prats recibió dos días después una carta de Renán Fuentealba, quien ese mismo día declara por radio: “Nuestro partido está en contra de cualquier intento golpista para derrocar al Gobierno y estará en contra de cualquier gobierno que se instaure como producto del golpe”.

Desde su elección en 1970, Allende busca el acuerdo con la DC en el Congreso, sin renunciar a lo que considera fundamental: mantener las conquistas sociales y el respeto a la legalidad constitucional, y en esa tarea transita en varios momentos sobre el filo de la navaja. De forma semejante, en la DC otro hombre, de gran poder y no menor indecisión, hace menos equilibrios. Eduardo Frei quiere mantener el régimen constitucional, pero empuja a los golpistas convencido de que, desplazada la Unidad Popular del gobierno llegará otra vez la hora de la DC. Aspira en primer lugar a que la presión sobre Allende lo obligue a renunciar y traspasar el poder al propio Frei, Presidente del Senado y primero en la línea sucesoria constitucional o, como última opción, a que las Fuerzas Armadas lo depongan invocando la necesidad de restaurar las garantías constitucionales y le traspasen el poder de la misma manera. Con esa intención, el 31 de agosto el PDC declara roto el diálogo con el Gobierno.

El nueve de septiembre el Consejo Consultivo de Presidentes Provinciales del mismo Partido resuelve: “promover la dimisión del Presidente Allende y la disolución del Congreso Nacional, de modo que el pueblo se pronuncie nuevamente, con la garantía de las Fuerzas Armadas”. Es el triunfo de la derecha de ese Partido, cuyas cabezas visibles son Rafael Moreno, Patricio Aylwin y Eduardo Frei. Y es, en consecuencia, el último aval “legalista” que precisan los conspiradores para lanzarse al asalto final de las conciencias y voluntades de quienes aún vacilan entre los altos mandos de las Fuerzas Armadas, y requisito indispensable para preparar el golpe.

Un pueblo dispuesto a defenderse

Ante la certeza de que el golpe está en marcha, en el campo popular también se toman posiciones. La dirección del PC resuel-

ve prepararse para la ilegalización de la que prevé será víctima si triunfa el alzamiento. En sus declaraciones públicas llama a los trabajadores a resistir al fascismo, pero en lo interno ordena a su aparato de defensa y a su estructura de cuadros que pasen a la clandestinidad. Su renuncia a enfrentar el golpe también obedece a varias razones, aunque se debe reconocer que en su actitud no hay engaños: su propuesta política es impedir la guerra civil, pactar con la DC, devolver gran parte de las empresas estatizadas, intervenidas u ocupadas por los trabajadores y, en suma, consolidar lo ya conquistado y no avanzar más en el camino de los cambios sociales. Una razón para no combatir se deriva de esta posición política, otra se debe a lo que dispone la política soviética para sus seguidores en esa zona y una tercera, de carácter oportunista, es la que le aconseja guardar sus cuadros para más adelante, con la ilusión de que podrá encabezar la resistencia contra una dictadura que piensan que durará poco y mientras ganarse las simpatías de la mayoría de los trabajadores.

El PC dispone de una buena estructura militar, con sus cuadros superiores educados en establecimientos especializados de la URSS, donde han estudiado inteligencia, seguridad y comunicaciones. Pero esa estructura, a cuyo mando está Carlos Toro, es apta para recoger información y proteger sus locales y sus dirigentes, pero en ningún momento es concebida o transformada para llevar grandes contingentes de personas al combate. No lo harán ni siquiera una década después cuando, a destiempo y actuando separados del fuerte movimiento ciudadano levantado contra Pinochet, alentarán y organizarán atentados. Además, por propia decisión, el PC se mantiene al margen de la instrucción militar masiva de trabajadores, pobladores y campesinos.

En el PS las cosas son diferentes, ya que ha desarrollado varios esquemas de defensa. El Comité Central ha delegado en el *aparato* de los *elenos* toda la cuestión relativa a temas militares y éstos desarrollan su labor siguiendo el mismo esquema del PC, pero vinculados a los servicios cubanos de inteligencia. Este aparato se ocupa de la seguridad del Comité Central, gastando buena parte de su tiempo y medios en el espionaje y la lucha interna dentro del Partido, y tiene estructurados un centenar de militantes con un buen adiestramiento para la guerra de guerrillas urbana, aunque sin experiencia en la práctica.

Además, la mayoría de los regionales socialistas, por no decir todos, tienen sus propios esquemas para la defensa. El de Santiago

Centro condena la formación de *aparatos*, por considerar que siguiendo el modelo soviético adquieren un peso superior al de las estructuras políticas, y decide que la formación, instrucción y organización para la defensa es una tarea de toda la militancia, en sus estructuras orgánicas naturales y vinculados estrechamente a las bases no partidarias.

Como excepción de la norma, crea gabinetes de inteligencia y algunos servicios técnicos, entre ellos el de compra y fabricación de armas, esto último bajo la condición rigurosa de hacerlo en tales condiciones de clandestinidad y seguridad que en ningún momento se pudiera convertir en una baza que sirviera a la provocación golpista. A finales de agosto de 1973, y de manera directa y confidencial, la Comisión Política de ese Regional hace saber a Allende que, en caso de necesidad, en una hora puede poner a su disposición un millar de personas con instrucción, organización y mando militar, pero sin armas, explosivos ni municiones y que, con más tiempo, puede seguir incorporando miles de afiliados y simpatizantes dispuestos a defender a su Gobierno.

En las jornadas de mayo, cuando se enfrenta a Patria y Libertad y lo borra de las calles del centro de la capital, el Regional Santiago Centro demuestra que puede movilizar, conducir, coordinar, llevar al combate y al posterior repliegue, al menos a un millar de personas, dato en poder del Comité Central y del Presidente.

Por otro lado, la seriedad de su preparación se puede constatar por la forma en que lleva adelante su programa de fabricación de armas. Este programa debió esperar meses hasta obtener la autorización del Comité Central para ser puesto en marcha. Finalmente, es Altamirano en persona quien da el visto bueno, tras varias tentativas frustradas y obviando al *aparato* que, por motivos fraccionales, no quiere ningún tipo de preparación militar en regionales que escapen a su control. El Regional monta un taller clandestino en una casona del barrio Independencia, insonorizado y con instalaciones de aire, sanitarias y comida para que, en caso de emergencia, pudiera permanecer oculto en su interior varios días un equipo de trabajo. Allí se cava un sótano, al que se accede tras accionar un oculto sistema de pesas que desplaza verticalmente una tapa de hormigón de una tonelada de peso. La calidad de su construcción y de sus normas de seguridad se constata por su supervivencia. Es descubierto recién dos años después del golpe militar, luego de ser traspasado a la Coordinadora de Regionales, una instancia que surge con fuerza en 1974 para reorganizar el PS y que entra después en declive.

En el interior de ese taller se llegan a fabricar tres prototipos de metralletas, siguiendo el modelo de la PAM del Ejército argentino pero aún más simplificado. Tras ser probadas en las estribaciones de los Andes en los primeros días de junio de 1973, una queda en el taller y otras dos son entregadas a Altamirano, para que el *aparato* testifique su calidad y como requisito para que el Secretario General apruebe la financiación necesaria para fabricar 500 unidades. Altamirano la aprueba y por orden suya se libran los primeros 20.000 dólares. En esas fechas también se hacen gestiones en Argentina para *importar* munición ya que en Chile se puede comprar, pero los circuitos del mercado negro están entremezclados con varios servicios de inteligencia y se corre el gran riesgo de que una operación pensada para apoyar al gobierno se convierta en un problema para éste.

En el resto del Regional hay armas largas y cortas, pero en cantidades irrisorias: entre 20 y 30 pistolas y revólveres, y cuatro o cinco escopetas, metralletas y fusiles por cada comuna y cantidades similares en cada gran fábrica o centro de trabajo. Todo ello con un promedio de 40 o 50 balas por arma. Una cantidad suficiente para la autodefensa de locales y empresas, y para enfrentamientos callejeros con las bandas de la derecha, pero totalmente inocua para un combate con tropas regulares.

La dirección de ese Regional decide proceder así por varias razones: porque no quiere dar argumentos al enemigo y porque admite que en ese proceso tiene dos direcciones a las que responder, el Comité Central y Allende. A ambas cabe la responsabilidad de dar el paso de armar a las masas, y en consecuencia son quienes deben tener todos los elementos de juicio para actuar en cada caso. Además, porque la Comisión Política del Regional recibe el compromiso específico del Comité Central y de Allende, de que en el momento oportuno las armas aparecerían, para reforzar con sus militantes a los militares leales. Por último, el Regional tiene suficientes motivos, contactos e informaciones, como para estar convencido de que llegado ese momento habría militares, carabineros y policías leales al Gobierno constitucional. Los hay, aunque carecen de una dirección política y militar en el momento decisivo, la noche del 10 de septiembre. Si los regionales del propio PS no reciben información ni directivas en esa noche, mucho menos pueden recibirlas los militares dispuestos a seguir cumpliendo con la Constitución y las leyes.

En las empresas estatizadas, requisadas o intervenidas y que

están mayoritariamente englobadas en el área de propiedad social, a partir de la constitución de los Cordones Industriales, en octubre de 1972, brotan de forma por lo general espontánea unos sistemas de autodefensa en los que se percibe más voluntad que técnica, organización y armas. En una primera instancia los trabajadores se organizan a partir de los Comités de Producción, y como parte de su responsabilidad de asegurar el funcionamiento de las empresas, instauran turnos de vigilancia para evitar sabotajes y atentados. Sus primeras armas, viejos revólveres, son los que están en los servicios de vigilancia de las empresas, después compran en el mercado paralelo pistolas, escopetas y fusiles, viejos máuseres y alguna metralleta, con escasa munición. De ahí el comentario de Prats cuando algunos políticos de oposición le plantean el problema de las armas en poder de particulares, problema que magnifican. El general les explica que a las Fuerzas Armadas no les preocupan esas armas, pues de nada sirve una metralleta si no se dispone de suficiente munición. Prats les señala que en unos segundos o minutos de uso, el civil poseedor de un arma en tales condiciones se queda sin balas y entonces el artefacto ya no le sirve para nada.

Sin embargo, en una etapa posterior, en esas empresas se toman otras medidas organizativas, como realizar un listado de los trabajadores que han hecho el servicio militar, calificándolos por especialidad, instrucción y conocimientos, y se despliega una frenética actividad de fabricación de *armamento popular*.

La mística de las armas populares es fomentada por la imitación de modelos revolucionarios de otros países, por la presencia de algunos guerrilleros exiliados, fundamentalmente de Brasil, Uruguay, Bolivia, Argentina y Colombia, por el ejemplo y la influencia de los cubanos y por la concepción foquista de miristas y *elenos*. Todos ellos piensan en la acción de pequeños grupos de vanguardia, (cada cual se considera a sí mismo la vanguardia), y se adhieren para acciones tipo comando. Además, fabricar armas populares y dar instrucción de guerrilla urbana en las empresas es una manera de mantener la adhesión y la ilusión de las bases, que quieren defender a su gobierno.

Entre esas armas se fabrican *minas vietnamitas*, llamadas así porque tienen la forma de los característicos sombreros puntiagudos utilizados por los campesinos del Vietnam, granadas para ser lanzadas con fusiles, lanzagranadas, granadas de mano y blindaje de vehículos que se transforman en una especie de tanquetas livianas,

capaces de detener balas de pistola o fusil pero totalmente inservibles contra la artillería.

Pero toda esa actividad sólo sirve para mantener la mística. **D** haberse producido ese armamento en cantidades significativas podría haber sido útil como apoyo a fuerzas regulares leales y seguramente en una etapa posterior al golpe, para combatir desde la clandestinidad al fascismo, pero es claramente insuficiente para enfrentarse sólo con ellas a las Fuerzas Armadas. La cantidad fabricada de ese *armamento popular* es irrisoria y su calidad resulta francamente inferior al producido en las industrias bélicas tradicionales, cuyo control permanece en manos de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

Para derrotar a los golpistas, tal como están planteadas las cosas en el segundo semestre de 1973, es indispensable contar con la lealtad de al menos una parte de las fuerzas armadas, Carabineros e Investigaciones, para sumarle los civiles organizados y adiestrados para combatir a la manera regular, bajo mando militar. Esa salida no es una utopía y lo demuestran experiencias de ese tipo que se han registrado en la historia de varios países de América Latina, en este siglo está muy presente en Chile por haber sucedido en su país vecino, Bolivia, en 1952. Ese año un alzamiento ciudadano acabó con una dictadura y dio nacimiento a un régimen popular encabezado por Víctor Paz Estensoro.

La organización popular, los armamentos improvisados y los aparatos de los partidos pueden servir de apoyo, e incluso ser un factor decisivo para definir el triunfo, pero tal como se presenta el panorama en septiembre de 1973, resultan insuficientes para resolver el problema por sí solos, sin el concurso de los militares profesionales leales. Así lo entiende Allende, en quien prima más, por formación y convicción, la decisión de aplazar lo más posible el enfrentamiento, con la esperanza de finalmente evitarlo. Así lo entienden también el Regional Santiago Centro y otros dos o tres regionales del PS, que se ubican en la línea de apoyar el diálogo con la DC para evitar o postergar el enfrentamiento, a la vez que hacen todos los esfuerzos para defender el gobierno constitucional de Allende. En esa línea están abocados a la búsqueda de contactos e información en los cuerpos armados, compra y fabricación cautelosa de armamento adecuado, adiestramiento y organización de su militancia en escuadras dispuestas al combate. Como resultado de ese esfuerzo, el 11 de septiembre, a las nueve de la mañana el Regional Santiago Centro del PS ya tiene concentrados sus primeros

mil efectivos en la Fundación Libertad, a la espera de las armas que le fueron prometidas por dos conductos: el Gobierno y el Comité Central del propio partido. Pero lo que ocurre entonces se verá más adelante.

CAPÍTULO XVII

El leal dictador

Augusto Pinochet Ugarte, apodado *Pinocho* por sus enemigos y *Tito* por su familia, como diminutivo del *Augustito* inicial y quien daría origen al término *pinochetismo* para referirse a la más atroz dictadura sufrida por Chile y a una de las peores del mundo, nació en 1915 en el puerto de Valparaíso, hijo del agente de aduanas Augusto Pinochet Vera y de Avelinda Ugarte, una mujer con don de mando y dedicada a sus labores.

Pinochet hereda de su madre ese don de mando y la disciplina, que ejerce como hijo mayor sobre sus hermanas, y quienes, recuerda Nena, la menor, sentían hacia él un respeto reverencial. Desde pequeño “vivía jugando con sus tambores y trompetas”, y “con sus soldados de plomo, no perdonaba jamás el cambio de guardia todas las noches”. El primer testimonio es también de Nena y el segundo corresponde a su esposa, Lucía Hiriart.

A los 15 años intenta por primera vez ingresar a la Escuela Militar, ante la indiferencia de su padre y con el apoyo ferviente y decidido de su madre, quien recuerda después el “gran espíritu de servicio” de su hijo porque, dice, está presto siempre a dar una limosna a un mendigo. Además, le gustan el boxeo, las artes marciales y la gimnasia.

Al ser rechazado su ingreso a la Escuela Militar debe seguir sus estudios secundarios en 1931, en los que se destaca en gimnasia, religión y trabajos manuales, pero las pasa muy mal en matemáticas, inglés, física y francés. Ese año es rechazado por segunda vez su pedido de ingreso a la Escuela Militar y vuelve a sus estudios secundarios, en cuarto año de humanidades. En ese curso, según un equipo de la revista *Apsi* que investiga sobre su vida, “padeció el extravío de la comprensión”, ya que sobre siete puntos posibles obtiene las siguientes notas: castellano, 3; historia y geografía, 4; inglés, 2; francés, 2,5; matemáticas, 3; ciencias, 3; física, 2; y química, 2,5; por lo que debe repetir el curso.

Finalmente, al tercer intento logra su propósito y en 1932 ingresa a la Escuela Militar. En su libro *El día decisivo*, el que llegaría a ser

Teniente General da una curiosa explicación de sus sucesivos fracasos: “fui rechazado por mi poca edad o por mi debilidad causada por mi crecimiento muy rápido en esos años”. Prats, nacido también en 1915, ingresó a la Academia en 1931, al primer intento.

En la Escuela, Pinochet es un cadete normal, serio, de buena conducta, ni de los primeros ni de los últimos, una característica que mantendría toda su vida, hasta que después de muchas dudas y vacilaciones resuelve ponerse a la cabeza del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. No es inteligente, pero sí astuto, terco, ordenado y detallista, con un instinto casi animal para advertir el peligro. En 1936 regresa con el grado de subalférez y desde entonces sigue una rutinaria carrera militar, con cambios de destino y ascensos siguiendo el escalafón.

Sus panegiristas lo consideran un gran escritor sobre temas militares, rayano en la genialidad, algo que resulta extraño si se recuerdan sus escasas dotes para prosperar en las materias en las que se necesita un cierto esfuerzo intelectual. De entre sus libros se destacan *Geopolítica* (1968), una obra que pasa desapercibida hasta que el autor se convierte en dictador y cuya lectura quizás hubiese resultado útil a los dirigentes de la Unidad Popular para conocerlo antes del golpe, dado que en una de sus páginas elogia *Mi lucha*, de Adolf Hitler, elogio que, dice, lo hace por su concepción de la propaganda como estrategia revolucionaria.

El dictador presenta ese libro como “el resultado de 15 años de apuntes y análisis realizados durante otros tantos de docencia en el curso Geografía Militar”, y olvida aclarar que, aunque él fue profesor de ese curso, los apuntes eran de otros. Por ejemplo, el coronel Gregorio Rodríguez, pronunció una conferencia en 1950 ante un grupo de alumnos de la Academia de Guerra, entre los que se encuentra Pinochet, y dijo: “Para algunos, la geopolítica no es más que una falsa ciencia ideada por los conductores de una determinada potencia con el objeto de justificar su política expansionista y sus ansias de dominio mundial. Esto, si bien pudo constituir en cierto momento la finalidad de un grupo de gobernantes de ese país y de los pensadores que los asesoraban, la verdad es que, al ampliarse los horizontes, al convertirse en un cuerpo de doctrinas bien cimentadas, ella superó por sí sola tan menguados propósitos”.

En el citado libro, Pinochet escribe: “Para muchos, la geopolítica no es más que una falsa ciencia desarrollada por los alemanes con el fin de justificar su política imperialista y sus ansias de dominio mundial; finalidad que, si bien pudo constituir el objetivo de un determi-

nado grupo de pensadores, la verdad es que al convertirse en un cuerpo de doctrinas bien cimentadas superó por sí sola tan menguados propósitos”. Unas palabras prácticamente calçadas de las pronunciadas por Rodríguez 18 años antes.

La revista *Apsi* recoge un interesante análisis del general argentino Andrés Fernández Cendoya, publicado en la revista militar *Estrategia*, editada en Buenos Aires, en el que dice que “el libro de Pinochet llama la atención no sólo por su simpleza y falta de profundidad, sino también por la falta de actualización conceptual”. Su simpleza lo lleva a plagiar en 1968 una conferencia dictada en 1950, sin siquiera actualizarla. Prosigue su análisis Fernández Cendoya: “Aquí (en el libro de Pinochet) se soslayan temas tan significativos para la geopolítica como la revolución científica y técnica, las contiendas ideológicas, las luchas de liberación, el desarrollo de las armas nucleares y la aparición de nuevos conceptos de integración y colaboración internacional y se ponen de relieve situaciones anacrónicas como la importancia de ciertos recursos de la fauna, según se desprende de expresiones como: ‘En el siglo XVI, Solimán III, sultán de los turcos, llegó hasta Viena con la ayuda de los elefantes’. Este libro es el resultado de una mentalidad política congelada y gravemente desactualizada en el momento en que el mismo es dado a conocer”.

El asesinato en 1970 del general Schneider, antes de que Allende asumiera la presidencia, y del nombramiento de Prats como Comandante en Jefe, cuyas órdenes cumple siempre leal y disciplinadamente, eleva a Pinochet al segundo puesto en importancia dentro del Ejército. Su sentido de la disciplina hace que se indigne cuando la prensa de oposición ataca a Allende, por considerar que se trata de una falta de respeto. En diciembre de 1971, en su condición de jefe de la zona de emergencia de Santiago, anuncia una querrela militar en contra del diario derechista *Tribuna*, y lo hace de tal manera que el diario *Puro Chile*, controlado por el PC, titula: “En Chile no habrá golpe de estado, notificó el general Augusto Pinochet a momios sediciosos de la derecha”. En una conferencia de prensa en la que anuncia la querrela, el general pide a los periodistas: “Por favor, señores, bajen la presión. He pedido en todos los tonos que los diarios no titulen incitando a la violencia. Les solicito nuevamente que asuman sus serias responsabilidades con un mayor nivel de conciencia pública frente a los problemas que estamos viviendo. ¿Qué quieren? ¿Una guerra civil? Porque golpes de Estado no ocurren en Chile”. Son palabras de diciembre de 1971.

A partir de ese momento en varias oportunidades subroga o representa a Prats, cumpliendo siempre a cabalidad sus funciones. El 9 de junio de 1973, al volver el Comandante en Jefe de un viaje por Europa, recibe un informe de Pinochet y ambos coinciden en la necesidad de buscar una salida política a la fuerte lucha desatada entre las corrientes ideológicas. También coinciden en la debilidad que aprecian en el SIM por no investigar las actividades extremistas y violentas de la derecha. No obstante esa coincidencia, Pinochet le hace presente su temor de que los acontecimientos se precipiten y que la oficialidad le exija a su Comandante una definición pública del Ejército.

El 29 de junio de 1973, producido el tanquetazo y una vez rendidos los amotinados, Prats cruza La Moneda y, al llegar a la puerta que da sobre la Plaza de la Constitución, se encuentra con efectivos del Regimiento Buin, con Pinochet al frente, que tenían la misión de atacar a los sublevados desde el norte. Al ver a su comandante en jefe, Pinochet lo abraza, en señal de lealtad y amistad. Días después del golpe frustrado, al dejar José Tóhá el cargo de ministro de Defensa, Pinochet envía una carta a él y a su señora, en la que dice: "Lucía y Augusto les expresan el sentido afecto que tienen por el matrimonio Tóhá Morales y les piden que los sigan considerando sus amigos".

Esos y otros antecedentes hacen que Prats, al verse obligado a renunciar a la Comandancia en Jefe, recomiende a Pinochet como su sucesor, por las tantas pruebas de lealtad que le ha dado y convencido de que ese militar sería capaz de llamar a retiro a los generales más comprometidos con la sedición derechista. Una misión que al parecer Pinochet está dispuesto a llevar adelante pues, nada más asumir la Comandancia, afirma que "la sangre de un general se paga con sangre de generales", aludiendo a que la caída de Prats debería conllevar la salida del servicio activo de los generales que la provocan.

Esas declaraciones provocan un feroz ataque de la ultraderechista revista *PEC*, editada en Santiago por un director exiliado en Argentina y que denota escasa capacidad de previsión del futuro: "En el Ejército, un comandante en jefe, (Pinochet) –que no hará huesos viejos en el cargo– se confesó como un general sin futuro a la altura de Famae, en el curso de un *tour* que realizó a las unidades de la Guarnición de Santiago. El general Pinochet inició el recorrido con la moral muy alta y una divisa en ristre: 'La sangre de un general se paga con sangre de generales'. Hasta este instante, Pinochet no ha

conseguido ni una sola pinta de sangre de alguno de sus generales... El nuevo comandante en jefe, definido como un hombre con mucha voz hacia abajo, pero sin ninguna hacia arriba, fue perdiendo apostura y empaque en la medida que avanzaba en su recorrido".

El 29 de agosto el nuevo Comandante en Jefe se reúne con el cuerpo de generales, con la intención de que *corra la sangre de generales* y les pide que presenten sus renuncias para dejarlo en libertad de acción. Todos aceptan, excepto Viveros, Javier Palacios y Arellano, los más vinculados a la DC. Al decirles que pediría a Allende el uso de la facultad que la Constitución otorga al Presidente de la República de poder ordenar el retiro de cualquier oficial de las Fuerzas Armadas, lo que él llama *el equipo duro* se solidariza con los cuatro que rechazan su intención de pasarlos a retiro y tiene que dar marcha atrás. Horas más tarde le dice a Prats que vivió unos momentos muy difíciles y que considera oportuno dejar en suspenso hasta octubre el llamado a retiro de los generales más revoltosos.

El 7 de septiembre de 1973 Prats recibe una carta de Pinochet, encabezada así: "Mi querido General y amigo". En ella le reitera su afecto y sincera amistad, "cimentada en las delicadas circunstancias que nos ha correspondido enfrentar", lo alaba porque desempeñó todos sus cargos "guiado sólo por un superior sentido de responsabilidad, tanto para el Ejército como para con el país" y le manifiesta que "queda incondicionalmente a sus gratas órdenes, tanto en lo profesional, como en lo privado y personal". Como consecuencia de todas esas manifestaciones, el sábado 8, a una pregunta de Allende, Prats le reitera su creencia en la lealtad de Pinochet, pero le advierte también de que será sobrepasado por los generales golpistas, "porque hasta los oficiales más constitucionalistas entienden que la división de las Fuerzas Armadas es la guerra civil".

Hasta ese día todo indica que Pinochet no está comprometido con el golpe. Sabe que se conspira, aunque no maneja toda la información y aún no está convencido de que un nuevo intento pueda triunfar. Ese sábado, (tres días antes del golpe), el general Arellano Stark asume el compromiso ante los demás conspiradores de ir a hablar con Pinochet e informarle de la decisión de alzarse, pedirle que se decida de una vez y que asuma una posición clara, pero éste no lo hace.

Ese mismo sábado Allende envía al médico Danilo Bartulín a pedir al socialista Adonis Sepúlveda, quien preside el comité ejecutivo de la Unidad Popular, la respuesta de esa coalición a la propuesta presidencial basada en cuatro opciones: 1) Llegar a un acuer-

do con la DC; 2) Convocar un plebiscito; 3) Constituir un gabinete militar; 4) Si no están de acuerdo con ninguna de las tres opciones anteriores, que los dirigentes de los partidos de la Unidad Popular propongan una. Y, si no estaban en condiciones de responder positivamente a ninguna de las tres primeras ni de proponer otra distinta, que lo dejaran en libertad para tomar las decisiones que considerase oportunas durante tres meses. El Presidente entregó esa propuesta a la dirección de la Unidad Popular en los primeros días de septiembre y la falta de respuesta retrasó su decisión de anunciar el plebiscito. De ahí que el sábado, ante la precipitación de los acontecimientos, enviase a Bartulín a requerir una respuesta urgente a Sepúlveda. La respuesta es que no están de acuerdo con ninguna de las cuatro opciones y que tampoco logran consenso para proponer una quinta.

Al recibir esa respuesta, Allende llama al jefe del PC, Luis Corvalán, con quien se reúne a las diez de la mañana del domingo 9 y logra de éste el apoyo para convocar el plebiscito. Asegurado al menos el apoyo de uno de los dos grandes partidos de la Unidad Popular, Allende convoca una hora después a Pinochet y a Urbina a su despacho y les informa de su decisión de convocar el plebiscito, por lo que estudia con ellos las medidas militares que se deberán adoptar para su realización, ya que las Fuerzas Armadas tienen la misión constitucional de asegurar todas las votaciones en el país.

El domingo 9 por la tarde el futuro dictador recibe en su casa la visita del general Gustavo Leigh, quien le dice: "Decídete, porque nosotros ya lo estamos. Si no lo haces, vamos a ir solos con la Marina y el Ejército se quedará fuera". Mientras están hablando y sin que Pinochet responda a Leigh, llegan los almirantes Carvajal, Huidobro y González, con una carta manuscrita del almirante Merino, que expresa: "Gustavo y Augusto, bajo mi palabra de honor, el día D será el 11 y la hora H 06:00. Si ustedes no pueden cumplir esta fase con el total de las fuerzas que mandan en Santiago, explíquenlo al reverso. El almirante Huidobro está autorizado para traer y discutir cualquier tema con ustedes. Los saluda con esperanzas de comprensión, Merino". En la hoja dos hay una posdata que dice: "Gustavo: Es la última oportunidad. J. V." y "Augusto:... usa todas las fuerzas del primer momento, no minimices al adversario. Pepe".

Leigh firma el conforme en el acto. Pinochet duda unos instantes, se vuelve, va hasta su escritorio, busca entre los papeles, abre un cajón, saca una pluma y un timbre, firma y rubrica. La suerte del gobierno popular está prácticamente decidida. Pero Pinochet toda-

vía se toma un tiempo más antes de que esa decisión se torne irreversible: el 11 de septiembre, cuando ya los jefes de la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros están en sus puestos de mando desde las seis de la mañana, él se demora en su domicilio hasta las 07:10. A esa hora, su chofer lo levanta y lleva hasta la casa de su hija, donde se queda unos minutos contemplando a su nieto que duerme y llega a su puesto de mando más tarde, a una hora que en ningún caso es antes de las 07:40, cuando ya está claro que los golpistas han logrado movilizar a las Fuerzas Armadas como un bloque, casi sin oposición y que Allende está en La Moneda prácticamente indefenso, rodeado por un pequeño grupo de leales. Pinochet mismo reconocerá, en una entrevista publicada por la revista *Hoy* en 1986, que el puesto de mando se instala "antes de las 08:30". Es decir, que en septiembre de 1973 juega sobre seguro, cuando el golpe en marcha se encuentra con una oposición mucho menor de la esperada.

CAPÍTULO XVIII

Las vísperas

Ya van a ver/ ya van a ver/ cuando los obreros/ tomemos el poder, corean grupos de una nutrida manifestación del PS al pasar delante del Ministerio de Defensa, ubicado frente a La Moneda, el domingo 9 de septiembre de 1973, cuando regresan desfilando por la Alameda desde un acto en el Estadio Chile, en el que su Secretario General, Carlos Altamirano, acaba de pronunciar el discurso principal.

Los dirigentes del Regional Santiago Centro se desesperan a lo largo de las columnas de manifestantes intentando acallar esos gritos y reemplazarlos por: *Crear, crear/ poder popular; Avanzar, sin transar/ Gobierno Popular* y otros por el estilo. Por momentos, la mayoritaria presencia de sus militantes y la coordinada organización de las columnas se imponen para tapar con sus voces las consignas que consideran una provocación tonta y peligrosa.

Pero es inútil, una y otra vez la incandescente e inoportuna consigna vuelve a prender, mientras en el gris edificio del Ministerio no se alcanza a percibir la menor señal de vida. Los militares de turno callan, escuchan y toman nota. Los ánimos de los manifestantes han sido caldeados por el fogoso discurso de Altamirano. Éste, en su intervención y contrariamente a lo que impulsa desde su gobierno Salvador Allende, se manifiesta categóricamente en contra de todo diálogo, negociaciones o acuerdos con la DC. Explica su intervención en el caso de los suboficiales y marineros de la Armada detenidos, torturados y acusados de subversión por la oficialidad y afirma: “aquí hay un Partido resuelto a resistir cualquier intento golpista. Chile se convertirá en un nuevo Vietnam Heroico si la sedición pretende enseñorearse de nuestro país”.

Su alocución es consecuente con un anuncio mandado a publicar en los periódicos por el Comité Central del PS, en el que se proclama que “cualquier fórmula de transacción de la DC, sólo sirve para alentar a los grupos facciosos que operan en su seno y en el resto de la reacción”, pues “solo es posible un diálogo con aquellas fuerzas políticas que se definan claramente en contra de los explo

tadores, en contra del imperialismo y en apoyo del proceso revolucionario”.

Altamirano amenaza a Allende con sacar a su partido de la coalición gobernante, pues, dice, los socialistas “sólo estarán con el Gobierno y combatirán a su lado, si éste cumple lealmente el Programa de la Unidad Popular, que dice claramente que debe crearse el Poder Popular para que sea ejercido por los obreros y los campesinos de Chile”. Al escuchar sus palabras muchos piensan que tiene a sus órdenes a un poderoso aparato militar socialista, aliado a sectores castrenses leales, de manera de poder oponer al diálogo y al acuerdo con la DC, una opción de enfrentamiento con posibilidades de victoria. Por no tener, el 11 de septiembre por la noche Altamirano ni siquiera tiene una casa donde dormir. Así lo rememora a su retorno a Chile en junio de 1987, Gustavo Ruz, miembro también de aquel Comité Central, quien además de recordar aquella orfandad, afirma que “Altamirano no estuvo a la altura de las circunstancias. Yo tampoco lo estuve, pero su posición aparte de equivocada fue inconsecuente”.

Con mayor realismo y sensatez, pero pensando erróneamente que aún cuenta con la lealtad de sectores importantes de las Fuerzas Armadas y sobre todo de Pinochet (quien, fiel a su doble juego, esa misma semana lo alerta acerca de que se perciben síntomas inquietantes); y a la vista de que la dirección de la DC, controlada finalmente por su sector derechista, se vuelca en favor del golpe, Allende se ha decidido por su última baza de carácter político: convocar un plebiscito para que la ciudadanía decida un camino que permita salir de la crisis institucional. En su análisis, y aunque su opción es la de jugarse para ganar la consulta electoral, también entra la posibilidad de perder y considera que, incluso perdiendo, la salida sería positiva, pues se evitaría el golpe y el riesgo de una guerra civil y se mantendría el imperio de la Constitución y de las leyes.

Mientras el PS realiza su acto en el Estadio Chile, el Presidente ha recibido a Pinochet y Urbina, quienes reiteran su visión de síntomas inquietantes por todas partes. Es entonces cuando les anuncia su decisión de convocar un referéndum. Joan Garcés recuerda cómo Allende le transmite a él, al día siguiente, la expresión de asombro en los rostros de los dos generales al recibir la noticia: “Los ojos se les pusieron redondos, y Pinochet preguntó: ‘Pero, Presidente, ¿es una resolución definitiva y firme la de llamar a un referéndum?’; Sí, general, está resuelto”. A lo que Pinochet responde: “Eso cambia toda la situación, Presidente. Va a ser posible resolver el conflicto

con el Parlamento, y esto despeja la tensión”. Por la mañana de ese domingo, todavía el futuro dictador sigue entre calculador e indeciso, aunque los conspiradores que impulsan el golpe ya han fijado una fecha para su alzamiento, el 14 de septiembre, aprovechando que ese día todos los años se movilizan las Fuerzas Armadas para ensayar el desfile del 18, Día Nacional de Chile. Eric Schnacke, antes de comenzar el acto en el Estadio Chile el domingo 9, advirtió a un miembro de la dirección del Regional Santiago Centro en el transcurso de una breve conversación sobre un acto que pensaban realizar el jueves: “¿El jueves? Cuidado, parece que es el día D”. Aunque existen diferencias sobre los días fijados para el alzamiento, comienza a filtrarse la información de que ya hay una decisión tomada por el núcleo central de los conspiradores.

En la prensa de ese día nueve se recoge un abierto llamado del presidente del PN, Sergio Onofre Jarpa, dirigido a las Fuerzas Armadas, pidiéndoles que derroquen al Presidente y una declaración del MIR, en la que trata al primer magistrado de *Señor Allende*, siendo que antes le decían *compañero*. Ese movimiento lo acusa de proponerse “como agente de la recomposición reaccionaria de las Fuerzas Armadas” y califica al plebiscito como “una fórmula honorable de capitulación y desalojo para el Gobierno”. Allende sabe que el PN, la DC, la ultraderecha y los conspiradores de las Fuerzas Armadas están pisando fuerte el acelerador, y cuenta también con informaciones acerca de que el día D está fijado para el viernes 14. El sábado ocho al mediodía lo comenta en un almuerzo que comparte con Prats y el ministro Fernando Flores, del MAPU, uno de sus más brillantes colaboradores. Prats recuerda que el Presidente “pese a lo cansado de su apariencia, me sorprende por su optimismo, en medio de tan lúgubres momentos para él” y le expone su tesis sobre la situación: “el PDC tratará de provocar su renuncia, logrando una declaración de inhabilidad del Parlamento. Ésto se apoyará con una especie de ultimátum de Aylwin, que le lanzará el jueves 13 en una gran concentración pública de la democracia cristiana”.

Ante esas perspectivas, Allende añade que se adelantará llamando el lunes 10 a un plebiscito. En su análisis, incluye la posibilidad de perder, aunque lo consideraría una honrosa derrota para la Unidad Popular “porque habrá una expresión mayoritaria del pueblo que le permitirá evitar la guerra civil, tragedia que ni la más cara consideración partidista me inducirá a promover”.

Prats lo mira estupefacto, como si no hubiera entendido bien lo que está oyendo y ante la penetrante e interrogadora mirada que su

estupefacción origina en Allende, piensa que éste está nadando en un mar de ilusiones y le dice: “Perdone, Presidente, ¿cómo puede hablar de un plebiscito, que demorará 30 o 60 días en implementarse, si tiene que afrontar un pronunciamiento militar antes de diez días?”.

El general le transmite con cuidado su visión de los hechos, basada sólo en el análisis de la marcha de los acontecimientos, en el inevitable avance de la tragedia griega de que habla Tomic, y le expresa su convicción de que es inminente un golpe, blando o cruento según sea el sector duro de la DC o la derecha económica quien dé el empujón decisivo a las Fuerzas Armadas.

Allende, en tono alterado, le replica: “¿Entonces, usted no cree que habrá algunos regimientos leales al gobierno, capaces de contener a los golpistas? ¿Entonces no cree en la lealtad de Pinochet, a quien yo nombré Comandante?”.

“Presidente - responde a su vez y con calma Prats- yo creo en la lealtad de Pinochet y también en la de Leigh, pero ellos serán sobrepasados por los generales golpistas, como lo será Montero (el Comandante de la Armada) por Merino, en forma tan sorpresiva, que no se producirá hacia abajo el quiebre de la verticalidad del mando, porque hasta los oficiales más constitucionalistas entienden que la división de las Fuerzas Armadas es la guerra civil”.

A continuación se produciría uno de los momentos más dramáticos en la relación de esos dos hombres que dan la vida por el futuro de Chile, víctimas ambos después de Pinochet. Perplejo ante el análisis de Prats, el Presidente, con un cierto tono sarcástico, le pregunta: “¿Qué salida ve usted, entonces, al problema que enfrenta la Unidad Popular, partiendo de la base de que he tratado hasta el último momento de lograr un entendimiento con la democracia cristiana y que no quiero la guerra civil?”. “Que el lunes usted pida permiso constitucional por un año y salga del país. Es la única fórmula que queda para preservar la estabilidad de su gobierno, porque volverá en gloria y majestad a terminar su período”, es la rápida y meditada respuesta.

“Eso jamás”, es la réplica, que tiene más énfasis en la mirada que en las palabras. Prats entiende el mensaje y dice: “Olvídese, Presidente, no he dicho nada”. El diálogo, registrado ante un mudo Flores, termina en una despedida afectuosa, con Allende recomendando al general que se preocupe por su seguridad personal, ya que tiene informaciones de que grupos fascistas quieren asesinarlo.

La decisión presidencial de convocar el referéndum, aunque todavía no se ha anunciado públicamente, ha trascendido entre los cir-

culos bien informados, después de que Allende hablase al respecto el domingo nueve de septiembre a partir de las diez de la mañana sucesivamente con la dirección del PC, con Pinochet, Urbina y con dirigentes del PS. No es de extrañar, por lo tanto, que su intención trascienda en círculos más amplios.

Democracia Cristiana, el factor clave

El factor clave, decisivo en ese momento para anticipar el golpe de Estado, es el control del PDC por el sector derechista de su dirección. El senador Renán Fuentealba, ex presidente de esa formación política y decidido partidario de la continuidad constitucional, envía un mensaje a Allende, el lunes 10, por medio de la periodista Frida Modak: “No confie para nada en el PDC. El único problema de Aylwin consiste en cómo deshacerse de Allende más pronto y con menor costo”.

El referéndum, cualquiera fuese su resultado, alejaría a la DC de la Presidencia de la República. Si lo ganaba el gobierno, Allende podría culminar su mandato constitucional en 1976, y si lo perdía debería convocar a elecciones generales. En esas circunstancias, nadie le puede asegurar a Frei y Aylwin que su Partido no volvería a sufrir rupturas, como las que dan nacimiento al MAPU y a la IC, escisión esta última en la que pierde a toda su organización juvenil. La dirección de la DC apuesta porque Allende renuncie, presionado desde todos lados, o que sea inhabilitado por el Parlamento. En cualquiera de esas dos circunstancias la Presidencia recaería en Eduardo Frei, en tanto que Presidente del Senado quien, además, podría volver a ser candidato presidencial y tienen claro que una cosa es que el Ejecutivo durante el proceso pre-electoral esté en manos de Allende, y otra que lo esté en manos de Frei. No es de extrañar, entonces, que dentro del Ejército los más decididos a dar el golpe sean Arellano Stark y Bonilla, dos generales articulados con la DC. Su decisión es la que arrastra a los demás. Sergio Arellano Iturriaga, miembro del PDC, hijo del general Sergio Arellano Stark, resume en 1988 esa posición, una opinión doblemente valiosa porque refleja tanto el sentir de la DC como el de los militares vinculados a ese partido: “así como mis camaradas de partido, consideraba legítima la intervención militar, pero en ningún caso la implantación de una dictadura. De hecho creía que el propio Bando 5 (de la Junta Militar, en septiembre de 1973), redactado fuera del Ministerio de Defensa y en el

que participaron otros militantes del partido, expresaba lo que era la posición mayoritaria del país”.

Por regla general, y en Chile también vale esa regla, los militares son mayoritariamente profesionales sin una definición política clara, con minorías muy definidas en posiciones de ultraderecha y otras minorías (también muy definidas) en la defensa del poder constitucional. Un artículo de primera página, con grandes titulares, de *La Aurora de Chile*, lo señala así el 19 de julio de 1973: “Hay algunos malos uniformados que son fascistas, así como hubo un Souper y un Viaux; son los menos, y se sabe quiénes son. Las Fuerzas Armadas en su conjunto no son fascistas, y no oirán los cantos de sirena de los enemigos del pueblo. Hay consideraciones de defensa nacional, de supervivencia de la sociedad chilena, que están por encima de las diferencias políticas. Y una guerra civil entregaría al vencedor un país calcinado hasta sus raíces, desangrado, inerte, ante las aspiraciones expansionistas de algunos vecinos... Los militares serán disciplinados, pero no imbéciles”.

Al comenzar el proceso que lleva al gobierno a la Unidad Popular, en 1970, la ultraderecha en el interior de las instituciones militares se reduce a Viaux, a Marambio y a unos pocos oficiales más. De igual forma, son muy pocos los que simpatizan con el PS, heredero de la tradición de su fundador, el coronel Marmaduke Grove. En cuanto al PC, es rotundamente rechazado, por la vigencia de la Doctrina de Seguridad Nacional y Seguridad Hemisférica, ya que está comprobado que ese partido depende de Moscú.

Sin embargo, esa situación varía paulatinamente durante el gobierno popular, en la misma medida en que cambia el escenario social y en el que actúan las *usinas* de acción propagandística y psicológica de la oposición, superpuestas a la desestabilización económica y social provocada por los propios cambios sociales, por el bloqueo y por la acción concertada de quienes vieron afectados sus privilegios. También por el contacto de las Fuerzas Armadas con los diversos estamentos gubernamentales. Por esas razones, a principios de septiembre de 1973 la situación interna de las Fuerzas Armadas es radicalmente distinta a la de finales de 1970 y, además, varía mucho en cada uno de sus cuerpos.

En el Ejército la mayoría de su oficialidad sustenta la Doctrina Schneider, que defiende la profesionalidad y la sujeción de las Fuerzas Armadas al poder civil. La negativa a darle su apoyo a Prats cuando éste es blanco de la acción psicológica de los golpistas y se ve obligado a renunciar, se debe considerar a la luz de dos hechos

de gran impacto entre los oficiales. El primero, que él pierde la confianza y el apoyo de la mayoría de la oficialidad porque ésta considera que toma posiciones políticas definidas, en favor de la Unidad Popular. En ese sentido, la propaganda y la acción psicológica de los conspiradores surte su efecto y coloca a Prats ante los ojos de los oficiales como un hombre del gobierno y de la Unidad Popular. En ese sentido, insiste esa propaganda, se aleja de la Doctrina Schneider. El segundo, que su sucesor en la Comandancia es su más leal colaborador, quien le sigue en el escalafón. Vale decir que con la salida de Prats se mantiene la disciplina y la estructura profesional del Ejército.

El Cuerpo de Carabineros es mayoritariamente leal al Gobierno y, por definición, el más sujeto al poder civil. En los meses previos al golpe no se han detectado actividades conspirativas en su seno. Algunos de sus generales, en los más altos escalones después de su director general, están identificados como ultraderechistas, pero están destinados a cargos burocráticos, en oficinas, sin mando de tropas.

El generalato de la Fuerza Aérea, con la excepción de Van Schoven, es decididamente golpista, pero a la vez consciente de que sólo con aviones es imposible pensar en el triunfo de un alzamiento contra el poder constitucional.

En la Armada se vive una situación especial. La mayoría de su oficialidad superior también es golpista, pero en la suboficialidad y en la marinería la situación es radicalmente opuesta. En ese cuerpo se insinúa una división horizontal que da lugar a enfrentamientos, detenciones y torturas de suboficiales y marineros, y denuncias y procesos que involucran a los máximos dirigentes del PS, Altamirano; el MAPU, Óscar Garretón y el MIR, Miguel Enriquez. Activistas del MIR toman contacto con algunos suboficiales, con la intención de aplicar su tesis de que en el seno de las Fuerzas Armadas también se resolvería la cuestión *clase contra clase*, (los suboficiales y la marinería representarían a los trabajadores y los oficiales a la burguesía). Su primitivismo ideológico resulta paralelo a la irresponsabilidad con que encaran sus escasos trabajos específicos en ese campo, un trabajo más orientado a satisfacer a su propia militancia y a servir de apoyo a campañas de propaganda, que a un efectivo combate del golpismo.

Uno de los ejemplos más significativos de esas acciones es la reunión a la que, a través de esos activistas del MIR, un grupo de suboficiales y marineros invitó a Enriquez, Garretón y Altamirano,

reunión que se celebra en julio de 1973, y en la que los dirigentes políticos son informados de un plan urdido por oficiales de la Armada para dar un golpe de Estado entre el ocho y el diez de agosto. Altamirano afirmará después que él únicamente asistió a esa reunión porque fue invitado, lo que reduce toda su participación en el asunto, y que en el curso de ella recibe una información pormenorizada de los días, horas y lugares en los que se reúnen los conspiradores, altos mandos de la Armada en vinculación con algunos miembros de la misión naval norteamericana.

La reunión es detectada por el servicio de inteligencia de la Armada, los marinos y suboficiales participantes son detenidos, torturados y sometidos a un proceso judicial ante los tribunales de ese cuerpo armado. El 25 de agosto la Armada entrega oficialmente una nómina del *personal sorprendido en actividades subversivas*, a los que acusa de pretender bombardear la Escuela Naval desde los buques de guerra Latorre y Blanco Encalada y menciona la reunión en la que participan Altamirano, Garretón y Enríquez. La derecha, al conocerse las detenciones, acusa a los tres dirigentes izquierdistas de intentar subvertir a la Marina y monta una campaña orientada a convencer a los oficiales de las Fuerzas Armadas de que el Gobierno impulsará la tesis de *clase contra clase*. Por los marinos y suboficiales detenidos llegan a interceder hasta el Cardenal Raúl Silva Henríquez y Radomiro Tomic.

Los 34 apresados envían una carta a Allende, que Altamirano lee en público el nueve de septiembre, en el acto del Estadio Chile, denunciando la conspiración y las torturas. Altamirano afirma que se volverá a reunir con militares o marinos cada vez que alguien le quiera denunciar una conspiración contra el gobierno popular.

Es prácticamente seguro que Altamirano no es el promotor de la actitud de los marinos presos y torturados. Por sus características personales y por su actividad pública como senador y dirigente partidario, es inverosímil pensar que organice por sí sólo esos contactos, entrevistas y actividades, sean las que les atribuyen los mandos de la Armada o la que asumen los marineros presos, de haber intentado "por todos los medios comunicarle al pueblo y al gobierno de este golpe de Estado que planificaba la oficialidad golpista de la Armada", como señalan en la aludida carta. El primer supuesto, de organizar una infiltración en la Armada, no entra dentro de la concepción de Altamirano ni de ningún otro dirigente socialista con alguna responsabilidad, sean miembros del Comité Central o de sus regionales más importantes. Todos esos dirigentes sostienen que

existen oficiales leales y que en el caso de un golpe se produciría un corte vertical y no horizontal en las Fuerzas Armadas, con oficiales, suboficiales y tropas de cada lado. Además, en el supuesto de que se hubiera propuesto realizar alguna actividad como la denunciada por la Armada, en ningún caso lo haría personalmente, tanto por razones elementales de seguridad como porque la operación habría estado a cargo del aparato pleno o de un comité regional.

En las supuestas pruebas aportadas por la Armada no se menciona a ningún otro socialista más que Altamirano. Por ello, la hipótesis de su actividad conspirativa puede ser descartada por completo. En cambio, los hechos desatados el 11 de septiembre de 1973 son pruebas irrecusables de que las denuncias de los marinos presos eran ciertas, ya que la mayoría de la alta oficialidad de la Armada participa activamente en el golpe de Estado contra el gobierno constitucional y es uno de los núcleos promotores de la sublevación.

Tampoco es creíble que Altamirano promueva la denuncia de los marinos tal como ellos la conciben en su carta. Un partido en el Gobierno, como lo hizo el PS en muchos otros casos durante todo el proceso, cuando le llega el conocimiento de actividades conspirativas entrega esa información al propio Presidente, si es un caso de extrema gravedad, al ministro del ramo o a la dirección de la Policía, que está a cargo de un socialista, en los casos menos graves o, incluso, lo normal es delegar su seguimiento a un regional, sin levantar ruido. Pero en ningún caso se ocupa de ello personalmente el secretario general del Partido.

En lo que a Altamirano y Garretón se refiere, lo único comprobado, admitido por ellos y sometido luego a debate en sus partidos respectivos, es que asisten a una reunión y escuchan lo que quieren contarle quienes invocan la representación de ese grupo de marineros y suboficiales. No cabe la misma certeza con respecto a Enríquez, cabeza de un grupo, el MIR, que confunde con facilidad la realidad con sus deseos y sus deseos con la realidad. Hasta qué punto el MIR promueve esa actividad de los marinos, dónde empieza y dónde termina la manipulación de los servicios de inteligencia que responden a los conspiradores de la Armada, es algo que no queda claro. Treinta años después esos hechos siguen en la oscuridad.

El lunes 10 de septiembre, el país amanece paralizado por la huelga de camioneros y con la mayoría del Parlamento en rebeldía institucional, dando un respaldo *legal* al golpe. Además, se inicia un nuevo paro del comercio detallista, los médicos declaran otra huelga por tiempo indefinido, los pilotos huelguistas de LAN Chile lle-

van sus aviones a los hangares militares para evitar su requisición por el gobierno, dos centenares de mujeres opositoras se manifiestan frente al Ministerio de Defensa pidiendo el derrocamiento del Gobierno, regresa a Chile el exiliado jefe de Patria y Libertad, Pablo Rodríguez, y se denuncian torturas a trabajadores, perpetradas por efectivos de la Fuerza Aérea actuando en misión oficial ordenada por su Comando en Jefe.

Los obreros arrestados por el allanamiento que efectivos de esa fuerza realizan en la fábrica Textil Sumar, denuncian que fueron “humillados, vejados, heridos y golpeados brutalmente por los militares” durante los interrogatorios. Así mismo, se producen atentados en varios barrios, se vuelan cables de alta tensión y se allanan empresas del área social, en un clima de tensión creciente. En las poblaciones, los vecinos se turnan para montar guardia, al igual que en los centros de trabajo y en los locales de los partidos de la Unidad Popular.

Entre tanto, la noche del 9 de septiembre, al conocer la decisión de Allende de anunciar ese lunes 10 el plebiscito que dejaría sin argumentos suficientes a los conspiradores, éstos deciden anticipar la fecha y reciben la adhesión de Pinochet.

Por la mañana, en la embajada de Bulgaria se celebra la fiesta nacional de ese país y asisten personalidades nacionales y extranjeras, entre ellas el secretario general del PC, Luis Corvalán, y el embajador de los Estados Unidos, Nathaniel Davies, quien acaba de regresar de los Estados Unidos, informado ya de que el golpe está en su hora decisiva.

Sobre las diez de la mañana del lunes Allende desciende de su coche en la acera de la Plaza de la Constitución, a la altura del Hotel Carrera y se dirige caminando hacia la entrada principal de La Moneda, cruzándose con unos pocos transeúntes, la mayoría de los cuales lo aplauden y vitorean. Él responde alzando el brazo, sin detener la marcha pero con gesto tranquilo y seguido de su reducida escolta habitual.

Casi a la misma hora Pinochet “informa” al ministro de Defensa, Letelier, le miente diciéndole que las guarniciones están tranquilas y que ha ordenado el acuartelamiento del Ejército en prevención de los disturbios que se pudieran producir como rechazo derechista al discurso de Altamirano en el Estadio Chile. Después cita en su despacho a los generales Bonilla, Brady, Benavides, Arellano, Palacios y al coronel Geiger. Momentos antes de sentarse a almorzar con ellos, les pide su palabra de honor de que guardarán el secreto acer-

ca de lo que va a comunicarles, les comunica la decisión golpista adoptada la noche anterior y les asigna sus misiones respectivas. Durante ese almuerzo se les unen los generales del aire, Leigh y Viveros.

Los complotados hubiesen preferido dar el golpe de Estado ese mismo día para anticiparse al anunciado mensaje de Allende al país. Sin embargo, cuando analizan esa posibilidad, en la tarde del domingo, comprueban que les queda poco tiempo para convocar de regreso a los cuarteles a los oficiales, suboficiales y soldados que están de licencia de fin de semana. En consecuencia, las misiones asignadas lo son para el martes 11 de septiembre.

De forma simultánea, un grupo de generales complotados, encabezados por Arellano Stark, se reúnen a primeras horas de la mañana, sin Pinochet. En esa reunión analizan los planes de movilización que aplicarán, y a los que en declaraciones de años posteriores el dictador se referirá como preparados específicamente para la sublevación. En realidad, se trata de los rutinarios planes que todos los Ejércitos del mundo actualizan y reactualizan cada tanto, para enfrentar huelgas, catástrofes naturales o insurrecciones, y que ellos emplean para el golpe.

También, a la misma hora en que Pinochet almuerza con el estado mayor de los golpistas del Ejército y la Fuerza Aérea, Allende lo hace con el ministro de Defensa, Orlando Letelier; el periodista y asesor Augusto Olivares, *el perro*; el ex ministro y gran amigo suyo, José Tóhá; el ministro del Interior, Carlos Briones; el ex ministro de Justicia, Sergio Bitar; y el asesor Joan (Juan Enrique) Garcés. El siguiente es el resumen de la conversación que sostienen, según el recuerdo de Garcés:

”Allende: He sabido que los aviones DC-8 de LAN se encuentran en la base aérea de Cerrillos.

”Tóhá: Está prohibido que los aviones civiles se posen en las bases militares.

”Allende: Le pedi explicaciones al comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Me respondió que los habían llevado allí los pilotos que se declararon en huelga el viernes pasado, según Leigh ‘para protegerlos’. Le pregunté de quién trataban de proteger los aviones, ¿del gobierno acaso? Dice que la Fuerza Aérea no cuenta con pilotos para mantener el servicio regular de pasajeros de los DC-8, pero que en cambio sí los DC-4, que van a ser movilizados para paliar los efectos de la huelga.

”La Fuerza Aérea tenía previsto allanar esta tarde tres de las em-

presas de Santiago. He dicho a Leigh que suspenda el operativo. He ordenado también suspender los allanamientos en todo el país, mientras se comunica a las autoridades militares un nuevo instructivo sobre el particular. En éste se indicará que la tarea de llevar a cabo los allanamientos corresponde a Carabineros y que a las Fuerzas Armadas sólo compete actuar en los casos graves.

"Tohá: En esta última forma se hallaba previsto en el proyecto original de la ley de control de armas de 1972, elaborado conjuntamente por el Gobierno y el Alto Mando de las Fuerzas Armadas. En el Parlamento, la oposición logró alterar la disposición.

"Olivares: Anteanoche, en el desalojo y allanamiento del canal 9 de televisión, Carabineros trataron con consideración a los trabajadores, sin que se produjera ninguna vejación ni violencia. Muy diferente de lo que ha ocurrido con los allanamientos hechos por los militares.

"Allende: Leigh me decía: 'Nosotros no tenemos interés especial en allanar únicamente a los trabajadores. ¿Pero, por qué nadie denuncia a los centros de la oposición para que también los allanemos?'

"Tohá: Eso es una argucia.

"Letelier: Tengo incoados más de treinta sumarios internos en las Fuerzas Armadas. Entre ellos, contra el capitán Ballas, que participó en la manifestación contra la residencia de Prats, por las denuncias de torturas de marinos y también por la difusión de esos panfletos de Valparaíso. (Se refiere a unos panfletos impresos por la Marina y distribuidos en esa ciudad portuaria, que terminaban con la frase: 'Las FFAA. son garantía de orden, seguridad y bienestar para todos los chilenos', *nota del autor*).

"Letelier: Si no nos derrocan esta semana, no caeremos nunca. Todo lo han venido preparando para que explote ahora.

"Briones: Vamos a nombrar de inmediato a Tohá director general de seguridad, función nueva que tendrá a su cargo la dirección de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones. Hay que acabar con el terrorismo".

La conversación de los comensales muestra su aprehensión por la actitud de los jefes militares, pero también que siguen adoptando decisiones, como ordenar la suspensión de los allanamientos en aplicación de la ley de control de armas y agrupar los servicios de inteligencia bajo el mando de Tohá. Y, en las palabras de Letelier, se nota el convencimiento de que hay un golpe en marcha, aunque cree que si no se produce y triunfa esa semana, la estabilidad del Gobierno estará asegurada.

A los postres, Allende explica el motivo por el cual los ha reunido a ellos, sus más íntimos y directos colaboradores:

"Allende: Me propongo dirigir al país un mensaje. Los he convocado para que veamos la posibilidad de hacerlo esta noche. Ya está dispuesta la red oficial de radio y televisión. Es muy importante, y hay que prepararlo bien... Por ello quizá sea más conveniente que hable mañana a mediodía. En cualquier caso, quiero hacerlo antes de que se reúna el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, mañana por la tarde. Los demócratas cristianos deben conocer mis planteamientos antes de que empiecen la sesión".

El Presidente se interrumpe, consulta la hora (poco más de las 15) y le indica a Letelier que vaya de inmediato a su ministerio y se asegure de que se cumple la orden dada a la Fuerza Aérea de suspender los allanamientos, cosa que éste hace sin esperar a que se sirva el café.

El golpe en marcha acelerada

Ese lunes 10 por la tarde, los complotados ya producen algunos hechos de importancia, como el arresto de 50 oficiales legalistas, entre ellos el Comandante en Jefe de la Armada, Montero, a los que mantienen incomunicados. Merino, quien ordena el arresto de su superior, se aduena de las instalaciones de la Armada en Valparaíso —centro neurálgico para el control de ese cuerpo— y por la noche transmite por radio un mensaje a todos los jefes de unidades y barcos, con instrucciones para actuar a partir de las seis de la mañana del martes 11. En tanto, como le confesaría más tarde a su amigo, el embajador Nathaniel Davis, Merino lleva celosamente guardado en su bolsillo el pacto del complot, constituido por aquella misiva de conformidad que el día anterior le habían devuelto firmada Leigh y Pinochet.

Esa tarde del lunes 10, no solo los subversivos están en acción. Las direcciones de los Regionales Santiago Centro y Valparaíso Puerto del PS intercambian informaciones sobre la situación en sus respectivas zonas y llegan a la conclusión de que el golpe está en marcha, apreciación que el secretario político del regional santiaguino, Juan Bustos, transmite personalmente al secretario de organización del Comité Central.

Durante todo el día, continúan fluyendo hasta ese Regional informaciones e innumerables señales que, tras ser evaluadas, permit-

ten confirmar esa apreciación. Una de esas señales, que se repetirá varias veces, está curiosamente originada en la instrucción que Arellano Stark da a sus oficiales para que tomen las providencias necesarias para que sus familias respectivas permanezcan en lugares seguros. Desde varios puntos de Santiago llega la información de que “la hija del Coronel Fulano de Tal le dijo a la hija del compañero Tal y Cual”, “que su padre les ordenó a su madre, a ella y a sus hermanos que el martes no salgan de su casa por ningún motivo”, o que la familia de otro oficial se ha trasladado en pleno a la casa de un pariente, o que han cargado con gasolina los depósitos de todos sus automóviles y así decenas de otras confidencias por el estilo.

La suma de todos esos pequeños datos, —que aumentan a medida que llega la noche—, más la información que proporcionan varios detectives y carabineros simpatizantes o afiliados al PS, y oficiales de las Fuerzas Armadas, vinculados de una u otra manera a miembros del Regional, da la certeza de que una nueva intentona está en marcha. Solamente la seguridad con que lo niega el Comité Central y las apreciaciones contradictorias que llegan desde La Moneda, siembran algunas dudas. Pero a pesar de esas pequeñas dudas, la Subsecretaría de Frente Interno del Regional socialista pone en estado de alerta a las diez comunas que lo componen, que en total cuentan con unos 16.000 militantes, y convoca una reunión de la Comisión Política para esa misma noche.

Además, en previsión de alguna acción de los conspiradores, la reunión no se hace en la sede del Regional, como es habitual, sino en un despacho del Banco Israelita, en el que trabaja un miembro de esa Comisión. A poco de comenzar la reunión, en torno a las 22:00 y como resultado de la evaluación de los datos en su poder, la Comisión resuelve llamar al Secretario de Organización del Comité Central, Ariel Ulloa, e insistirle sobre la creciente gravedad de las informaciones que se siguen recibiendo desde las bases. La respuesta terminante es que todo está bajo control.

Esa noche, Allende llega a su residencia de Tomás Moro pasadas las 21. Allí ya se encuentran su esposa, *Tencha*, su hija Isabel, Augusto Olivares, Joan Garcés, Letelier y Briones. Cenan todos juntos. En el transcurso de la conversación, y refiriéndose a unas amenazas de muerte recibidas telefónicamente por doña *Tencha*, se destaca la diferencia de proceder entre la derecha y la izquierda, ya que aquella recurre a cualquier método. Allende comenta: “pero nosotros no podemos romper la legalidad, porque somos precisamente el gobierno. Siempre hemos luchado en favor de que el respeto por la ley

en un estado democrático corta el paso al despotismo o la arbitrariedad, evitando que los chilenos terminen matándose unos a otros”.

Doña *Tencha* tercia e insiste en que el terrorismo está cobrando día a día víctimas inocentes. Es ahora Isabel la que replica que “al terrorismo de la derecha la Unidad Popular no puede responder con el terrorismo, pues eso sería el caos”, en tanto su padre asiente moviendo la cabeza.

Terminada la cena, madre e hija se retiran a descansar. Los otros comensales se reúnen en el gabinete de trabajo del Presidente. Éste comenta que por fin la Armada se ha hecho a la mar, desde Valparaíso (lo que de ser cierto significaría que sus sectores golpistas no podrían actuar). Después expone los puntos generales del discurso que prepara para pronunciar al día siguiente por la cadena de radio y televisión: que dará trámite de urgencia a la discusión en el Parlamento de los dos proyectos negociados con el PDC y que al terminar el 15 de septiembre el período ordinario de sesiones convocará a las cámaras en legislatura extraordinaria para el 20, para tratar sólo esos dos proyectos de ley.

Así mismo, anunciará que si el PDC concuerda con esos dos proyectos, promulgará de inmediato las dos reformas constitucionales ya aprobadas por el Parlamento y que si no hubiese acuerdo sobre esas propuestas convocará a un referéndum.

Además, informa a sus colaboradores de que recibió una carta de la dirección del PC en la que se manifiesta de acuerdo con la convocatoria del referéndum, y con que el Presidente tenga poder de decisión en los meses siguientes sin tener que consultar cada vez con los partidos de la Unidad Popular. Briones señala que el PDC ya dio su conformidad a los términos específicos de los dos proyectos legislativos mencionados. Finalmente, el Presidente expone los puntos principales de un plan económico para 1974, que también desea que se incluya en su discurso.

Todo parece ocurrir en un ambiente calmado. Sin embargo, a las 23:00 Olivares atiende el teléfono y al reincorporarse a la reunión informa:

“Es Miriam (Contreras, *La Payita*, secretaria privada e íntima colaboradora de Allende) desde La Moneda. Me ha repetido lo mismo que antes. Que les han llamado diciendo que dos camiones con soldados han salido de Los Andes hacia Santiago, y que el regimiento allí está acuartelado. Hay muchos rumores”.

Allende indica a Letelier que llame al jefe de la guarnición de Santiago, para averiguar lo que está pasando. El ministro lo hace,

encuentra a Brady en su casa, habla con él y transmite su respuesta:

“Dice que no sabe nada, que va a informarse. Me ha pedido el número de teléfono para llamarme en quince minutos más. Le he dicho que llamaré yo”. Poco antes de la medianoche vuelve a hablarle y comunica la respuesta del general:

“Dice que no hay nada de camiones. Se ha puesto en contacto con la guarnición de San Felipe y está todo normal. El acuartelamiento obedece a la preparación de la parada del 18. Que él se hace cargo de la situación”.

A medianoche otra llamada telefónica. Ésta es de Altamirano, atiende Letelier y vuelve a transmitir a Allende una síntesis de lo que informa el dirigente socialista: “(Altamirano) dice lo mismo. Que dos camiones con tropas han salido de Los Andes”. Y pregunta: “¿Qué hago, llamo al comandante en jefe?”.

Allende responde: “No, no llame a Pinochet. No hace falta. Son tantos los rumores... Hace meses que no dormiría si tuviera que atender cada rumor”. Pero no se queda tranquilo y telefonea él en persona al director subrogante de Carabineros, general Urrutía, de cuya lealtad no tiene dudas. Después sigue hablando con sus colaboradores acerca del acuerdo con la oposición, hasta que Olivares interrumpe y reitera su preocupación por la noticia de los dos camiones.

Cerca de las dos de la mañana, ya martes 11, Allende da por terminada la reunión, destaca la necesidad de descansar pues el siguiente sería un día muy duro, e indica a Olivares y Garcés, con quienes trabajaba la mayoría de sus mensajes y discursos, que duerman en su residencia, ya que se volverán a reunir a las ocho y media de la mañana.

Dispuestos a retirarse a dormir, atienden otra llamada de Miriam que aún está en La Moneda, quien cuenta a Allende una serie de detalles sobre las consultas que ha realizado acerca del movimiento de los dos camiones y le pasa el número de teléfono del general Brady, que aquél le solicita.

A las dos y media, después de hablar con el general, Allende dice a sus colaboradores que se vayan a descansar, nomás.

Son las tres de la madrugada cuando Letelier llega a su domicilio, antes de acostarse comenta con su esposa, Isabel, que la reunión ha resultado excelente y agrega: “Salvador anunciará dentro de unas horas que va a convocar un referéndum. Estoy seguro de que lo ganaremos y que reducirá las posibilidades de un golpe”. Isabel recordará tiempo después: “Los dos nos fuimos a dormir muy felices”. No obstante, les esperaba un duro despertar.

Los que no se acuestan, ni a las tres de la mañana, son los complotados. A esa misma hora el general Arellano Stark deja una oficina de emergencia habilitada en el Estado Mayor de la Defensa, en la que ha estado analizando los últimos detalles del golpe, con un grupo de militares.

También a esa misma hora concluye la reunión de la Comisión Política del Regional Santiago Centro, a la que se suma Humberto Moyano, secretario político de la Primera Comuna, la más importante de las diez que lo integran, por el número de militantes y por los puestos claves que muchos de éstos ocupan. La Comisión resuelve que se vuelva a insistir ante el Comité Central sobre la conveniencia de movilizar ya las defensas frente al golpe, pues en las últimas horas ya no quedan dudas, sino que se tiene la convicción de que el pronunciamiento militar está en marcha, aunque se desconozcan sus verdaderas dimensiones. Juan Bustos habla con Ariel Ulloa, quien se encuentra en la casa de Carlos Altamirano. Ulloa insiste rotundamente en que todo está bajo control y que el Secretario General no puede atender su llamada. Las últimas palabras del secretario de organización, al que Bustos ya no volvería a oír por muchos años, son:

“Carlos tiene jaqueta, la cabeza está que le estalla del dolor. No puede atenderte ahora... Pero, ¡por las chutas, compañero! son ustedes, haciéndose eco de todo tipo de rumores, los que preparan el camino para el golpe. ¡Vayanse a dormir!” Y cuelga el teléfono.

CAPÍTULO XIX

El golpe

A las 06:10 del martes 11 de septiembre, Raymond Molinière, *el tío Marcos*, un francés que en la década del treinta ha sido secretario de León Trotsky y que años después reparte su vida entre París y varios países de América Latina, (en especial Argentina y Chile) y que a la sazón está en Santiago, telefona a la casa del responsable de defensa del Regional Santiago Centro, ubicada en el barrio Recoleta:

“Mon ami, la Armada se sublevó en Valparaíso y está tomando la ciudad. El golpe está en marcha”. Después explicaría que la información se la pasa uno de sus amigos, miembro de la Comisión Política del Regional Valparaíso Puerto del PS.

Nada más colgar el *tío Marcos*, se recibe otra llamada, del responsable de comunicaciones del Regional, Eugenio Da Via, quien también confirma la noticia del levantamiento. Las comunicaciones telefónicas, a pesar de lo que se diría después respecto del corte de las líneas desde la Central Recreo, en Valparaíso, se pueden realizar hasta las siete de la mañana. En Santiago prácticamente no hay interrupciones en las comunicaciones ni en los demás servicios públicos durante todo el día, con excepción de las emisoras de radio y televisión.

De inmediato, el dirigente socialista se comunica con el secretario político, Juan Bustos, quien dispone la movilización de todo el Regional y se dirige a la sede de este, en la calle San Martín.

En Valparaíso, destacamentos de la Armada, al mando del rebelde almirante José Toribio Merino, ya se han desplegado, ocupando poblaciones, fábricas, oficinas del gobierno, el puerto, universidades y medios de comunicación. Antes de las 07:00, la ciudad y el puerto quedan bajo su control.

En Santiago, el comandante subrogante de Carabineros, Urrutia, recibe la misma información y se la transmite entre las 06:10 y las 06:20 a Allende, a quien despierta en su residencia de Tomás Moro. Cuenta Joan Garcés que poco antes de las 07:00, al entrar al gabinete de trabajo presidencial, el Presidente le dice: “Se ha sublevado la marinería... la oficialidad del submarino ‘Simpson’ y la del

crucero 'Almirante Latorre'... Seis camiones con tropas de la Marina se dirigen desde Valparaíso hacia Santiago... Ninguno de los comandantes en jefe (de la Armada, Ejército y Fuerza Aérea) responde al teléfono. Carabineros son los únicos que responden”.

A esa hora Allende ya ha dado órdenes a Brady para que ponga en ejecución los planes de defensa, se preocupa por la situación del general Urbina y da otras instrucciones, creyendo todavía que cuenta con la lealtad de Pinochet.

Entretanto, al Regional Santiago Centro, poco después de las 07:00, llegan los miembros de la Comisión Política, Juan Bustos, Eugenio Parrau y el autor, coincidiendo con una decena de militantes de los 20 que, según los planes previos, debían trabajar con ellos en caso de emergencia. Pared de por medio, el edificio del Comité Central está desierto y nadie contesta en los teléfonos que se han indicado como de contacto para el caso de un golpe de Estado. Algunos de los miembros del Regional portan metralletas Uzi, de una partida de diez compradas tres meses atrás en Europa, y los demás pistolas o revólveres. La dirección regional establece contactos con las Comunas y con los principales centros de trabajo de la zona, ordena desocupar los demás locales partidarios dependientes del Regional y poner en marcha la red de comunicaciones y contactos prevista para los casos de emergencia que funcionaría, aunque con bastantes deficiencias, en los días posteriores. Dispone también la inmediata concentración de los militantes con formación y organización militar en el lugar previsto, la Fundación Libertad. Esta orden se cumple bien en los primeros momentos, pero queda en suspenso a medida que pasan las horas, debido al creciente despliegue militar y en la tarde esa suspensión es confirmada por una orden de la dirección regional.

A las 06:30 Allende telefona a la casa de Orlando Letelier, el ministro de Defensa, quien está durmiendo, lo despierta con la noticia de la sublevación en Valparaíso y le dice: “Los carabineros son las únicas unidades que obedecen. Los demás comandantes en jefe no contestan. Haz lo que puedas”. Pero poco es lo que puede hacer este ministro, ya que es apresado al entrar minutos después en el Ministerio de Defensa, controlado desde la noche anterior por los golpistas.

Una hora más tarde, Allende ordena a Joignant, director de Investigaciones, que interrumpa las emisiones de las radios derechistas y que ocupe *El Mercurio*, órdenes ambas que no llegarán a cumplirse. Poco más tarde, cuando Joignant le informa de que ha hecho

dejación de su cargo, el que pondrá en manos de un funcionario policial, es el único momento en el que el Presidente perderá la calma y llenará de improperios a alguien. Allende no podrá admitir ni justificar que Joignant abandone el cargo sin resistencia, dejándolo sin el único cuerpo armado que tenía a su frente a un miembro de la Unidad Popular. Si bien la Dirección de Investigaciones no es comparable a ninguno de los otros cuerpos armados por su poder de fuego, el que tiene –unos seiscientos hombres equipados con metralletas– no es de despreciar.

Instantes después de las 07:30 Allende indica a Garcés que le transmita a Carlos Toro la misma instrucción que había dado a Joignant. Después de hablar con éste, Garcés le repite un mensaje de Toro: la Fuerza Aérea se dispone a allanar los cordones industriales. A lo que Allende responde: “Si hacen eso, es la guerra civil” y mientras se termina de vestir dispone:

“Vamos a La Moneda. A los tanques (en realidad, tanquetas) de Carabineros que están aquí, en la puerta, dígales que se dirijan allí también”.

Allende parte en su coche, un Fiat 125 que ha utilizado durante todo su mandato, seguido de otros tres con su escolta personal. Garcés y Olivares los siguen en los suyos. La caravana, completada con dos camionetas con algunas armas, se dirigen a toda velocidad hacia La Moneda seguida por las dos tanquetas de Carabineros. En esos momentos, en virtud de lo asegurado por Brady, jefe de la guarnición de Santiago, de que el Ejército es leal y por lo que dice el Director General de Carabineros de que ese cuerpo se está movilizándose contra la sublevación, Allende aún cree que cuenta a su favor con sectores militares decisivos.

Garcés relata que al llegar a La Moneda, a las 07:30, ven que a su alrededor se están desplegando gran cantidad de Carabineros con tanquetas y que dentro del edificio la Guardia Presidencial (de Carabineros también) se encuentra en posición de combate. A las 07:40, tras intentar infructuosamente comunicarse con los comandantes en jefe, Allende dice a sus allegados: “me temo que esta vez están comprometidos todos los comandantes en jefe”. A Luis Figueroa, presidente de la CUT, que llama en ese instante, el Presidente le pide que movilice a los trabajadores.

A partir de ese momento los hechos se precipitan. A las 07:55 pide salir al aire a Radio Corporación, emisora a cargo de Eric Schnacke, quien se mantendría allí dirigiendo las emisiones hasta ser detenido por la tarde, al salir del edificio. Sus antenas son bom-

bardeadas y destruidas en la mañana. A las 08:00, aproximadamente, Pinochet llega al puesto de mando número uno, donde según los golpistas debería haber llegado a las 06:00 y alcanza a oír parte del discurso presidencial:

“Habla el Presidente de la República desde el palacio de La Moneda. Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del Gobierno que está amparado por la ley y la voluntad del ciudadano.

”En estas circunstancias, llamo sobre todo a los trabajadores, que ocupen sus puestos de trabajo, que concurren a sus fábricas, que mantengan calma y serenidad. Hasta este momento, en Santiago no se ha producido ningún movimiento extraordinario de tropas y, según me ha informado el jefe de la guarnición, Santiago estaría acuartelado y normal. En todo caso, yo estoy aquí defendiendo el Gobierno que represento por la voluntad del pueblo.

”Lo que deseo, esencialmente, es que los trabajadores estén atentos, vigilantes, y que eviten provocaciones. Como primera etapa tenemos que ver la respuesta, que espero sea positiva, de los soldados de la patria, que han jurado defender el régimen establecido, que es expresión de la voluntad ciudadana, y que cumplirán con la doctrina que prestigió a Chile y la prestigia por el profesionalismo de las Fuerzas Armadas... De todas maneras, el pueblo y los trabajadores fundamentalmente, deben estar movilizados activamente, pero en sus sitios de trabajo, escuchando el llamado que pueda hacerles y las instrucciones del compañero Presidente de la República”.

La recepción del mensaje de Allende en todos los rincones del país ratifica lo que muchos presagian. Desde el Regional Santiago Centro contactan con La Moneda, donde Puccio les confirma el alzamiento, pero les transmite la misma idea que se desprende del discurso de Allende: hay que estar movilizados, pero todavía es posible una respuesta positiva de los militares leales. Agrega, de parte del Presidente, que si llegase el momento habría armas para los trabajadores, que estén preparados y que no se presten a provocaciones. En esa misma conversación los dirigentes regionales Bustos, Parrau y el autor piden a Puccio que transmita a Allende la información de que ya hay un millar de militantes en la Fundición Libertad, organizados y preparados, pero sin armas, dispuestos a defender a su Gobierno, y que, en la medida en que las estructuras partidarias continuasen movilizándose, (ya que se encontraban con bastantes dificultades para hacerlo), se podría contar con más.

Minutos después Allende llama por teléfono y despierta, en su casa, a Rolando Calderón, al que repite las mismas indicaciones que ya ha dado a Joignant y a Toro: que haga callar las radios de derecha y que se ocupe de *El Mercurio*.

A las 08:15 Allende vuelve a hablar por radio, repitiendo los términos de su primer mensaje.

Aproximadamente a esa misma hora sale al aire una cadena de radios controladas por los golpistas, emitiendo canciones militares una detrás de otra, hasta que sobre las 08:30 se escucha el Himno Nacional y a continuación una proclama de los sublevados que firma una “Junta Militar de Gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros” y reclama: “...el Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile... la prensa, la radio y canales de televisión adictos a la Unidad Popular deben suspender sus actividades informativas a partir de este instante, de lo contrario recibirán castigo aéreo y terrestre...”.

Hasta ese momento, en La Moneda se carece de una información directa de los golpistas, hecho que, años más tarde, motiva esta reflexión a Joan Garcés: “estos valientes oficiales no se han atrevido a comunicar sus propósitos personalmente, ni siquiera por medio de un teléfono”. El temor a enfrentarse a la fuerte personalidad de Allende prima sobre los golpistas, ya que ninguno de los cuatro integrantes de la Junta Militar quiere hablar con él ni siquiera por teléfono. Y menos que ninguno, Pinochet, “el leal general”.

A las 08:55 lo único seguro para las fuerzas de la Unidad Popular es que el alto mando de Carabineros aún respalda al Gobierno constitucional. A esa hora, al oír ruido de motores fuera de La Moneda, Allende se asoma al balcón de su despacho, sobre la Plaza de la Constitución (debajo de ésta, en el subterráneo, está el Cuartel de los Carabineros que prestan servicio en la Casa Presidencial), un centenar de personas lo reconoce, aplaude y viva. Allende advierte que se comienzan a retirar los carabineros desplegados en posición de defensa, llevándose sus tanquetas y cañones. Retorna a su despacho y ordena al Director General de Carabineros, general Sepúlveda, que le informe de lo que está sucediendo.

Dos o tres minutos después, el general Sepúlveda habla con Allende y explica lo ocurrido:

“*Sepúlveda*: Presidente, me informan que ha sido tomada la central de telecomunicaciones de Carabineros. Y las unidades reciben las órdenes por radio desde allí... El Alto Mando está aislado...”

"Allende: Mande hombres que recuperen el centro de comunicaciones.

"Sepúlveda: No tengo, Presidente. Sólo cuento con los que están en la Dirección General (a 500 metros de La Moneda).

"Allende: ¿Cuántos son?

"Sepúlveda: "Cincuenta, más los oficiales.

"Allende: Dígales que ingresen de inmediato aquí".

Nunca llegarán a entrar, pues el palacio está totalmente rodeado y sus accesos controlados por los insurrectos. En ese momento Allende asume que no podrá contar con Carabineros, cuerpo en cuya lealtad confiaba y que habría sido decisivo para alentar la reacción de sectores leales en el Ejército. Los insurrectos logran controlar a esa institución armada a partir de la toma de su central de telecomunicaciones, desde la que imparten órdenes que son disciplinadamente acatadas en todo el país..., por provenir de ese centro, el conducto normal para recibirlas.

En tanto, los tres edecanes del Presidente, quienes vienen del Ministerio de Defensa, piden reunirse con él y le transmiten un mensaje de los sublevados: "Las Fuerzas Armadas le piden que entregue el mando. Usted debe salvar su vida, no tiene otra alternativa". Le ofrecen un avión y seguridades de que podrá abandonar el país, acompañado de su familia. Si el mensaje es breve, la respuesta también lo es: "Comandantes, si así lo desean vayan junto a sus instituciones. Quedan en libertad de acción. Yo me quedo aquí". Pero les anuncia que resistirá con las armas cualquier ataque.

No han dado las 09:30. En el Regional Santiago Centro siguen sin poder contactar con el Comité Central de su Partido. Uno de los militantes desplazados a la esquina del Hotel Carrera con la misión de informar lo que va ocurriendo, da cuenta de la retirada de la Guardia de Carabineros y del cerco cerrado establecido en torno a La Moneda, lo que confirma los peores pronósticos. Se toman medidas para evacuar el Regional y se revisan los escritorios y armarios por si queda algún papel comprometedor, ya que los archivos han sido retirados tiempo antes.

Al recibir el Alto Mando golpista la información del almirante Carvajal sobre la respuesta de Allende, que le ha transmitido a través del marino que, de los tres edecanes, es el único abiertamente implicado en la conjura, se registra el siguiente diálogo:

"Carvajal: Acabo de hablar con el Edecán Naval, quien me dice que ellos, los tres, se van a retirar de La Moneda y se vienen

hacia el Ministerio de Defensa. Le encargué que instara al jefe de Carabineros (de La Moneda) que rindiera sus tropas, porque iban a ser bombardeados, así que los carabineros deben salir de La Moneda en este momento.

"Pinochet: Conforme..., conforme.

"Carvajal: En este momento me llamó Domínguez, Secretario de Marina, y me decía que fueran los tres comandantes en jefe a pedirle la rendición al Presidente.

"Pinochet: Tú sabes que ese gallo es chueco. Es al revés la cosa. Si él quiere, va al Ministerio de Defensa a entregarse a los tres Comandantes en Jefe.

"Carvajal: Yo hablé personalmente con él (Allende), le intimé la rendición a nombre de los Comandantes en Jefe y contestó con una serie de garabatos (insultos), no más.

"Pinochet: Quiere decir que a las 11 se van para arriba (los aviones) y a ver qué va a pasar (con el bombardeo aéreo)"¹.

Sin embargo, minutos después, el diálogo entre ambos golpistas delata su preocupación por la definición de posiciones dentro del cuerpo de Carabineros.

"Pinochet: Patricio, te pregunto, ¿Mendoza (el general rastroero y traidor' al que se refiere Allende en su discurso), asumió el mando de Carabineros o todavía no?

"Carvajal: Mendoza asumió, pero no sé si está en la Dirección General de Carabineros.

"Pinochet: ¿Está trabajando o no? Dime otra cosa, Patricio, ¿el señor Yovane (general de Carabineros, golpista) está también trabajando?

"Carvajal: Sí, está trabajando. Él está al mando de los carabineros que rodean La Moneda. Estamos en contacto con él.

"Pinochet: O sea, Carabineros se está portando en forma leal.

"Carvajal: Los Carabineros que rodean son leales.

"Pinochet: ¿A nosotros?"

En el palacio presidencial, en tanto, varios de los colaboradores de Allende le proponen salir de ese edificio, indefendible desde un punto de vista militar y convertido en una verdadera ratonera y dirigirse a alguna fábrica, a su residencia de Tomás Moro o a cualquier otro lugar donde pudiera permanecer escondido días u horas, con el propósito de organizar la resistencia.

¹ Textos de las conversaciones de los golpistas publicados en el libro del mismo autor *Chile, un doble secuestro*, Madrid, Editorial Complutense, 1993.

Allende, cuando todo está preparado para la evacuación, rechaza el proyecto con la misma firmeza con que se niega a renunciar. Dice definitivamente que él no se moverá de La Moneda y recibe un casco y un fusil ametrallador del capitán José Muñoz, Jefe de Seguridad Presidencial de Carabineros de Chile y de la Guardia de Palacio durante todo su gobierno. El casco y el fusil son los que tenía asignados personalmente Muñoz, según su propio testimonio posterior, y no una metralleta regalada por Fidel Castro, como días después afirmarán los golpistas y el propio Castro. Son también los que porta en la fotografía tomada esa mañana por un trabajador de la OIR y que, sin firma, da la vuelta al mundo.

En torno a las 09:30 Allende vuelve a pedir una conexión radial y puede hacerlo sólo a través de una emisora, Radio Magallanes, ya que las demás han sido silenciadas por los ataques aéreos de los golpistas. Sobre el palacio presidencial pasan los aviones a ras de los edificios, amenazantes pero sin disparar todavía. En cambio, comienzan los tiroteos alrededor de La Moneda, que se oyen como trasfondo del postrer discurso del Presidente.

Allende habla al país y dice que esa es la última vez que escucharán su voz, confirma la sublevación de todas las Fuerzas Armadas y Carabineros, anuncia que no renunciará, que pagará con su vida la lealtad del pueblo y que tiene la certeza de que su sacrificio no será en vano. En su último consejo al pueblo está implícito que éste no debe combatir desarmado a los militares, pero tampoco rendirse:

“El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar; pero tampoco puede rendirse... por lo menos habrá una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición”.

En los discursos pronunciados esa mañana, Allende llama a los trabajadores a movilizarse pero no les da ninguna orientación para combatir, sino que les indica que se queden en calma en sus centros de trabajo. Además, da entender de manera clara que morirá. ¿Cómo? No lo sabe en ese momento. Puede matarlo una bomba lanzada por la aviación, un cañonazo de los blindados, una ráfaga de ametralladora o la última bala del fusil que porta durante toda la mañana. Esas palabras, más su negativa a trasladarse a un punto menos vulnerable que La Moneda o a pedir que ingresen a aumentar sus fuerzas los militantes de la Unidad Popular que están en las cercanías, sobre todo los del Regional Santiago Centro e, incluso, su autorización a los tres edecanes y a los 50 carabineros que custodiaban el edificio por dentro para que se retiren, son pruebas más que

suficientes de que cuando se inicia el tiroteo a su alrededor, él ha descartado cualquier posibilidad de derrotar a la subversión. Y también de que desea evitar muertes inútiles.

Entre el momento en que le informan sobre la sublevación de la Armada en Valparaíso y su último discurso, apenas transcurren tres horas y media. En ese periodo de tiempo intenta sus últimos esfuerzos para negociar y evitar el golpe. La resistencia a tiros contra el ataque de los insurrectos también puede ser ubicada dentro de esa línea de disuadir a los golpistas. Pero su objetivo mayor al resistir, antes que protagonizar un combate con un objetivo militar inalcanzable, se comprende desde una opción política, para *responder con lealtad a la lealtad del pueblo*, marcar a fuego a los militares traidores y dejar encendida una antorcha para el futuro. Como lo dice en su último discurso, lo hace con la certeza de que “mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor”.

Los motivos fundamentales de Allende al resistir dentro de La Moneda son demostrar hasta qué punto de traición, de cobardía, de felonía y de ferocidad son capaces de llegar los golpistas. Su finalidad es desacreditarlos históricamente y posibilitar que, más adelante, otras personas reinicien el proceso de cambios sociales y políticos. Es también una manera de demostrar fidelidad a su compromiso con el pueblo y a sus múltiples promesas de que sólo lo sacarían de La Moneda *en un mameluco* (traje) *de madera*. En su decisión de no rendirse ni entregarse vivo, sin ser el motivo fundamental, prima también su fuerte personalidad que, así como es sencillo y afable con los trabajadores, se muestra con rasgos de caballero antiguo, con gran dignidad y respeto por sí mismo, que torna casi imposible el verse prisionero, vejado o exiliado de manera poco digna, sin agotar antes todas las posibilidades que las circunstancias le brindan para evitarlo. Sobre todo porque, profundo conocedor del alma humana, sabe cuánto odio ha despertado en esos generales y almirantes y puede suponer, con bastante razón, que su destino más probable si cae vivo en sus manos es el de ser asesinado.

El propio Pinochet lo dice en un diálogo con los otros jefes del complot, mientras tratan de que La Moneda se rinda, y tal como lo registran las cintas grabadas ese día: *Se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país... Y el avión se cae, viejo, cuando vaya volando (Risas de todos)*⁶.

Ibid.

CAPÍTULO XX

Una lección moral

Después de recibir un ultimátum para rendirse antes de las 10:50, bajo la amenaza de que en caso contrario a las 11:00 serán bombardeados desde el aire, Allende reúne a sus colaboradores en el Jardín de Invierno de La Moneda y les plantea a todos los que están desarmados que se deben retirar. La jefa de prensa, Frida Modak, recuerda así aquel momento:

“El Presidente habló de su decisión de luchar... pero explicó que eso era un acto político y que no debería mirarse en términos de sacrificio personal. Desapasionadamente, continuó diciendo que la batalla de La Moneda era sólo el principio... y volvió a decir a todos aquellos que estaban en el Palacio y que no tenían experiencia en el manejo de armas de fuego que se marchasen y ayudasen en el exterior, resistiendo a la junta”.

Allende señala a quienes están a su lado que “la batalla contra el fascismo no necesita muertos inútiles, habrá mucho que hacer”.

René Largo Fariás, jefe de radio de la OIR, garabatea en un papel las palabras de Allende, dejando un dato para la historia:

“Las mujeres y los hombres que no tengan cómo defenderse, deben irse. Ordeno que las compañeras abandonen La Moneda. Quiero que se vayan. Yo no me voy a rendir, pero no quiero que el de ustedes sea un sacrificio estéril. Ellos tienen la fuerza, nosotros sólo la razón. Las revoluciones no se hacen con cobardes a la cabeza, por eso me quedo. Los demás deben irse. No voy a renunciar. A todos les agradezco su adhesión. Los hombres que quieran ayudarme a luchar, que se queden. Tengo aquí dos hijas que no tienen por qué estar aquí. Deben irse”.

Ninguno de sus colaboradores quiere retirarse, mientras el tiroteo se extiende en torno a La Moneda y también entre los atacantes y un puñado de partidarios de la Unidad Popular apostados en edificios públicos cercanos, que los hostigan con disparos esporádicos.

En el alto mando golpista, otro diálogo indica como interpretan ellos lo que está ocurriendo dentro del palacio presidencial:

“*Carvajal*: Acabo de hablar con el Edecán Naval que viene lle

gando de allá, me dice que han defendido La Moneda 40 o 50 carabineros que se están retirando y 50 hombres del GAP... Me dice el general Mendoza que él está esperando que se retiren antes de seguir bombardeando. El Edecán me dice que el Presidente anda con un fusil ametralladora, que tenía 30 tiros y que el último se lo va a disparar en la cabeza. Ese es el ánimo en que estaba hace unos minutos atrás.

"*Pinochet*: Esas son... (ruidos en la grabación)... Este huevón no se dispara ni en las... (parece decir "bastillas del morro", o sea en el borde de los labios).

"*Carvajal*: El general Mendoza está en contacto con nosotros y está en contacto con el general Brady, así que toda la cosa está bien coordinada.

"*Pinochet*: Yo para las once voy a dar la orden de bombardeo (aéreo). En consecuencia, a esa hora más o menos la actividad tiene que replegarse a dos cuadras de La Moneda... A las once en punto tiene que empezar el bombardeo. O sea, hay que meterse prácticamente en zanjones adonde sea, porque se puede pasar la aviación y tocarle a las tropas nuestras".

Próximo a vencer el ultimátum, Allende pide a los sublevados una breve tregua, orientada a permitir la evacuación de las mujeres y del personal civil.

En el exterior, las tropas sitiadoras se comienzan a replegar para permitir el bombardeo aéreo, en tanto los aviones continúan con sus vuelos rasantes y el tiroteo arrecia. Allende se despide de las mujeres, con especial emoción de sus dos hijas, Beatriz e Isabel, que no quieren apartarse de su lado y les abre personalmente la puerta de Morandé 80, uno de los laterales de La Moneda, para obligarlas a salir.

Varios civiles y casi todas las mujeres salen, pero fuera no encuentran ningún *jeep* ni persona alguna para recogerlas, a pesar de que el golpista general Baeza ha prometido tenerlos allí para su evacuación. Las mujeres y algunos civiles pueden alejarse en medio del humo y los tiros hasta el Ministerio de Obras Públicas y desde allí a diferentes destinos, libres. Pero una de las mujeres, Miriam Contreras, desobedece la orden de evacuación dada por Allende, se esconde cuando están saliendo los demás y permanece en el edificio rodeado hasta el final. Carlos Jorquera, periodista y director de la OIR, Augusto Olivares y René Largo Fariás la ven esconderse y hacerles con el dedo índice sobre la boca la señal de silencio, que acatan.

Sobre las 12:00 aparecen dos *Hawker Hunter* de la Fuerza Aérea que pasan volando apenas por encima de las edificaciones en dirección

norte-sur y comienzan el bombardeo con misiles (*rockets*) aire-tierra. La ausencia total de defensa antiaérea permite a los pilotos acercarse y afinar la puntería, como si se tratase de un simple ejercicio de tiro al blanco, como en una sesión de entrenamiento. En total hacen tres pasadas y lanzan 18 proyectiles, que dan en La Moneda y provocan destrozos y varios focos de incendio.

Los defensores del palacio presidencial se refugian en los sótanos del edificio durante el bombardeo aéreo, se colocan máscaras antigás para protegerse del humo y continúan resistiendo a balazos, cuando las tropas al mando del general Javier Palacios reinician el ataque por tierra. Osvaldo Puccio recuerda que "el bombardeo fue intenso. La primera bomba cayó encima del techo del patio cerrado de la Presidencia, que era de vidrio y se derrumbó violentamente, produciendo un ruido increíble. El segundo y tercer *rocket* cayeron, al parecer, en la Secretaría General de Gobierno y en la Presidencia de la República. En el lugar que estábamos nosotros no dio ningún *rocket* directamente, el más cercano cayó a unos 25 metros, destruyendo el Salón Rojo y el Salón Toesca".

Poco antes de las 13:00 las radios en manos de la Junta piden que los bomberos se dirijan hacia La Moneda para atacar el incendio, confiando en que el edificio caería en sus manos a la brevedad. Terminado el bombardeo, el Puesto 5 de los sublevados informa a Pinochet:

"*Puesto 5*: Mi general, La Moneda está totalmente rodeada, no hay posibilidad de que salga nadie.

"*Pinochet*: ¿El presidente Allende está metido ahí? ¿Seguro que está el señor Allende ahí?

"*Puesto 5*: Creo que el Presidente está en La Moneda, o lo que queda de él.

"*Pinochet*: Conforme".

De inmediato Carvajal se introduce en la conversación.

"*Carvajal*: De La Moneda me han llamado por teléfono el ex ministro Flores y el secretario de Allende. Manifestaron su intención de salir por la puerta de Morandé 80 para rendirse, y se les ha indicado que deben venir enarbolando un trapo blanco para cortar el fuego. Esto se lo ha comunicado al general Brady y al general Arellano. La idea no es parlamentar, sino tomarlos presos inmediatamente. (Los complotados manifiestan un curioso sentido de la ética y del honor militar: dicen que aceptan parlamentar bajo bandera blanca, pero desde el principio tienen la decisión de tomarlos prisioneros, *nota del autor*).

”*Pinochet*: Conforme. Patricio, hay que tener el avión listo en Cerrillos. La gente llega y ninguna cosa, lo toman, arriba del avión y parten. Con gran cantidad de escoltas.

”*Carvajal*: La idea sería dejarlos presos nomás por el momento, después se verá... Pero por el momento la idea es tomarlos presos.

”*Pinochet*: Bueno, pero si los tenemos les damos tiempo. Creo que hay que consultarlo con Leigh. La opinión mía es que estos caballeros se toman y se mandan por avión a cualquier parte, e incluso, por el camino los van tirando abajo. (*Pinochet confirma su decisión de matar a Allende de inmediato si lo apresa vivo y a sus colaboradores, como mandará a hacer después con el general Carlos Prats y el ex ministro Orlando Letelier, nota del autor*).

”*Carvajal*: (risas)... Bien, lo vamos a consultar con Leigh”.

El Presidente hace como que cree en las garantías que debe significar el pacto de salir con bandera blanca y envía a parlamentar al subsecretario del Interior, Daniel Vergara; a Fernando Flores, ministro Secretario General del Gobierno, y a su secretario privado, Osvaldo Puccio, a quien acompaña su hijo de 18 años, del mismo nombre. A Puccio, para decidirlo a ir y señalándole a Vergara y Flores, le dice: “Vete con ellos, a ver lo que hablan”. Después del bombardeo aéreo, el Presidente sabe que los sublevados quieren consumir velozmente el descabezamiento de la jefatura del Estado.

Puccio (padre) recordará así su gestión: “Allí (en el Ministerio de Defensa) nos recibió nuestra contraparte, la delegación de la Junta, con el almirante Carvajal y los generales Baeza, Nuño y Díaz Estrada. Baeza y Nuño habían sido ayudantes de mi padre y me trataron con cordialidad. El diálogo me resultó fácil con ellos por ese motivo. No así con Carvajal, a quien no conocía, que se mostraba muy alterado y caminaba de un lado para otro. Ahí Baeza me dijo que a nombre de la Junta me ofrecía la posibilidad de que el Presidente, su esposa, el ministro del Interior y yo dispusiéramos de un avión para salir del país. Yo le expresé que el Presidente por ningún motivo aceptaría algo así. Pero de todos modos le pedí que me diera esa proposición por escrito. Me di cuenta del momento histórico y se me ocurrió que había que dejarlo grabado de algún modo. Por lo demás, yo también iba en la parada... Baeza subió a consultar y luego regresó. ‘No Osvaldito’, me dijo, ‘ya no es necesario. El Presidente se rindió y viene saliendo’. Luego se alargó la espera. Me llevaron a una oficina, mientras a Vergara y Flores los conducían a otra parte. Luego, la historia ya se conoce...”.

La historia indica que Baeza telefona a Allende después de hablar con sus enviados y le promete una tregua. También lo hace el almirante Carvajal, instantes después de hablar con Tohá, a quien ofreció las mismas garantías que Baeza, incluyendo un avión para dejar el país.

A las 13:30 se suicida Augusto Olivares, en el interior de La Moneda. El desigual combate continúa, hasta que los atacantes vencen la resistencia y entran por Morandé 80, desde cuyo primer piso, y dando gritos con un megáfono, intiman la rendición a los que aún resisten, quienes se repliegan hacia el segundo piso. En medio del humo, la confusión y el ruido de los disparos dentro y fuera del edificio, se pacta un alto al fuego para la rendición, que no llega a hacerse totalmente efectivo. Allende ordena a toda su gente que deje las armas y baje con las manos en alto. Primera, encabeza la fila, La Payita. Él afirma que saldrá el último.

La grabación de las conversaciones en el mando golpista registra ese momento:

”*Carvajal*: En estos momentos me avisaron de La Moneda que cesaron el fuego, porque se rinden sin condiciones.

”*Pinochet*: Conforme, de La Moneda al avión.

”*Carvajal*: Conforme, pero el avión sería para él y familia exclusivamente y nadie más”.

Una bata blanca de médico enarbolada a guisa de bandera es la señal de la rendición. Los leales a Allende, con Miriam Contreras iniciando la marcha, bajan desarmados desde el segundo piso por las escaleras y sin interrupción salen al exterior por la puerta de Morandé 80, siendo obligados a tenderse sobre el suelo en la acera, con las manos en la nuca. Después la mayoría de ellos son cargados en un vehículo militar. Los médicos que cumplían funciones de tales, que visten bata blanca y no son combatientes, Danilo Bartulín y el cardiólogo Oscar Soto, son liberados en el momento. La *Payita* también logra salir libre minutos después, en un descuido de quienes los custodian en la calle.

La muerte de Salvador Allende

El médico Guijón, último en la fila de los que estaban saliendo y presto a descender por las escaleras, se da vuelta y regresa a buscar su mascarilla de gas, por lo que pudiera ocurrir, o *para recuerdo de un momento histórico*, como comentara después. En ese momento ad

vierte que Allende ha regresado hacia el Salón Independencia, se asoma por la puerta entreabierta, ve al Presidente sentado en un sillón disparándose con el fusil en la barbilla y nota como el cuerpo se estira hacia atrás por la fuerza de dos impactos de bala. Se acerca y obedeciendo a su impulso profesional de médico le toma el pulso, a pesar de comprobar que se ha volado el cráneo desde las cejas hacia arriba, perdiendo la masa encefálica. Es una muerte instantánea. Allende acaba de cumplir su promesa de que no renunciaría, no se rendiría y no sería apresado vivo. Con la excepción de *La Payita*, quien aprovecha la confusión y logra escapar con la ayuda de los enfermeros de una ambulancia, en la que la introducen sus captores, los colaboradores que acompañan las últimas horas de Allende en La Moneda son víctimas de la represión más despiadada. La Comisión Rettig establecerá que los detenidos al salir de La Moneda permanecen tendidos en la acera de enfrente hasta las 18:00, cuando son conducidos al Regimiento Tacna en dos vehículos militares. “En ese recinto, continúa el *Informe Rettig*, permanecieron tendidos en el suelo, boca abajo, con las manos detrás de la nuca, desde el día 11 de septiembre en la tarde, hasta el 13 de septiembre a mediodía. El 12 de septiembre son liberados los miembros del Servicio de Investigaciones, excepto uno que también permaneció en ese recinto hasta el mediodía del día 13, momento en que fue liberado.

“La Comisión puede afirmar que el grupo que permaneció hasta el día 13, a mediodía, en el regimiento Tacna, estaba compuesto, por una parte, por nueve asesores y miembros de la Presidencia de la República y por otra, por quince miembros del GAP... Los antecedentes reunidos permiten afirmar que el ex director de Investigaciones, Eduardo Paredes, también estuvo detenido en el Regimiento Tacna, hasta el 13 de septiembre. Para esta Comisión es inverosímil la versión publicada en la prensa de esa época, que sostenía que Paredes había muerto en un enfrentamiento”.

El Informe Rettig dice asimismo que los miembros de ese grupo “amarrados de pies y manos, fueron subidos a camiones militares y sacados del Regimiento con destino desconocido. Testimonios coincidentes señalan que el vehículo militar se dirigió a Peldehue, al predio destinado al Regimiento Tacna, donde habrían sido ejecutados y sepultados. Desde esa fecha permanecen todos ellos en calidad de detenidos desaparecidos”.

Los colaboradores asesinados son el economista, ex gerente del Banco Central y asesor del Presidente, Jaime Barrios Meza, 47 años,

socialista; el jefe del gabinete del Subsecretario del Interior, Daniel Escobar Cruz, 37 años, comunista; el Intendente de La Moneda, Enrique Huerta Corvalán, 48 años; Claudio Jimeno Grandi, 33 años, sociólogo, socialista, asesor; Jorge Klein Pipper, 27 años, médico psiquiatra, comunista, asesor; Eduardo Paredes Barrientos, 34 años, médico cirujano, socialista, asesor; Enrique París Roa, 40 años, médico psiquiatra, comunista, asesor; Héctor Pincheira Núñez, 28 años, médico, asesor de informaciones y Arsenio Poupin Ossiel, 38 años, socialista, abogado, asesor. También son asesinados los integrantes del dispositivo de seguridad presidencial, todos ellos socialistas: Manuel Castro Zamora, 23 años, Sergio Contreras Contreras, 40 años, José Freire Medina, 20 años, Daniel Gutiérrez Ayala, 25 años, Óscar Lagos Ríos, 21 años, Óscar Marambio Araya, 20 años, Juan Montiglio Murúa, 24 años, Julio Moreno Pulgar, 24 años, Jorge Orrego González, 29 años, Óscar Ramírez Barría, 23 años, Luis Rodríguez Riquelme, 26 años, Jaime Sotelo Ojeda, 33 años (jefe de la escolta presidencial), Julio Tapia Martínez, 24 años, Óscar Valladares Caroca, 23 años y Juan Vargas Contreras, 23 años.

A treinta años de estos hechos, ninguno de los generales que ese día comandaron las tropas se hace responsable de haber dado la orden de fusilamiento e insisten en la tesis insostenible de que los asesinados murieron combatiendo en La Moneda. La Comisión Rettig recibió testimonios y comprobó fotografías y videos en los que se identifican a quienes se rindieron. Su conclusión es terminante: fueron asesinados en dependencias militares.

CAPÍTULO XXI

La resistencia

Esc 11 de septiembre, la tónica dominante en los partidarios de la Unidad Popular es una mezcla de rabia, desconcierto y confusión. Las únicas instrucciones que les llegan a todos desde las cúspides directivas son las dadas por Allende en sus discursos que, treinta años después, todavía se prestan a diversas interpretaciones. En ellos se aprecia la gran valentía y decisión personal del Presidente para defender la dignidad de su cargo, pero a la vez quedan patentes sus contradicciones y ambigüedades en temas claves, así como una orientación de carácter pasivo a la ciudadanía, a la que indica permanecer en sus centros de trabajo.

Ni de los discursos de Allende ni desde las direcciones de los sindicatos o de partidos de la Unidad Popular llegan a la población instrucciones de ofensiva contra los amotinados ni de defensa personal o colectiva. No hay ni siquiera indicaciones para obstruir los movimientos de los sublevados, como cortar caminos y puentes, interrumpirles el suministro de energía eléctrica e interferir sus comunicaciones.

El enorme potencial de los trabajadores organizados no es movilizadado por Allende ni por la dirección nacional de los partidos. Ante la ausencia de esas directivas a escala nacional, las actitudes quedan a merced de la situación que se vive en cada partido, fábrica, sindicato, provincia o población.

En la capital, la dirección del Regional Santiago Centro se traslada a las 11:00 de la mañana a la Fundición Libertad, desde la Segunda Comuna, a la que ha llegado sobre las 10:00. Allí recibe después la confirmación de la caída de La Moneda, sin saber todavía el destino de Allende. También recoge y evalúa la información que le llega desde diversos puntos de la ciudad que indican que ésta se encuentra bajo control de los golpistas. Entre las 14:45 y las 15:00 se tiene la certeza de que a la Fundición no llegarán las armas prometidas, ya que el Gobierno ha caído y no hay señales del Comité Central. La dirección, encabezada por Juan Bustos, asume la decisión de evacuar esa empresa, para impedir una masacre de los que

están allí reunidos desde hora temprana, listos para defender a su gobierno.

Bustos y el responsable de defensa del Regional encaramados a una máquina explican las razones de esa decisión a los allí concentrados, entre gritos de una gran indignación de la mayoría de los presentes que, preparados durante semanas, esperan que se cumpla la promesa de entregarles armas y contar con una dirección para derrotar a los golpistas. Esa gente se siente frustrada y engañada. "Apenas hay aquí tres o cuatro metralletas, cuatro o cinco fusiles y armas cortas, con no más de veinte balas por arma. ¿Creen que con esto se puede defender esta fábrica? No, compañeros, sería un suicidio. Váyanse a sus casas, destruyan los papeles comprometedores, guarden o entierren en un lugar seguro las armas que puedan tener y manténgase en comunicación. Ahora lo importante es mantener en funcionamiento el Partido al que cada uno pertenezca y los sindicatos, para el contragolpe o para la clandestinidad", explican los dirigentes socialistas.

Con el peso de la frustración y la incertidumbre sobre sus espaldas, los trabajadores se van retirando poco a poco, en distintas direcciones, en medio de una gran tensión y de críticas a sus dirigentes. Bustos y dos miembros de la Comisión Política del Regional se dirigen después hacia el lugar de concentración de los militantes de la Sexta Comuna, en el barrio Recoleta, cruzando el río Mapocho.

En el camino hacia esa cita, uno de los miembros de la Comisión Política del Regional se detiene en su domicilio, próximo a la Sexta Comuna y allí se encuentra con una sorpresa: en su casa están los miembros del Comité Central, Luis Lobos y Gustavo Ruz, *el Pollo*, y otros dos integrantes de la Comisión Política del Regional, Eugenio Da Vía y Germán Mallol. En una breve reunión se dialoga sobre la situación. Ruz, quien coordina desde hace unas semanas, en nombre del Central, las labores de defensa con el Regional, consulta sobre la cantidad de gente de que podría disponer esa organización partidaria para actuar esa noche en lo que se supone puede ser el contragolpe leal. Además, desaconseja que mientras tanto se realicen acciones militares con las escasas armas y las más aún escasas municiones de que se dispone, concerta un encuentro para más tarde, con citas de recambio por si surgen problemas y asegura que esa misma noche llegarán las armas prometidas por el Comité Central. Es probable que Ruz crea sinceramente en lo que promete, ya que aún no está enterado de lo que está ocurriendo lejos de allí, en una empresa del sector metalúrgico. En los días siguientes *el Pollo* empezará su intento de reconstruir una Dirección Central, con otros tres

miembros del Comité Central, Alejandro Jiliberto, Víctor Zérega y el dirigente juvenil Ricardo Lagos (que no es el que posteriormente será elegido presidente de Chile), tarea que lo ocupa hasta que cae preso en marzo de 1974.

En torno a las 17:00 del once de septiembre, la Comisión Política del Regional, a la que se agregan representantes de dos o tres comunas, entiende que el golpe ha triunfado en Santiago y resuelve dar instrucciones a toda su militancia para que planteen en sus centros de trabajo que éstos sean desocupados y que no se los defiendan. El argumento es el mismo dado en la Fundación Libertad: encerrarse en una fábrica, en un centro de trabajo o de estudios, prácticamente sin armas y sin fuerzas militares leales que los apoyen, para enfrentar a las fuerzas regulares, es un acto simbólico y heroico, pero poco práctico a la hora de defender las conquistas de su gobierno popular.

Pero en las fábricas se producen discusiones y en alguna, como en Luchetti, la instrucción del Regional es desacatada por sus militantes, que resisten tres días a un cerco militar, en evidente desproporción de fuerzas. En el combate se enfrentan unas pocas pistolas, revólveres y viejos fusiles, contra ametralladoras, cañones, tanques, helicópteros y aviones. El heroísmo desplegado en Luchetti, y en otros centros de trabajo de todo el país, demuestra que de haber existido una dirección política coherente, dispuesta a liderar y resistir, y sectores leales de las Fuerzas Armadas y Carabineros, otro habría sido el resultado, sin lugar a dudas distinto. Pero así como los trabajadores no reciben instrucciones ni apoyo para organizar la defensa, tampoco las reciben los militares leales, que los hay, y que en varios casos pagan esa lealtad con prisión, torturas, exilios e incluso con sus vidas. Además de los desplazados o encarcelados antes del 11, otros son detenidos en sus cuarteles la noche anterior al alzamiento, algunos de ellos desobedecen ordenes, o como el sargento de carabineros Eduardo Schmidt Godoy, quien no solo se niega a obedecer a los oficiales sublevados sino que extrae su arma y mata a dos de ellos, en la norteña provincia de Antofagasta. El sargento paga ese acto con su vida. Muchos otros militares y carabineros, cuyos nombres quedan en el anonimato, cumplen esas ordenes a regañadientes, encuadrados en una organización verticalista y disciplinada. Entre los constitucionalistas encarcelados el día del golpe se encuentra el oficial ayudante de Pinochet.

En los regionales de provincias del PS, donde a sus direcciones les resulta más difícil esconderse, moverse clandestinamente o aislarse en una embajada, y cuya estructura organizativa y medios son

menores que en la capital, la represión cobra rápidamente sus víctimas. Las direcciones casi completas de los regionales de Antofagasta, Atacama y Coquimbo son masacradas, sin posibilidad de defenderse. La furia asesina se abate también sobre las direcciones seccionales de Iquique, del Salitre, San Felipe, Barrancas, Talca, del Carbón, Valdivia, Llanquihue y Porvenir, entre otras.

La Comisión Política del Comité Central del PS no llega a reunirse. El *aparato eleno*, en cambio, se concentra en la fábrica Indumet, con armas automáticas cortas y largas que exceden al medio centenar de militantes en condiciones de usarlas. La dirección partidaria nunca llega a explicar las razones por las que no entregan esas armas a los regionales, como si la cabeza del Partido pensase que podía actuar sin su cuerpo. Es probable que Ruz se refiriera a esas armas cuando las promete al Regional Santiago Centro, en la tarde del once de septiembre.

Ese día, poco después de las doce, Indumet es rodeada por fuerzas militares y el jefe del aparato y miembro del Comité Central, Arnoldo Camú, *el Nono*, decide evacuar la fábrica. Con Camú al frente, un grupo sale por la parte de atrás de la fábrica, combate, rompe el cerco y, parte de ellos, se dirigen a la textil Sumar. A esa fábrica llegan unos 30 fusiles y algunas ametralladoras, olvidados en la residencia de Tomás Moro por los Carabineros que abandonaron la custodia. En Sumar se combate hasta el atardecer, cuando sus defensores evacúan la empresa y se dirigen a la población La Legua, lugar en el que se distribuyen más armas y en el que vuelven a enfrentarse a las tropas regulares, en una serie de escaramuzas que duran toda la noche.

El once, la dirección del PC también se sumerge. En realidad ha pasado a la clandestinidad dos días atrás. En la noche del 10 alcanza a cambiar el titular de su diario, *El Siglo*, convocando “Cada cual a sus puestos de combate”, con un editorial escrito por Luis Corvalán, en el que llama a los trabajadores a permanecer en sus puestos y defender al Gobierno cada uno en su frente. Sus directivas son: “Hay que echar a andar la actividad en los sindicatos industriales, en los cordones, en los comandos comunales, en las JAP”. Repite instrucciones dadas en el transcurso del paro patronal, o en la movilización contra el *tanquetazo*, como si se estuviera otra vez frente a un paro patronal o a una simple asonada. Pero frente a la subversión total, la dirección comunista no moviliza a sus cuadros sino que éstos cumplen la orden de pasar a la clandestinidad, quedando sus militantes de base en la misma situación que el resto de los partidarios de la

Unidad Popular. Es decir, sin instrucciones ni armas y sujetos a la represión desatada por las Fuerzas Armadas, represión en la que colaborarían cada vez con mayor intensidad los resentidos de la DC, la derecha y la ultraderecha.

Algo similar ocurre con el MIR, que el 11 de septiembre no llega a movilizarse. Con posterioridad (diciembre de 1973) su dirección dirá como explicación que en la mañana del golpe queda aislada e incomunicada, lo que le impide actuar. Una versión posterior y *maquillada* de esa explicación, indica que una parte de su dirección alcanza a reunirse con la Comisión Política del PS (explicación que se contradice con el testimonio de Ruz), y que en esa ocasión son cercados por tropas del Ejército, rompen el cerco y logran huir. Además de la falta de experiencia y la incomunicación entre la dirección y su base, el MIR atribuye su propio repliegue a que “el movimiento de masas (estaba) pasivo, lo que era nuestra (!) fuerza militar fundamental”. Con menos del dos por ciento obtenido en las elecciones de la CUT, la dirección del MIR todavía cree que el movimiento de masas le responde y que, por añadidura, constituye su fuerza militar fundamental. No es de extrañar que el once de septiembre ese movimiento no desempeñe un papel más acorde con sus incendiarias proclamas anteriores.

El PC resguarda sus cuadros, con desigual fortuna, siguiendo una tradición impuesta por su propia historia, que de tanto en tanto lo hace cruzar por etapas de represión y clandestinidad. Además, contribuye a su parálisis su posición ideológica partidaria de congelar el proceso, a la que no son ajenas las instrucciones de Moscú, poco propenso a que se cree una zona de confrontación con Washington en este confín del mundo. El gobierno soviético no quiere, y mejor que nadie lo saben Corvalán y la cúpula comunista chilena, verse involucrado directamente, o indirectamente a través del PC, en un conflicto con los Estados Unidos por este país austral. El reparto del mundo realizado después de la Segunda Guerra Mundial deja para América Latina el papel de patio trasero de los Estados Unidos. En consecuencia, la política soviética para el Cono Sur de América Latina es de buena letra, como lo pudieron testimoniar también, pocos años después, los partidos comunistas de Argentina y Uruguay, en sus actitudes ante sus respectivas dictaduras.

Pero en el MIR, el *repliegue* tiene otras connotaciones. Además de la falta de correlación entre sus proclamas y los hechos, entre su fanfarría de desfiles pseudomilitares y la ausencia de una estructura capaz de combatir, está la infantil esperanza de que una vez “derrotado el

reformismo” las masas reconocerían en ese grupo a su verdadera dirección. En el mismo informe de diciembre de 1973, con tiempo suficiente como para haber analizado la magnitud de la derrota y su escasa contribución para evitarla, todavía la dirección del MIR afirma que: “Más allá de los golpes recibidos y con una táctica correcta, tenemos la autoridad moral y la fortaleza orgánica suficientes para dar conducción al movimiento de masas y llevarlo al éxito”.

El 11 de septiembre y los días que le siguen, la represión es infinitamente superior a la resistencia, mal armada o desarmada, que se opone al golpe. Es posible que los golpistas esperaran una resistencia mayor, como lo afirma después el mismo Pinochet o, lo más probable, que el despropósito de utilizar el bombardeo aéreo, de blindados y artillería contra quienes sólo disponen de unos pocos fusiles y pistolas persiga el objetivo de disuadir desde el principio cualquier oposición, amedrentar a la mayoría y apresar y matar a los más decididos defensores del gobierno popular.

Para colmo de males, a partir de la tarde del 11 de septiembre y hasta el 15 del mismo mes, desde el exterior se alimenta una campaña de rumores y noticias falsas sobre una supuesta resistencia militar y civil al golpe, que encabezaría el general Prats. Éste es obligado por los golpistas, en la tarde del 14, a hablar ante las cámaras de la televisión, para aclarar que, careciendo de toda atribución de mando, está al margen de todas sus convicciones pretender dirigir un movimiento de resistencia, y anunciar que su propósito es abandonar el país. La campaña indicando lo contrario tiene su origen en el infantilismo y la irresponsabilidad de quienes se sienten seguros fuera del país. Esa campaña provoca que dentro de Chile, en más de un lugar, se mantengan posiciones de resistencia a la espera de que lleguen las tropas leales que, siempre según los dirigentes que están en el exterior, vienen avanzando desde el sur y al mando de Prats. El mantenimiento de esas posiciones, en fábricas, fundos y poblaciones, costará sangre, prisión y vidas.

Un cable de la agencia estadounidense de noticias AP, datado en Buenos Aires el 13 de septiembre y que es reproducido por la mayoría de la prensa latinoamericana, da cuenta de una conferencia de prensa ofrecida en el local central de la Juventud Peronista por Juan Enrique Vega, ex embajador chileno en La Habana y Secretario del MAPU; Octavio González, miembro de la dirección de la CUT y dirigente del PC; y Jorge Arrate, asesor económico de Allende, vicepresidente de la Corporación del Cobre y miembro de la dirección del PS, así presentados al iniciar sus declaraciones.

“Podemos anunciar que el general Prats ha reasumido el comando en jefe del Ejército y que avanza desde el sur hacia Santiago, con efectivos de la Quinta División de Ejército, secundado por dos columnas de trabajadores armados”, anuncian ante una multitud de periodistas.

El cable añade: “Los líderes izquierdistas afirmaron que, de acuerdo a lo que había sido previsto, los militares golpistas controlan solamente el perímetro céntrico de Santiago, pero no sus suburbios obreros y fabriles, donde continúa una intensa lucha. Dijeron que hay más de cien mil trabajadores armados que resisten exitosamente y en condiciones de tomar la ofensiva. No habrá derrota, al menos en el mediano plazo, e incluso las perspectivas de victoria para la causa popular son buenas”.

Con estas declaraciones, que las radios argentinas emiten una y otra vez y que son captadas en Chile, no es de extrañar que en todo el país grupos de activistas intenten acciones desesperadas de resistencia. Todo puede justificarse si es verdad que Prats con la Quinta División y *cien mil trabajadores armados* continúan defendiendo al Gobierno Popular. Este gobierno se mantenía pues, añaden los tres líderes, “ante el asesinato de Allende hay por lo menos 14 funcionarios en línea de sucesión”.

Esa información es totalmente falsa, como se demostrará cabalmente días después. Lo que sí es verdad es que otros dirigentes, en Chile, inician el camino del destierro. Los primeros, Nicolás García y Ariel Ulloa, del Comité Central del PS, sobre el mediodía del once de septiembre se asilan en la residencia del embajador argentino, en la calle Vicuña Mackenna, donde permanecen hasta su salida al exterior. Otros, como Ruz, Altamirano y dirigentes del Regional Santiago Centro y de otros regionales permanecen en la clandestinidad un tiempo, reorganizando el Partido y posteriormente van saliendo hacia el exilio.

Dirigentes del Regional Santiago Centro, con Juan Bustos al frente, aunque por asilarse en embajadas centroamericanas deben partir hacia Honduras y El Salvador, a las pocas semanas se trasladan a Buenos Aires y desde allí trabajan para reorganizar su partido en Chile, incluyendo la edición de materiales, el apoyo material a los que no salen del país y la organización de acciones solidarias en Argentina y otros países. Bustos lo hace hasta que es detenido, confinado en una cárcel y finalmente expulsado, gracias a la intervención de la embajada alemana que lo reclama para dar clases en la Universidad de Colonia, Alemania.

CAPÍTULO XXI

El golpe dentro del golpe

La conservadora dirección del PDC, encabezada por Frei, Aylwin y Rafael Moreno, en los meses previos al golpe da su carta de legalidad parlamentaria al alzamiento e impulsa a sus generales amigos a la sublevación con la esperanza de que el Gobierno caería en sus manos inmediatamente, por la vía de aplicar la fórmula de sucesión establecida en la Constitución o por una rápida convocatoria de elecciones. En cualquiera de los dos casos el indicado para asumir la presidencia era Eduardo Frei. En consecuencia, al día siguiente del golpe, sin que se alcancen a cumplir todavía 24 horas de instaurada la Junta Militar con Pinochet a la cabeza, ese partido da un comunicado público de apoyo al nuevo gobierno, el que, afirma, “merece la patriótica cooperación de todos los sectores”. En términos similares, y con una mayor lógica en su política, se pronuncia el PN.

En su afán de dar cobertura y de procurar apoyos internacionales a los golpistas, todavía el 8 de noviembre de 1973 Frei los justifica con mentiras tan desproporcionadas como la que le cuenta por carta a Mariano Rumor, presidente de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana: “Las armas hasta ahora recogidas, y se estima que no son aún el 40 por ciento, permitirían dotar a más de 15 regimientos... Se había establecido así un verdadero ejército paralelo”. Como ex presidente sabía muy bien cuántas armas son necesarias para armar 40 regimientos y conocía que Pinochet ni siquiera en sus momentos de mayor exaltación golpista llegó a afirmar que hubiera armas para más de un regimiento. Según la información oficial proporcionada por el general Óscar Bonilla, el *arsenal* encontrado a los partidarios de la Unidad Popular en su conjunto lo componen 147 fusiles automáticos, nueve lanzacohetes, dos cañones sin retroceso, 121 granadas, 150 granadas caseras, cinco ametralladoras, dos morteros, 80.000 balas, además de un número indeterminado de metralletas y pistolas. Aún si se creyera en la información del golpista Bonilla, cuyo interés es abultar las cifras, lo que dicen haber descubierto está muy lejos de alcanzar la cantidad necesaria para armar a un sólo regimiento.

El 10 de octubre, en declaraciones al diario *ABC* de Madrid, Frei es tanto o más explícito en su apoyo al golpe: “Los militares han salvado a Chile, a todos nosotros. Cuando un gobierno actúa como lo hizo Allende, el derecho al levantamiento se convierte en un deber”. Un deber que Frei olvidó durante toda la dictadura militar, una dictadura que cerró el Parlamento, clausuró y se apropió de los medios de comunicación, impuso la censura, obvió al Poder Judicial, ignoró la Constitución y creó un formidable aparato represivo que detuvo sin orden judicial, torturó, mató e hizo *desaparecer* a miles de personas, persiguiendo y asesinandolas incluso en el extranjero.

El abogado Jorge Ovalle Quiroz, asesor legislativo del general Gustavo Leigh desde 1973 a 1978, dice que éste le informa al producirse el alzamiento que el propósito del gobierno golpista es restablecer en el más breve tiempo la institucionalidad democrática y devolverle el poder a los civiles, a quienes correspondía. Por eso, añade Ovalle Quiroz, colabora con Leigh hasta que se desengaña.

Sergio Arellano Iturriaga recuerda que “al principio no había un grupo homogéneo en el gobierno. No aparecía claro si el general Pinochet estaba de acuerdo con esto o con lo otro... Había un desconocimiento de quién era Pinochet. Nadie, ni él mismo, pensó que se aferraría al poder con tantos deseos de conservarlo y con tanta habilidad para hacerlo. Al principio él no concentraba todo el poder. Al contrario, era bastante más abierto y también más inseguro”. Poco tiempo le dura la inseguridad.

En cuestión de días, Pinochet controla la suma del poder público, frustra las esperanzas demócrata cristianas de que les cedería el gobierno a los seguidores de Frei y se prepara para reinar de manera absoluta hasta su muerte. De esa manera confirma una de las constantes de los golpes de Estado en América Latina: las usinas de propaganda montadas por nacionales y extranjeros apelan a todos los medios para crear una sensación de que la opinión pública pide que se restaure la democracia, supuestamente agredida por el gobierno popular y democrático de turno, o simplemente democrático. En esa movilización apelan a los sectores de centro, como la DC, sin los cuales les resultaría imposible dar una imagen de consenso en torno al golpe. Una vez producido éste, los sectores extremos de los golpistas copan el poder, desplazan a los moderados y defraudan a los políticos centristas que los apoyaron, que ven incumplidas las promesas previas.

Es probable que la mayoría de los generales chilenos, al igual que la dirección derechista del PDC, pensaran en 1973 que el golpe

sólo vendría a poner orden en unos pocos meses y que inmediatamente se convocarían elecciones. Así lo recuerda en 1988 el general Nicanor Díaz Estrada, de la Fuerza Aérea: “Estuve por el pronunciamiento porque perseguía... prevenir la llegada de una dictadura marxista, restaurar el imperio de la Constitución, la ética y la moral en las funciones públicas y reconocer el derecho a discrepar. Posteriormente eso se desvirtuó”.

Otro civil conspirador, el empresario Orlando Sáenz, alcanza a durar seis meses como asesor económico del régimen y se retira, espantado por el calibre de la violación de los derechos humanos y porque, confiesa, “me tocó asistir al proceso de pasar de la decisión de una intervención para la restauración de la democracia a una decisión de permanencia. No era eso lo que yo pensaba ni era lo que se había declarado en los primeros momentos”. El que fue Director de Trabajo del régimen en sus primeros seis meses, Guillermo Videla, también renunciante por rechazar la violación de los derechos humanos, afirma que en Chile nadie conocía a los militares hasta el extremo, dice, que “para la derecha fue una sorpresa que el régimen de las Fuerzas Armadas resultara tan derechista como ha sido”. Un conspirador de los que dan origen al movimiento, Javier Palacios, el general que está al mando de las tropas que atacan La Moneda y que entra a ella de los primeros, es también de los que estaban convencidos “de que iba a ser un movimiento de corto plazo, que íbamos a exigir el cambio de gobierno para después entregarlo a un poder civil” y está seguro de que todos sus colegas pensaban así, “salvo nefastas excepciones que no tenían nada que ver con nosotros”. Los hechos demuestran que los golpes de Estado tienen una dinámica propia, en la que por lo general prosperan los más duros de los conspiradores. A los tres años del golpe, de los 26 generales de septiembre de 1973, no todos golpistas, sólo quedan cinco en actividad, además de Pinochet. Los demás caen todos, víctimas de las sucesivas purgas internas decididas por el dictador. Bonilla, uno de los artífices de la sublevación, muere de una manera poco clara al estrellarse el helicóptero en el que viaja, en 1975.

Habida cuenta de la tendencia manifestada por Pinochet el día del golpe, de ofrecer aeronaves *que después se caen*, toda clase de conjeturas surgen al morir Bonilla, sin que nunca se aclaren. Otros tres conspiradores de la primera hora son pasados a retiro al cumplirse seis meses del golpe: Orlando Urbina, Ernesto Baeza y Sergio Nuño. Otro conspirador destacado y como los demás vinculado a la DC, Sergio Arellano Stark, queda sin mando de tropas en 1975 y al año

siguiente pasa a retiro, a pesar de la oposición de un sector del cuerpo de generales. Este militar demócrata cristiano se gana una mención en la historia por su despiadada gira al norte de Chile, inmediatamente después del golpe, durante la cual ordena el fusilamiento sin juicio previo de medio centenar de presos políticos, la mayor parte de ellos socialistas.

Justo es señalar que un sector del PDC, minoritario en su dirección pero con personalidades de relieve, como Bernardo Leighton (víctima de un atentado con explosivos, en su exilio en Roma, años después); Ignacio Palma, ex Presidente del Senado; Renán Fuentealba, senador y ex Presidente de ese partido; Radomiro Tomić, ex candidato presidencial, y Fernando Sanhueza, entre otros, rechazan el golpe antes de que se produzca y lo vuelven a rechazar públicamente después, en la primera oportunidad en que pueden reunirse para hacerlo, el 13 de septiembre de 1973. Ese día firman un documento en el que dejan constancia de que esa es la primera ocasión en la que se pueden reunir para aunar criterios, condenan categóricamente el derrocamiento del Presidente Constitucional de Chile, y se inclinan respetuosos “ante el sacrificio que él hizo de su vida en defensa de la autoridad constitucional”. Los firmantes culpan de la tragedia al Gobierno y a la oposición, “porque el deber de mantener una democracia no puede ser eludido por nadie”. A los de la Unidad Popular la critican por considerarla incapaz de construir un camino auténticamente democrático para el socialismo y a la derecha económica por desestabilizadora, ya que “con fría determinación aprovechó los errores de la Unidad Popular para producir un clima de tensión, de ceguera y de pasión política que, unido a lo anterior, hizo imposible un consenso mínimo al descalificar a quienes lo buscábamos con objetividad y con cordura”. También el sector progresista del PDC debe emprender poco después el camino del exilio. El régimen no tolera ni siquiera una oposición moderada, mientras en su interior el golpe dentro del golpe encumbra a los más duros y concentra todo el poder en las ensangrentadas manos de Pinochet.

Epílogo

A treinta años del golpe contra Salvador Allende y a quince de que la dictadura resultara derrotada en un plebiscito que Pinochet convocó seguro de ganar, pero en el que triunfan los demócratas conducidos por quienes fraguaron la oposición y se enfrentaron al dictador dentro del país, todavía Chile no se ha recuperado totalmente de los daños a su sistema democrático, ni del ataque a las conquistas sociales de su población perpetrados por el dictador y sus cómplices internos y externos.

El déficit mayor, registrado en las Fuerzas Armadas, se está superando desde que Augusto Pinochet tuvo que dejar el cargo de Comandante en Jefe y, en especial, cuando fue apresado y llevado ante los Tribunales en Londres, por orden de la justicia española. El mantenimiento del ex dictador en ese cargo fue durante años un freno que impidió la investigación y el esclarecimiento de los miles de casos de desapariciones y asesinatos, reclamados por los familiares y demócratas de dentro y fuera del país. Además, fue un factor de perturbación constante, con desplantes y amenazas al gobierno constitucional.

Sin embargo, el gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia, con dos presidentes demócrata cristianos primero y con el socialdemócrata Ricardo Lagos después, poniendo por delante lo que une y no lo que separa, logra importantes aunque todavía insuficientes progresos en la recuperación de las libertades de expresión, de prensa, de actuación sindical, de reunión y de participación política y otros avances, de menor intensidad, en el campo de los derechos económicos y sociales. Porque si el pinochetazo arrasa como un huracán los derechos humanos y políticos, su acción sobre la economía de la mayoría de la población es comparable a un terremoto de la máxima intensidad, o al paso de una mancha de langostas por un campo de trigo.

Es en el campo económico y social donde se puede apuntar una acción destacada de la dictadura: la de someter a prueba una experiencia neoliberal en las mejores condiciones posibles para su éxito, de acuerdo a los principios que levantan sus teóricos. En un laboratorio no se hubiesen conseguido esas condiciones, “ideales” para poner a prueba un modelo económico y social

Pinochet contrata a los *Chicago Boys*, aunque hay quienes dicen que la relación contractual fue a la inversa, que el contratado fue él, y dispone las condiciones idóneas para realizar un experimento económico sobre un país real. ¡Cuántos ministros de Economía que deben rendir cuentas a sus parlamentos, discutir con los sindicatos, sufrir huelgas y oír la crítica de los medios de comunicación, pueden sentir envidia de sus colegas en la dictadura chilena! Las huelgas prohibidas, los empresarios acallados, los diarios, radios y televisiones de izquierda o democráticos, clausurados; los demás bajo férrea censura o autocensura, según el caso; el Parlamento cerrado, la “justicia” controlada férreamente, los sindicatos reprimidos y los políticos perseguidos.

Uno de los argumentos más utilizados por quienes defienden a la dictadura militar liderada por Pinochet es que ésta deja como herencia una economía estabilizada, con una tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto alta y una de inflación relativamente baja para lo que es usual en América Latina; una balanza comercial con superávit; comercios abarrotados de productos de importación y un sector empresarial próspero. Todo eso es relativamente cierto, pero desde la derecha no dicen que las transformaciones estructurales realizadas durante el gobierno de Allende –y en especial la reforma agraria– fueron la base real de esas mejoras, y no hablan del costo social impuesto por la dictadura. Hoy hay todavía un *pequeño Chile*, constituido por el 20 por ciento de su población, que vive bien, rodeado de bienes superfluos, habituado al lujo y a satisfacer de inmediato cualquier capricho, mientras el resto malvive o está directamente fuera del sistema, en la marginación más absoluta, en la subhumanidad.

El periodista argentino Jacobo Timmerman, conocido por su profesionalidad y alejado de cualquier extremismo, después de un viaje a Chile en 1986, señala que “en 1985 hubo menor producción que en 1970 en rubros esenciales de la actividad económica: acero, papel, fideos y pastas, vidrio. Los chilenos consumen hoy un 15 por ciento menos que en 1970, aunque el 20 por ciento pudiente consume un 30 por ciento más, y el 40 por ciento más pobre un 50 por ciento menos”. Y por si no se lo hubiese entendido bien, Timmerman repite entre signos de exclamación: “¡50 por ciento *menos!*” después del derrocamiento de Allende y de haber instaurado un modelo neoliberal firmemente protegido por las bayonetas.

Allende, cuando alguien le señala durante su gobierno que se están produciendo desajustes e inflación, replica:

“Nosotros no queremos una economía pretendidamente sana, con desocupación, explotación, injusticia, sometimiento al extranjero y desigualdad extrema en la distribución del ingreso. No queremos una economía con desnutrición y alta mortalidad infantil, in cultura y desprecio por la dignidad del hombre. Para nosotros, semejante economía está irremediabilmente enferma. Los pobladores, los desocupados, los desnutridos, no entienden cómo puede ser sano un sistema que los excluye y los somete. No viven de índices, conceptos o palabras de banqueros internacionales. Sienten día a día y saben muy bien qué está sano y qué está irremediabilmente enfermo”.

Si el fracaso del neoliberalismo económico “importado” por Pinochet queda demostrado por su propia experiencia, sin atenuantes, no se puede decir lo mismo del modelo de cambios económicos y sociales impulsado por Salvador Allende. Aún sus más feroces detractores deben admitir que ese modelo es puesto en práctica en las peores condiciones posibles: caída mundial de los precios de sus principales materias primas; huelgas de trabajadores de alto rango, de profesionales y de patronos; modificación del régimen de tenencia de la tierra con una ley obsoleta; el Parlamento, el Poder Judicial y la Contraloría General de la República en contra; un bloqueo financiero internacional dispuesto por los Estados Unidos, con particular incidencia en los organismos multilaterales de crédito; una campaña de propaganda y acción psicológica con sólidos apoyos internos y externos; un desabastecimiento en gran medida provocado y la constante desestabilización de las Fuerzas Armadas por campañas de acción psicológica dirigidas por especialistas, norteamericanos, formados en los Estados Unidos o vinculados a aquellos.

Para un proceso que tiene suficientes elementos positivos como para mantenerse y progresar, la circunstancia adversa de que la presidencia de los Estados Unidos estuviese ocupada por Richard Nixon no es un problema baladí. Con cualquier otro presidente en la Casa Blanca, con Ronald Reagan o Bush hijo incluidos, las cosas habrían podido ser diferentes. Habría habido malas relaciones, pero no un impulso tan fuerte, claro y directo al golpismo desde Washington. Pero Nixon, a todos los hechos de corrupción y espionaje que lo obligaron a renunciar a la presidencia, unió su ligazón personal con empresas estadounidenses con fuertes intereses en Chile.

A todo ello, hay que agregar los errores cometidos por la Unidad Popular, los atribuibles al propio Allende y, sobre todo, los de sus partidarios, en gran medida debidos a la heterogeneidad de sus

apoyos y al apego de las direcciones máximas de sus dos principales partidos a fórmulas ideológicas cuyo fracaso en el llamado campo socialista ya es evidente durante su gobierno para quien quiera verlo y en especial, para aquellos que periódicamente viajan al Este, como lo hacen los dirigentes de esos partidos.

En el Chile de 1970-73 existen condiciones *revolucionarias*, si por tales se entienden las que permiten revolucionar legalmente el país, cambiarlo, darlo vuelta para que el bienestar llegue a las mayorías populares, marginadas desde siempre. La gran aportación de Salvador Allende es su convicción y su lucha para demostrar que es posible realizar esa revolución y esos cambios, en democracia y libertad, con un profundo respeto a la ley y a las ideas de los demás, y con una participación democrática y efectiva de las mayorías populares.

Por negarse a permitir que bajo su Gobierno la policía aplique la tortura ni siquiera a sus enemigos más declarados y colocados voluntariamente al margen de la legalidad, como el terrorista de Patria y Libertad, Roberto Thieme; por mantener buenas relaciones y respetar a todas las religiones, a pesar de ser masón; por proclamarse marxista y a la vez rechazar a las capillas y santones de esa cuasi religión; por ser sensible al dolor de los pobres y desamparados; por creer en las elecciones y respetar sus resultados; por defender a ultranza la libertad de expresión y de prensa; por buscar soluciones a través del diálogo y la negociación y por mucho más, desde sus propias filas se tilda a Allende de socialdemócrata y reformista. Palabras duras y descalificadoras dentro de la izquierda, casi equivalentes a los peores insultos en la época en la que le toca gobernar.

Treinta años después, comprobado el fracaso del neoliberalismo (en realidad: *neoconservadurismo*), del comunismo o *socialismo real* y del globalizador capitalismo salvaje que lo reemplaza, las ideas y el ejemplo de Allende muestran un camino que, a pesar de haber sido trunco, merece un atento estudio, en la seguridad de que aportará elementos para construir el futuro. Como señala Octavio Paz, las respuestas que el comunismo ensayó para los problemas sociales de las mayorías se han demostrado falsas, pero las preguntas siguen en pie.

No se trata de repetir en Chile ni fuera de Chile la experiencia allendista, porque la historia no se repite, ni como farsa ni como tragedia. La humanidad, a pesar de los pesares mira y camina hacia adelante por los vericuetos de la historia, por senderos de espiral en los que los retrocesos son apenas una curva para iniciar otra vuelta ascendente.

La caída de los regímenes dictatoriales del bloque del Este y el

desmembramiento de la Unión Soviética, aquel mal llamado *paraíso de las nacionalidades*, en primera instancia deja al descubierto el fracaso del comunismo, y en segunda que el capitalismo salvaje que lo reemplaza tampoco está resolviendo los problemas. Sin embargo, no se ha llegado al fin de la historia sino al principio de un proceso de cuestionamiento de las ideologías, incluso de aquellas que se dicen no ideológicas, capaz de abrir nuevas fronteras a la humanidad. Nunca antes como ahora la especie humana ha tenido tantas posibilidades, científicas, técnicas y económicas para asegurar una existencia digna, justa y libre, a todos los habitantes del planeta.

Pero, para lograr esa nueva fase de felicidad de la humanidad no bastan los progresos científicos y técnicos, ni el desarrollo económico, porque las respuestas deben ser, ante todo, éticas, políticas y sociales. Allende lo expone con claridad en su primer mensaje al Congreso Pleno del Parlamento de Chile, en mayo de 1971: “es este un tiempo inverosímil, que provee los medios materiales de realizar las utopías más generosas del pasado. Solo nos impide lograrlo el peso de una herencia de codicias, de miedos y de tradiciones institucionales obsoletas”. Es en ese ámbito necesario de búsqueda de nuevos caminos, donde Chile puede ofrecer al mundo su experiencia de los años 1970-73. El análisis y valoración de lo ocurrido bajo el gobierno de la Unidad Popular es una cantera de experiencias e ideas, en especial si se logra separar la paja del trigo. A ello intenta contribuir este libro, escrito desde la distancia, pero con el corazón puesto en Chile, ese extraordinario país austral del continente americano donde, como dijo Allende en su último discurso, “más temprano que tarde, de nuevo se abirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor”.

ANEXOS

Yo estoy aquí, en La Moneda

Primera alocución radial de Salvador Allende, 11 de septiembre de 1973, hora 07:55. Emitida por la Red de Emisoras de la Patria (Radios Corporación, Portales, Magallanes y Recabarren):

“Habla el Presidente de la República desde el Palacio de La Moneda. Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del Gobierno, del gobierno legítimamente constituido, del gobierno que está amparado por la ley y la voluntad del ciudadano.

En esta circunstancia llamo sobre todo a los trabajadores: que ocupen sus sitios de trabajo, que concurren a sus fábricas, que mantengan calma y serenidad. Hasta este momento, en Santiago no se ha producido ningún movimiento extraordinario de tropas y según me ha informado el jefe de la guarnición, Santiago estaría acuartelado y normal. En todo caso, yo estoy aquí, en el Palacio de Gobierno y me quedaré, aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo.

Lo que deseo, esencialmente, es que los trabajadores estén atentos, vigilantes y que eviten provocaciones. Como primera etapa tenemos que ver la respuesta, que espero sea positiva, de los soldados de la patria, que han jurado defender el régimen establecido, que es expresión de la voluntad ciudadana y que cumplir con la doctrina que prestigió a Chile y la prestigia, por el profesionalismo de las Fuerzas Armadas. En estas circunstancias tengo la certeza de que los soldados sabrán cumplir con su obligación. De todas maneras, el pueblo y los trabajadores fundamentalmente, deben estar movilizados activamente, pero en sus sitios de trabajo, escuchando el llamado que pueda hacerles y las instrucciones que les de el compañero Presidente de la República”.

Es posible que nos aplasten

Segunda alocución radial de Salvador Allende, 11 de septiembre, hora 08:15. Emitida por la Red de Emisoras de la Patria

“La historia no se detiene, ni con la represión, ni con el crimen. Esto es una etapa, será superada. Esto es un momento duro y difícil. Es posible que nos aplasten, pero el mañana será del pueblo, será de los trabajadores. La humanidad avanza para conquistar una vida mejor.

Compatriotas: es posible que silencien las radios y me despidan de ustedes.

En este momento pasan los aviones, es posible que nos acribillen, pero sepan que estamos, por lo menos con nuestro ejemplo, para señalar que en este país hay hombres que saben cumplir con la obligación que tienen. Yo lo haré, por mandato del pueblo y por voluntad consciente de un Presidente que tiene la dignidad del cargo...”.



Pagaré con mi vida

Última alocución radial de Salvador Allende, 11 de septiembre, hora 09:30. Emitida sólo por Radio Magallanes:

“Esta es la última vez que me voy a dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron: soldados de Chile, comandantes en jefe, titulares dos de ellos, el contraalmirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero que sólo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al Gobierno, también se ha denominado director general de carabineros.

Ante estos hechos sólo me cabe decirles a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico pagaré, con mi vida la lealtad del pueblo y les digo que tengo la certeza de que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser segada definitivamente.

Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.

Trabajadores de mi patria: quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que sólo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra de que respetaría la Constitución y la ley y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en el que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección.

El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que les enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya, víctima del mismo sector social que hoy estará en sus casas, esperando con mano ajena reconquistar el poder, para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios.

Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo dar su preocupación por los niños, me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase

para defender también las ventajas de una sociedad capitalista, de unos pocos.

Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron y entregaron su alegría y su espíritu de lucha.

Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual. A aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente, en los atentados terroristas, volando los puentes, saltando las líneas férreas, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de quienes tenían la obligación de custodiar los bienes del Estado. La historia los juzgará.

Seguramente Radio Magallanes será acallada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa, lo seguirán oyendo, siempre estaré junto a ustedes, por lo menos en el recuerdo quedará el nombre mío, que fue leal a la lealtad de ustedes.

El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede rendirse.

Trabajadores de mi patria: tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse.

Quedan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor.

¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!

Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano, tengo la certeza de que por lo menos habrá una lección moral que castigara la felonía, la cobardía y la traición”.



El juicio de la historia

Artículo publicado el 5 de julio de 1971 en el semanario *La Aurora de Chile*. (Las negritas pertenecen al original, escrito por la dirección del periódico, *nota del autor*)

Oímos clauto al compañero (Allende) esa mañana del viernes 29 de junio, por la radio: “llamo al pueblo a que salga a la calle... el pueblo tendrá armas si es necesario”.

“El pueblo tendrá armas si es necesario” Eso dijo el compañero. Y nos quedamos pensando en lo que dijo: todos los civiles que esa mañana tomaron las fábricas y los servicios, todos los civiles que esa mañana se volcaron a los alrededores de La Moneda, han estado pensando en lo que dijo el compañero Presidente: **Armados de palos y de fierros fue como los obreros tomaron las fábricas. Con las manos desnudas, sin más**

armas que sus agallas, era como los trabajadores se movilizaban alrededor de La Moneda. Le silbaban a los tanques los compañeros, y los tanques enfilaban sus armas contra la masa desarmada, y los compañeros arrancaban (corrían, *nota del autor*) y se agrupaban, y volvían a la carga, de nuevo a silbar, y a gritar, a silbar y a gritar, en un desesperado intento de defender con sus silbidos y sus gritos, con su mera presencia física, con su puro corazón, con su pura decisión de combatir, en un emocionante afán de defender a su Gobierno.

No, no tuvo armas el pueblo para defender a su Presidente. Para defender su revolución. No tuvo armas.

Hay algunos fascistas dentro de los organismos armados. Hay algunos fascistas dispuestos a utilizar las armas en contra del pueblo. **Creemos que tarde o temprano esos fascistas se alzarán de nuevo en contra del Gobierno.**

Y cuando esa minoría fascista se alce, las tropas leales, las fuerzas armadas leales, combatirán en contra de esta minoría. Las fuerzas armadas leales, los carabineros, los detectives combatirán de nuevo por su Gobierno, con el mismo grito en la garganta: **“La guardia muere, pero no se rinde, mierda!”.**

Y no deben combatir solos. Los obreros, los campesinos, los pobladores, deben combatir junto a ellos. **Armas necesitará el pueblo y armas deben serle entregadas.**

Es una cuestión de oportunidad, conforme. A lo mejor la intentona fascista puede ser controlada sólo con las FFAA. y Carabineros. A lo mejor no.

El presidente de la República, los jefes de partido, y los militares leales deben meditar bien: ¿puede o no puede la intentona ser sofocada sólo con las tropas leales? ¿Sí o no?

Si se equivocan, y tardan en armar al pueblo, como ocurrió en Bolivia (en el golpe contra el presidente Juan José Torres, 1972, *nota del autor*), y el fascismo se impone, grave responsabilidad contraerán ante la historia. En España (al estallar el golpe franquista, en 1936, *nota del autor*) en todas las ciudades donde se abrieron las armerías a los sindicatos, la insurrección fascista fue sofocada en el día; en cambio, en otras ciudades no se quiso armar a los civiles, y allí el fascismo se impuso y desde allí se irradió al resto del país.

Si se equivocan, como se equivocó J. J. Torres, **como se equivocaron los republicanos españoles, entonces, ¡qué triste juicio emitirá sobre ellos la Historia!**



Carta de Aylwin a Allende

Santiago, viernes 3 de agosto de 1973

Señor
Salvador Allende G.
Presidencia de la República
PRESENTE

Excmo. Señor:

El desarrollo de nuestras conversaciones en el día y la noche de ayer me han ocasionado una tan seria preocupación de conciencia que creo mi deber representársela de inmediato.

Acogiendo V.E. y nosotros el llamado del Episcopado Católico nacional a dar “los pasos necesarios para crear las condiciones de un diálogo que haga posible un entendimiento”, nos reunimos con el propósito de “ordenar el proceso de cambio y continuarlo” como condiciones indispensables para restablecer la convivencia democrática entre los chilenos y evitar el riesgo de un enfrentamiento armado.

Hablamos con la franqueza y responsabilidad que nos exige Chile en la grave emergencia que vivimos, en el ánimo de encontrar puntos de convergencia y soluciones eficaces sobre la base de la exposición sincera del pensamiento de cada cual.

Del cotejo de los planteamientos públicos formulados reiteradamente por V.E. y, muy especialmente, en su discurso en la UNCTAD la semana pasada, con nuestros planteamientos igualmente públicos expresados en la Declaración de la Directiva Demócrata Cristiana del 6 de julio en curso y de mis discursos del 11 y 26 del presente resulta una convergencia formal evidente en torno a las siguientes materias esenciales:

- a) necesidad de alianzar el orden institucional y la plena vigencia del Estado de Derecho;
- b) necesidad de cumplir el mandato constitucional de que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros son los únicos depositarios de la fuerza y no pueden existir otros grupos armados paralelos;
- c) necesidad de terminar con las “tomas” y otros medios ilegítimos de imponer de hecho y por la fuerza la voluntad de grupos minoritarios que se arrogan representación del pueblo o de los trabajadores, y
- d) necesidad de definir de una vez por todas el régimen de propiedad de las empresas delimitando *legalmente* el área social, la mixta y la privada, y regulando el régimen de participación de los trabajadores.

Hicimos presente a V.E. la extrema urgencia que atribuimos al cumplimiento efectivo de estos propósitos, diariamente contradichos en los hechos por personeros y partidarios del Gobierno, lo que ha llevado al país a perder la confianza en las declaraciones de sus dirigentes. Y respetuosos de

sus prerrogativas constitucionales, creemos nuestro deber hacerle saber nuestra opinión en orden a que V.E. afianzara su autoridad constitucional y preservaría la estabilidad institucional de la República si constituyera un Ministerio con participación institucional de las Fuerzas Armadas con poderes suficientes en mandos superiores y medios, para asegurar el efectivo cumplimiento de las decisiones de V.E. dentro del marco de la Constitución y las leyes aplicadas a todos por parejo.

Agregamos a V.E. que un paso de esta naturaleza produciría en el país el clima de “desarme espiritual y material” indispensable para restablecer la normalidad en nuestra convivencia cívica y haría posible nuestra cooperación desinteresada, desde la oposición en que nos encontramos por voluntad del pueblo, para facilitar acuerdos y resoluciones a fin de ir resolviendo los más importantes problemas nacionales.

A este planteamiento nuestro V.E. respondió que sin descartarlo como una posibilidad ulterior, le parecía previo lograr acuerdos entre el Gobierno y la Democracia Cristiana sobre los problemas más importantes del país, entre los cuales enunció los siguientes: a) grupos armados; b) participación de los trabajadores y poder popular; c) solución jurídica y política de las cuestiones de competencia entre los Poderes del Estado; d) medidas para solucionar los problemas económicos y jurídicos, del área social y privada; e) medidas para asegurar la distribución, aumentar la producción y atajar la especulación, y f) cuestiones varias, como, por ejemplo, medios de comunicación.

Para abordar estos problemas sugirió la constitución de comisiones especiales, que estudiaran fórmulas de consenso y nos las propusieran a V.E. y a mí, a fin de adoptar los acuerdos definitivos.

Por nuestra parte representamos a V.E. que a nuestro juicio no es viable lograr un acuerdo de conjunto o global sobre todas estas materias en un plazo breve; que la gravedad de la situación porque el país atraviesa no admite espera y que a juzgar por sus declaraciones y las nuestras, hay consenso sobre lo fundamental que es restablecer las bases esenciales de la convivencia democrática enunciadas en los tres primeros puntos señalados en la conversación, la mayor parte de las cuestiones que V.E. nos planteaba tenían su base de solución en la reforma constitucional aprobada por el Congreso Nacional y cuya promulgación está pendiente. Conscientes de los problemas políticos que para V.E. puede significar dicha promulgación, como esta semana sobre asignación de tierras a los campesinos, le expresamos nuestra voluntad - que ya lo habíamos hecho saber anteriormente por conducto privado - de concurrir con nuestros votos en el Congreso Nacional para despachar rápidamente: a) una reforma constitucional destinada a impedir que el procedimiento de reforma prescrito actualmente por la Constitución pudiera utilizarse para reducir, terminar anticipadamente o cercenar de cualquier modo los mandatos y atribuciones de los mandatarios de elección popular, y b) las leyes necesarias para solucionar los problemas prácticos a que podría dar lugar la entrada en vigencia de la reforma sobre las áreas de la economía.

Sobre esta materia V.E. fue muy explícito: no puede aceptar desde luego

la idea de promulgar la reforma constitucional en los términos aprobados por el Congreso Nacional como perentoriamente lo ordena la Carta Fundamental y estima que la cuestión debe ser zanjada mediante alguna fórmula de solución que elabore una Comisión formada por personeros del Gobierno y sus Partidos y de la Democracia Cristiana la que debería informar en el menor plazo posible.

Así planteadas las cosas, nuestras conversaciones han llegado a un “im passe”, V.E. no acepta ninguna de nuestras sugerencias y sólo nos ofrece la constitución de comisiones que, según lo prueba la experiencia, son generalmente inoperantes, suscitan desconfianza en la opinión pública y significan dilaciones que la grave situación actual del país no admite.

En estas circunstancias no puedo ocultar a V.E. que considero, después de serena meditación e inspirado sólo en el afán de servir a Chile, que el camino sugerido por V.E. no es el que la Patria exige de nosotros en esta hora tan grave y apremiante: por lo que me permito insistirle en nuestros primitivos planteamientos, únicos que a nuestro juicio pueden crear las condiciones de tregua y normalización cívicas indispensables para la búsqueda de entendimiento verdaderamente fecundos.

Confío que V.E., medítandolo ante su conciencia de chileno y de gobernante, no podrá menos que compartir esta apreciación y adoptar las decisiones consecuentes, para lo cual puede contar con la certeza de nuestra leal cooperación.

Si así no fuere, nos parece inútil prolongar conversaciones que sólo contribuiría a confundir más al pueblo que nos mira con el consiguiente perjuicio para nuestro régimen democrático.

Saluda Atte. a V.E.

PATRICIO AYLWIN AZÓCAR
Presidente Nacional
Partido Demócrata Cristiano

Carta de Allende a Aylwin

Señor Senador Aylwin:

La trascendencia que para la seguridad y el progreso de los chilenos tiene un urgente entendimiento entre la mayoría democrática del país, que ponga bajo control de la razón las corrientes profundas que de modo cada vez más alarmante amenazan con arrastrar a nuestra comunidad hacia una catástrofe social, interpretando el sentimiento de la gran mayoría de com-patriotas, me llevó a convocar pública y solemnemente al Partido Demó

crata Cristiano a entablar un diálogo con el Gobierno que permitiera “ordenar el proceso de cambios y continuarlo”.

En las circunstancias presentes por que atraviesa Chile, un diálogo entre el Gobierno y el Partido que usted preside tiene un solo sentido: buscar las coincidencias y convergencias sobre los problemas nacionales más vitales que existen entre la oposición democrática y el Gobierno, con el objeto de encontrar el entendimiento mínimo sobre las materias concretas expresadas en la declaración de la Directiva Demócrata Cristiana el 6 de julio ppdo., en sus discursos del 11 y del 26 del mismo mes y en el mío ante el Plenario de Federación de la CUT, el día 25 de julio. Y tanto usted como yo convinimos, en nuestras últimas declaraciones sobre la materia, en que el diálogo quedaba planteado sin imposiciones unilaterales y contemplando los puntos de vista de la otra parte.

Por consiguiente, cuando usted, en la carta que ayer me dirigiera, reafirma su deseo de ver promulgada la Reforma Constitucional sobre las áreas de la economía, ello no puedo interpretarlo como la manifestación de querer imponer los criterios del P.D.C. en torno de esa materia por sobre los del Ejecutivo. Por el contrario, usted se muestra sensible a algunos planteamientos que el Gobierno ha formulado al respecto y hace proposiciones complementarias para obviar los problemas que para mí, como Presidente de la República, encierra la promulgación de la mencionada Reforma.

Las tesis jurídicas sustentadas por el Ejecutivo acerca del procedimiento seguido por el Congreso para aprobar la Reforma Constitucional en cuestión, distintas de las defendidas por la mayoría parlamentaria, son ampliamente conocidas. La posición del Gobierno se funda en mi voluntad intransigente de mantener el régimen presidencial. Pero ha estado siempre en mi ánimo que una discrepancia jurídico constitucional no debía convertirse en obstáculo insalvable para la continuidad institucional del país. Por ello, el Gobierno invocó, en su oportunidad, el arbitraje del Tribunal Constitucional.

Hoy, cuando todos nuestros ciudadanos se interrogan por los graves problemas económicos y sociales que enfrentamos y se angustian e inquietan por el destino que espera a nuestra convivencia cívica, no será el Presidente de la República quien anteponga un problema de interpretación jurídica a la discusión y búsqueda de entendimiento sobre los reales problemas materiales que nos preocupan.

Llevado por este anhelo en bien del país, quiero proponerle una solución concreta que concilie las posiciones jurídico constitucionales del PDC y del Gobierno sin que las de ustedes se impongan sobre las nuestras, ni viceversa.

En caso de acuerdo estaría dispuesto a promulgar la Reforma Constitucional para que así desaparezca la dificultad formal y entremos a discutir sobre lo substancial que preocupa a los trabajadores y a todos los chilenos, lo que presupone el siguiente procedimiento de instrumentación, basado en la simultaneidad de sus concreciones:

1.- Remitir al poder constituyente formado por el Congreso Nacional y el Presidente de la República la solución del conflicto de interpretación

jurídica pendiente. En este sentido se tramitaría un proyecto de Reforma Constitucional que declara explícitamente, a contar de su vigencia, que el quórum para que el Congreso haga prevalecer su criterio, tratándose de observaciones supresivas o substitutivas a un proyecto de enmienda a la Constitución, es de dos tercios de los miembros presentes, que representen, a lo menos, la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio. A la vez, que declare que, para los efectos de la tramitación de los proyectos de Reforma Constitucional referente a las áreas de la economía y al régimen de tenencia de la tierra, el Congreso no requirió insistencia para que se entendiera aprobado a su propio texto frente a las observaciones del Presidente de la República.

2.- Dicho proyecto de enmienda constitucional contendría también disposiciones encaminadas, tal como usted lo señala, a solucionar los problemas prácticos a que daría lugar la entrada en vigencia de las reformas constitucionales sobre las áreas de la economía y sobre el régimen de tenencia de la tierra, en trámite.

3.- Se despacharán, simultáneamente, los proyectos de ley sobre empresas de autogestión, participación de los trabajadores en la conducción de la economía, garantías a la pequeña y mediana empresa, actividades económicas reservadas al Estado, estatuto de requisiciones e intervenciones y la persecución del delito económico. Estas materias, salvo el estatuto de requisiciones e intervenciones y la persecución del delito económico, están contenidas en los proyectos de ley enviados hace varios meses al Congreso, previo estudio conjunto del Gobierno y del Partido Demócrata Cristiano, los que, sin duda, constituyen una base real de convergencia. Igualmente, se despacharían los proyectos que fueran necesarios derivados de la Reforma Constitucional sobre el régimen de tenencia de la tierra ya referido.

4.- Los proyectos de Reforma Constitucional sobre las áreas de la economía y sobre el régimen de tenencia de la tierra se promulgarán conjuntamente con la enmienda constitucional propuesta en los puntos primero y segundo y con los proyectos de ley a que se alude en el punto tercero.

Obviado de esta forma el diferendo jurídico, queda abierto el camino para abordar los reales problemas sobre los cuales Chile espera un entendimiento mínimo: los problemas económicos, sociales y políticos que hoy están amenazando la paz interna y la unidad nacional frente a presiones extranjeras.

Afirma usted en su carta que hay convergencia formal entre el PDC y el Gobierno en torno de la necesidad de restablecer las bases esenciales de la convivencia democrática. En su discurso del 26 de julio, usted recogió la casi totalidad del plan en ocho puntos que yo propusiera la víspera para centrar el diálogo y que son los siguientes:

- 1.- Afianzamiento del mando y la autoridad de Gobierno.
- 2.- Rechazo de las fuerzas armadas paralelas. Marginación de las FEAA de la pugna política.
- 3.- Desarrollo del poder popular vinculado al Gobierno y sin producir antagonismos con el régimen institucional.

4. Reafirmación del camino político establecido en el programa de la Unidad Popular que en ningún caso es insurreccional.

5. Definición y articulación de las competencias que les corresponden a los poderes del Estado.

6. Plena vigencia del estado de derecho, para lo cual es imprescindible acabar con el bloqueo legislativo y del desarrollo de un régimen legal.

7. Definición del régimen de propiedad de las empresas, precisando legalmente el área de propiedad social de la economía y teniendo presente la reversibilidad de las transformaciones realizadas en ella y la necesidad de la participación de los trabajadores en su dirección.

8. Medidas económicas concretas que detengan la inflación, aseguren la distribución y permitan el desarrollo económico del país. No es, por consiguiente, en los principios genéricamente formulados donde se han producido las divergencias que tanto preocupan al país, sino en el contenido y concreción de esos principios. Es sobre estos problemas concretos que debemos discutir y buscar el entendimiento mínimo que asegure la paz y el régimen democrático.

Tengo el firme convencimiento de que el vigor y el prestigio de nuestras instituciones políticas se demuestra buscando los puntos mínimos de entendimiento democrático sobre los problemas más imperiosos del momento.

Llevar a cabo un nuevo cambio de Gabinete, apenas un mes después que asumiera el actual, no aportaría ninguna solución a lo que el país nos exige en la medida de los problemas materiales y tangibles que hoy enfrentan al PDC y al Gobierno no hayan sido reemplazados por un acuerdo que, respetando la personalidad propia de cada una de las partes, preserve el consenso fundamental sobre las condiciones que hacen posible la democracia, las libertades, el estado de derecho, la participación popular, el desarrollo económico y, como consecuencia de todo ello, la convivencia ciudadana.

Mi Gobierno ha sido el único que ha dado pruebas fehacientes y prácticas en múltiples oportunidades y circunstancias de su voluntad de incorporar a las FEAA como instituciones a las grandes tareas nacionales. En un momento de grave peligro para la paz interna, en octubre de 1972, les asigna altas responsabilidades en el seno del Gabinete. Su participación y contribución al desarrollo económico se manifiesta de diversas maneras. Y es mi propósito continuar sumándolas al esfuerzo nacional por avanzar en el camino que democráticamente ha escogido nuestro pueblo. Pero es en la robustez de las instituciones políticas donde reposa la fortaleza de nuestro régimen institucional. Y es obligación de los partidos políticos democráticos esforzarse en evitar el desmoronamiento de las instituciones cívicas capacitándolas para atender las necesidades del país. El estudio detenido de los documentos básicos elaborados por el Partido que usted preside y el Gobierno, para orientar el diálogo, me llevó a proponerle, el 30 de julio, que ambas partes discutieran y buscaran coincidencias mínimas en breves plazos preestablecidos en torno de las grandes cuestiones nacionales en ellos mencionados y que usted recoge y enumera en su carta.

La concreción de todas estas medidas que expresan el decidido propósito

de mi Gobierno de elaborar la nueva juridicidad que el país reclama y que yo estimo indispensable en el ordenamiento del proceso, permitirá el desarrollo normal de nuestra vida institucional, lo que, a su vez, facilita el pleno desarrollo de los cambios sociales dentro de la concepción del estado de derecho.

No deseo dramatizar, pero tengo el deber de recordarle las trascendentes responsabilidades que usted y yo tenemos en los difíciles instantes que vive el país y las proyecciones históricas de nuestras decisiones. Por ello y por el interés superior de Chile, debemos continuar el diálogo. Le invito formalmente para que prosigamos nuestras conversaciones.

Cordialmente

SALVADOR ALLENDE GOSSENS
Presidente de la República

Santiago, viernes 3 de agosto de 1973



Las primeras 40 medidas del Gobierno Popular

(Del programa de la Unidad Popular en las elecciones del 4 de septiembre de 1970).

1. *Supresión de los sueldos fabulosos.*

Limitaremos los altos sueldos de los funcionarios de confianza. Terminaremos con la acumulación de cargos. Terminaremos con los gestores administrativos y traficantes políticos.

2. *¿Más asesores? ¡No!*

Todo funcionario pertenecerá al escalafón común y ninguno estará al margen de las obligaciones del estatuto administrativo. En Chile no habrá más asesores.

3. *Honestidad administrativa.*

Terminaremos con los favoritismos y los saltos de grados en la administración pública. Habrá inamovilidad funcionaria. Nadie será perseguido por sus ideas políticas o religiosas.

4. *No más viajes fastuosos al extranjero.*

Suprimiremos los viajes al extranjero de los funcionarios del régimen, salvo aquellos indispensables para los intereses del Estado.

5. *No más autos fiscales en diversiones.*

Los automóviles fiscales no se podrán usar bajo ningún pretexto con fines particulares. Los vehículos que queden disponibles se utilizarán para fines de servicio público como transporte de escolares, traslados de enfermos de las poblaciones o vigilancia policial.

6. El fisco no fabricará nuevos ricos.

Estableceremos un control riguroso de las rentas y patrimonios de los altos funcionarios públicos. El gobierno dejará de ser una fábrica de nuevos ricos.

7. Jubilaciones justas, no millonarias.

Terminaremos con las jubilaciones millonarias, sean parlamentarias o de cualquier sector público, o privado, y utilizaremos esos recursos en mejorar las pensiones más bajas.

8. Descanso justo y oportuno.

Daremos derecho a jubilación a todas las personas mayores de 60 años, que no han podido jubilar, debido a que no se les han hecho imposiciones.

9. Previsión para todos.

Incorporaremos al sistema previsional a los pequeños y medianos comerciantes, industriales y agricultores, trabajadores independientes, artesanos, pescadores, pequeños mineros, pirquineros y dueñas de casa.

10. Pago inmediato y total a los jubilados pensionados.

Pagaremos de una sola vez los reajustes del personal en retiro de las Fuerzas Armadas, y haremos justicia en el pago de pensionados y montepiadas del Servicio de Seguro Social.

11. Protección a la familia.

Crearemos el Ministerio de protección a la familia.

12. Igualdad en las asignaciones familiares.

Nivelaremos en forma igualitaria todas las asignaciones familiares.

13. El niño nace para ser feliz.

Daremos matrícula completamente gratuita, libros, cuadernos y útiles escolares sin costo, para todos los niños de la enseñanza básica.

14. Mejor alimentación para el niño.

Daremos desayuno a todos los alumnos de la enseñanza básica y almuerzo a aquellos cuyos padres no se lo puedan proporcionar.

15. Leche para todos los niños de Chile.

Aseguraremos medio litro de leche diaria, como ración, a todos los niños de Chile.

16. Consultorio materno infantil en su población.

Instalaremos consultorios materno infantiles en todas las poblaciones.

17. Verdaderas vacaciones para todos los estudiantes.

Se invitará al palacio presidencial de Viña del Mar a los mejores alumnos de la enseñanza básica, seleccionados de todo el país.

18. Control del alcoholismo.

Combatiremos el alcoholismo no por los medios represivos, sino por una vida mejor, y erradicaremos el clandestinaje.

19. Casa, luz, agua potable para todos.

Realizaremos un plan de emergencia para la construcción rápida de viviendas y garantiremos el suministro de agua por manzana, y luz eléctrica.

20. No más cuotas reajustables Corvi.

Suprimiremos los reajustes de los dividendos y las deudas a la Corporación de la Vivienda.

21. Arriendos a precios fijos.

Fijaremos el 10% de la renta familiar como máximo para el pago del arriendo y dividendos. Supresión inmediata de los derechos de llave.

22. Sitios eriazos, no.

Destinaremos todos los sitios eriazos fiscales, semifiscales o municipales a la construcción.

23. Contribuciones sólo a las mansiones.

Liberaremos del pago de contribuciones a la casa habitación hasta un máximo de 80 metros cuadrados, donde viva permanentemente el propietario y no sea de lujo o de balneario.

24. Una reforma agraria de verdad.

Profundizaremos la reforma agraria, que beneficiará también a medianos y pequeños agricultores, minifundistas, medieros, empleados y afuerinos. Extenderemos el crédito agrario. Aseguraremos mercado para la totalidad de los productos agropecuarios.

25. Asistencia médica y sin burocracia.

Eliminaremos todas las trabas burocráticas y administrativas que impiden o dificultan la atención médica de imponentes y cesantes.

26. Medicina gratuita en los hospitales.

Suprimiremos el pago de los medicamentos y exámenes en los hospitales.

27. No más estafa en los precios de los remedios.

Rebajaremos drásticamente los precios de los medicamentos, reduciendo los derechos e impuestos de internación de las materias primas.

28. Becas para estudiantes.

Estableceremos el derecho a becas en la enseñanza básica, media y universitaria de todos los buenos alumnos, en consideración al rendimiento y a los recursos económicos de sus familias.

29. Educación física y turismo popular.

Fomentaremos la educación física y crearemos campos deportivos en las escuelas y todas las poblaciones. Organizaremos y fomentaremos el turismo popular.

30. Una nueva economía, para poner fin a la inflación.

Aumentaremos la producción de artículos de consumo popular, controlaremos los precios y detendremos la inflación, a través de la aplicación inmediata de la nueva economía.

31. No más amarras con el Fondo Monetario Internacional.

Desahuciaremos los compromisos con el FMI y terminaremos con las escandalosas devaluaciones de escudo.

32. No más impuestos a los alimentos.

Terminaremos con las alzas de los impuestos que afectan a los artículos de primera necesidad.

33. Fin al impuesto de la compraventa.

Suprimiremos el impuesto a la compraventa y lo reemplazaremos por otro sistema más justo y expedito.

34. Fin a la especulación.

Sancionaremos drásticamente el delito económico.

35. Fin a la cesantía.

Aseguraremos el derecho de trabajo a todos los chilenos e impediremos los despidos.

36. Trabajo para todos.

Crearemos de inmediato nuevas formas de trabajo con los planes de obras públicas y viviendas, con la creación de nuevas industrias y con la puesta en marcha de los proyectos de desarrollo.

37. Disolución del grupo móvil.

Garantizaremos el orden en los barrios y poblaciones y la seguridad de las personas. Carabineros e Investigaciones serán destinados a cumplir una

función esencialmente policial contra la delincuencia común. Eliminaremos el Grupo Móvil y sus miembros reforzarán la vigilancia policial.

38. Fin a la justicia de clase.

Crearemos un procedimiento legal rápido y gratuito con la cooperación de las Juntas de Vecinos, para conocer y resolver casos especiales, como penencias, actos de matonaje, abandono de hogar y atentados contra la tranquilidad de la comunidad.

39. Consultorios judiciales en su población.

Estableceremos consultorios judiciales en todas las poblaciones.

40. Creación del Instituto Nacional del Arte y la Cultura.

Crearemos el Instituto Nacional del Arte y la Cultura, y escuelas de formación artística en todas las comunas.



Cronología

1970

4/09. Elecciones presidenciales. Salvador Allende (coalición de izquierda): 1.075.616 votos; Jorge Alessandri (conservador): 1.036.278; Tomic (demócrata cristiano): 824.819.

6/09. La DC resuelve gobernar con la Unidad Popular allendista un acuerdo de garantías constitucionales como requisito para dar sus votos a Allende en el Congreso y consagrarlo Presidente de la República.

7/09. El embajador estadounidense, Edward Korry, informa a su gobierno que el triunfo de Allende "tendrá un efecto muy profundo en América Latina y el resto del mundo... pues... sólo Chile en el mundo occidental y democrático tiene las condiciones objetivas para permitir una transición constitucional técnica hacia un estado comunista, con el gobierno de Allende".

6/09. El Comité de los 40 aprueba enviar 250.000 dólares a Chile para influir sobre la votación presidencial en el Congreso.

9/09. El presidente ejecutivo de la ITT, Harold Gencen, informa a su directorio que está dispuesto a financiar con un millón de dólares el bloque a Allende en el Congreso.

10/09. Se funda en Santiago el Frente Nacionalista Patria y Libertad, una organización paramilitar y ultraderechista, que encabeza el abogado Pablo Rodríguez Grez.

13/09. Allende denuncia una conspiración del Banco Edwards y la CIA para provocar el pánico financiero en Chile.

13/09. El asesor de seguridad nacional del gobierno norteamericano,

Henry Kissinger, se reúne con Agustín Edwards, propietario de *El Mercurio* y vicepresidente de Pepsi-Cola Inc.

14/09. El Presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, recibe en su despacho a sus ex empleadores, Donald Kendall y Agustín Edwards, presidente y vicepresidente de Pepsi Cola Inc.

15/09. Nixon ordena al director de la CIA, Richard Helms, que "actúe del modo que sea" para impedir que Allende asuma la presidencia.

23/09. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denuncia que en Chile comenzó el despido de los periodistas "anti izquierdistas". Ante la evidencia de que todos los medios siguen en manos de sus propietarios tradicionales, el Colegio de Periodistas refuta esa afirmación. La ITT comienza a subvencionar a *El Mercurio*.

26/09. Se producen atentados contra torres de alta tensión y explotan bombas en residencias de empresarios y en dos supermercados, colocadas por la ultraderecha, que las atribuye a la izquierda.

5/10. La Junta Nacional del PDC aprueba, por 271 votos contra 191 y 91 abstenciones, el apoyo a Allende en el Congreso, sobre la base del acuerdo de garantías constitucionales.

12/10. El Comandante en Jefe del Ejército, René Schneider, ratifica la línea legalista de las Fuerzas Armadas.

17/10. Jorge Alessandri anuncia su retirada definitiva de la política.

18/10. Después del anuncio de Alessandri se produce una corrida de los clientes a los bancos. Cunde el pánico financiero, al considerarse segura la elección de Allende.

20/10. El PDC instruye a sus parlamentarios para que el sábado 24 voten por Allende.

22/10. El general Schneider es víctima de un atentado. El general Carlos Prats es designado Comandante en Jefe provisional, ante la gravedad de las heridas del titular.

24/10. Allende es proclamado Presidente por el Congreso Pleno. El Ministerio del Interior anuncia la identificación de los autores del atentado contra Schneider, de ideología ultraderechista.

25/10. Muere Schneider.

4/11. El demócrata cristiano Eduardo Frei transfiere el cargo de Presidente de la República a Salvador Allende. Este confirma como Comandante en Jefe del Ejército a Prats.

19/11. El Comité 40 aprueba gastar 725.000 dólares para acciones en cubiertas contra Allende.

26/11. El PDC anuncia que apoyará la ley de nacionalización de las minas de cobre.

29/11. El Gobierno interviene a la Compañía Telefónica (Chitelco), de la cual la ITT posee el 70% de las acciones.

2/12. El Estado expropia la Fábrica de Paños Bellavista Tomé.

12/12. El PDC anuncia que apoyará la ley de nacionalización de los bancos.

21/12. El Congreso aprueba, con votos de la Unidad Popular y del PDC, la modificación de la Constitución, para incorporar el estatuto de garantías.

31/12. El Gobierno decreta la intervención de los yacimientos de carbón de Lota Schwager, los mayores del país.

1971

4/1. Se inicia el reparto gratuito de medio litro de leche diario a cada uno de los niños chilenos.

10/1. Se inicia la expropiación de la banca.

13/1. El gobierno interviene varias empresas industriales, abandonadas por sus propietarios.

28.1. El Comité 40 aprueba gastar 1.240.000 dólares para comprar radios y periódicos en Chile.

2.2. El Congreso General del PS elige como Secretario General a Carlos Altamirano.

16.2. Allende promete expropiar todas las tierras comprendidas en la Ley de Reforma Agraria y a la vez respetar a la pequeña y mediana propiedad.

19.2. Se inicia el plan de expropiación de fincas de más de 80 hectáreas de riego básico.

25.3. El Estado compra la empresa siderúrgica Armco Steel.

27.3. Se nacionalizan las minas de hierro, mediante la compra de las dos empresas más importantes del sector.

2.4. *The New York Times* publica una entrevista a Allende, en la que éste asegura que no permitirá la construcción de bases militares extranjeras en Chile y que desea las mejores relaciones con los Estados Unidos.

4.1. La coalición allendista obtiene el 50,25% de los votos, en las elecciones municipales realizadas en todo el país.

13.4. Se reconoce legalmente la calidad de trabajadoras a las empleadas domésticas, que pasan a recibir las mismas prestaciones sociales que los demás asalariados.

13.5 Allende otorga a la CUT la personalidad jurídica como corporación de derecho público.

25.5. Son intervenidas las empresas textiles más importantes.

30.5. Ante 5.000 estudiantes, en su mayoría hostiles y partidarios del MIR, Allende condena en Concepción las ocupaciones ilegales de tierras y crítica "el afiebramiento de algunos, que creen que de la noche a la mañana se puede transformar una sociedad"

8.6. El ex ministro de Frei, Edmundo Pérez Zujovic, es asesinado por un comando ultraizquierdista.

14.6. En un enfrentamiento, la policía mata a uno de los autores del atentado contra Pérez Zujovic, Arturo Calderón, de la VOP.

25.6. Acuerdo de Argentina y Chile para solucionar sus problemas fronterizos en el canal de Beagle.

11.7. El Congreso Pleno aprueba la ley de nacionalización del cobre, por unanimidad.

14.7. El estadounidense Bank of America es nacionalizado por un acuerdo con sus propietarios.

- 16.7. El Estado toma posesión de todas las minas de cobre.
- 28.7. El ex diputado demócrata cristiano, Bosco Parra y el Consejo Nacional de la Juventud de ese partido renuncian al PDC y se pasan a la Unidad Popular.
- 31.7. Otros siete parlamentarios demócrata cristianos renuncian a su partido.
- 1.8. La convención del PR da un giro a la izquierda, origen de una posterior escisión, que toma el nombre de Partido de Izquierda Radical, a pesar de su moderación.
- 6.8. Jacques Chonchol encabeza una ruptura del MAPU, en oposición a su línea marxista.
- 12.8. Estados Unidos anuncia que no dará nuevos créditos a Chile hasta que indemnice a sus empresas cupríferas.
- 9.9. El Comité 40 aprueba otros 700.000 dólares para *El Mercurio*.
- 11.10. La Contraloría General de la República determina que no corresponde indemnizar a las empresas cupríferas expropiadas, por cuanto al deducirse de la indemnización las ganancias excesivas, éstas quedan como deudoras del Estado.
- 24.10. El Cardenal Raúl Silva Henríquez, jefe de la iglesia chilena, califica de impecable el proceso de nacionalización del cobre.
- 15.11. Allende escribe a Germán Pico Cañas, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa, que agrupa a los editores de diarios, que si prospera la nacionalización del monopolio fabricante de papel, dará participación a esa asociación en el proceso de distribución del papel de diario.
- 26.11. Se efectúa la primera marcha de las cacerolas vacías, método de agitación antigubernamental impulsado por la derecha.
- 30.11. Atentado a balazos, frustrado, contra Salvador Allende, en la carretera a Valparaíso.
- 3.12. Se decreta el toque de queda en Santiago, ante las alteraciones provocadas por las manifestaciones derechistas.
- 10.12. Estallan explosivos almacenados en un local de Patria y Libertad.

1972

- 6.1. El Congreso aprueba una acusación constitucional presentada por la DC contra el ministro del Interior, José Tóhá, quien cesa en el cargo por voluntad propia.
- 7.1. Allende nombra a Tóhá ministro de Defensa y a Alejandro Ríos Valdivia en Interior. Nace la fórmula del "enroque", que se aplicará cuando prosperen otras acusaciones constitucionales contra ministros.
- 11.11. El PDC declara su total ruptura con la Unidad Popular.
13. 1. La Unidad Popular gana las elecciones de la Federación de Estudiantes de Concepción, tradicional feudo del MIR, al que desplaza de la dirección.

- 14.1. Allende anuncia que 91 empresas monopólicas pasarán a manos nacionales, 53 a poder del área de propiedad social y 38 al de empresas mixtas.
- 16.1. La oposición gana las elecciones para elegir un senador y un diputado, en dos provincias.
- 3.2. Se crean legalmente las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios, órganos de movilización y participación de la ciudadanía.
- 23.2. Son embargados en los bancos de Nueva York el dinero y las cuentas de la Línea Aérea Nacional, la CORFO y la Empresa Nacional de Minería, por un juicio entablado por la Braden Cooper Company.
- 1.3. Allende declara a estudiantes del MIR que no se apartará ni un ápice de la Constitución.
- 4.3. Se organiza el complot del *pastel de choclo*.
- 21.3. La CUT declara el estado de alerta para desbaratar la sedición en marcha. El *Washington Post* comienza a publicar las columnas de Jack Anderson, que saca a luz pública los documentos secretos de la ITT, que prueban su actividad encubierta contra Allende.
- 31.3. La ITT reconoce la autenticidad de los documentos revelados por Anderson.
- 11.4. El Comité 40 aprueba otros 965.000 dólares para *El Mercurio*.
- 12.4. La oposición moviliza 300.000 personas en un acto contra el gobierno, convocado "para defender la democracia y la libertad".
- 18.4. Centenares de miles de manifestantes recorren Santiago en apoyo del gobierno.
- 6.6. Los partidarios de la Unidad Popular ganan las elecciones de la CUT, en las que la DC obtiene un tercio de los votos.
- 13.6. Fracasa una reunión de la Unidad Popular y el PDC para concertar una plataforma política común.
- 8.7. La DC gana las elecciones de la CUT en la provincia de Santiago.
- 27.7. Con la oposición del PC, el MIR y los restantes partidos de la Unidad Popular convocan una Asamblea del Pueblo, en Concepción.
- 31.7. Allende escribe una carta a los partidos de la UP, en la que crítica con dureza la Asamblea del Pueblo, a la que se opone. El PC y el PR respaldan a Allende, el MAPU reconoce que se ha equivocado, la Izquierda Cristiana defiende a la *asamblea popular*. El PS niega que la *asamblea* signifique un quiebre constitucional y dice que es tan sólo el inicio de una gran tarea.
- 5.8. Es asesinado un poblador del campamento Lo Hermida, por fuerzas policiales.
- 6.8. Allende destituye a los dos máximos jefes de la policía, por el asesinato de Lo Hermida, aunque ellos no tuvieron parte ni ordenaron la actuación policial.
- 21.8. Estado de Emergencia en Santiago, por los incidentes derivados de la huelga de los comerciantes minoristas.
- 24.8. Tres campesinos son asesinados en el sur del país por comandos derechistas.
- 4.9. 800.000 personas desfilan en apoyo de la Unidad Popular y Allende, al conmemorarse el segundo aniversario del triunfo electoral.

- 21.9. El general Jorge Canales es pasado a retiro, por sus actividades sediciosas.
- 1.10. Se lanza la conspiración del “pastel de choclo”, también conocida como “Plan septiembre”.
- 5.10. Trabajadores de tres empresas textiles las ocupan, por diversos motivos, y reclaman su nacionalización.
- 6.10. Los senadores Francisco Bulnes, Patricio Aylwin, Julio Durán y Américo Acuña acusan a Allende de haberse colocado al margen de la ley.
- 8.10. Comienza un paro general de camioneros.
- 10.10. Ante la gravedad del paro de los transportistas, la interrupción de carreteras y las agresiones, Allende declara que Chile está al borde de la guerra civil.
- 11.10. El ministro del Interior anuncia que serán requisados todos los camiones parados o que obstaculicen el tráfico por las carreteras.
- 12.10. Comienza la requisita de camiones y la detención de camioneros que cometen actos de violencia.
- 13.10. Trabajadores de empresas del área social y vecinos comienzan a organizarse para combatir los efectos del paro de los camioneros y la huelga patronal.
- 15.10. El PDC se pronuncia formalmente en favor del paro patronal y de camiones.
- 17.10. Se establece el toque de queda en Santiago, por las noches. Se ocupan y requisan empresas paradas por sus dueños.
- 20.10. El Ejército ofrece protección a los choferes independientes, para que puedan realizar su trabajo.
- 21.10. Otorgan el Premio Nobel al poeta chileno Pablo Neruda.
- 24.10. El senador demócrata cristiano Rafael Moreno pide el ingreso de las fuerzas armadas en el Gabinete, para que aseguren la normalidad de las elecciones de marzo de 1973.
- 26.10. Se celebran conversaciones entre dirigentes de los camioneros y comerciantes en huelga con Allende.
- 27.10. Se producen atentados terroristas de la derecha e incidentes callejeros en Santiago, en el que se enfrentan derechistas e izquierdistas.
- 28.10. Huelga parcial en los servicios hospitalarios de urgencia y maternidades y cierre patronal de las farmacias.
- 31.10. El demócrata cristiano Radomiro Tomić pide una “tregua democrática” hasta las elecciones de marzo. Allende remodela su Gabinete y nombra ministros a tres militares.
- 3.11. La IC, escisión del PDC, renuncia a integrar el gabinete de Allende, al que critica desde posiciones a su izquierda.
- 5.11. Finaliza el paro de camioneros, después de negociar con el general Carlos Prats, Comandante en Jefe del Ejército y ministro del Interior.
- 8.11. Richard Nixon es reelegido Presidente de los Estados Unidos.
- 29.11. Prats asume la vicepresidencia de la República, al iniciar Allende una gira por el extranjero.
- 4.12. Allende habla ante la Asamblea General de la ONU y denuncia el cerco invisible del que es víctima Chile.

27.12. Allende firma el decreto que incorpora a dos millones de estudiantes al seguro de protección de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

1973

- 7.1. El Gobierno anuncia el racionamiento de alimentos y el control de la producción de trigo.
- 9.2. El PDC llama a unir a toda la oposición al gobierno. Allende dice que es necesario nacionalizar *El Mercurio*. La Internacional Socialista se reúne por primera vez en su historia en Chile.
- 10.2. Carlos Altamirano escribe en el diario *Clarín* un artículo en el que afirma que “las revoluciones no se aprueban ni se rechazan con votos”.
- 4.3. Se realizan las elecciones legislativas. La UP logra el 43,39 % de los votos.
- 25.3. Nuevo gabinete, sin ministros militares.
- 19.4. Los mineros de El Teniente, yacimiento de cobre, se declaran en huelga.
- 1.5. Patricio Aylwin reemplaza a René Fuentealba en la presidencia del PDC.
- 17.5. Son prohibidas las reuniones y manifestaciones de Patria y Libertad.
- 23.5. Eduardo Frei es designado presidente del Senado, cargo cuyo titular es el primero en la sucesión en caso de vacancia en la Presidencia de la República.
- 27.5. El Colegio Médico declara una huelga de 48 horas. Más de tres millones de personas realizan una jornada nacional de trabajo voluntario.
- 10.6. La Cámara de Diputados suspende a los ministros Sergio Bitar, de Minería y Luis Figueroa, de Trabajo.
- 15.6. Marcha de mineros huelguistas a Santiago e incidentes callejeros en los que muere el obrero Milton da Silva. El gobierno acusa al PDC y a la derecha de instigar esos incidentes.
- 16.6. Allende informa que hay en marcha un plan sedicioso promovido por el PDC y Patria y Libertad.
- 21.6. La CUT realiza una huelga de 24 horas, que paraliza el país, en apoyo del gobierno.
- 27.6. Allende propone una nueva negociación al PDC.
- 29.6. Motín militar frustrado, de un regimiento que ataca el palacio presidencial.
- 5.7. Allende reitera su disposición para dialogar con el PDC.
- 12.7. Altamirano rechaza “cualquier fórmula de transacción con la democracia cristiana”.
- 25.7. El PDC acepta dialogar con Allende.
- 26.7. Se inicia otra huelga de los camioneros.
- 27.7. Es asesinado el edecán naval de Allende y jefe de la Casa Militar de la Presidencia, capitán de navío Arturo Araya Peters.

- 30.7. Allende inicia otro diálogo con el PDC.
- 31.7. El PS se pronuncia contra el diálogo con el PDC.
- 4.8. Fuerzas militares allanan una fábrica en el extremo sur del país y asesinan a un obrero.
- 6.8. Patricio Aylwin da por terminado el diálogo con Allende.
- 8.8. Se informa sobre el arresto en la Marina de un grupo de suboficiales y clases, los que son torturados y acusados de subversión ante la justicia militar.
- 9.8. Allende reestructura su Gabinete e incorpora otra vez a cuatro ministros militares. Aylwin estima que esa incorporación no satisface sus requerimientos. Fuentealba, por el contrario, afirma que dará seguridad a todos los chilenos.
- 15.8. Ola de atentados. Mujeres de camioneros ocupan y usan cuatro emisoras de radio.
- 17.8. El PDC anuncia que apoya el paro de los transportistas.
- 18.8. El general Gustavo Leigh es designado Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.
- 21.8. Manifestaciones de esposas de oficiales del Ejército frente a la residencia del general Carlos Prats, a quien insultan.
- 22.8. La Cámara de Diputados, con el voto favorable de derechistas y demócrata cristianos, aprueba un acuerdo que sostiene que el Gobierno ha quebrado gravemente la Constitución.
- 23.8. Prats renuncia a los cargos de ministro de Defensa y Comandante en Jefe del Ejército.
- 25.8. El líder de los camioneros en huelga, León Vilarín, rechaza otro acuerdo con el Gobierno.
- 26.8. Se generaliza el paro patronal y de profesionales derechistas, que prácticamente paralizan los servicios esenciales.
- 29.8. El PS manifiesta su disconformidad con la designación de Carlos Briones, socialista, como ministro del Interior, por considerarlo *blando* y proclive a un acuerdo con el PDC.
- 31.8. El presidente del PDC, Patricio Aylwin, rechaza otra propuesta de diálogo efectuada por el Gobierno.
- 2.9. Briones afirma que Aylwin “silencia la ola de terrorismo que sacude al país, omite referencia alguna al paro de los transportistas y no tiene una palabra de condena para los que siembran el odio entre los chilenos”.
- 6.9. El Comité Ejecutivo de la Unidad Popular se solidariza con los suboficiales y clases procesados por la justicia naval. Allende discrepa públicamente con ese Comité y pide que se espere el pronunciamiento de la justicia. El PDC y el PS piden conjuntamente la renuncia de Allende.
- 8.9. El PC se pronuncia a favor de un acuerdo mínimo entre el Gobierno y los sectores democráticos de la oposición.
- Allende se reúne con los jefes de las Fuerzas Armadas y les comunica su decisión de convocar a un plebiscito.
- 9.9. Sergio Jarpa, presidente del PN, llama a las Fuerzas Armadas a derojar a Allende.

El PDC resuelve promover la dimisión de Allende y la disolución del Congreso Nacional.

Carlos Altamirano critica el diálogo “con sectores de la burguesía”.

10.9. Allende convoca un consejo extraordinario de su gabinete. Discute con sus más directos asesores, José Tohá, Joan Garcés y Augusto Olivares, el texto del discurso por el que anunciará la convocatoria del plebiscito, prevista para el día siguiente.

11.9. Se produce el golpe de Estado. Allende se suicida en el palacio presidencial, después de resistir el ataque de los sublevados y negarse a renunciar y exiliarse.

Se inicia la etapa más dura de la historia chilena, que tardará décadas en comenzar a ser superada.

13.9. La Junta militar designa Presidente al general Augusto Pinochet.

10.10. Eduardo Frei declara al *ABC* de Madrid: “Los militares han salvado a Chile, a todos nosotros. Cuando un gobierno actúa como lo hizo Allende, el derecho al levantamiento se convierte en un deber”.



Nombres citados

AGUIRRE CERDA, Pedro. Político radical, Presidente de la República encabezando un Frente Popular (1938-42).

ALESSANDRI, Jorge. Abogado, político conservador. Presidente de la República (1958-64).

ALESSANDRI, Arturo. Político conservador. Presidente de la República. (1932-38).

ALLENDE, Laura. Diputada y dirigente socialista, hermana de Salvador Allende.

ALLENDE GOSSENS, Salvador. Médico, dirigente socialista, presidente constitucional de Chile desde el 1 de noviembre de 1970 hasta el 11 de septiembre de 1973, día de su muerte.

ALTAMIRANO, Carlos. Secretario General del PS de Chile (1971-73).

ANDERSON, Jack. Periodista estadounidense, revelador del Watergate y de los documentos secretos de la FTT.

AYLWIN, Patricio. Político demócrata cristiano. Perteneciendo al sector conservador ganó la presidencia de su partido y de la Cámara de Diputados (1971-73). Apoyó el golpe militar. En 1989 fue electo presidente de Chile, como candidato de una coalición con socialistas y otras fuerzas democráticas.

BRIONES, Carlos. Abogado, socialista moderado, ministro del Interior en los dos últimos meses del gobierno de Salvador Allende.

BUSSI DE ALLENDE, Hortensia. *Doña Tencha*, esposa de Salvador Allende.

BUSTOS, Juan. Abogado, dirigió el regional Santiago Centro del PS (1971-73). Exiliado en Honduras se trasladó a fines de 1973 a Buenos Aires para reorganizar el PS. Apresado por la dictadura argentina fue liberado y desterrado a Alemania. De allí pasó a España y regresó a Chile a luchar contra la dictadura.

CARMONA, Juan de Dios. Político demócrata cristiano, sector derechista.

CASIRO RUIZ, Fidel. Abogado, líder revolucionario y presidente de Cuba desde 1959.

CONTRERAS, Miriam. La *Payita*, secretaria privada de Allende.

CORVALAN, Luis. Dirigente comunista, apresado después del 11 de septiembre y, tras siete años de cárcel, canjeado por un disidente soviético.

CHILEN ROJAS, Alejandro. Escritor, dirigente histórico del socialismo chileno, dirigió el Departamento de Ediciones Especiales de la Editorial Quimantú.

CHONCHOL, Jacques. Político chileno, siendo demócrata cristiano fue ministro de Agricultura de Frei (1964-69), rompió con ese partido y formó el MAPU, que integró en la Unidad Popular. Fue ministro de Agricultura de Salvador Allende (1970-72).

DAVIS, Nathaniel. Embajador estadounidense en Chile (1972-73).

EDWARDS EASTMAN, Agustín. Principal accionista del diario chileno *El Mercurio*, vicepresidente de Pepsi Cola International.

ENRIQUEZ, Miguel. Líder del MIR, asesinado por la dictadura pinochetista en 1974, mientras dirigía ese movimiento en la clandestinidad.

FERNANDEZ LARIOS, Armando. Teniente del ejército, perteneció a varios servicios de inteligencia, al servicio de Pinochet.

FREL, Eduardo. Político demócrata cristiano, presidente de la República (1964-70), presidente del Senado (1971-73). Padre del político demócrata cristiano del mismo nombre, candidato a la Presidencia de Chile en 1993 por la Concertación de Partidos por la Democracia.

GARCÉS, Joan. Socialista, abogado, de nacionalidad española, asesor personal de Allende.

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Colombiano, escritor, castrista, Premio Nobel de Literatura.

GENENN, Harold. Estadounidense, presidente de la International Telephone and Telegraph (ITT), activo conspirador contra Allende.

GROVE, Marmaduke. Coronel de la Fuerza Aérea. Líder de la primera república socialista de América, en Chile, que duró 12 días (1932) y uno de los fundadores del PS.

GUIJÓN, Patricio. Médico personal de Allende. Único testigo de su muerte.

HOCES, Ángel. Ingeniero en seguridad, militante de base del PS. Vio el cuerpo sin vida de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, cuando acudió a apagar el incendio en La Moneda.

IBAÑEZ DEL CAMPO, Carlos. General, dictador (1927-1931) y presidente constitucional, populista (1952-58).

JOIGNANT, Alfredo. Abogado, socialista, jefe de la policía civil en 1973.

KENNEDY, Edward. Senador estadounidense, denunció el complot de la ITT y del gobierno de Nixon contra Allende.

KISSINGER, Henry. Político estadounidense, asesor de defensa y secretario de Estado del presidente Richard Nixon. Manejó la actuación de la CIA en el complot contra Salvador Allende.

LANSKY, Meyer. Empresario de casinos, prostitución y drogas en la Cuba precastrista (1959), trasladado después a Las Vegas, Estados Unidos y a Las Bahamas.

LEIGHTON, Bernardo. Político demócrata cristiano, sector progresista. Víctima de un atentado en Roma, 1977, cuya autoría intelectual se atribuye a Pinochet.

MARINI, Ruy Mauro. Sociólogo y político izquierdista, miembro de la dirección del MIR.

MAURÍN, Sergio. Técnico comercial, socialista, gerente de la Editorial Quimantú (1971-73).

MOLINIER, Raymond. "El tío Marcos", francés, fue secretario de León Trotsky y militante de la IV Internacional.

NIXON, Richard. Abogado de empresas transnacionales. Presidente de los Estados Unidos desde 1968, reelecto en 1972 no llegó a terminar su segundo mandato, al ser destituido por mentir en el caso Watergate.

OLIVARES, Augusto. Periodista, amigo y asesor personal de Salvador Allende. Murió en La Moneda el 11 de septiembre de 1973.

PALACIOS, Javier. General, comandó las fuerzas sublevadas que asaltaron La Moneda el 11 de septiembre.

PAREDES, Eduardo. Médico, dirigente socialista, jefe de la policía civil chilena (1970-72). Fue asesinado por los golpistas después de ser apresado en La Moneda el 11 de septiembre de 1973.

PÉREZ ZUJOVIC, Edmundo. Político demócrata cristiano, fue ministro del Interior de Frei (1964-70). Murió asesinado por un grupo ultraizquierdista, en junio de 1971.

PINOCHET UGARTE, Augusto. General. Designado Comandante en Jefe del Ejército por Allende, traicionó su confianza y encabezó el golpe de Estado que lo derrocó.

PRATS, Carlos. General, constitucionalista, Comandante en Jefe del Ejército de Chile desde octubre de 1969 hasta agosto de 1973 y ministro del Interior de Salvador Allende (1972-73). Fue asesinado durante su exilio en Buenos Aires (1974), en un crimen cuya autoría intelectual se atribuye al general Augusto Pinochet, por lo cual se abrió proceso a éste en Argentina.

PUCCIO, Osvaldo. Abogado, socialista, amigo y secretario privado de Allende.

POUPIN, Arsenio. Abogado, dirigente socialista, jefe de la policía civil chilena (1972). Fue asesinado por los golpistas después de ser apresado en La Moneda el 11 de septiembre de 1973.

RÍOS, Juan Antonio. Político radical, presidente de la República por el Frente Popular (1942-46).

RODRÍGUEZ, Pablo. Abogado, jefe de Patria y Libertad.

SÁNCHEZ, Comandante, aviador. Edecán de Allende, el único de los tres edecanes que permaneció leal hasta último momento.

SCHINACKE, Eric. Subsecretario general del PS (1971-73), director de Radio Corporación (1971-73), apresado el 11 de septiembre, liberado 4 años después, se exilió en España. Regresó clandestinamente a Chile en 1987.

SCHNEIDER, René. General, Comandante en Jefe del Ejército de Chile (1964-69). Asesinado por un comando ultraderechista (1969).

THEME, Roberto. Ultraderechista, jefe de los comandos clandestinos de Patria y Libertad.

TOHA, José. Abogado, dirigente socialista, ministro del Interior primero y de Defensa, después, de Salvador Allende. Apresado en La Moneda el día del golpe, muere en prisión.

TOMIC, Radomiro. Político demócrata cristiano, sector progresista. Candidato presidencial derrotado por Allende en 1970. Se opuso al golpe militar.

VALDES, Gabriel. Político demócrata cristiano, sector progresista. Se opuso al golpe militar. Presidente del Senado (1989-93).

VALDIVIA, Pedro de. Conquistador extremeño, fundador de la capital chilena, Santiago y de varias de sus ciudades. Murió en combate con los indios mapuches.

VERGARA, Daniel. Dirigente comunista, abogado, subsecretario del Interior durante el gobierno de Allende.

VIAUX, Roberto. General derechista, se amotinó durante el gobierno de Frei aduciendo motivos salariales (1969).

VILARIN, León. Líder de los dueños de camiones que realizaron varias huelgas patronales contra el gobierno de Salvador Allende.

Bibliografía

ALLENDE, Salvador. *Salvador Allende y América Latina*. México, Casa de Chile, 1978.

ALLENDE, Salvador. *La vía chilena al socialismo. (Mensajes al Congreso Nacional)*. Puebla, Centro Salvador Allende, 1988.

ALLENDE, Salvador. *Su pensamiento político*. Santiago, Editorial Quimantú, 1972.

ALLENDE, Salvador. *Nuestro camino al socialismo*. Buenos Aires, Editorial Papiro, 1971.

ALTAMIRANO, Carlos. *Dialéctica de una derrota*. México, Siglo XXI, 1977.

Araucaria de Chile. Madrid, 1978-1985.

Arauco, Buenos Aires, números 1 y 2, 1974.

BARRERA, Manuel *et al.* *Sindicatos y estado en el Chile actual*. Santiago, CES, 1985.

BARRERA, Manuel. *Chile 1970-72*. Caracas, Editorial ILDIS, 1973.

CHILÉN ROJAS, Alejandro. *Trayectoria del socialismo*. Santiago, Editorial Austral, 1971.

ITT. *Documentos secretos de la ITT*. Santiago, Editorial Quimantú, 1972.

CONGRESO Y SENADO DE LOS ESTADOS UNIDOS. *Covert Action in Chile. 1963-73*, Washington, 1975.

CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS. *Multinational Corporations and United States Foreign Policy: The ITT*, Washington, 1973.

DAVIS, Nathaniel. *Los dos últimos años de Salvador Allende*. Barcelona, Plaza & Janés, 1986.

DOS SANTOS, Theotonio. *La crisis norteamericana y América Latina*. Santiago, Prensa Latinoamericana, 1971.

GARCÉS, Joan. *Allende y la experiencia chilena*. Santiago, Ediciones BAT, 1990.

GARCÉS, Joan. *El Estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende*, Siglo XXI, Madrid, 1971.

GARCÉS, Joan. *El caso Toha, revolución, Congreso y Constitución*. Santiago, Editorial Quimantú, 1972.

GARCÍA MARQUEZ, Gabriel. *La muerte de Salvador Allende*, New York, Harper's, 1971.

GONZALEZ CAMUS, Ignacio. *El día que murió Allende*. Santiago, 1988.

GURRIARAN, José Antonio. *Chile: el ocaso del General*. El País Aguilar, 1989.

Tito Drago

- GUTIÉRREZ AICARDI, Enrique. *Negro septiembre*. México, Casa de Chile, 1976.
- GUTIÉRREZ FUENTES, Juan Ignacio. *Chile*. Madrid, Alianza Editorial, 1986.
- SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO. *Libro blanco del cambio de gobierno en Chile*. Santiago, Editorial Lord Cochrane, 1973.
- LABARCA, Eduardo. *Chile al rojo*. Santiago, Ediciones UTE, 1971.
- LABROUSSE, Alain. *L'expérience chilienne*. París, Seuil, 1972.
- LAMOUR, Catherine. *Le pari chilien*. París, Stock, 1972.
- MARINI, Ruy Mauro. *Estudios sobre Chile*. México, Editorial Era, 1976.
- MEJIDO, Manuel. *Esto pasó en Chile*. México, Editorial Extemporáneos, 1973.
- MIR. *Táctica para la lucha de resistencia en Chile*. Madrid, Editorial Conocer, 1978.
- Pensamiento Socialista*, Madrid, números 1 a 24, 1979-1981.
- PRATS GONZÁLEZ, Carlos. *Memorias: testimonio de un soldado*. Santiago, Pehuén Ediciones, 1985.
- PUCCIO, Osvaldo. *Un cuarto de siglo con Allende*. Santiago, Pehuén Ediciones, 1988.
- REIMANN WEIGERT, Elisabeth; RIVAS SANCHEZ, Fernando. *Las Fuerzas Armadas de Chile*. La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 1976.
- ROJAS MIX, Miguel *et al.* *Chile en todas partes*. México, Casa de Chile, 1983.
- RUIZ TAGLE, Jaime P., *Poder político y transición al socialismo*. Caracas, Editorial ILLDIS, 1973.
- SACCHI, Hugo. *Salvador Allende*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1974.
- SELSER, Gregorio. *La CIA y el golpe de 1973*. Puebla, Universidad Autónoma de Puebla, 1987.
- SELSER, Gregorio. *Los días del Presidente Allende*. México, Universidad Autónoma Metropolitana, 1991.
- Socialismo Chileno*, Bruselas, números 1 y 2, 1976.
- TAUFIC, Camilo. *Chile en la hoguera*. Buenos Aires, Corregidor, 1974.
- TIMERMAN, Jacobo. *Chile, el galope muerto*, El País, 1987.
- TIMOSSI, Jorge. *O combate do presidente Allende*. Lisboa, Iniciativas Editoriais, 1974.
- TOURAINÉ, Alain. *Vie et mort du Chile populaire*. París, Seuil, 1973.
- WITKER, Alejandro *et al.* *Narradores chilenos del exilio*. México, Casa de Chile, 1978.

Índice

<i>El Chile eterno</i> , Fernando Henrique Cardoso	5
El mundo posible de Salvador Allende	9
Un doble secuestro	13
Chile, un país con historia	19
<i>Tracks</i> , prólogos sangrientos	29
Del medio litro de leche al poder popular	43
Entre el socialismo y la democracia social	53
Una reforma agraria demócrata cristiana	61
Ni Washington ni Moscú	69
La ultraizquierda en acción	75
El pastel de choclo	83
El Sol y la Aurora	95
Prensa, poder y golpismo	109
La Unidad Popular, crisis de dirección	117
El auge electoral de la Unidad Popular, un aguijón para los golpistas	127
La desestabilización	137
Pepsi, Mercurio y narcóticos	145

El punto de no retorno	153
El leal dictador	175
Las vísperas	183
El golpe	201
Una lección moral	211
La resistencia	219
El golpe dentro del golpe	227
Epílogo	231

ANEXOS

Yo estoy aquí, en La Moneda	239
Es posible que nos aplasten	239
El juicio de la historia	241
Carta de Aylwin a Allende	243
Carta de Allende a Aylwin	245
Las primeras 40 medidas del Gobierno Popular	249
Cronología	253
Nombres citados	261
Bibliografía	265

Impreso en los talleres
digitales de RIL® EDITORES
Teléfono 2254269
ri@rileditores.com
Santiago de Chile, septiembre de 2003

Desde 1977 su casa es Madrid, donde dirige las agencias Comunica e Inter Press Service y es presidente honorario del Club Internacional de Prensa. Es autor de *Medioambiente y desarrollo* (CIFCA, 1980), *Centroamérica, una paz posible* (El País-Aguilar, 1988), *El futuro es hoy* (Cruz Roja, 1990), *Chile, un doble secuestro* (Editorial Complutense, 1993), y *El retorno de la ilusión. Pinochet, el fin de la impunidad* (RBA, 1999), además de una veintena de libros en colaboración con otros autores.



TITO DRAGO, periodista y escritor, nació en un pueblo de la Patagonia en 1936. Entre 1971 y 1973 vivió en Chile. La intensa actividad que desarrolló en esos años como director-editor del semanario *La Aurora de Chile*, además de jefe de publicidad, promoción y ventas de la Editora Nacional Quimantú y miembro de la Comisión Política del Regional Santiago Centro del Partido Socialista, evidencian su completa integración y comunión con el espíritu del país, en esos años de cambios sociales en democracia.